

CIVICUS

INFORME SOBRE EL ESTADO DE LA SOCIEDAD CIVIL 2024

EQUIPO DE REDACCIÓN
Andrew Firmin
Inés M. Pousadela
Mandeep Tiwana

EQUIPO DE INVESTIGACIÓN
Moira Cornejo
Elizaveta Filippova
Victoria Ubierna

ASESOR DE MEDIOS
Jason Patinkin

COMUNICACIONES
Kgalalelo Gaebee
Thapelo Masiwa
Lerato Pagiwa
Silvia Puerto Aboy

DISEÑO
Luciana Burak
Juliana Pecollo

FOTO DE PORTADA: Manifestantes en el centro de Londres, Reino Unido, reclaman un alto el fuego inmediato en Gaza el 6 de enero de 2024. Foto de Henry Nicholls/AFP vía Getty Images.

FECHA DE PUBLICACIÓN: MARZO DE 2024

ACERCA DE ESTE INFORME

Les damos la bienvenida al Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil 2024 de CIVICUS, la alianza mundial de la sociedad civil. El informe de este año, el decimotercero de nuestra serie de publicación anual, examina retrospectivamente el año 2023 e identifica tendencias en la acción de la sociedad civil a todos los niveles y en todos los ámbitos, desde la respuesta a conflictos y la lucha por la democracia, la inclusión y la justicia climática hasta la demanda de reforma de la gobernanza global.

El informe de este año se alimenta del material producido por nuestra iniciativa de análisis permanente, **CIVICUS Lens**, y canaliza las voces de actores de la sociedad civil afectados por los principales problemas y desafíos de la actualidad y movilizados para darles respuesta. Recoge más de 250 entrevistas y artículos publicados por CIVICUS que dan cobertura a más de 100 países y territorios.

Nuestro informe ofrece una mirada de la sociedad civil sobre el mundo tal como se presenta a principios de 2024: un mundo plagado de conflictos y crisis –crisis incluso de las instituciones y valores democráticos– pero en el que la sociedad civil se mantiene firme y resiste aún en tiempos hostiles.

4 PANORAMA

10 CONFLICTOS Y CRISIS: UN MUNDO EN DESORDEN

35 GOBERNANZA GLOBAL: NECESIDAD URGENTE DE REFORMA

60 CLIMA: LA REPRESIÓN COMO NEGACIONISMO

80 DEMOCRACIA: TERRITORIO EN DISPUTA

111 GÉNERO: RESISTENCIA CONTRA LA REGRESIÓN

136 AGRADECIMIENTOS

















Voluntarios distribuyen comida caliente a familias palestinas desplazadas en Rafah, Gaza, el 20 de febrero de 2024.

Foto de Abed Rahim Khatib/Anadolu vía Getty Images.

PANORAMA: LA NECESIDAD DE LA SOCIEDAD CIVIL EN UN MUNDO EN CRISIS

Una serie de crisis aceleradas y multifacéticas está poniendo a la sociedad civil a prueba como nunca antes. En un contexto de crecientes conflictos y represión, en 2023 la sociedad civil enfrentó obstáculos cada vez mayores en el ejercicio de roles vitales de asistencia, amplificación de las voces de la gente y defensa de los derechos humanos. A pesar de estos desafíos, logró mantenerse firme y marcar una diferencia significativa en muchas vidas. La sociedad civil continúa siendo una gran fuente de esperanza: la situación actual del mundo es calamitosa, pero sin ella sería mucho peor. Para superar las actuales crisis, es imperativo escuchar a la sociedad civil, colaborar estrechamente con ella y fortalecer sus capacidades.

CONFLICTOS Y CRISIS: UN MUNDO EN DESORDEN

La sociedad civil está siendo atacada en medio de conflictos cada vez más profundos e intensos. En demasiados países no se pueden dar por sentados los derechos más fundamentales, y cuando despierta en la mañana la gente no tiene la certeza de que vivirá para ver otro día.

Una de cada seis personas está expuesta a algún conflicto. Las muertes relacionadas con los conflictos han alcanzado su nivel **más alto en décadas**, con un aumento del **62%** de las víctimas civiles en 2023. El gasto militar global alcanzó la **cifra récord** de USD 2.200 millones, y se cierne amenazante el espectro del genocidio.

El conflicto de **Gaza** ha conmocionado al mundo. En un grotesco acto de castigo colectivo, las fuerzas israelíes están ejerciendo una crueldad implacable contra la población civil. Debe ponerse fin inmediato a este sufrimiento. Pero, aun así, sus efectos se harán sentir durante generaciones.

La violencia amenaza con intensificarse en Medio Oriente, pero esta no es la única región sumida en conflicto. **Rusia** sigue librando su mortífera guerra en Ucrania, la población civil padece el enfrentamiento entre militares y milicias en **Sudán**, y a tres años del golpe militar se ha desatado un sangriento conflicto en **Myanmar**.

Estos son apenas algunos ejemplos de los muchos conflictos actuales. En todos ellos, los beligerantes atacan a la población civil, a menudo por motivos étnicos. Las fuerzas combatientes recurren sistemáticamente a la violencia sexual y al hambre como armas de guerra, provocando así crisis humanitarias que incluyen desplazamientos masivos.
Más de **114 millones de personas** se encuentran desplazadas, una

realidad que algunos gobernantes prefieren negar. En lugar de reconocer la magnitud de los desplazamientos, los líderes políticos adoptan posturas hostiles, refuerzan las fronteras, deslocalizan los controles migratorios y avivan la xenofobia. Los dobles estándares de los Estados europeos son flagrantes: si bien la cálida acogida brinda a los ucranianos puede estar enfriándose a medida que se eterniza la guerra, siguen siendo tratados considerablemente mejor que los migrantes no blancos que llegan en busca de refugio. En el sur global, donde se concentra la mayor parte de los migrantes y desplazados, arraigadas tradiciones de hospitalidad están experimentando retrocesos notables: Turquía por ejemplo está devolviendo refugiados a la fuerza a Siria, y **Pakistán** los está regresando a Afganistán.

En este contexto, la sociedad civil emerge como una respuesta vital, proporcionando ayuda humanitaria, liderando los esfuerzos de reconstrucción, recopilando pruebas de violaciones de derechos humanos, instigando la acción internacional y reclamando justicia y el fin de la impunidad. En Ucrania, las iniciativas voluntarias contribuyen enormemente a la resiliencia, y el activismo documenta las violaciones de derechos y ayuda a erradicar la corrupción. El periodismo proporciona información crucial de primera mano sobre el asalto israelí a Gaza, mientras que grupos de jóvenes sudaneses prestan ayuda humanitaria en las zonas más afectadas por el conflicto y ofrecen soluciones para avanzar hacia un gobierno civil democrático.

Lamentablemente, en lugar de reconocer y apoyar estos esfuerzos, los responsables de los conflictos atacan a la sociedad civil, a los trabajadores humanitarios y al periodismo, y los Estados optan por criminalizar a la sociedad civil por su apoyo a migrantes y refugiados. La sociedad civil necesita apoyo, y todas las partes involucradas en conflictos deben respetar sus derechos.

GOBERNANZA GLOBAL: NECESIDAD URGENTE DE REFORMA

Los beligerantes desafían abiertamente los principios establecidos largo tiempo atrás en el derecho internacional humanitario y de derechos humanos, confiando en que sus acciones quedarán impunes. Las instituciones de gobernanza global titubean mientras algunos Estados toman **decisiones hipócritas** que socavan el orden internacional basado en normas. Aunque la sociedad civil proponga soluciones para reformar la gobernanza global, no se le concede un asiento en la toma de decisiones.

Algunos Estados poderosos, como Rusia y Estados Unidos, están demostrando un respeto selectivo por las normas, protegiendo a sus aliados mientras condenan a sus enemigos. Este doble estándar quedó claramente en evidencia cuando los mismos Estados que se apresuraron a defender a Ucrania continuaron respaldando a Israel. En el extremo, algunos Estados están exhibiendo posiciones racistas, ya que expresan preocupación por los derechos humanos de las personas blancas pero no por los de las personas de color.

Se supone que las normas internacionales deberían garantizar que no se cometan atrocidades como las que se están perpetrando sistemáticamente en Gaza y que, cuando se las comete, se detengan rápidamente y los responsables comparezcan ante la justicia. Pero el órgano clave de las Naciones Unidas (ONU), el Consejo de Seguridad, se encuentra **paralizado** debido al uso del derecho de veto. Entre los Estados poderosos escasean el liderazgo empático, los principios, la humildad y la disposición a escuchar.

Los cálculos de corto plazo de líderes que no rinden cuentas están neutralizando los acuerdos internacionales forjados para abordar grandes desafíos transnacionales como la crisis climática y el **desarrollo sostenible**, cuyos resultados están quedando considerablemente rezagados. En la **cumbre** sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible

celebrada el pasado mes de septiembre, la sociedad civil presentó ideas innovadoras para movilizar los recursos necesarios para financiar el desarrollo y la resiliencia climática. Sin embargo, estas propuestas fueron ignoradas, lo cual evidenció una vez más la necesidad de que la sociedad civil sea incluida en los espacios de toma de decisiones. A menudo a la sociedad civil se le cierran las puertas, como ocurrió en la **Asamblea General de la ONU** y en la reunión del **G20** organizada en India. Al mismo tiempo los Estados represivos, algunos de los cuales incluso integran el Consejo de Derechos Humanos, toman represalias contra los activistas que participan en los procesos de derechos humanos de la ONU.

Las crisis actuales están sometiendo a las instituciones de la ONU a duras pruebas y están sacando a la luz sus fallas fundamentales de diseño. Pero el riesgo, si la confianza en la ONU se desvanece, es que emerjan en su lugar alternativas más autoritarias. Para evitar este escenario, los Estados y la ONU deben adoptar las numerosas ideas prácticas de reforma de la sociedad civil. La ONU debe volverse más democrática e incluir plenamente a la sociedad civil como participante esencial.

La sociedad civil aboga por un orden basado en normas en el que se implementen leyes y políticas claras para hacer frente al cambio climático, acabar con la pobreza, abordar las profundas desigualdades económicas, mitigar los conflictos y prevenir violaciones graves de los derechos humanos. La **Cumbre del Futuro** de la ONU, programada para septiembre de 2024, debería comprometerse a impulsar esta visión. La sociedad civil está haciendo todo lo posible para participar en el proceso, exigiendo reformas genuinas que sitúen a las personas en el centro de la toma de decisiones.

CLIMA: LA REPRESIÓN COMO NEGACIONISMO

La crisis climática es una emergencia global con consecuencias inmediatas y a largo plazo. La necesidad de actuar nunca ha estado tan clara. El año 2023 fue el **más cálido hasta la fecha**, y pareciera que cada semana llegaron noticias de un nuevo fenómeno meteorológico extremo que afectaba en mayor medida a las personas más vulnerables.

Los llamamientos a un cambio urgente proceden en mayor medida de la sociedad civil, pero en 2023 los activistas se enfrentaron a una creciente resistencia. Muchos Estados están **limitando** el espacio para el activismo climático, incluso en los países del norte global con movimientos climáticos robustos, donde la libertad de expresión solía ser respetada.

Las autoridades alemanas atacaron al movimiento de acción directa Última Generación mediante leyes contra la delincuencia organizada, realizando allanamientos, confiscando computadoras portátiles y congelando cuentas bancarias. En el Reino Unido, la policía británica aprovechó nuevas leyes que restringen los derechos de protesta para encarcelar a manifestantes que exigían el fin del uso de combustibles fósiles. Asimismo, varios estados australianos introdujeron leyes contra las protestas para perseguir y encarcelar a activistas pacíficos por el clima.

La represión del espacio cívico debería ser reconocida como una nueva forma del negacionismo climático. Aunque el negacionismo abierto se esté volviendo cada vez menos común, se corre el riesgo de que los Estados y las empresas de combustibles fósiles, al suprimir la capacidad de la sociedad civil para ejercer presión, retrasen la adopción de medidas a la escala necesaria hasta que sea demasiado tarde.

El activismo desempeña un papel crucial, ya que la actuación de los Estados y del sector privado para abordar la crisis climática se revela insuficiente. Las temperaturas globales se encaminan hacia un aumento de **casi tres grados** con respecto a los niveles preindustriales para finales de siglo, lo que probablemente significaría un punto de inflexión catastrófico. Mientras las empresas de combustibles fósiles siguen obteniendo beneficios considerables y apenas invierten en energías renovables, los Estados continúan aprobando nuevas extracciones. La financiación internacional para el clima se mantiene por debajo de lo necesario. Mientras tanto, las desigualdades fundamentales del cambio climático, causado de forma desproporcionada por las personas más

ricas de los países más ricos, pero con las peores consecuencias para los más pobres del mundo, persisten.

La sociedad civil demostró su relevancia en 2023 cuando ganó casos judiciales, especialmente en **Bélgica** y **Estados Unidos**, obligando a Estados y empresas a cumplir sus compromisos climáticos, presionó a instituciones como las universidades para que abandonaran su inversiones en combustibles fósiles, y utilizó tácticas disruptivas para atraer la atención de los medios de comunicación.

A escala global, la sociedad civil logró incluir la necesidad de reducir las emisiones de combustibles fósiles en la agenda de la cumbre del clima **COP28**, sorprendentemente por primera vez. Pero el evento, organizado por los Emiratos Árabes Unidos, un petroestado con espacio cívico cerrado, no permitió el acceso de la sociedad civil a los espacios de toma de decisiones, y tampoco logró avances significativos. Es probable que esta experiencia se repita en 2024, cuando la COP29 será organizada por otro petroestado con espacio cívico cerrado, **Azerbaiyán**.

DEMOCRACIA: TERRITORIO EN DISPUTA

Los ataques a la democracia están dificultando la construcción de soluciones para responder a las crisis actuales. A principios de 2023, el **72%** de la población vivía en regímenes autoritarios, y la situación no mejoró a lo largo del año. Un número récord de países se está deslizando hacia el autoritarismo, mientras que la cantidad de países que se está democratizando está más baja que en décadas.

La sociedad civil trabaja para defender la democracia y exigir responsabilidades a los dirigentes políticos, pero esta tarea resulta cada vez más difícil a medida que se cierra el espacio cívico. La proporción de personas que viven en países con un espacio cívico cerrado el 30,6%, también está alcanzando los niveles más altos en años.

En los países que han experimentado golpes militares recientemente, los gobiernos militares han consolidado su poder. En 2023, dos países más, **Gabón** y **Níger**, sufrieron golpes militares, completando así un "cinturón golpista" que se extiende de costa a costa de África.

En algunos países, los líderes elegidos democráticamente han debilitado las instituciones y las prácticas democráticas, acumulando poder de manera desproporcionada y recortando libertades para poder perpetuarse en su cargo. Además, muchos llevaron a cabo elecciones meramente ceremoniales, cuyo único propósito era legitimar a líderes autoritarios.

En aquellos casos en los que se desarrollaron elecciones libres y justas, los votantes rechazaron repetidamente a los partidos y políticos tradicionales. En una época de incertidumbre económica e inseguridad, muchos están decepcionados con lo que la democracia les ha traído hasta ahora. Los emprendedores políticos antiderechos están explotando estas ansiedades y ofreciendo soluciones engañosamente sencillas a problemas complejos. Venden un discurso supuestamente antielitista que se presenta como nuevo y radical aunque en realidad es profundamente regresivo. Ganan terreno exacerbando los prejuicios y el odio, incluso contra los inmigrantes y las personas LGBTQI+.

En varias elecciones de 2023, como las de **Argentina**, **Finlandia** y los **Países Bajos**, las fuerzas de extrema derecha lograron avances, y algunas consiguieron alcanzar el poder o ejercer influencia en el gobierno. Incluso cuando no alcanzan el poder, las figuras políticas de extrema derecha desplazan el centro político, por lo que los demás candidatos terminan compitiendo en sus términos.

La polarización está en aumento, alimentada por la desinformación, las teorías conspirativas y el discurso de odio. Todo ello se ve facilitado por las tecnologías impulsadas por inteligencia artificial, que se extienden y evolucionan más rápido de lo que es posible regularlas. La inteligencia artificial tiene potencial, pero también ofrece oportunidades que las fuerzas regresivas pueden aprovechar en su beneficio. No se puede confiar en que las grandes empresas de tecnología se autorregulen,

ni tampoco dejar que los Estados sean los únicos en establecer las normas, ya que muchos están deseosos de utilizar la tecnología emergente con fines represivos. La sociedad civil aboga por una **regulación transnacional**.

Es probable que las tendencias negativas se prolonguen en 2024, cuando un número récord de personas acudirá a las urnas. Pero hay esperanzas: recientemente ha habido buenas noticias en las que la sociedad civil desempeñó un papel importante. En **Guatemala**, un nuevo partido nacido de protestas masivas contra la corrupción sorprendió al ganar las elecciones, y la gente se movilizó masivamente para defender el resultado frente a la reacción de las poderosas élites políticas y económicas. En **Polonia**, tras ocho años de gobierno nacionalista de derecha, llegó al poder un gobierno de unidad que se comprometió a restaurar las libertades cívicas, lo que ofrece nuevas posibilidades para que la sociedad civil colabore en la recuperación de los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos.

A lo largo de 2023, la sociedad civil se movilizó contra las restricciones a las libertades, contrarrestó la retórica divisiva y luchó por la integridad de los procesos electorales. En 2024, seguirá presionando para que las elecciones se celebren en condiciones libres y justas, garantizando la disponibilidad y el acceso a la información, el recuento preciso de los votos, la aceptación de la derrota por parte de los perdedores y el gobierno de los ganadores en aras del interés común.

GÉNERO: RESISTENCIA CONTRA LA REGRESIÓN

Frente a la reacción, la sociedad civil siguió reivindicando derechos en 2023. Logró la despenalización de las relaciones homosexuales en **Mauricio** y la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo en **Estonia**. Asimismo, **Letonia** y **Nepal** dieron pasos cruciales hacia la igualdad de derechos. Luchas de larga data por el matrimonio igualitario continúan en todas las regiones, y algunos ya han logrado su cometido, como fue el caso de **Grecia** en febrero de 2024 y probablemente ocurra pronto en **Tailandia**. En muchos países las mujeres se movilizaron contra la violencia de género, logrando en ocasiones producir cambios en las políticas.

Sin embargo, el año estuvo marcado más por la resistencia que por el avance. Los talibanes consolidaron su dominio en **Afganistán**, la teocracia se reafirmó en **Irán** y la epidemia global de femicidios persistió. **Rusia** intensificó su represión contra el colectivo LGBTQI+, se aprobaron leyes antigay extremas en **Ghana y Uganda** y la histeria antitrans se extendió en los Estados Unidos. En 2023 se evidenció un importante retroceso en materia de derechos, que puso en peligro la vida de aún más mujeres y personas LGBTQI+.

La tendencia de progreso en materia de derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+, logrado gracias al esfuerzo de la sociedad civil a lo largo de décadas, se ha desacelerado y enfrenta una reacción cada vez más intensa. Un movimiento transnacional bien financiado, con raíces estadounidenses que lleva décadas luchando contra los derechos de género está ganando cada vez más influencia. En muchos países, la instrumentalización de la reacción antiderechos para obtener beneficios políticos ha llevado a un aumento de los ataques contra activistas que defienden estos derechos.

No obstante, el activismo de todo el mundo sigue resistiendo frente a la opresión. Ante el aumento de los femicidios, grandes protestas feministas en países como Bulgaria y Kenia exigieron medidas para poner fin a los asesinatos. Incluso en Afganistán e Irán, las activistas han encontrado formas sutiles y clandestinas de mantener el desafío.

Aunque el último año ha sido decepcionante para los movimientos por los derechos de género, la situación habría sido mucho peor sin sus enormes esfuerzos. A pesar de la desaceleración de los avances, la mayoría de los logros históricos perduraron. En todo el mundo, la sociedad civil resistió mediante protestas callejeras, incidencia, campañas, solidaridad, apoyo mutuo y litigios - y se mantuvo firme.



Un grupo de personas participa en la concentración "Bienvenidos refugiados", organizada por el grupo de la sociedad civil Stand Up To Racism en Dover, Reino Unido, el 4 de marzo de 2023.

ES HORA DE ACABAR CON LOS ATAQUES CONTRA LA SOCIEDAD CIVIL

El espacio cívico se encuentra actualmente en su **peor estado** desde el lanzamiento de la cobertura global del CIVICUS Monitor en 2018. En la actualidad, **118 países** experimentan restricciones graves del espacio cívico, y apenas el 2,1% de la población mundial vive en países con espacio cívico abierto. En diciembre de 2023, dos países más – **Bangladesh** y Venezuela – pasaron a tener la peor calificación: espacio cívico cerrado. Las principales violaciones documentadas en 2023 fueron la intimidación, la interrupción de protestas y la detención de manifestantes, afectando principalmente a activistas por la democracia, el clima y el medio ambiente, así como a mujeres y personas LGBTQI+.

A pesar de las numerosas limitaciones, la sociedad civil persevera en sus esfuerzos. Pero las restricciones se hacen sentir. La generación joven ha liderado movimientos cívicos impresionantes, pero no está claro cuánto tiempo podrá resistir el desgaste, ya que actores poderosos están incrementando deliberadamente los costos personales y los peligros del activismo.

Con el aumento de la cantidad de países con espacio cívico cerrado, el activismo en el exilio juega un papel cada vez más crucial en la defensa de la democracia y los derechos humanos. Sin embargo, en respuesta a ello la represión se está volviendo más transnacional. Numerosos Estados -China, Egipto y Turquía, entre muchos otros- apuntan contra los exiliados mediante vigilancia, intimidación, violencia y presión sobre sus familias. Los países de acogida no suelen proporcionar la protección necesaria, sobre todo cuando entran en juego consideraciones de política exterior. Urge desarrollar estrategias transnacionales para defender el espacio cívico.

Es imperioso revertir las restricciones y habilitar a la sociedad civil para que pueda desempeñar su papel en todos los ámbitos, desde la construcción de la paz a la lucha contra el cambio climático, pasando por la producción de avances en el marco de importantes acuerdos internacionales, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Como lo demuestran las crisis actuales, es evidente que la forma de abordar los desafíos actuales ha fracasado. Insistir en las mismas estrategias que llevaron al mundo a su estado actual no mejorará la situación. La coyuntura actual debería motivarnos a reflexionar sobre qué tipo de mundo queremos y cómo podemos alcanzarlo. La sociedad civil presenta una visión a futuro en la que prevalecen la empatía y la compasión, se respetan los derechos humanos, se abordan colaborativamente las amenazas globales, los recursos se reparten de forma más equitativa y se celebra la diversidad. Es una fuente crucial de soluciones para afrontar las crisis y mejorar el mundo. Imaginemos un mundo en el que los líderes políticos y económicos escuchan activamente a la sociedad civil. Ya es hora de que así sea.















CONFLICTOS Y CRISIS: UN MUNDO EN DESORDEN

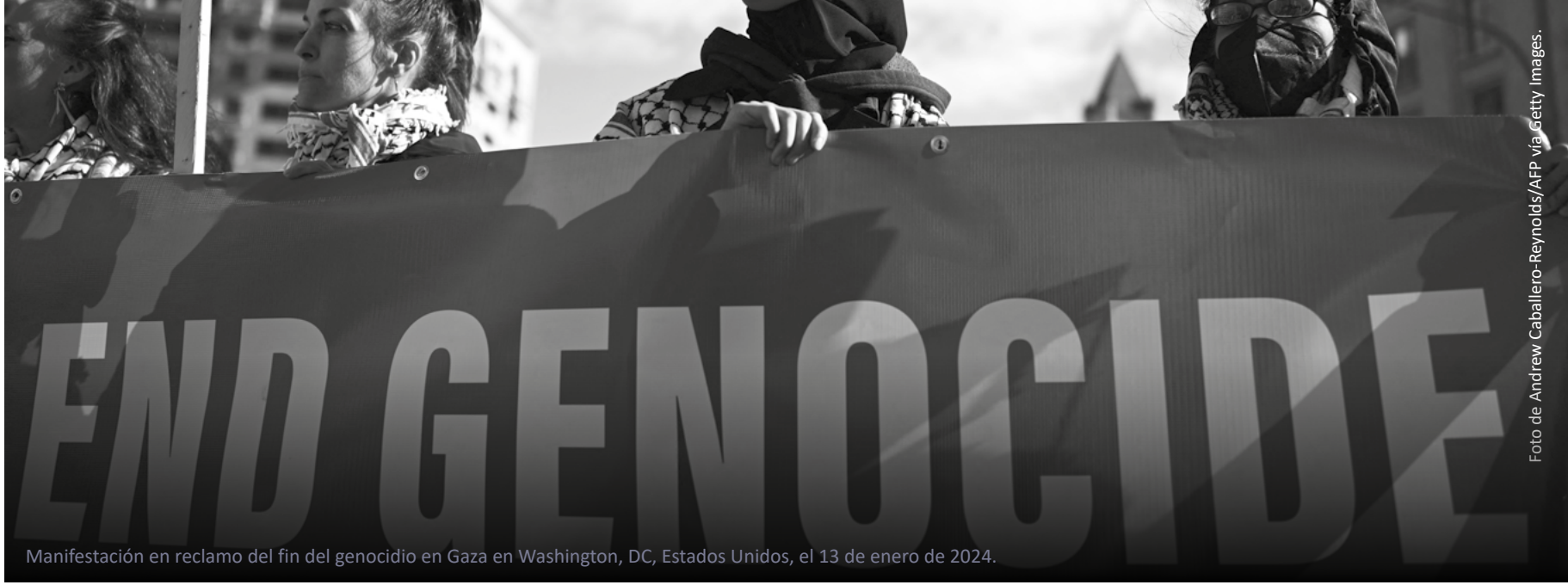


Foto de Andrew Caballero-Reynolds/AFP vía Getty Images.

Manifestación en reclamo del fin del genocidio en Gaza en Washington, DC, Estados Unidos, el 13 de enero de 2024.

UN MUNDO DE CONFLICTOS

Demasiadas personas en diferentes partes del mundo no pueden dar por segura la satisfacción de sus necesidades más básicas. Cuando despiertan por la mañana no pueden dar por sentado que vivirán otro día. No pueden dar por seguro el acceso a agua limpia o a alimentos. En caso de lesión o enfermedad, no está garantizado que reciban atención médica. Tampoco pueden acceder a información confiable sobre el conflicto al que intentan sobrevivir, ni pueden contarle al mundo su historia. No pueden confiar en que sus gobiernos las protegerán, ya que en muchos casos es el propio gobierno el que las agrede. Tampoco pueden depositar su fe en la ayuda de la comunidad internacional. Si se ven obligadas a huir, no están seguras de encontrar compasión.

En todo el mundo, **una de cada seis** personas está expuesta a conflictos. Las muertes relacionadas con conflictos están en su pico **más alto en décadas**. En 2023 la cantidad de víctimas civiles aumentó **62%** respecto de 2022. La desescalada no parece inminente: el gasto militar global alcanzó la **cifra récord** de USD 2,2 billones el año pasado.

El asalto de Israel a Gaza ha sacudido al mundo. Es urgente poner fin a la matanza, pero incluso después de un alto el fuego, las consecuencias del conflicto se sentirán durante décadas. Habrá que lidiar con un trauma generacional y la tarea de reconstrucción física será inmensa. También será necesario un enorme esfuerzo internacional para obligar a los responsables de las grotescas violaciones de derechos humanos a rendir cuentas.

Gaza es el escenario del conflicto más espantoso de la actualidad, que amenaza con extenderse a toda la región, pero, por desgracia, dista mucho de ser el único. Además, Rusia sigue librando su mortífera guerra contra Ucrania; en Sudán, la población civil padece los enfrentamientos entre militares y milicias; y a tres años después del golpe militar, un conflicto sangriento se ha desatado en Myanmar. Incluso en lugares donde supuestamente la guerra ha terminado, como en Etiopía y Nagorno-Karabaj, continúan la violencia, las violaciones de derechos y la impunidad.

Además de las víctimas y heridos inmediatos, los conflictos causan enormes daños ambientales y climáticos. Se estima que las fuerzas militares representan el **5,5%** de las emisiones totales de gases de efecto invernadero, equivalentes a las del **cuarto país** con mayor emisión en el mundo. El Acuerdo de París no obliga a los Estados a declarar sus emisiones militares, y prácticamente ninguno elige

EL GASTO MILITAR GLOBAL ALCANZÓ LA CIFRA RÉCORD DE USD 2,2 BILLONES

1 DE CADA 6 PERSONAS ESTUVO EXPUESTA A CONFLICTOS

LAS VÍCTIMAS CIVILES AUMENTARON 62%

AL MENOS 167.800 PERSONAS MURIERON EN CONFLICTOS, MÁS DE 30.000 DE ELLAS EN GAZA

MÁS DE 114 MILLONES DE PERSONAS SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE DESPLAZADAS

CASI 300 MILLONES NECESITAN PROTECCIÓN Y AYUDA HUMANITARIA

hacerlo, lo que dificulta la tarea de la sociedad civil de presionar a los Estados para que las reduzcan. La sociedad civil insta al desarme para salvar vidas humanas, hacer realidad los derechos humanos y proteger el clima y el planeta.

La sociedad civil trabaja en todos los frentes posibles para abordar los conflictos. Presta servicios esenciales, brinda protección, ayuda a las personas obligadas a abandonar sus hogares, comparte información, insta al cese del combate, exhorta a la comunidad internacional a actuar, exige justicia por los crímenes contra los derechos humanos y aboga por la desescalada, el desarme y la consolidación de la paz.

Por desempeñar estas funciones, la sociedad civil es atacada por los beligerantes. En muchos casos, soldados y rebeldes atacan directamente a quienes intentan brindar ayuda humanitaria vital. Los periodistas que intentan compartir verdades sin ambages también están bajo fuego: en 2023, **99 periodistas y trabajadores de medios** fueron asesinados en el ejercicio de sus funciones. Los autores de la violencia están violando leyes internacionales humanitarias y de derechos humanos largamente establecidas, confiados en que gozarán de impunidad ▶ **VÉASE CAPÍTULO**. La sociedad civil reclama el fin de los conflictos y aboga por la educación en la prevención de la violencia, la protección de los derechos y la construcción de la paz.

Gaza: la matanza que no cesa

La masacre es implacable. A excepción de una breve pausa en noviembre, los bombardeos israelíes sobre Gaza han sido incesantes. Actualmente, se están llevando a cabo negociaciones para un segundo alto el fuego temporario: más allá de la urgente necesidad de esta pausa, el asalto debe cesar de forma definitiva.

Ya han muerto unas 30.000 personas y casi toda la población se ha visto obligada a abandonar sus hogares. Se trata de una tragedia que dejará una marca indeleble.

La decisión de Israel de bombardear el pequeño territorio densamente poblado de Gaza no podía sino resultar en pérdidas civiles masivas. Las fuerzas israelíes han reducido a escombros la mayor parte del territorio. Sus habitantes, obligados a huir en repetidas ocasiones, fueron conducidos al sur, hacia zonas que, según les habían dicho, serían seguras, pero que igual fueron bombardeadas por Israel. Israel podría lanzar una nueva ofensiva terrestre en cualquier momento. La gente está atrapada contra una frontera cerrada.

La atrocidad de los ataques perpetrados por Hamas y otros grupos en Israel el 7 de octubre es innegable. Los responsables de estos actos merecen ser llevados ante la justicia y los rehenes deben ser liberados. Sin embargo, la respuesta de Israel constituye claramente un castigo

colectivo, ya que penaliza a toda una población por actos cometidos por algunos de sus miembros. Esta estrategia presupone la culpabilidad de los habitantes de Gaza simplemente por su identidad y lugar de residencia. Esto es un crimen de guerra según los Convenios de Ginebra. Israel responsabiliza a la población civil porque no hizo nada por detener un ataque que tomó a todos por sorpresa. El 7 de octubre, la población civil de Gaza estaba simplemente tratando de vivir su vida cotidiana en circunstancias ya increíblemente difíciles. Ellos no son los culpables.

La guerra de Israel contra Gaza parece no ser más que una sanguinaria campaña de venganza del primer ministro Benjamín Netanyahu, y puede que no sea una coincidencia que el estado de guerra sea su única forma de asegurar su supervivencia política.

A pesar de los esfuerzos de la sociedad civil para implementar una respuesta humanitaria, el gobierno israelí continúa obstaculizando el suministro de ayuda. Gran parte de la ayuda internacional permanece bloqueada en la frontera, desafiando la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU) de diciembre y las órdenes provisionales de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) emitidas en febrero de 2024, que ordenan a Israel permitir el pleno acceso de la ayuda humanitaria ▶ **VÉASE CAPÍTULO**. Como era de esperarse, las consecuencias incluyen un aumento del hambre, la escasez de agua potable y problemas de salud cada vez mayores, ya que la mayoría de los hospitales han sido destruidos.

El trabajo humanitario es peligroso: **al menos 167** trabajadores humanitarios han muerto, la cifra más alta de todos los conflictos de este siglo. Informar sobre el conflicto también conlleva riesgos significativos. Más del **75%** de los periodistas y profesionales de los medios de comunicación asesinados en 2023 murieron en Gaza en tan solo unos meses.

Palestinos e israelíes necesitan desesperadamente a la sociedad civil y su capacidad para brindar ayuda, apoyar la consolidación de la paz y exigir rendición de cuentas. Sin embargo, la primera reacción de muchos donantes ha sido obstaculizar el trabajo del activismo. Tras los atentados del 7 de octubre, varios Estados europeos **suspendieron o anunciaron la revisión** de su apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en Palestina e Israel.

Lo hicieron sobre la base de evidencia, frágil en el mejor de los casos, de que los fondos podrían ser desviados hacia el terrorismo, o en función de la errónea equiparación de la crítica de las acciones del Estado de Israel con el antisemitismo. Este hecho profundamente preocupante ha favorecido al gobierno israelí, que durante mucho tiempo ha restringido y obstaculizado las actividades de la sociedad civil.

> La sociedad civil está sitiada. Durante 30 años, la ocupación israelí ha socavado el trabajo de las OSC, impidiendo que desempeñen su rol en la promoción de desarrollo autónomo, cambio político y el fin de la ocupación de Cisjordania y Gaza. En los últimos años, el gobierno de ocupación se ha vuelto más explícito en la represión de las OSC, clausurándolas, confiscando sus bienes y deteniendo a su personal.
> La ocupación también impone restricciones al financiamiento de las OSC. Las condiciones políticas impuestas por donantes europeos y, sobre todo, estadounidenses, han llevado a cientos de OSC a suspender sus actividades.
>
> 
> **ABDALAZIZ ALSALEHI**
> **Monitor de Políticas Sociales y Económicas (Al-Marsad)**

En todo el mundo, millones de personas han expresado su empatía saliendo a las calles y mostrando su solidaridad con Palestina, exigiendo un alto al fuego y pidiendo a sus gobiernos que presionen a Israel para detener la violencia. Sin embargo, se han enfrentado a la reacción hostil de las autoridades. Los políticos han calificado erróneamente muchas de estas manifestaciones como antisemitas o de apoyo al terrorismo. En el Reino Unido, el entonces ministro del Interior describió a estas manifestaciones como “marchas de odio” y **declaró** que mostrar la bandera palestina o corear eslóganes pro-palestino podría constituir un delito penal.

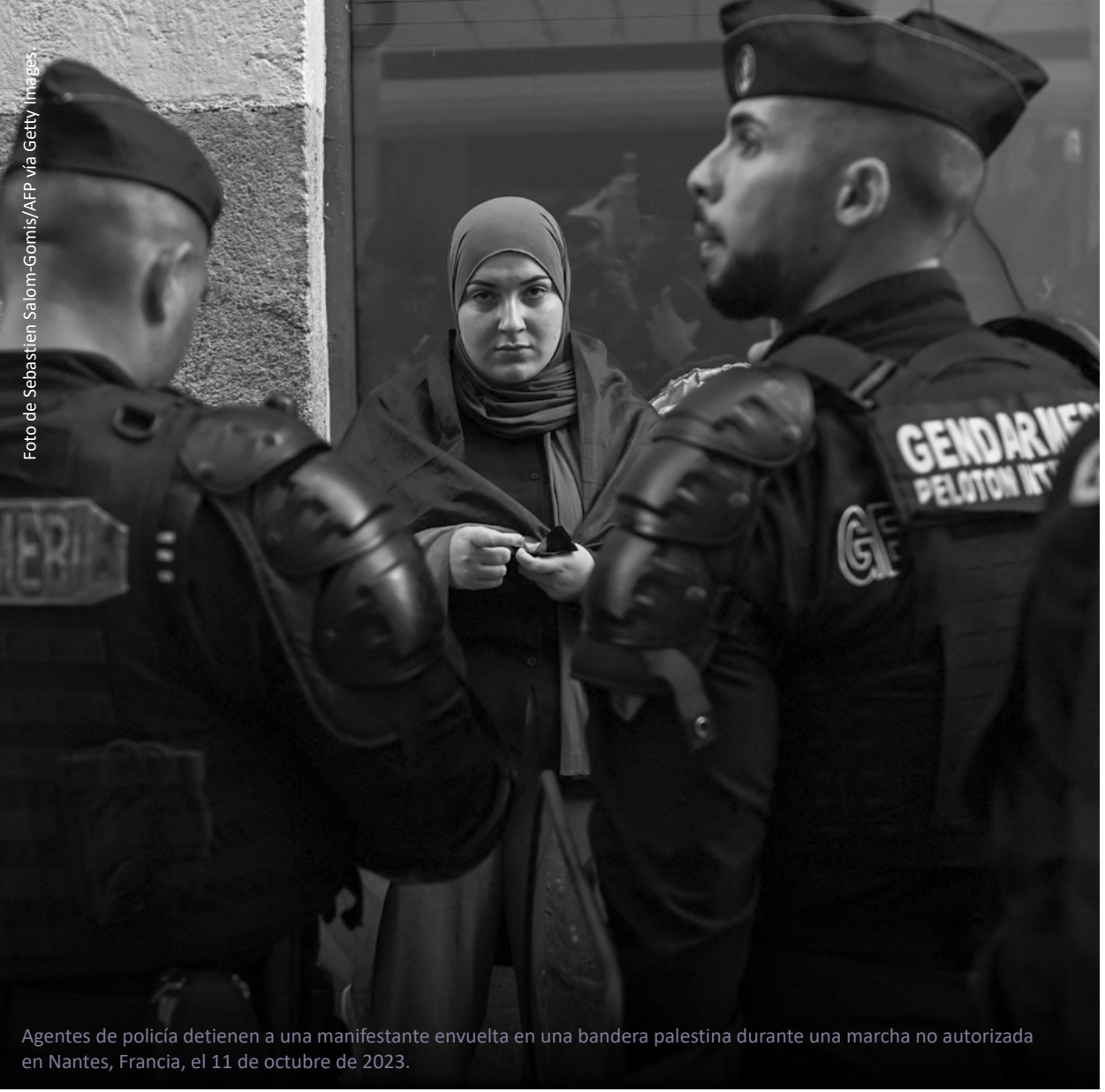


Foto de Sebastien Salom-Gomis/AFP vía Getty Images

Agentes de policía detienen a una manifestante envuelta en una bandera palestina durante una marcha no autorizada en Nantes, Francia, el 11 de octubre de 2023.

En **Francia**, el gobierno intentó imponer una prohibición general de las manifestaciones pro-palestinas, pero un tribunal **determinó** que estas protestas sólo podrían ser prohibidas caso por caso. La policía disolvió una manifestación prohibida en París utilizando **gases lacrimógenos y cañones de agua**. En Alemania, las autoridades permitieron algunas protestas pero prohibieron otras. La policía **recurrió a la fuerza** cuando mil personas participaron en una vigilia pro-palestina prohibida en Berlín. En Australia, la policía de Sídney **anunció** que usaría "poderes extraordinarios" para registrar y verificar la identidad de los participantes en una manifestación pro-palestina. Estas violaciones de los derechos de protesta son apenas algunos ejemplos de las respuestas estatales a las manifestaciones en las primeras etapas del conflicto, y han continuado desde entonces.

Las restricciones no se limitan a las protestas. En Estados Unidos, grupos pro-palestinos **reportan** haber sido objeto de acoso e intimidación, mientras que personas críticas del Estado de Israel han sido excluidas de los medios de comunicación y emisoras musulmanas han sido sacadas **del aire**. La libertad académica también está en peligro, ya que algunos donantes adinerados han amenazado con **retirar su apoyo** a universidades cuyo personal y estudiantes sean considerados partidarios de la causa palestina. Las empresas de redes sociales han sido **acusadas** de censurar u ocultar al público publicaciones palestinas y pro-palestinas.

Estas reacciones consolidan esfuerzos de larga data para limitar la capacidad de boicotear a Israel. Durante mucho tiempo el movimiento global de boicot, desinversión y sanciones (BDS) ha abogado por tácticas pacíficas para presionar al Estado de Israel para que respete el derecho internacional de derechos humanos. Estas tácticas son similares a las que contribuyeron al fin del apartheid en Sudáfrica.

La mayoría de los estados de Estados Unidos ya han adoptado **leyes anti-BDS**, a menudo basadas en una ley modelo promovida por grupos de presión proisraelíes, y los esfuerzos continúan para introducir una ley similar a nivel federal. Las autoridades francesas han utilizado una **ley antidiscriminación** para limitar los esfuerzos del movimiento BDS, y en el Reino Unido el gobierno ha **presentado** un proyecto de ley antiboicot que impediría a todo organismo público tomar una decisión de inversión basándose en preocupaciones éticas sobre un país. El proyecto de ley menciona explícitamente a Israel. Estas medidas a menudo equiparan la crítica al historial de derechos humanos de Israel con el antisemitismo, lo cual dificulta la libre expresión.

> Al asociar la crítica a Israel con el antisemitismo, el proyecto de ley antiboicot, así como la retórica que lo acompaña, disuaden a los defensores de derechos de criticar a Israel por temor a ser tachados de antisemitas. A largo plazo, al enfrentar a los judíos y la seguridad judía con otras luchas por los derechos civiles y humanos, esta ley acabará enfrentando entre sí a las comunidades minoritarias.



DANIEL LUBIN
Na'amod (Judíos británicos contra la ocupación)

A pesar de los desafíos, la sociedad civil global continúa ejerciendo presión sobre las organizaciones internacionales e instando a los Estados a exigir un alto el fuego e instar a Israel a actuar con moderación. Estos esfuerzos han dado frutos. En febrero de 2024, como resultado de una acción legal emprendida por tres OSC, un tribunal **ordenó** al gobierno holandés suspender la exportación de partes para aviones de combate F-35 a Israel. El tribunal determinó que existía un riesgo evidente de que estas partes pudieran utilizarse para cometer violaciones graves del derecho internacional humanitario. Sin embargo, el gobierno holandés ha apelado la decisión. La sociedad civil **ha iniciado** una demanda similar en el Reino Unido, que actualmente está en proceso de apelación tras una decisión inicial del tribunal a favor del gobierno.

> Presentamos esta demanda porque ningún gobierno debería permitir transferencias de armas a un Estado que comete crímenes de guerra. El tribunal precisó que no es necesario demostrar las violaciones del derecho internacional: alcanza con que haya un "riesgo claro" de tales violaciones. También rechazó las acusaciones del gobierno de que la información proporcionada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y por los relatores especiales de la ONU no podía ser verificada de forma creíble. Por el contrario, declaró que estas fuentes debían ser tomadas "extremadamente en serio".



FRANK SLIJPER
PAX, Países Bajos

El impulso para cortar el suministro de armas puede fortalecerse tras la orden provisional de la CIJ. Por ejemplo, la empresa japonesa Itochu Corp **anunció** que terminaría su cooperación con un fabricante de armas israelí debido a la decisión del tribunal.

Se necesitan muchas más acciones de este tipo para evitar que la situación se descontrole aún más. Hay claros indicios de una posible escalada regional. Hezbollah e Israel están intercambiando ataques, y los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen a embarcaciones en el Mar Rojo están desencadenando respuestas estadounidenses y británicas. Esta escalada debe detenerse. Todos los beligerantes deben atender los continuos llamamientos de la sociedad civil a un alto el fuego inmediato y permanente.

LEER MÁS:

› GAZA: LLAMAMIENTO A UN ALTO EL FUEGO INMEDIATO

Tres años de guerra de Rusia contra Ucrania

La invasión de Ucrania por parte de Rusia entró en su tercer año en febrero de 2024, evidenciando el modo en que acciones militares supuestamente acotadas pueden convertirse en conflictos prolongados. La guerra se ha transformado en una batalla territorial en que los ejércitos luchan por cada centímetro de terreno. Las consecuencias han sido desastrosas para la población civil. Ha habido **más de 10.000 muertos** y violaciones sistemáticas de derechos humanos. Al igual que en Gaza, periodistas y trabajadores de los medios de comunicación están pagando un alto precio: **al menos 69** de ellos han sido asesinados hasta la fecha.

Mientras la sociedad civil ucraniana muestra un inmenso esfuerzo voluntario, el activismo ruso enfrenta intensas restricciones.

En Ucrania, la sociedad civil trabaja para **evacuar** a la población civil de las zonas ocupadas, **brindar atención médica** a los heridos y **restaurar** edificios dañados. También documenta los numerosos crímenes cometidos por Rusia y recopila pruebas, con la esperanza de llevar a Vladimir Putin y a su círculo cercano ante la justicia internacional. "Un Tribunal para Putin" (T4P) es una iniciativa de tres OSC ucranianas, entre ellas el Centro para las Libertades Civiles, ganador del **Premio Nobel de la Paz**, que recopila y registra detalles de los delitos contra los derechos humanos. Su objetivo es construir una base de evidencia que pueda ser utilizada por la Corte Penal Internacional (CPI) y otros organismos para impartir justicia. En agosto, presentaron a la CPI **pruebas** de actos de genocidio cometidos por las fuerzas rusas en Mariupol.

La sociedad civil ucraniana se está enfocando cada vez más en la lucha contra la corrupción. Esto refleja un creciente interés ciudadano en la gestión financiera de las entidades públicas, especialmente en la gestión de la ayuda internacional, por temor a que el apoyo se agote si los donantes consideran que los fondos no se utilizan adecuadamente. Las iniciativas de la sociedad civil buscan garantizar una reconstrucción sin corrupción, incluso utilizando herramientas en línea para rastrear el gasto público. La **Better Regulation Delivery Office**, un grupo de reflexión independiente de la sociedad civil, investiga y busca prevenir la corrupción en la **reconstrucción y restauración** de edificios.

Al mismo tiempo, la prolongación del conflicto ha afectado inevitablemente la capacidad de respuesta de la población. El voluntariado, que alcanzó un nivel increíblemente alto del 80% de la población en los primeros meses de la guerra, **ha disminuido** a la mitad durante el segundo año. La respuesta de la sociedad civil ucraniana a la guerra requiere de apoyo internacional sostenido.

Mientras tanto, al intentar suprimirla por todos los medios posibles Rusia continúa reconociendo la importancia de la sociedad civil. El suceso reciente más impactante es la sospechosa muerte del líder opositor Alexei Navalny en una colonia penitenciaria del Ártico. Es el último de una **larga lista** de personas que han fallecido repentinamente tras enfrentarse a Putin.

El asesinato perpetrado por el Estado, ampliamente percibido como la causa de la muerte de Navalny, representa la forma más extrema de represión, pero Putin cuenta con muchos otros recursos a su disposición. Uno de ellos es la criminalización de las manifestaciones, que se observó una vez más cuando la gente acudió a **vigilias improvisadas** para conmemorar a Navalny. La policía **detuvo a cientos de personas**.

La organización de derechos humanos OVD-Info **informa** que, desde el inicio de la invasión, las autoridades han detenido a 19.855 personas durante manifestaciones contra la guerra, han iniciado 897 causas penales contra activistas antibelicistas y han introducido 51 nuevas leyes represivas.

Entre **los numerosos rusos** encarcelados por actos simbólicos de protesta, el artista de Crimea Bohdan Zizu **fue condenado** en junio a 15 años de prisión por pintar un edificio con los colores de la bandera ucraniana. En noviembre, un tribunal **condenó** a la artista Alexandra Skochilenko a siete años de cárcel por colocar información sobre la guerra en las etiquetas de precios de los supermercados. Incluso quienes ayudan a refugiados ucranianos que viven en Rusia son criminalizados.

En enero de 2023, las autoridades **declararon** que Meduza, uno de los pocos medios de comunicación independientes que quedaban en Rusia, sería considerado una "organización indeseable". Por lo tanto, se le prohibió operar en Rusia y se criminalizó a cualquier persona que compartiera su contenido. En junio, el canal de televisión independiente Dozhd **sufrió el mismo destino**, y otras organizaciones también fueron etiquetadas de la misma manera durante el año.

En enero de 2023, un tribunal **ordenó el cierre** del Grupo Helsinki de Moscú, la organización rusa más antigua de defensa de los derechos humanos, debido a un defecto técnico relacionado con su registro. En agosto, los tribunales **ordenaron** el cierre de otra organización de derechos humanos, el Centro Sájarov. Estos métodos han sido empleados repetidamente por las autoridades para forzar a un número creciente de OSC a disolverse o exiliarse.

El Estado también ha designado a numerosas personas y organizaciones como “agentes extranjeros”, una clasificación destinada a estigmatizarlas y asociarlas con el espionaje. En noviembre, el Moscow Times **fue añadido** a la lista. En febrero de 2024, Putin **promulgó** una ley que permite al gobierno confiscar dinero y otros bienes de quienes critiquen la guerra. También han aumentado los ataques contra las personas LGBTQI+ como parte de la estrategia del gobierno para avivar un sentimiento nacionalista ►VÉASE CAPÍTULO.

El Estado también está criminalizando a los periodistas. En marzo, Evan Gershkovic, periodista del Wall Street Journal, fue detenido por espionaje. Ello envió la señal de que ni siquiera los periodistas internacionales están a salvo. La periodista ruso-estadounidense Alsu Kurmasheva de Radio Free Europe también está **bajo custodia** tras ser arrestada mientras visitaba a su familia en Rusia. Es probable que Putin esté considerando utilizar a los detenidos como medio de presión en el marco de un intercambio de prisioneros. Otros periodistas que trabajan fuera de Rusia también han sido incluidos por las autoridades estatales en **listas de personas buscadas** o **acusadas en rebeldía**.

Es difícil esperar un relajamiento de la represión, al menos mientras dure la guerra. En marzo, Putin obtendrá un nuevo mandato a través de elecciones no competitivas. Ningún candidato creíble está autorizado a oponerse a él, y en febrero de 2024 se **prohibió la candidatura** de un político antibelicista inesperadamente erigido en posible articulador de una alianza opositora. El año pasado, el gobierno modificó las leyes para **restringir aún más** la cobertura mediática de las elecciones, lo que dificulta la denuncia de fraude.

Durante un tiempo el año pasado, Putin pareció debilitado frente a la rebelión de su antiguo aliado Yevgeny Prigozhin, quien se encaminó con sus mercenarios del grupo Wagner hacia Moscú. Ambas partes llegaron a un acuerdo para poner fin al conflicto y, dos meses después, Prigozhin murió en un sospechoso accidente aéreo. Ahora el Estado ruso controla directamente a los mercenarios.

Desde entonces, Putin ha reafirmado su autoridad. Podría estar sacando ventaja en la guerra. Rusia dispone de una mayor potencia de fuego y está sobreviviendo en gran medida a los intentos de



Foto de Marc Asensio/NurPhoto via Getty Images.

Exiliados rusos rinden homenaje al líder opositor Alexei Navalny en Barcelona, España, el día de su funeral, 1º de marzo de 2024.

aislamiento financiero gracias a regímenes represivos como China, India y Turquía, que compensan la disminución en la demanda de combustibles fósiles. La economía del país se ha convertido en una **economía de guerra**, con un fuerte enfoque del gasto estatal en el esfuerzo militar, aunque esta situación no es sostenible a largo plazo. Además, algunos de los gobiernos más autoritarios del mundo, como **Irán** y **Corea del Norte**, están suministrando armas.

Al mismo tiempo, las fuerzas ucranianas **carecen de municiones**. El apoyo a Ucrania ha sido puesto a prueba por los cambios políticos en Europa y la ruptura del consenso político en los Estados Unidos, donde los republicanos afiliados a Trump intentan bloquear toda nueva ayuda militar.

Puede que Putin esté en una posición favorable, pero el alto nivel de control estatal hace difícil sopesar cabalmente su popularidad, y las elecciones no ofrecerán ninguna evidencia en ese sentido. Dada la represión, es posible que la cantidad de protestas tampoco revele mucha información, pero aun así algunas han tenido lugar, incluidas las que fueron convocadas en respuesta a la muerte de Navalny.

Se ha gestado un movimiento de protesta vital en torno al descontento provocado por las pérdidas sufridas durante la guerra. En septiembre, una **encuesta independiente** reveló que el respaldo a la guerra había alcanzado su punto más bajo. Se informa que el ánimo de las tropas rusas es bajo, y los desertores **han instado** a otros a unirse a ellos. **Familiares** de soldados han **protestado** para exigir el cese de los combates.

Los manifestantes han protagonizado otros episodios de oposición. En noviembre, tuvo lugar una **manifestación** en Siberia en contra de una iniciativa local que buscaba restringir aún más las protestas. En enero de 2024, en Baymak, al sur de Rusia, cientos de personas se manifestaron en contra del encarcelamiento de un activista.

Estos momentos no necesariamente dan forma a un movimiento, pero pueden servir de inspiración para constituir uno, algo que a menudo sucede de manera inesperada. La historia de Putin está lejos de haber concluido pero, como ocurrió con otros tiranos en el pasado, probablemente parecerá invencible hasta justo antes de su caída.

LEER MÁS:

› RUSIA Y UCRANIA: HISTORIA DE DOS SOCIEDADES CIVILES

El conflicto olvidado de Sudán

Con la atención global centrada en Gaza y Ucrania, apenas se destacan otros acontecimientos en los titulares. La guerra civil entre las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) y las milicias de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR), que comenzó en abril de 2023, ha desaparecido casi por completo del radar global. Sin embargo, ha provocado una crisis humanitaria de gran magnitud, no sólo en Sudán, sino también en los países vecinos, a los que se ha desplazado mucha gente, y en Chad en particular. Aunque la sociedad civil sudanesa ofrece soluciones, la comunidad internacional parece no prestar atención.

La guerra es un conflicto por la supremacía entre dos líderes rivales que anteriormente habían trabajado juntos en el gobierno militar: Abdel Fattah al-Burhan lidera las FAS y Mohamad Hamdan Dagalo, conocido como Hemeti, comanda las FAR, surgidas de las infames milicias yanyauid.

Inicialmente, el conflicto se desarrolló en las calles de la capital, Jartum, y su ciudad vecina, Omdurman, pero desde entonces se ha extendido a otras partes de Sudán. Darfur está en llamas, y se acusa a las FAR de llevar a cabo **ejecuciones sumarias** de personas masalit y de otros grupos étnicos, replicando el genocidio indígena perpetrado por los yanyauid a principios de la década del 2000. En diciembre, las FAS **tomaron el control** de la gran ciudad de Wad Madani. También han estallado combates en la montañosa región de Kordofán. Mientras tanto, los enfrentamientos continúan en Jartum y Omdurman, donde las tropas de las FAS lograron una excepcional victoria en febrero de 2024.

La sociedad civil sudanesa es diversa. Existe un sector con un historial de participación en procesos políticos que respaldó a la administración supuestamente de transición surgida tras el **golpe de 2021**. También hay OSC establecidas que defienden los derechos y prestan servicios esenciales. Y luego están los comités de resistencia: grupos de barrio que se formaron para desempeñar un papel crucial en la revolución de 2019, la cual derrocó al exdictador Omar al-Bashir, y que han seguido desafiando al gobierno militar.

Los comités se rigen por la democracia interna, toman decisiones por consenso y abogan por un gobierno democrático. Rechazan los planes del mundo exterior, que intentaron establecer una forma de régimen militar para garantizar la estabilidad, lo cual inevitablemente conduciría a la opresión. Durante el conflicto, también se han convertido en proveedores esenciales de artículos de primera necesidad, como alimentos y agua, servicios de salud e información vital.

Varios comités de resistencia han colaborado en la **elaboración de un plan** de transición, pero fuerzas tanto internas como externas rechazan sistemáticamente sus demandas de un régimen civil democrático, que consideran demasiado ambiciosas. Hoy en día, el ejército está atacando a las personas involucradas en los comités de resistencia.

Los ataques contra la sociedad civil forman parte de una ola más amplia de violencia contra la población civil perpetrada por las FAS, las Fuerzas de Defensa Nacional y otras milicias. Según las Naciones Unidas, desde abril, **más de 12.000 personas** han sido asesinadas y **7,76 millones** han sido desplazadas, otorgando a Sudán el triste récord de tener el mayor número de desplazados en el mundo. El cólera y otras enfermedades como el dengue, la malaria y el sarampión se han propagado en medio del caos, sometiendo al sistema de salud a una presión sin precedentes. En las regiones más afectadas, la comida, el agua y los medicamentos esenciales son escasos.

Las fuerzas armadas están atacando tanto a los trabajadores humanitarios como a **los periodistas**, lo que les impide proporcionar ayuda vital. Además, a principios de diciembre, el gobierno liderado por las FAS **puso fin** al mandato de la Misión Integrada de Asistencia de las Naciones Unidas en Sudán, la cual tenía la responsabilidad de respaldar la transición hacia un régimen democrático.

Los Estados extranjeros están evaluando sus intereses para determinar qué bando apoyar, considerando la importancia estratégica de Sudán debido a su tamaño y su ubicación entre el África Oriental y el Norte de África. Según informes, los Emiratos Árabes Unidos están actualmente suministrando armas a las fuerzas de seguridad sudanesas. Además, los mercenarios rusos parecen haber tomado partido, dado el interés de ambos países en las minas de oro de Sudán. Por otro lado, Egipto continúa brindando un apoyo constante a la institución militar, mientras que aparentemente Irán está suministrando armas a Burhan, y las fuerzas especiales ucranianas están **involucradas** junto a las FAS.

Mientras tanto, los Estados están lejos de proporcionar la ayuda necesaria: a finales de año, las Naciones Unidas informaron que solo habían recibido el **39%** de los fondos solicitados.

Los Estados extranjeros han pecado sistemáticamente de ilusos, suponiendo que la única forma de garantizar la estabilidad es colaborar con los líderes militares. Todos los procesos emprendidos desde el golpe de Estado de 2021 han fortalecido el poder de los jefes militares actualmente en conflicto, demostrando así la insensatez de este enfoque.

El conflicto actual representa el mejor argumento posible a favor de la democratización en lugar de la continuación del régimen militar. El poder no debería pertenecer a ninguno de los generales en conflicto, sino a todo el pueblo sudanés. La comunidad internacional debe otorgar una importancia seria a la sociedad civil de base, especialmente a los comités de resistencia.

LEER MÁS:

- EL CONFLICTO DE SUDÁN NECESITA SOLUCIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL EN

Sahel: el gobierno militar no logra cambiar las cosas

En otros lugares del Sahel, en los últimos años, los ejércitos han tomado el control de varios Estados. En 2023, Níger se sumó a sus vecinos Burkina Faso, Chad y Mali, en la lista de regímenes militares ▶**VÉASE CAPÍTULO**. El ejército utilizó la misma justificación que en



Foto de AFP vía Getty Images.

Un grupo de manifestantes ondea una bandera en una manifestación por el Día de la Independencia en Niamey, Níger, el 3 de agosto de 2023.

otros casos, citando la incapacidad del gobierno civil para dominar a la insurgencia yihadista que se extiende más allá de las fronteras.

Los Estados de la región bajo régimen militar generalmente se han alejado de sus antiguas relaciones con Occidente, especialmente con la antigua potencia colonial, Francia, así como con los órganos de las Naciones Unidas. Han optado por una cooperación más estrecha con Rusia, que a menudo implica la llegada de mercenarios rusos que extraen recursos como el oro, y que a cambio lideran la lucha contra la insurgencia. La mayoría de los mercenarios provienen del antiguo grupo Wagner, **rebautizado** como Africa Corps tras ser absorbido por Putin.

Los mercenarios rusos están involucrados en al menos **18 países africanos**. En Mali, participan activamente en combates e incluso han **causado la muerte de civiles**. El aumento de la intervención rusa es a menudo precedido por intensas campañas de desinformación prorrusa y antifrancesa, como parece haber ocurrido en **Níger**.

Los golpes militares y la inclinación hacia Rusia generalmente reciben un importante respaldo de la opinión pública, motivada por los fracasos pasados en la lucha contra la crisis de seguridad. Quienes más padecen la inseguridad tienden a estar más dispuestos a aceptar cualquier cambio que prometa mejorar la situación. Esta tendencia también se observa en **El Salvador**, cuyo presidente goza de gran popularidad gracias a políticas de seguridad draconianas que han contenido la violencia de las pandillas, permitiéndole acumular y concentrar el poder ▶**VÉASE CAPÍTULO**.

Hasta el momento, la junta de Níger ha seguido el mismo patrón. Cuando el gobierno de Mali expulsó a las fuerzas francesas, Níger se convirtió en la base de las operaciones militares regionales de Francia. Los movimientos sociales de Níger **protestaron** exigiendo la retirada francesa y la gente ondeó banderas rusas al celebrar el golpe de Estado. La junta **rompió** los acuerdos de cooperación militar con Francia y suspendió las emisoras francesas. En octubre, **ordenó** la salida del funcionario de más alto rango de la ONU en Níger. En diciembre, puso fin a dos acuerdos militares con la Unión Europea (UE) y **se reunió** con oficiales militares rusos. El jefe de la junta de Chad también **se reunió** con Putin en enero de 2024, señalando un posible cambio con respecto a su anterior alineamiento con Occidente.

Sin embargo, no hay pruebas de que el gobierno militar o la importación de mercenarios rusos mejoren la situación de seguridad. No lo han hecho en los países que sufrieron golpes militares en años anteriores. La insurgencia continúa y la violencia ha **aumentado**, mientras que la situación humanitaria no ha hecho más que **empeorar**.

Existe otro problema para la sociedad civil. Aunque inicialmente algunos grupos de la sociedad civil acogen con satisfacción los golpes de Estado como respuesta a la inseguridad, las juntas reprimen

invariablemente las libertades cívicas. En Níger, el nuevo gobierno ha restringido las protestas y los **medios de comunicación**, siguiendo los pasos de **Burkina Faso**, **Chad** y **Mali**. En última instancia, estas restricciones dificultarán que la sociedad civil reclame cambios cuando vuelva a surgir el descontento.

LEER MÁS:

› GOLPE DE ESTADO EN NÍGER: MALAS NOTICIAS PARA LA DEMOCRACIA EN ÁFRICA OCCIDENTAL EN

Myanmar: golpe de Estado devenido conflicto

Han pasado tres años desde el golpe de Estado en Myanmar, y el conflicto se ha arraigado. Dada la historia de décadas de ejercicio del poder por parte de los militares, es posible que los generales esperaran encontrar poca resistencia al derrocar al gobierno electo en febrero de 2021. Sin embargo, el derrocado Gobierno de Unidad Nacional ha respondido con una campaña militar, a menudo apoyada por milicias étnicas largamente establecidas. Grandes porciones del país no están bajo control militar.

La sociedad civil está haciendo todo lo posible para responder a las necesidades humanitarias, defender los derechos humanos y buscar una vía hacia la paz. Los grupos de la sociedad civil de Myanmar y de la región han elaborado un **plan** que insta a una respuesta internacional para poner fin a la violencia militar, incluyendo sanciones, un embargo de armas y una remisión a la CPI.

La sociedad civil también insta a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), el organismo regional clave, a priorizar el conflicto y entablar un diálogo con los numerosos grupos que buscan el retorno a la democracia. Hasta el momento, esto no ha ocurrido, ya que la ASEAN se aferra a un **plan** desacreditado desde hace mucho tiempo y los gobiernos de la región muestran signos de querer normalizar las relaciones con la junta. Se puede esperar poco progreso mientras el gobierno autoritario de Laos presida la organización en 2024.

> Laos ha designado a un diplomático experimentado como enviado especial de la ASEAN, encargado de reunirse con el líder de la junta, Min Aung Hlaing, en Myanmar. Sin embargo, la falta de un programa claro para involucrar a los partidarios de la democracia, como el Gobierno de Unidad Nacional, el Consejo Consultivo de Unidad Nacional y las Organizaciones Étnicas Revolucionarias, suscita dudas sobre el papel progresista de la ASEAN. Dadas las relaciones históricas y políticas entre la junta militar y el gobierno de Laos, persisten preocupaciones sobre la alineación de la ASEAN con los intereses del pueblo de Myanmar.
>
> 
> **AILEEN DIAZ BACALSO**
> FORUM-ASIA

Sin embargo, continuar por el mismo camino solo puede resultar en más derramamiento de sangre. La violencia se intensificó durante 2023. En noviembre, tres grupos armados del norte se unieron a la lucha contra la junta, formando la Alianza de la Hermandad. En lo que las Naciones Unidas calificaron como la **mayor escalada** de combates desde el golpe de Estado, la ofensiva de los rebeldes **cortó** rutas comerciales vitales con China. Parece seguro que en el corto plazo la junta no puede ganar este conflicto.

Acorralados, los militares reaccionaron con una violencia repugnante. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar informa que la junta ha bombardeado hospitales, escuelas, aldeas y campamentos de desplazados. Ha masacrado y torturado civiles y utilizado violencia sexual y trabajos forzados y bloqueado ayuda humanitaria vital.

La junta intenta controlar la información, como lo demuestra la detención de **64 periodistas**. Sin embargo, la verdad no puede ser ocultada. En septiembre, el mecanismo de investigación independiente

de las Naciones Unidas para Myanmar **informó** sobre la intensificación de los crímenes de guerra y los crímenes contra la humanidad. Se informó que la mayoría de los altos mandos militares son **responsables** de crímenes de guerra. En septiembre, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, **condenó** la violencia, calificándola de "inhumanidad en su forma más vil".

El ataque aéreo **más mortífero** hasta la fecha ocurrió en abril de 2023, cuando se estima que 168 personas, incluidos 40 niños, fueron asesinadas por las fuerzas militares en el pueblo de Pa Zi Gyi. La Asociación de Asistencia a Presos Políticos, que realiza un seguimiento regular, **informa** que hasta ahora 4.598 personas han sido asesinadas por la junta y los grupos afines a los militares, y que 26.199 personas están actualmente detenidas. Las cárceles son peligrosas: 34 presos políticos **murieron en custodia** en 2023.

Muchas personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares. Hacia finales de 2023, **más de 2,6 millones de personas** habían sido desplazadas, 1,1 millones más que el año anterior. Las Naciones Unidas estiman que, mientras 18,6 millones de personas necesitan ayuda humanitaria, solo se ha recibido el **29%** de los fondos solicitados en 2023. Mientras tanto, los trabajadores humanitarios no están a salvo: al menos 142 de ellos fueron arrestados o detenidos por la junta en 2023.

En julio, el ejército volvió a **prorrogar** el estado de emergencia, que ha estado en vigor desde el golpe de Estado. En febrero de 2024, **anunciaron** la implementación del servicio militar obligatorio para los jóvenes. Los generales ya no pueden pretender avanzar hacia las elecciones que se habían comprometido a celebrar y que esperaban usar para legitimar su poder.

Mientras la ASEAN se debilita, el ejército sufre cierta presión internacional. En octubre, el gobierno estadounidense **impuso sanciones** a la Myanma Oil and Gas Enterprise (MOGE), la empresa estatal que constituye la principal fuente de ingresos extranjeros del régimen. La Unión Europea también intensificó **sus sanciones** en diciembre, especialmente contra dos empresas que suministran armas y generan ingresos para la junta. En mayo, el grupo indio Adani cedió a las presiones y **vendió** su puerto en Myanmar.

La comunidad internacional debe mantener aislada a la junta y negarle cualquier reconocimiento diplomático. Los estados deben sancionar la red de empresas del ejército, incluida MOGE. Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de abril de 2023 condenó la violencia de la junta, pero **no** pidió sanciones como la prohibición de la venta de combustible de aviación o un embargo de armas. La sociedad civil exige la implementación de estas medidas esenciales para poner fin a las masacres.

LEER MÁS:

› CATÁSTROFE MILITAR EN MYANMAR: TRES AÑOS Y CONTANDO EN

Nagorno-Karabaj: fin de un conflicto congelado

El prolongado y a menudo estancado conflicto entre Armenia y Azerbaiyán llegó a su fin de manera decisiva en septiembre, dejando a la sociedad civil luchando por ayudar a las multitudes que se vieron obligadas a huir repentinamente.

Ambas partes estuvieron enfrentadas durante mucho tiempo por la disputada región de Nagorno-Karabaj, situada dentro de las fronteras internacionalmente reconocidas de Azerbaiyán, pero que hasta hace poco estaba habitada mayoritariamente por armenios étnicos, como la autoproclamada República secesionista de Artsaj. La disputa resurgió cuando ambos países se independizaron al final de la Guerra Fría.

Históricamente, Armenia tenía el control de la situación, pero Azerbaiyán recuperó gran parte del territorio en una ofensiva en 2020, en la que perdieron la vida miles de personas. La región separatista restante dependía de un estrecho corredor que la conectaba con Armenia, pero Azerbaiyán impuso un bloqueo en diciembre de 2022.



Foto de Alain Jocard/AFP vía Getty Images.

Refugiados de Nagorno-Karabaj saludan desde la parte trasera de un camión tras cruzar la frontera con Armenia el 28 de septiembre de 2023.

> La libre circulación de personas hacia Armenia se volvió imposible. El prolongado bloqueo provocó una crisis humanitaria debido a la escasez de bienes esenciales, como electricidad, combustible y agua, así como al cierre de servicios básicos.



SHUSHANIK NERSESYAN
People in Need Armenia

La consecuencia fue una crisis humanitaria que paralizó el día a día. Diez meses de bloqueo agotaron a la población, por lo que el siguiente ataque azerbaiyano, en septiembre, fue breve. Ambas partes acordaron un alto el fuego justo un día después de que comenzara la ofensiva. Poco más de una semana después, la República de Artsaj anunció su disolución.

En 2020, Azerbaiyán rompió su promesa de respetar el estatus especial de Nagorno-Karabaj. Estaba claro que el gobierno simplemente pretendía absorber la región dentro de Azerbaiyán. Dado el historial de violencia étnica y el tamaño mucho mayor de la población azerbaiyana, los armenios temían lo peor.

Cuando las autoridades azerbaiyanas levantaron el bloqueo, se produjo un éxodo. Más de 100,000 personas, casi toda la población de etnia armenia, huyeron a Armenia. En lo que podría calificarse razonablemente como un episodio de migración forzosa y limpieza étnica, el territorio se vació.

> El bloqueo y la ofensiva tuvieron el objetivo de llevar a cabo la limpieza étnica de la población armenia en Nagorno-Karabaj. La privación intencionada de recursos esenciales para la supervivencia, seguida del ataque directo para apoderarse de Nagorno-Karabaj, junto con la creación de condiciones para que la población armenia se marchara, indican que Azerbaiyán no contemplaba un final pacífico del conflicto ni garantías de derechos humanos que permitieran a la población armenia sentirse segura en sus hogares y continuar viviendo en Nagorno-Karabaj.



LIDA MINASYAN
Fondo de Colaboración para Europa Central y Oriental, el Cáucaso y Asia Central y Septentrional

El conflicto y sus secuelas transcurrieron sin mucho intento de intervención internacional. Azerbaiyán utiliza su riqueza petrolífera para establecer relaciones estratégicas con Estados europeos y proyectar una imagen internacional positiva, entre otras cosas, al acoger la próxima cumbre sobre el clima, la COP29 ▶**VÉASE CAPÍTULO**. Rusia, preocupada por su guerra en Ucrania, ya no es el sólido socio que fue en el pasado para Armenia. Turquía, el aliado más firme de Azerbaiyán,

está ocupando el espacio regional que dejó vacante Rusia. Como consecuencia, es poco probable que los responsables de violaciones de los derechos humanos tengan que rendir cuentas.

Azerbaiyán es un Estado autoritario en el que dos generaciones de la misma familia han ocupado el poder desde 1993. Su espacio cívico está cerrado, lo que impide la crítica a las acciones del Estado. El gobierno adoptó nuevas medidas represivas tras su victoria, antes de unas elecciones presidenciales anticipadas celebradas en febrero de 2024 que no fueron ni remotamente libres ni justas y que otorgaron al presidente en funciones un quinto mandato consecutivo. Según informes, en el mes siguiente a la victoria de Azerbaiyán, las autoridades detuvieron a más de **20 personas** por criticar la ofensiva. Desde entonces, el Estado ha continuado deteniendo a periodistas y disidentes.

Aunque el conflicto haya terminado, es necesario abordar los problemas a largo plazo. Armenia tiene una nueva población resignada a no volver nunca a sus antiguas casas. La gente tiene necesidades duraderas, tanto materiales como psicológicas. La sociedad civil, que ha trabajado para proporcionar ayuda de emergencia durante el éxodo, debe ahora estar capacitada para desempeñar un papel pleno en la configuración de una respuesta más amplia, que debe incluir la rendición de cuentas por las violaciones de derechos cometidas durante el conflicto.

LEER MÁS:

- NAGORNO-KARABAJ: CONSECUENCIAS DE LARGO ALCANCE DE UN CONFLICTO OLVIDADO EN

Etiopía: preguntas sin respuesta

Etiopía es escenario de otro conflicto que el Estado quiere desesperadamente dar por terminado. Una guerra de dos años entre las fuerzas federales y los insurgentes de la región de Tigray supuestamente concluyó en noviembre de 2022 tras la firma de un acuerdo de paz que confirmó la victoria del gobierno federal. Sin embargo, la violencia persiste en varias partes del país, especialmente en la región de Amhara, donde también crece una **crisis alimentaria**. El Estado continúa reprimiendo a la sociedad civil, a los manifestantes de la oposición y a **los medios de comunicación independientes**, utilizando cortes de internet para limitar el flujo de información.

La Comisión Internacional de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Etiopía **documentó** que las fuerzas eritreas, que lucharon del lado del gobierno federal, y las milicias amharas han continuado cometiendo violaciones y actos de violencia sexual desde que entró en vigor el acuerdo de paz de Tigray. Amnistía Internacional ha **encontrado indicios** de crímenes de guerra y posibles crímenes de lesa humanidad desde la firma del acuerdo de paz. La Comisión Etíope de Derechos Humanos ha **detectado** indicios de ejecuciones extrajudiciales de civiles a manos de las fuerzas gubernamentales en Amhara. Según **informes**, en enero de 2024, las tropas federales llevaron a cabo ejecuciones sumarias matando a civiles en la ciudad amhara de Merawi.

El Estado no muestra ningún interés real en poner fin a las violaciones de derechos ni en exigir responsabilidades a los autores, especialmente a los que están de su lado. El informe de la Comisión de la ONU concluye que el proceso de justicia transicional del gobierno no cumple con las normas internacionales. Asegura que el gobierno no investiga las violaciones de derechos humanos y no proporciona apoyo a las sobrevivientes de violencia sexual y de género. Las víctimas **no confían** en que el Estado las tome en serio.

El gobierno busca presentar el conflicto como resuelto y pasar página ante la comunidad internacional. Presionó con éxito para cerrar la Comisión de Investigación de la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, cuyo mandato **finalizó** en junio, tras dos años de nunca haber elaborado un informe. Luego permitió discretamente que el mandato de la Comisión de la ONU expirara a finales de año. Para renovarlo, se necesitaba una votación en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero tras las presiones de Etiopía, nunca se llevó a cabo.

Los **llamados** de la sociedad civil para que continuaran estas investigaciones internacionales no fueron escuchados porque los Estados prefirieron dejar el conflicto atrás para preservar sus relaciones con un país estratégico en la región. Mientras los conflictos arden en otras partes, este ha desaparecido discretamente de los titulares.

Quizás envalentonado por la falta de rendición de cuentas sobre sus guerras en Tigray y Amhara, en enero de 2024 el gobierno etíope anunció un acuerdo con Somalilandia que amenaza con avivar aún más las tensiones regionales. Etiopía, sin salida al mar desde la independencia de Eritrea en 1993, **anunció** un acuerdo para arrendar un tramo de costa a Somalilandia, una nación de facto dentro de las fronteras de Somalia sin reconocimiento internacional. Se ha sugerido que Etiopía podría reconocer a Somalilandia a cambio, lo que provocaría la airada respuesta de Somalia.

> La implicación internacional debe tener como objetivo ayudar a Etiopía y Somalia a alcanzar una solución mutuamente aceptable. Esto requiere una diplomacia cuidadosa para evitar exacerbar las tensiones existentes o generar nuevos problemas. También es esencial instar a aquellos con intereses creados en la región a que eviten explotar esta situación para sus agendas. La desescalada debe ser el objetivo primordial.
>
> 
> **MENGISTU ASSEFA**
> Centro para el Avance de los Derechos y la Democracia

Todas las partes deben tomar todas las precauciones necesarias para garantizar que la disputa actual no desencadene otro conflicto armado. Al mismo tiempo, el gobierno etíope debe atender los llamados de la sociedad civil para asegurar la rendición de cuentas por los crímenes contra los derechos humanos y permitir que la población se movilice, haga campañas y exprese su desacuerdo.

LEER MÁS:

› ETIOPÍA: SIN PAZ NO HAY JUSTICIA EN

Haití: la violencia de las pandillas fuera de control

En Haití, la violencia tiene un origen distinto, pero sus efectos en la vida de las personas son igualmente mortíferos. La violencia de las pandillas se apodera del país. La sociedad civil, una fuente de ideas a menudo ignorada por el gobierno y la comunidad internacional, critica las propuestas de intervención internacional y pide en su lugar un gobierno de transición de amplia base que ayude a conducir a Haití hacia la seguridad.

La violencia de las pandillas ha aumentado tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en julio de 2021. Ahora se conoce que un grupo de mercenarios, en su mayoría colombianos, perpetró el asesinato, aunque aún no está claro quién ordenó el golpe. Ariel Henry, el sustituto en funciones de Moïse, figura entre los acusados de complicidad. Sin embargo, no está incluido entre las 50 personas recientemente **acusadas** por el asesinato, que incluyen a la viuda de Moïse, Martine Moïse, y al ex primer ministro Claude Joseph. Estos últimos argumentan que se trata de una maniobra políticamente motivada por Henry. Mientras tanto, Henry ostenta poder político formal, pero carece de mandato, ya que los mandatos de todos los cargos electos del gobierno han expirado.

Las pandillas criminales han prosperado en el vacío de poder, llegando a controlar aproximadamente la mitad de Haití. La capital, Puerto Príncipe, se ha convertido en el epicentro de una sangrienta batalla entre pandillas rivales. Según **cálculos** de la Oficina Integrada de la ONU en Haití, durante 2023 perdieron la vida alrededor de 3.960 personas, 1.432 resultaron heridas y 2.951 fueron secuestradas. Sin embargo, estas cifras podrían ser mayores, ya que muchos delitos no se denuncian.

Las pandillas no solo se limitan a la violencia entre ellas; también atacan a activistas por la paz y **periodistas**. Utilizan la violencia sexual de manera sistemática para controlar a las comunidades mediante el miedo. Además, demuestran habilidades en la extracción de recursos, incluido el secuestro extorsivo.

Las redes de corrupción establecen conexiones entre las pandillas, jueces y policías, generando una impunidad generalizada. El sistema de justicia penal se muestra débil, y la policía carece del **equipamiento adecuado**. Como resultado, no se han registrado acusaciones **recientes** ni condenas relacionadas con la violencia de las pandillas. En 1995, Haití disolvió su ejército tras múltiples intentos de golpe de Estado.

Aquellos con capacidad para huir están optando por hacerlo, enfrentándose a hostilidades y peligros. La República Dominicana, que comparte la isla de La Española con Haití, no les da la bienvenida; incluso está construyendo un muro fronterizo. Estos individuos se ven obligados a tomar rutas riesgosas hacia países más distantes, y aun llegando a su destino, no encuentran seguridad. Tan solo en el primer semestre de 2023, **más de 115.000** personas fueron repatriadas a Haití en contra de su voluntad.

En respuesta a la violencia, algunos han formado **grupos de vigilantes** que llevan a cabo linchamientos de presuntos miembros de pandillas, cobrándose también víctimas sin conexión con estas.

La violencia ha generado una grave crisis humanitaria. La gente lucha por acceder a lo esencial, como alimentos y agua. El cólera ha retornado y muchos niños están desnutridos. La inseguridad limita el acceso



Foto de Richard Pierrin/AFP vía Getty Images.

Una familia huye de la violencia de las pandillas en el barrio de Pétion-Ville de Puerto Príncipe, Haití el 30 de enero de 2024.

humanitario, y, al igual que en Myanmar y Sudán, el financiamiento escasea. En julio, el Programa Mundial de Alimentos se vio obligado a **reducir** la ayuda alimentaria a un número menor de personas.

En este contexto desgarrador, la necesidad de ayuda internacional es evidente, pero a la sociedad civil le preocupa la naturaleza y el propósito de dicha asistencia. La historia de Haití desde su independencia ha estado marcada por interferencias extranjeras, especialmente por parte del gobierno estadounidense. Incluso las fuerzas de la ONU, lejos de ser salvadoras, fueron responsables de abusos sexuales y de un **brote de cólera** durante su misión de mantenimiento de la paz de 2004 a 2017. Los grupos internacionales de la sociedad civil, tales como lo que respondieron al devastador terremoto de 2010, han sido criticados por un enfoque autoritario y acusados de abusos sexuales.

El plan más reciente, delineado en una **resolución del Consejo de Seguridad de la ONU** adoptada en octubre, proponía enviar una fuerza policial internacional para fortalecer la capacidad de aplicación de la ley. Aunque durante bastante tiempo fue el que impulsó la idea, el gobierno estadounidense, posiblemente consciente de su historial negativo en Haití, buscó que otro país la liderara.

El gobierno de Kenia **se ofreció** a desplegar un total de mil policías, y varios países caribeños prometieron un contingente menor. Sin embargo, en enero de 2024, un tribunal keniano **declaró** inconstitucional el plan en respuesta a una demanda de la oposición.

Ante el fracaso de esta última propuesta, los grupos de la sociedad civil haitiana buscan conocer cuál es el plan a largo plazo. Se preguntan cuánto tiempo planean quedarse en el poder los políticos no elegidos que lideran el desastre, y **demandan** un gobierno de transición no partidista como primer paso para salir de la crisis. No desean una respuesta internacional que fortalezca aún más a una élite corrupta.

La sociedad civil de Haití representa una **fuente crucial de resiliencia**, pero su papel ha sido descuidado durante mucho tiempo por el gobierno nacional, los Estados extranjeros, las organizaciones internacionales y la sociedad civil internacional. Ahora es el momento de darles un rol protagónico. La sociedad civil haitiana debería, como mínimo, estar habilitada para demandar rendición de cuentas ante toda nueva iniciativa de seguridad que pueda surgir tras el desbaratamiento del plan keniano. Deben escucharse sus demandas de una respuesta más reflexiva que vaya más allá de este enfoque improvisado.

LEER MÁS:

- HAITÍ: LA COMUNIDAD INTERNACIONAL DEBE TRABAJAR CON LA SOCIEDAD CIVIL EN

UN MUNDO DE DESPLAZAMIENTOS

Los conflictos representan una de las principales causas de migración y desplazamiento, junto con la opresión política, las tensiones económicas y, cada vez más, el cambio climático. A pesar de la multiplicidad de conflictos y crisis en un mundo cada vez más interconectado, los Estados se resisten a reconocer la realidad del desplazamiento humano, tanto dentro de las fronteras nacionales como más allá de estas. Las condiciones para los inmigrantes y refugiados se tornan cada vez más adversas.

Europa: hostilidad en aumento

En Europa, se observa un evidente doble rasero. En general, los países europeos han continuado acogiendo a los numerosos desplazados a causa de la guerra de Rusia contra Ucrania. Hasta diciembre de 2023, se contabilizaban **6,3 millones** de refugiados ucranianos, de los cuales 5,9 millones vivían en Europa, además de **3,7 millones** de desplazados internos dentro de Ucrania.

No obstante, incluso en este contexto, los Estados comienzan a mostrar signos de fatiga compasiva a medida que la guerra se prolonga. En Irlanda, la escasez de viviendas ha alimentado una reacción violenta, evidenciada a través de **disturbios** antiinmigrantes y antimusulmanes en Dublín en noviembre de 2023. Al mes siguiente, el gobierno **anunció** recortes en las ayudas para los recién llegados de Ucrania. En toda la Unión Europea, con el estatuto temporal otorgado a punto de expirar en 2025, los ucranianos expresan preocupación por la duración de su estancia.

Sin embargo, la situación es mucho peor para los demás desplazados. Los gobiernos europeos han exhibido evidentes rasgos racistas al acoger mayoritariamente a los ucranianos mientras intensifican la persecución de las personas de color del sur global.

En Europa, está surgiendo una preocupante tendencia de los gobiernos a externalizar sus políticas migratorias: los Estados pagan a los países más pobres para que acojan a los inmigrantes que no desean recibir. Australia fue la precursora de este enfoque en 2001, enviando a personas a centros de detención en Nauru y Papúa Nueva Guinea, aunque fue considerado un caso atípico. Ahora, el gobierno británico avanza con su **plan Ruanda**, que busca deportar a Ruanda a aquellas personas que ingresen ilegalmente al Reino Unido y obligarlas a permanecer allí, incluso si sus solicitudes de asilo son exitosas.

Cuando el gobierno **presentó** el plan, no estaba claro si realmente esperaba que tuviera éxito o si el propósito era poner a la oposición en aprietos en un tema político polémico, mientras el partido gobernante tambaleaba en las encuestas. Aunque el Reino Unido recibe muchos menos solicitantes de asilo que otros grandes países europeos, los políticos de derecha y los medios de comunicación que los respaldan han enfocado gran parte de su atención en el tema de las “pateras”: la llegada de inmigrantes a la costa sur del Reino Unido después de cruzar desde Francia. Dado que el gobierno ha cerrado todas las rutas más seguras para los inmigrantes indocumentados, las personas están optando por la peligrosa travesía a través de la ruta marítima más transitada del mundo en embarcaciones inadecuadas vendidas por pandillas de traficantes sin escrúpulos.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, ha convertido el plan Ruanda en una política central, pero la sociedad civil ha recurrido a los tribunales para intentar detenerlo. En noviembre, el Tribunal Supremo británico declaró ilegal el plan Ruanda, argumentando que Ruanda no es un país seguro para enviar solicitantes de asilo. Ruanda es un Estado autoritario con un **espacio cívico represivo**, donde los críticos del presidente Paul Kagame son asesinados o encarcelados de forma rutinaria, los derechos del colectivo LGBTQI+ no son respetados y los inmigrantes sufren discriminación.

El gobierno británico toma una postura contradictoria, sosteniendo tanto que Ruanda es un país acogedor como que la perspectiva de ser enviado allí disuadirá a la gente de cruzar. Su respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo ha sido reescribir la ley. Recientemente, ha reemplazado su memorando de entendimiento con Ruanda por un tratado y respaldó este acuerdo con un proyecto de ley, actualmente en el parlamento, que simplemente pasa por alto la sentencia del tribunal que declaró a Ruanda como país seguro. Además, el proyecto de ley limita aún más la capacidad de las personas para emprender acciones legales contra las decisiones de reubicación.

El gobierno también ha **anunciado** que impulsará un cambio de normas para obligar al personal de la administración a ignorar toda sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que impida las deportaciones planificadas, y algunos de sus políticos más extremistas promueven la idea de que el Reino Unido debe retirarse del Tribunal Europeo.

> El costo humano de este proyecto de ley será catastrófico. Incluso antes de su aprobación, hemos observado cómo la perspectiva de ser enviados a Ruanda sumía a las personas a las que apoyamos en una ansiedad y angustia mental extremas, y seguimos registrando índices alarmantes de autolesiones y suicidios. Al implementarlo, el gobierno estará obligando a la gente a enfrentarse a un daño seguro e irreversible.
>
> 
> **ARIA DANAPARAMITA**
> **Consejo Conjunto para el Bienestar de los Inmigrantes, Reino Unido**



Foto de Henry Nicholls/AFP vía Getty Images.

Protesta contra el más reciente plan de deportación a Ruanda del gobierno británico frente al Ministerio del Interior en Londres, Reino Unido, el 18 de diciembre de 2023.

Si el plan británico entra en vigor, es probable que suscite imitaciones, y ya hay indicios claros de ello. Dinamarca firmó un memorando similar con Ruanda en 2021, aunque aún no lo ha puesto en práctica. El **gobierno de extrema derecha** de Italia **anunció** en noviembre un acuerdo con Albania para reubicar migrantes rescatados del Mar Mediterráneo, una ruta migratoria clave. A cambio de financiación, Italia prometió respaldar la pretensión de Albania de ingresar a la Unión Europea. Aunque el Tribunal Constitucional de Albania **bloqueó temporariamente** el acuerdo al mes siguiente, acabó dándole **luz verde** en enero de 2024.

En noviembre, Alemania **anunció** medidas más estrictas para los solicitantes de asilo, que incluyen recortes en las prestaciones sociales. Grecia, por su parte, se ha vuelto más hostil para con migrantes y refugiados, como también con la sociedad civil que trabaja para ayudarlos. Ha enjuiciado a trabajadores humanitarios bajo acusaciones graves, como espionaje, trata de personas, pertenencia a organizaciones delictivas, fraude y lavado de dinero. Se trata de delitos que pueden acarrear penas de hasta 25 años de cárcel. Muchos acusados han permanecido en prisión preventiva y a otros se les ha prohibido viajar. El Estado también ha sometido a vigilancia a los activistas. El gobierno ha criminalizado las operaciones de rescate de migrantes en el mar, obligando a varias organizaciones a suspender sus actividades. Grecia también ha sido **acusada** de realizar devoluciones ilegales e incluso se ha **jactado** de "bloquear" a personas en su frontera.

Estas restricciones a los derechos de la sociedad civil que trabaja para ayudar a migrantes y refugiados fueron una de las principales razones por las cuales la calificación del espacio cívico de Grecia fue **rebajada** de "estrecho" a "obstruido" por el CIVICUS Monitor en marzo de 2023.

El desafío para la sociedad civil es que estas acciones se traducen en ciertos niveles de apoyo público a los gobiernos, razón por la cual los partidos adoptan una retórica antiinmigración antes de las elecciones. En Grecia, el partido gobernante, históricamente una típica fuerza de centroderecha, se aseguró un segundo mandato en 2023 mediante la adopción de políticas antiinmigración, que solían ser territorio exclusivo de la extrema derecha. Este caso ilustra cómo los partidarios de ideas extremistas sobre los migrantes y refugiados desplazan el centro político.

Lo irónico, sin embargo, es que Grecia, al igual que Alemania y otros Estados europeos, sufre actualmente de escasez de mano de obra en sectores clave de su economía, como la agricultura y los servicios. En respuesta a ello, en diciembre el gobierno griego **otorgó** reconocimiento legal a miles de inmigrantes indocumentados.

Grecia no es el único país de la UE acusado de realizar expulsiones ilegales. En abril, Lituania **aprobó una ley** que legaliza las devoluciones forzadas en situaciones de emergencia. A nivel regional, la UE es

acusada de maltratar a migrantes y refugiados, contradiciendo sus elevados principios de derechos humanos. Su agencia fronteriza, Frontex, es acusada de complicidad con la violencia y otros abusos de derechos. Grupos de la sociedad civil sostienen que sus políticas son responsables, al menos en parte, de la muerte de **más de 3.000 personas** el año pasado.

La situación podría empeorar. En diciembre, los Estados miembros de la UE **acordaron** un Pacto sobre Migración que amenaza con crear centros de detención en las fronteras, acelerar las deportaciones y permitir a los Estados realizar devoluciones forzosas en situaciones de crisis. La UE también está ignorando la preocupación por los derechos humanos en países como Etiopía y Túnez a cambio del compromiso de reforzar sus fronteras y devolver migrantes. Con estas acciones, la UE socava la solidaridad humanitaria y deshumaniza a migrantes y refugiados.

> El plan Ruanda constituye uno de los elementos más hostiles del Reino Unido hacia los inmigrantes, reflejando una tendencia global más amplia. En todo el mundo, especialmente en Europa y Estados Unidos, los gobiernos destinan fondos para fortalecer sus fronteras ya de por sí altamente militarizadas.
> En tiempos de crisis o inestabilidad económica, los gobiernos recurren a los grupos marginados y a los inmigrantes como chivos expiatorios para desviar la atención de sus propias deficiencias. Es su truco más antiguo.
>
> 
> **JULIA TINSLEY-KENT**
> Red de Derechos Migrantes, Reino Unido

La idea de que los países más ricos pueden simplemente pagarles a los más pobres para que resuelvan sus problemas también refleja algo inquietante sobre cómo ven el mundo, dividido entre aquellos que tienen derechos y aquellos que no. Apesta a colonialismo. La retórica política también está impulsando la discriminación y demonización e las personas de color y de creencias no cristianas en los países del norte global.

La gente está pagando un precio letal por el cierre de rutas migratorias seguras y legales. **Más de 2.500** personas murieron cruzando el Mediterráneo en 2023. A medida que estas vías se cierran, las personas recurren a rutas aún más arriesgadas. Ahora, intentan navegar por el traicionero Océano Atlántico para llegar a las Islas Canarias españolas. El número de personas que realizaron el viaje atlántico desde África Occidental aumentó **más de 1.000%** en 2023. La organización Caminando Fronteras **informó** que 6.618 personas, incluidos 384 niños, murieron o desaparecieron, y presuntamente han fallecido, al intentar cruzar a España en 2023. Ello equivale a 18 personas al día.

América: la misma historia

En el continente americano se observa un patrón similar de hostilidad y crecientes riesgos para quienes intentan llegar a los Estados Unidos. En un año electoral, los políticos estadounidenses han convertido el control de las fronteras en un tema altamente político, compitiendo por mostrarse como los más severos en materia migratoria.

En octubre, el presidente Joe Biden **anunció planes** para fortalecer la frontera sur de los Estados Unidos y reanudar los vuelos de deportación a Venezuela, previamente suspendidos. Sin embargo, nadie ha podido caer más bajo que Donald Trump, un nieto de inmigrantes que en diciembre **afirmó en un evento** que “los inmigrantes están envenenando la sangre de nuestro país”, recurriendo sin filtros a la retórica del supremacismo blanco. La política ha interferido a tal punto que los republicanos han pospuesto repetidamente su apoyo a Ucrania para incluir medidas relacionadas con el control de las fronteras estadounidenses en el acuerdo.

En una intensificación de la politización de la migración, gobernadores republicanos de estados sureños como Texas han comenzado a **transportar** a migrantes recién llegados en autobuses hacia ciudades lejanas gobernadas por demócratas, abandonándolos allí sin ningún

respaldo, tratándolos como peones en su ajedrez político. En ciudades como Nueva York, se ha organizado un **esfuerzo voluntario** de gran envergadura para brindarles asistencia.

Al igual que en Europa, cuando se cierran las rutas tradicionales la gente opta por vías más arriesgadas. Actualmente, los migrantes se desplazan hacia el norte desde países sudamericanos a través del **tapón del Darién**, un territorio peligroso que conecta Colombia y Panamá. En 2023, una cifra récord de **520.000 personas** eligieron esta ruta antes infrecuente. Aproximadamente la cuarta parte fueron niños y jóvenes. Además de las desafiantes barreras naturales que deben superar, son vulnerables a asesinatos, violencia, agresiones sexuales y robos. En diciembre, Médicos sin Fronteras encontró que los incidentes mensuales de violencia sexual se habían **multiplicado por siete**.

Asimismo, la gente se aventura cada vez más en el mar, lo cual, al igual que en Europa, implica grandes peligros. Ha surgido una nueva ruta de tráfico de personas a través del Mar Caribe por las **Bahamas** y, como en Europa, muchos han perdido la vida. En noviembre, al menos 30 personas murieron cuando una embarcación proveniente de Haití **naufragó** frente a las Bahamas.

Alineamientos cambiantes en el sur global

A pesar de la ansiedad politizada en torno a la migración en el norte global, es un hecho innegable que la mayoría de los movimientos migratorios y desplazamientos ocurren dentro del sur global. Numerosas personas son desplazadas dentro de sus propios países o cruzan fronteras hacia naciones vecinas en el sur global.

Un ejemplo de ello son los refugiados sudaneses, quienes han continuado cruzando la frontera con Chad, un país de bajos ingresos que ya albergaba a **casi un millón** de personas desplazadas antes del inicio del conflicto. Los centros de refugiados están desbordados, y la gente vive hacinada en condiciones insalubres.

> Los campamentos carecen de acceso suficiente a agua potable, alimentos y servicios de saneamiento. La ausencia de electricidad dificulta la comunicación con sus familias en Sudán, y ha generado inseguridad, especialmente entre las mujeres, cuando se desplazan por los campamentos al anochecer. La carencia de refugios adecuados es motivo de especial preocupación.
> Estas condiciones hacen que la comunidad de refugiados sea sumamente vulnerable a enfermedades y aumentan el riesgo de violencia de género. Es imperativo abordar estas necesidades de manera integral, lo cual demanda la atención y el respaldo inmediatos de la comunidad internacional.
>
> 
> **MONIM HAROON**
> Sociedad Hebrea de Ayuda a los Inmigrantes, Chad

En términos generales, hasta ahora Chad ha demostrado solidaridad con los recién llegados, aunque esta postura podría cambiar si el conflicto en Sudán persiste. También se acusa a Chad de ser un punto de tránsito para las armas que terminan en manos de las FAR, responsable de conducir a la mayoría de los refugiados hacia Chad en primer lugar.

En otras partes del sur global, se observan señales preocupantes: los gobiernos están abandonando prácticas humanitarias largamente establecidas, y algunos sectores de la opinión pública se inclinan por culpar a los inmigrantes de los problemas económicos y sociales. En Sudáfrica, por ejemplo, la xenofobia ha aumentado, y un grupo vigilante antiinmigrante **planea presentarse** a las elecciones de este año.

Se estima que Pakistán alberga a cuatro millones de refugiados afganos, muchos de los cuales han huido de sucesivas oleadas represivas de los talibanes. En octubre, el gobierno ordenó la salida de todos los refugiados indocumentados, afectando a unos **1,7 millones de personas**. Aunque la justificó con referencias al terrorismo, la medida pareció dirigida a contrarrestar la presión económica, ya que algunos pakistaníes acusan a los afganos de quitarles empleos.



Foto de Hasan Mrad/DeFodi Images vía Getty Images.

Refugiados víctimas de la creciente violencia racista piden ayuda para evacuar frente a las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Túnez el 21 de marzo de 2023.

Tras este anuncio, el gobierno siguió deteniendo a muchos afganos indocumentados y dejándolos en la frontera. Mucha gente fue expulsada incluso habiendo nacido en Pakistán. Se informó que las autoridades paquistaníes **cometieron abusos** tales como la confiscación de propiedades de afganos y la destrucción de sus documentos de identidad, buscando crear una situación hostil para que la gente se sintiera obligada a marcharse. El gobierno paquistaní también **impuso** "tasas de salida" de unos USD 660 a los refugiados afganos que obtuvieran un lugar de reasentamiento en otro país, una medida por la que se le acusó de beneficiarse a expensas de la miseria ajena.

Para las mujeres, las niñas, las personas LGBTQI+, los periodistas y cualquier persona crítica de los talibanes que regrese, la represión es inevitable. La política de Pakistán no hace más que empeorar la ya desesperada situación humanitaria y de derechos humanos en Afganistán.

> A pesar de nuestras reiteradas peticiones, no hemos recibido el suficiente apoyo internacional, el cual resulta crucial para evitar una mayor escalada de la crisis. Dadas las actuales condiciones invernales en Afganistán, nuestro objetivo inmediato es proporcionar refugio y kits de invierno. Hacemos un llamado a la comunidad internacional para que aborde estos problemas acuciantes e instamos al gobierno de Pakistán a detener, al menos temporariamente, las expulsiones de refugiados y a elaborar una estrategia en colaboración con las autoridades de Afganistán y la Agencia de la ONU para los Refugiados.
>
> 
> **HABIB MALIK ORAKZAI**
> **Organización Internacional de Derechos Humanos de Pakistán**

Pakistán sigue los pasos de Turquía, que acoge a unos 3,6 millones de refugiados sirios. El partido gobernante ha avivado la xenofobia como respuesta a los problemas económicos y como parte de su estrategia de cara a las **elecciones presidenciales** de mayo. Como muestra de la normalización del sentimiento tóxico contra los inmigrantes, la oposición ha hecho campaña prometiendo ser aún más severa con los inmigrantes sirios.

En una flagrante violación del principio de no devolución de la Convención sobre los Refugiados, muchas personas están siendo forzadas a regresar a Siria, donde **corren el riesgo** de ser detenidas y encarceladas. El Estado sirio está perpetrando **grotescas violaciones de derechos humanos**, incluso contra quienes **regresan**. Antes de ser devueltas, las personas son detenidas y recluidas en condiciones terribles en centros de detención. Quienes permanecen en Turquía enfrentan mayores niveles de **hostilidad pública y violencia**.

En el Líbano, donde reside una gran población de refugiados sirios, éstos están siendo designados por las autoridades como chivos expiatorios en un contexto de crisis económica y política prolongada, y deportados a Siria. Mientras tanto, el sangriento gobernante sirio Bashar al-Assad ha sido readmitido en las altas esferas regionales. Los Estados que antes lo condenaban ahora **normalizan** sus relaciones, lo que podría abrir la puerta a más retornos forzosos.

En Túnez, el presidente autoritario Kais Saied ha dirigido ataques contra los africanos negros que viven en el país, tratando de enfocar la indignación pública no en la economía fallida ni en sus numerosos **ataques contra las libertades**, sino en una minoría visible. Ha culpado a los inmigrantes de crímenes y violencia, difundiendo teorías conspirativas según las cuales forman parte de un complot para socavar el país.

La amenaza no se quedó en palabras. En julio, el gobierno habría reunido a **centenares de personas**, incluidos niños y mujeres embarazadas, para **expulsarlas** a las fronteras de Túnez con Argelia y Libia. En la frontera argelina, estas personas quedaron atrapadas en el desierto, expuestas a temperaturas superiores a los 40 grados. En la frontera libia, se enfrentaron al peligro en una zona militarizada. Algunas perdieron la vida y otras fueron víctimas de violencia sexual. Ante la reacción de la comunidad internacional, las autoridades luego trasladaron a algunas personas a campos. Grupos locales también perpetraron ataques violentos.

Hubo un tiempo en que Saied habría enfrentado condena internacional por avivar el racismo, pero el interés prioritario de la UE en el control migratorio le está permitiendo salir indemne. En julio, la UE y el gobierno tunecino **firmaron** un acuerdo para proporcionar a Túnez alrededor de USD 1.100 millones que se destinarán, entre otras cosas, a la prevención de la inmigración y al retorno de migrantes tunecinos desde países de la UE, dado que la gente ha continuado huyendo de las dificultades económicas y la represión. Sin embargo, las relaciones entre la UE y el gobierno tunecino se han tensado desde entonces, y este último ha **devuelto** aproximadamente USD 65,4 millones ya recibidos. Dado que las maniobras políticas continúan, nada permite suponer que la vida de las personas negras en Túnez vaya a mejorar.

LEER MÁS:

- GRECIA: LA ACCIÓN HUMANITARIA BAJO ATAQUE EN
- ELECCIONES GRIEGAS: MALAS NOTICIAS PARA MIGRANTES Y REFUGIADOS EN
- SUDÁN: MILLONES DE PERSONAS OBLIGADAS A HUIR DEL CONFLICTO EN
- TÚNEZ: EL RACISMO SE SUMA A LA REPRESIÓN EN

HORA DE CAMBIAR

El año 2023 lamentablemente estuvo marcado por sufrimientos humanos inmensos e innecesarios. Personas inocentes, niños incluidos, fueron no solamente víctimas de violencia, sino también, en muchos casos, blanco deliberado de ataques. Los sobrevivientes enfrentaron una crueldad y hostilidad constantes. Fuerzas gubernamentales, milicias y otros grupos violentos llevaron a cabo ataques generalizados contra civiles e infraestructuras vitales. Junto con el aumento exponencial del gasto militar, esta situación presenta el riesgo de que los avances logrados hacia un mundo más pacífico desde los horrores de la Segunda Guerra Mundial acaben perdiéndose.

Sin embargo, no tiene por qué ser así. La vida no debería ser tan desechable. La sociedad civil aboga por la senda de la paz, la desescalada, la justicia y la inclusión. Exige el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario largamente establecido y que no respetarlo tenga consecuencias. Reclama solidaridad con las víctimas de la violencia y colaboración entre grupos de la sociedad civil, incluidas organizaciones de mujeres y jóvenes, sindicatos y grupos religiosos, para poner fin a la violencia.

La sociedad civil es a menudo reprimida y convertida en blanco deliberado de violencia en situaciones de conflicto. Los procesos globales y nacionales encaminados a la resolución de los conflictos son a menudo diálogos elitistas que favorecen a los mismos actores y mentalidades que resultaron en el estallido de los conflictos y dejan de lado cuestiones cruciales de justicia y reparación. La sociedad civil defiende las voces de las personas más marginadas y excluidas, afectadas de manera desproporcionada por los conflictos.

Si los enfoques tradicionales para lidiar con el conflicto funcionaran, el mundo no estaría en este estado calamitoso. Es hora de escuchar a la sociedad civil, incluirla y habilitarla, y abrir el espacio cívico para que pueda desempeñar todos los roles que le corresponden.



Foto de Fadel Itani/NurPhoto vía Getty Images.

Protesta contra la deportación de refugiados sirios ante las oficinas de la Agencia de la ONU para los Refugiados en Beirut, Líbano, el 19 de mayo de 2023.









GOBERNANZA GLOBAL: NECESIDAD URGENTE DE REFORMA



Foto de Selcuk Acar/Anadolu via Getty Images.

Pancartas sostenidas por manifestantes en una protesta ante la sede de la ONU en Nueva York, Estados Unidos, antes de una votación del Consejo de Seguridad de la ONU sobre Gaza el 20 de febrero de 2024.

Los horrores que están sucediendo en Gaza superan nuestra capacidad de comprensión. La inmensa crueldad y el sufrimiento cotidiano representan una crisis en la gobernanza global: se supone que las normas internacionales existen para prevenir atrocidades como las que se están perpetrando sistemáticamente en Gaza y para que, si son cometidas, la comunidad internacional intervenga para detener la violencia y llevar a los responsables ante la justicia. Sin embargo, una vez más, los Estados eluden estas normas.

La sociedad civil exige que las normas se respeten. Algunos Estados, en cambio, exhiben un escandaloso doble rasero, y los más poderosos son los mayores hipócritas. En el contexto de los conflictos actuales, tanto Rusia como Estados Unidos han optado por ignorar o interpretar selectivamente el derecho internacional humanitario y las normas de derechos humanos, bloqueando las acciones que consideran contrarias a sus intereses.

El gobierno estadounidense lideró la condena internacional ante la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. La condena estaba justificada: Rusia ha violado prácticamente todas las normas existentes, aprovechando sus alianzas para mitigar las críticas internacionales.

Sin embargo, Estados Unidos y sus aliados se han negado reiteradamente a condenar el castigo colectivo impuesto por Israel a la población civil de Gaza. Al margen de que podrían estar ejerciendo una diplomacia discreta, han impedido la acción internacional y han seguido suministrando armas al gobierno israelí, contribuyendo así a un asalto que ha causado decenas de miles de muertes. El respaldo a Israel, a pesar de las abundantes pruebas de que está cometiendo crímenes de guerra, ha debilitado gravemente el argumento según el cual la condena de la guerra de Rusia contra Ucrania estuvo motivada por el respeto de los derechos humanos. Esto refuerza la respuesta de Rusia, que sostiene que las críticas a sus atrocidades son sesgadas e interesadas.

Muchos Estados parecen operar bajo la lógica de que hay dos tipos de derechos humanos: los que coinciden con sus intereses y les permiten denunciar a Estados enemigos, y los que no, ante los cuales hacen la vista gorda, en particular cuando son violados por sus aliados. En el extremo, cuando muestran preocupación por los derechos humanos de las personas blancas pero no por los de las personas de color, su doble rasero linda con el racismo.

APENAS EL 15% DE LAS 169 METAS DE LOS ODS VAN POR BUEN CAMINO

EL PILAR DE DERECHOS HUMANOS RECIBE APENAS EL 4,3% DEL PRESUPUESTO DE LA ONU

4 DE 5 NUEVOS MIEMBROS NO PERMANENTES DEL CONSEJO DE SEGURIDAD FUERON ELEGIDOS SIN COMPETENCIA

AL MENOS 40 ESTADOS TOMARON REPRESALIAS CONTRA PERSONAS QUE COLABORARON CON LA ONU

Esta situación se aleja de la visión fundacional de las Naciones Unidas (ONU). El cometido de la ONU, como lo deja claro el artículo primero de su **Carta**, es mantener la paz y la seguridad internacionales y fomentar la cooperación internacional para promover y alentar el respeto de los derechos humanos. En 1948, pocos años después de la fundación de la ONU, los países acordaron la **Declaración Universal de los Derechos Humanos**. Su preámbulo explica que es necesaria porque "el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad". En 2023, las celebraciones del 75º aniversario de este texto emblemático fueron notoriamente discretas.

Las ideas plasmadas en la Carta de la ONU y la Declaración Universal, así como en otros acuerdos clave como la **Convención sobre el Genocidio** de 1948 y la **Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos**, elaborada 25 años atrás, son hoy más relevantes que nunca. Pero también se debe subrayar que en los años de existencia de la ONU la realidad nunca ha sido tan sombría.

Como se expone en el **capítulo sobre conflictos y crisis** de este informe, 2023 fue un año marcado por conflictos: en Gaza y Ucrania, pero también en Myanmar, Nagorno-Karabaj y Sudán, entre otros. En estos conflictos hay evidencia abrumadora de "actos de barbarie" que desafían los principios fundamentales de los derechos humanos, incluyendo crímenes a gran escala como genocidio y crímenes de lesa humanidad. Los Estados y otros beligerantes están normalizando el incumplimiento de los principios destinados a prevenir atrocidades, confiando en la casi segura impunidad que les brinda un sistema internacional fallido.

> Aunque el sistema de gobernanza global es esencial y tiene importantes responsabilidades, no está dando resultados. Es disfuncional y no consigue responder a los mayores desafíos que enfrentamos: la emergencia climática que amenaza nuestra existencia, la pandemia, la crisis del costo de vida y otros conflictos importantes. El sistema no responde adecuadamente a estos desafíos, no los anticipa ni evita su escalada.
>
> 
> **NATALIE SAMARASINGHE**
> Open Society Foundations

La necesidad de un sistema de gobernanza global más democrático, robusto y eficaz se hizo cada vez más patente durante 2023. Sin embargo, podría estar ocurriendo lo contrario. Las alternativas al sistema existente, como el grupo BRICS, que recientemente se expandió mediante la inclusión, impulsada por China, de una serie de Estados represivos, no suponen ninguna mejora.

A medida que disminuye la confianza en el sistema, la hipocresía de los Estados del norte global deja mayor espacio para que regímenes autoritarios como China y Rusia se presenten como abanderados del sur global y canalicen iras que son justificadas hacia la construcción de un orden global aún menos democrático y con menos salvaguardas contra la impunidad de los abusos de derechos humanos.

> El colapso del Estado de Derecho, junto con el fracaso del sistema de la ONU a la hora de dar respuestas justas y eficaces y abordar los desafíos globales, ha socavado la confianza en líderes e instituciones. Estos desafíos están interconectados y sólo pueden abordarse a través de respuestas interconectadas, mediante un multilateralismo revitalizado que coloque a la ONU, su Carta y sus valores en el centro de los esfuerzos conjuntos.



FRANCESCA RESTIFO
Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados

La sociedad civil aboga por un orden internacional basado en normas, donde los Estados sean tratados de manera equitativa y se atengan sistemáticamente a leyes y políticas claras para abordar cuestiones como el cambio climático, la erradicación de la pobreza, la mitigación de la profunda desigualdad económica, la desescalada de conflictos y la prevención de genocidio y otras graves violaciones de los derechos humanos.

La sociedad civil es una fuente fundamental de soluciones para fortalecer las normas internacionales, y está en busca de un liderazgo moral equivalente por parte de los Estados, sus dirigentes y las instituciones internacionales, en un mundo donde tal liderazgo escasea. La sociedad civil debe tener un asiento en la mesa de toma de decisiones, cosa que a menudo se le niega.

Se acerca una gran oportunidad para generar un cambio significativo: la **Cumbre del Futuro** de la ONU, programada para septiembre de 2024. En esta cumbre, los líderes mundiales se reunirán para debatir ideas de reforma y acordar un Pacto para el Futuro. La sociedad civil considera que esta cumbre podría ser un punto de inflexión para la ONU, y está haciendo todo lo posible por participar y reclamar medidas ambiciosas. Pero también se está preparando para una nueva decepción.

ISRAEL: IMPUNIDAD PROPICIADA POR LA INACCIÓN INTERNACIONAL

Fracasos del Consejo de Seguridad

Irónicamente, la debilidad de la ONU se manifiesta con mayor claridad en su espacio más poderoso: el Consejo de Seguridad. El Consejo recién **aprobó su primera resolución** sobre el asalto a Gaza seis semanas después del comienzo de la matanza. El retraso fue causado por Estados Unidos y Rusia, que en calidad de miembros permanentes del Consejo vetaron cuatro propuestas anteriores. Cuando la resolución se aprobó, el 15 de noviembre, las fuerzas israelíes ya habían matado a bastante más de 10.000 personas.

El 22 de diciembre, tras varias votaciones aplazadas, el Consejo aprobó una **segunda resolución** en la que exigía un acceso humanitario inmediato, seguro y sin obstáculos para hacer frente a la magnitud de la crisis, y pedía que la ONU desempeñara un papel clave en la coordinación de la respuesta humanitaria. La votación de diciembre se produjo después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, **invocara** el artículo 99 de la Carta de la ONU. El hecho de que utilizara este mecanismo tan poco frecuente, que permite al secretario general llamar la atención del Consejo de Seguridad sobre algún asunto, puso de manifiesto la gravedad desesperante de la situación y contribuyó a presionar al Consejo para que actuara.

Ninguna de las dos propuestas recibió apoyo unánime. Su aprobación se debió a que Estados con derecho de veto terminaron absteniéndose a cambio de una redacción más suave. Tanto Rusia como Estados Unidos se abstuvieron en diciembre. En este momento, los avances hacia una nueva resolución están estancados.

La gravedad de la violencia exigía decisiones más contundentes, pero las resoluciones representaron al menos un avance. La última vez que el Consejo de Seguridad aprobó una resolución sobre las relaciones entre Israel y Palestina fue en 2016. Desde entonces, el veto de Estados Unidos había impedido cualquier tipo de acción.



Foto de Timothy A. Clary/AFP vía Getty Images.

El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne para discutir la situación en Gaza en su sede en Nueva York, Estados Unidos, el 24 de octubre de 2023.

Se supone que las decisiones del Consejo de Seguridad son legalmente vinculantes, pero en noviembre Israel respondió inmediatamente con el anuncio de que ignoraría la resolución. Tampoco ha hecho mucho por cumplir la resolución de diciembre, y continúa obstaculizando la entrada de suficiente ayuda humanitaria. No es la primera vez que Israel adoptado esta actitud: ya había ignorado una serie de decisiones vinculantes del Consejo de Seguridad, además de las del Consejo de Derechos Humanos y la Asamblea General. Entre ellas se encuentra la **resolución de 2016 del Consejo de Seguridad** que confirmó que los asentamientos israelíes en los Territorios Palestinos Ocupados constituyen una violación flagrante del derecho internacional y que deben cesar inmediatamente las nuevas ocupaciones. Israel se comporta como un Estado infractor que no está dispuesto a cumplir las normas, amparado por el respaldo de su poderoso aliado para evitar las sanciones que se les imponen a otros violadores flagrantes de los derechos humanos.

Un estancamiento similar se observa en la guerra de Rusia contra Ucrania, donde el agresor es uno de los cinco miembros permanentes. En un flagrante conflicto de interés y una clara violación de los principios del Consejo, Rusia ha utilizado repetidamente su derecho de veto para garantizar que el Consejo no tome ninguna decisión sobre su guerra. El Consejo le ha servido de herramienta de **difusión de desinformación** sobre su invasión. Incluso **ocupó** la presidencia rotatoria del Consejo en abril, un mes después de que la Corte Penal Internacional (CPI) **emitiera** órdenes de detención contra Vladimir Putin y un asociado por el crimen de guerra de traslado ilegal de niños ucranianos a Rusia.

El punto muerto en el que se encuentra Ucrania ha impulsado el debate sobre la reforma del Consejo de Seguridad. La idea de ampliar el número de miembros permanentes del Consejo para incluir a algunos de los principales países del sur global está cobrando impulso, aunque esta medida por sí sola no resolvería el problema de los cálculos egoístas de los Estados a la hora de ejercer sus poderes. Algunos influyentes actores del sur global, como India y Sudáfrica, enfrentan acusaciones de buscar su ingreso al Consejo no con la intención de mejorar su desempeño, sino más bien para instrumentalizar su poder de manera similar a los actuales miembros permanentes.

La sociedad civil ha propuesto diversas reformas, que incluyen protocolos para moderar y reducir el uso del veto, aumentar el acceso público a la presentación de pruebas, y mejorar la rendición de cuentas. Pero sigue faltando voluntad política. En la apertura de la Asamblea General de la ONU el pasado mes de septiembre, el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, **propuso** un procedimiento por el que dos tercios de los miembros de la Asamblea General podrían votar para anular un veto del Consejo de Seguridad, pero el debate posterior fue **vago e inconcluyente**.

El Consejo de Seguridad debe abrirse a la incidencia y el escrutinio de la sociedad civil. Esta debe poder ejercer presión para que los miembros del Consejo de Seguridad dejen a un lado sus propios intereses y tomen decisiones que se ajusten estrictamente a la Carta de las Naciones Unidas.

> La disfuncionalidad en la toma de decisiones se debe a la naturaleza de nuestras instituciones de gobernanza global. La ONU opera esencialmente como un congreso de embajadores encargados de defender sus intereses nacionales de cada país tal y como los perciben sus gobiernos. Esta dinámica se inclina más a la competencia que a la colaboración, por lo que se acaba llegando a compromisos de mínimo común denominador.



JOHN VLASTO
Movimiento Federalista Mundial

Ante el estancamiento de los esfuerzos en el Consejo de Seguridad, los Estados afectados recurrieron a otras instancias del sistema de la ONU, como la Asamblea General de la ONU. En esta instancia cada Estado tiene un voto, pero sus resoluciones no son vinculantes. El 27 de octubre, la Asamblea General **aprobó una resolución** en la que llamaba a una tregua inmediata, y el 12 de diciembre, **otra** que respaldaba por abrumadora mayoría un alto el fuego humanitario.

Sin embargo, los patrones de votación evidenciaron claramente los intereses nacionales y las alianzas internacionales en juego. En diciembre, Estados Unidos votó en contra de la resolución y otros países del norte global se abstuvieron. En esta votación se pudo ver al menos una disminución del apoyo a Israel en comparación con la situación de octubre, posiblemente influenciado por la magnitud de las atrocidades cometidas. Sin embargo, con 153 votos a favor, 10 en contra y 23 abstenciones, la resolución no logró la casi unanimidad que se esperaría en el compromiso de defender los principios de la ONU.

Este escenario no es nuevo para la ONU: la misma situación, pero a la inversa, se había producido en la **votación de la Asamblea General** de febrero de 2022 en la que se pedía el fin inmediato de la guerra en Ucrania. En ese caso, un grupo de aliados leales y Estados cautivos de Rusia votó en contra y **otros 32 se abstuvieron**, motivados muy claramente por relaciones estratégicas con Rusia. Estos patrones de votación evocaron recuerdos de la guerra fría.

En ambos casos, en lugar de exhibir una determinación de respetar los derechos humanos internacionales y las leyes humanitarias, los líderes políticos realizaron cálculos estrechos de interés propio nacional. Como resultado de estas prácticas, nuestro sistema internacional es deficiente en sus más altos niveles.

La CIJ y la UNWRA en el punto de mira

El doble rasero también se evidenció en el **caso** que Sudáfrica presentó ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), el organismo de la ONU encargado de resolver litigios entre Estados, en el que sostuvo que Israel estaba incumpliendo la Convención sobre el Genocidio. El Tribunal **emitió** rápidamente una sentencia provisional en enero de 2024, respaldada por la amplia mayoría de sus jueces.

La sentencia ordenaba a Israel tomar medidas para prevenir y sancionar los actos genocidas, detener las declaraciones genocidas y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria. Aunque decepcionó a muchos al no ordenar un alto el fuego, resulta difícil imaginar cómo Israel podría cumplir la sentencia del Tribunal sin realizar cambios drásticos e inmediatos en sus tácticas.

> Sólo podremos alejarnos de los conflictos armados mediante la adhesión a los principios humanitarios y al Estado de Derecho. Es nuestra responsabilidad colectiva evitar que las generaciones futuras experimenten ciclos prolongados de violencia que comprometan los derechos humanos y la humanidad básica.



NESHAN GUNASEKERA
Asociación Internacional de Abogados contra las Armas Nucleares

> La CIJ es de vital importancia. Es el más alto tribunal existente, y sus sentencias deben ser acatadas. La comunidad internacional también debe desempeñar un papel esencial protegiendo y apoyando a la CIJ, cumpliendo sus resoluciones y fomentando su aplicación. Esto a menudo se pasa por alto. Se debe erradicar cualquier forma de doble rasero.



THOMAS VAN GOOL
PAX

Las órdenes de la CIJ son vinculantes, pero su ejecución depende de la acción del Consejo de Seguridad de la ONU, donde entra en juego el poder de veto. En 2022, cuando Ucrania presentó una demanda en virtud de la Convención sobre el Genocidio, la CIJ fue más allá que en el caso de Gaza, ordenando a Rusia que detuviera su invasión. Sin embargo, Putin optó por ignorar la sentencia. Israel ha indicado claramente su intención de hacer lo mismo, confiando en el veto de Estados Unidos: no ha detenido la violencia ni ha facilitado el acceso humanitario.

Los Estados del norte global están mostrando una notable hipocresía en su respuesta a la decisión de la CIJ sobre Israel. En 2019, Gambia presentó una demanda contra Myanmar acusándolo de cometer genocidio contra su población rohingya. En noviembre, seis Estados -cinco de Europa más Canadá- **se unieron** al caso en apoyo de la posición de Gambia. Entre ellos, el Reino Unido presentó un argumento según el cual la privación sistemática de alimentos y servicios médicos y el desplazamiento forzoso podrían ser considerados actos de genocidio, especialmente cuando se cometen contra niños. Sin embargo, el Reino Unido **no ha argumentado** del mismo modo en relación con las acciones parecidas cometidas por Israel en Gaza. En noviembre, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, **afirmó** que la CIJ era "una de las instituciones más importantes de la humanidad para promover la paz". Sin embargo, su gobierno intentó desestimar el caso presentado por Sudáfrica, **calificándolo** de "carente de fundamento".

> Estamos siendo testigos de una jerarquización de las víctimas y de una arbitrariedad en la compasión y la condena. Las crecientes pruebas de los crímenes atroces cometidos en Gaza han revelado un flagrante doble rasero en nuestra respuesta a las situaciones de crisis, especialmente por parte de Estados que se hacen llamar defensores de los derechos humanos, la justicia y el derecho internacional.



ELISABETH PRAMENDORFER
Centro Global para la Responsabilidad de Proteger

La sentencia provisional de la CIJ podría al menos haber ejercido presión moral sobre Israel y sus aliados, pero el foco de atención se desplazó rápidamente a la UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados de Palestina en Oriente Próximo. Poco después de la sentencia del Tribunal, Israel declaró que había **compartido con sus aliados** un expediente que demostraba que parte del personal de la UNRWA había participado en los horrendos atentados contra la población israelí cometidos por Hamás y otros grupos el 7 de octubre.

Las acusaciones eran contra 12 de los más de 13.000 empleados de UNRWA desplegados en Gaza. El UNRWA despidió inmediatamente a varios de los acusados y la ONU puso en marcha una investigación independiente. Pero las repercusiones internacionales no se hicieron esperar. **Dieciocho Estados**, entre ellos Estados Unidos y Alemania, los principales financiadores de la UNRWA, anunciaron rápidamente que suspenderían su financiación. La financiación total suspendida ascendería a **unos USD 440 millones**.

No todos los Estados se apresuraron a emitir un juicio. Dinamarca, Irlanda y Noruega se comprometieron a mantener su apoyo, mientras que Portugal y España **anunciaron** ayuda adicional. Pero la magnitud de las suspensiones de financiación amenazaba con paralizar rápidamente la labor de la UNRWA. Después de que la CIJ ordenara la entrada sin restricciones de la ayuda humanitaria, las acusaciones contra la UNRWA pusieron en peligro las vidas de los **más de dos millones** de habitantes de Gaza que debido al conflicto dependen de la agencia para sobrevivir.

Varios Estados del norte global parecen interpretar selectivamente la información: se basan en pruebas **débiles** para respaldar la posición de Israel contra una agencia de la ONU a la que siempre se ha opuesto, en un momento oportuno que cambia los titulares de las noticias. De vuelta muestran su hipocresía, socavando el sistema internacional que dicen defender.

El pilar de los derechos humanos en segundo plano

Dada la magnitud de las violaciones de los derechos humanos cometidas por Israel, ha habido mucha actividad en Ginebra, sede del sistema de derechos humanos de la ONU. En los primeros meses del conflicto, el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, llamó a un alto el fuego y al fin de los castigos colectivos. Varios relatores especiales y expertos independientes de la ONU llamaron la atención sobre el **riesgo de genocidio** e instaron a un alto el fuego. El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño también pidió un alto el fuego, y **condenó** la escalada de ataques de Israel contra civiles. Estos son solo algunos ejemplos de peticiones de acción y manifestaciones de preocupación procedentes de organismos y funcionarios de derechos humanos de la ONU.

Lamentablemente, estas manifestaciones de preocupación fueron muy fáciles de ignorar. Los derechos humanos se encuentran entre uno de los **tres pilares** de la ONU, junto con la paz y la seguridad y el desarrollo sostenible. Sin embargo, a menudo son relegadas a un segundo plano. El pilar de los derechos humanos sólo recibe el **4,3%** del presupuesto ordinario de la ONU. Las iniciativas nuevas dependen de contribuciones voluntarias y no reciben fondos suficientes.

Los problemas de financiación quedaron patentes en enero de 2024, cuando las oficinas de la ONU en Ginebra sufrieron un **cierre** temporario debido a una crisis de liquidez, incapaces de hacer frente a los gastos de calefacción en plena emergencia de derechos humanos. Alrededor de 50 Estados miembros de la ONU -más de una cuarta parte- no han pagado total o parcialmente sus contribuciones de 2023.



Foto de Fabrice Coffrini/AFP via Getty Images.

El 6 de diciembre de 2023, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, afirma que los palestinos de Gaza viven en un “horror absoluto y cada vez más profundo” y pide un alto el fuego urgente.

Este acontecimiento mostró muy claramente que los derechos humanos no se toman suficientemente en serio, a pesar de las declaraciones de los líderes de los países poderosos. A medida que se acumulan los desafíos globales en materia de derechos humanos, los Estados deben replantearse urgentemente sus prioridades.

> Para alcanzar un sistema de gobernanza global más sólido, eficaz y democrático, los tres pilares de la ONU -seguridad, desarrollo y derechos humanos- deben cobrar la misma importancia. En la actualidad, se hace mucho hincapié en los pilares de la seguridad y de desarrollo, pero el pilar de los derechos humanos carece de fondos y recursos. Mientras que el Consejo de Seguridad y el Consejo Económico y Social de la ONU son órganos primarios de la ONU, el Consejo de Derechos Humanos permanece subsidiario.



MARC LIMON
Grupo Derechos Universales

LEER MÁS:

- GAZA: LA HIPOCRESÍA INTERNACIONAL AL DESCUBIERTO
- GAZA: EL SISTEMA INTERNACIONAL NO ESTÁ A LA ALTURA DEL DESAFÍO EN

VOTACIONES SIN COMPETENCIA

En 2023, otro de los desafíos que enfrentaron los principales organismos internacionales fue la selección de sus miembros mediante elecciones no competitivas, incluidos los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad y del Consejo de Derechos Humanos.

La ONU está dividida en cinco bloques regionales, cada uno de los cuales tiene puestos reservados en el Consejo de Derechos Humanos y el Consejo de Seguridad. Los miembros rotan cada año, pero cada bloque regional suele presentar la misma cantidad de candidatos que de puestos disponibles, por lo que ganan sin oposición.

En 2023 cuatro de los cinco bloques tuvieron la oportunidad de presentar candidatos, pero sólo uno fue objeto de una votación competitiva. Afortunadamente, prevaleció la cordura y Eslovenia se impuso con facilidad sobre Bielorrusia, aliado incondicional de Rusia y **Estado autoritario** donde se criminalizan las protestas. También fracasó el intento de Rusia de volver al Consejo de Derechos Humanos, del que había quedado suspendida durante su último mandato debido a su invasión a gran escala de Ucrania. En una competencia entre tres Estados de Europa Oriental por dos puestos en el Consejo, Rusia quedó en un lejano tercer puesto, superada por Albania y Bulgaria.

Las elecciones competitivas brindan a la sociedad civil una valiosa oportunidad para participar, hacer incidencia y denunciar los desempeños deficientes en materia de derechos humanos. Permiten penalizar a los infractores graves de los derechos humanos y premiar a los Estados más democráticos y comprometidos con los principios fundamentales de la ONU. Sin embargo, los resultados positivos no están garantizados, como se evidenció en 2023 cuando Cuba, donde los derechos civiles son **sistemáticamente reprimidos**, ganó una votación competitiva para su puesto en el Consejo de Derechos Humanos.

Incluso cuando las listas no son competitivas, los Estados pueden manifestar su desaprobación negándose a votar por los peores candidatos. Esto le sucedió a China, que fue uno de los cuatro Estados propuestos en Asia y el Pacífico para ocupar cuatro puestos en el Consejo de Derechos Humanos. Los Estados deben votar incluso en ausencia de competencia, y gracias a una campaña concertada, China fue el país que obtuvo el menor número de votos. Del mismo modo, Burundi, cuyo gobierno reprime ampliamente el disenso, quedó en último lugar entre los tres países que se postulaban para tres puestos del grupo africano.

Pero estos resultados no son más que actos simbólicos. No lograron

evitar que aquellos Estados violadores de los derechos humanos ocuparan asientos en el máximo órgano de derechos humanos durante tres años. La presencia continuada de infractores sistemáticos de los derechos humanos no hace más que empañar la reputación del Consejo de Derechos Humanos y minar su capacidad de actuación.

En noviembre, Irán **presidió** el Foro Social del Consejo de Derechos Humanos, un diálogo anual entre Estados, organismos intergubernamentales y la sociedad civil. El régimen teocrático asumió este papel a pesar de su **prolongada e intensa** represión del movimiento de protesta por los derechos de las mujeres. La sesión se llevó a cabo en una sala prácticamente vacía, ya que muchos asistentes no quisieron legitimar al régimen ensangrentado.

Irán ocupó la presidencia porque fue el único país nominado. Los Estados comprometidos con el respeto de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz del Consejo de Derechos Humanos deben participar más activamente y evitar dejar el camino libre para que lo hagan quienes carecen de ese compromiso.

No se trata sólo de cómo votan los Estados, sino también de cómo actúan. En septiembre, la ONU publicó su **informe anual** sobre represalias contra personas que colaboran con el organismo. El informe documentó que en 40 Estados se castigó a individuos por utilizar los espacios y procesos de la ONU para defender los derechos humanos y exigir rendición de cuentas. Sorprendentemente, 14 de estos Estados eran miembros del Consejo de Derechos Humanos, lo que representa casi el 30% de los miembros del organismo. Esta vergonzosa situación apunta a un problema más amplio de falta de respeto por los derechos humanos por parte de muchos Estados activos en la ONU.

LEER MÁS:

- CONSEJO DE SEGURIDAD DE LA ONU: NUEVOS MIEMBROS PERO POCOS CAMBIOS
- RUSIA QUEDA FUERA DEL CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS DE LA ONU

RECHAZO DEL ESCRUTINIO INTERNACIONAL

Existe otro peligro creciente para el sistema de gobernanza global: los Estados represivos se muestran cada vez más audaces al negarse a colaborar con organismos multilaterales que buscan hacerlos rendir cuentas.

En 2023, Etiopía **hizo presión** y logró exitosamente poner fin a los mecanismos de observación establecidos tanto por el Consejo de Derechos Humanos como por la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en el contexto de conflictos ▶VÉASE CAPÍTULO.

La investigación de la Comisión Africana nunca llegó a elaborar un informe, y la comisión de la ONU finalizó sin que se celebrara una votación, permitiendo que expirara su mandato. El gobierno etíope quería cerrar estos procesos porque podrían haber contradicho su narrativa según la cual su conflicto de dos años ha terminado y se ha restablecido la paz. Sin embargo, la violencia continúa, nadie ha rendido cuentas por las atrocidades y los procesos de justicia nacional resultan insuficientes.

En el **conflicto de Sudán** entre militares y milicias, el gobierno **expulsó** en diciembre a la misión de transición de la ONU, encargada de ayudar a restablecer el gobierno civil. Asimismo, existe una presión considerable para que las fuerzas de paz de la ONU se retiren de África Central y Occidental. En la República Democrática del Congo se han llevado a cabo **protestas masivas** para exigir su retirada, que han provocado una violenta represión militar.

La ONU tenía una oficina de derechos humanos en Uganda desde 2005, pero el pasado agosto tuvo que **cerrar** después de que el gobierno decidiera no renovar su mandato. Según el gobierno, ya no era necesaria porque había cumplido su cometido y ahora existían canales nacionales adecuados para plantear cuestiones de derechos humanos.

La sociedad civil ugandesa no está de acuerdo. El espacio cívico de Uganda es **represivo**. Se amenaza y se ataca a los activistas ambientales, a los **periodistas** y a las **personas LGBTQI+**, y el derecho a

protestar está muy restringido. El organismo nacional de vigilancia de los derechos humanos, la Comisión de Derechos Humanos de Uganda, carece de recursos y depende de la cooperación gubernamental, cuyos aportes no siempre llegan.

> Las autoridades ugandesas esgrimen la consecución de sus objetivos como argumento para no prorrogar el mandato de la oficina de la ONU. Los grupos de la sociedad civil, sin embargo, creen que su cierre supondrá la pérdida de un actor crucial en el ámbito de los derechos humanos, dado el papel fundamental que desempeñaba en términos de democratización en Uganda, desarrollo de capacidades, asistencia técnica y monitoreo de los derechos humanos.
>
> 
> **DR LIVINGSTONE SEWANYANA**
> Fundación Iniciativa de Derechos Humanos

En febrero de 2024, el **gobierno represivo** de Venezuela hizo lo mismo: **ordenó** el cierre de la oficina de derechos humanos de la ONU y dio al personal tres días para marcharse. La medida se adoptó en respuesta a las críticas internacionales al historial del gobierno en materia de derechos humanos.

Esto no ocurre solo con las instituciones de la ONU. En enero de 2024, tres Estados bajo gobierno militar -Burkina Faso, Mali y Níger- **anunciaron su retirada** de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO). Los tres países vienen teniendo conflictos con la organización por no avanzar rápidamente hacia el restablecimiento de un régimen democrático.

La CEDEAO impuso sanciones tras los golpes militares de los últimos años, con la intención de frenar la normalización del gobierno militar en África Occidental. Sin embargo, los Estados gobernados por juntas parecen ahora dispuestos a desmantelar la cooperación regional antes que aceptar la presión en favor de la democracia. La retirada tardará un año en hacerse efectiva. En las negociaciones que se lleven a cabo durante este periodo, la CEDEAO debe permanecer inflexible en cuanto a los principios fundamentales de la democracia y los derechos humanos.



Foto de AFP vía Getty Images.

Manifestantes sostienen pancartas de denuncia de la CEDEAO en una manifestación por el Día de la Independencia en Niamey, Níger, el 3 de agosto de 2023.

ESCASOS AVANCES EN LOS ODS

El año 2023 hubiera tenido que ser un gran año para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Todos los Estados miembros de la ONU acordaron este ambicioso conjunto de 17 objetivos interconectados en 2015, tras una amplia campaña de la sociedad civil. Dado que los objetivos deben cumplirse antes de 2030, el año 2023 marcó la mitad del camino.

Si bien todo el mundo debería poder apoyar la visión de los ODS de un mundo más igualitario, justo, pacífico y sostenible, según la **evaluación de la ONU** solo el 15% de los 169 objetivos están bien encaminados y casi un tercio se han estancado o han experimentado un retroceso respecto a la línea de base de 2015. Las **tendencias actuales** sugieren que para 2030, 575 millones de personas seguirán viviendo en la pobreza extrema y 600 millones padecerán hambre, lo que corresponde a aproximadamente las mismas cifras que en 2015.

> Tenemos objetivos globales de gran alcance y un sistema internacional de Estado de Derecho, pero nuestros compromisos carecen de implementación. Los mecanismos de rendición de cuentas del sistema internacional no alcanzan, y la actual dinámica de poder impide el uso eficaz de las herramientas existentes. Para actuar conforme a las metas y objetivos que nos hemos fijado, necesitamos mejorar los mecanismos de aplicación, seguimiento y rendición de cuentas.
>
> 
> **ANJA OLIN-PAPE**
> Fundación Desafíos Globales

Los ODS nunca estuvieron bien encaminados, pero la situación se ha deteriorado aún más, en parte debido a las repercusiones de la pandemia COVID-19, la guerra de Rusia contra Ucrania y la consiguiente crisis del costo de vida, los efectos de las catástrofes climáticas y los impactos de todo ello sobre el aumento de los niveles de deuda de los Estados del sur global. Los gobiernos se ven obligados a gastar sus presupuestos en el pago de servicios de la deuda en lugar de cumplir con los ODS. Los países más pobres tienen que pedir préstamos a tasas hasta ocho veces más altas que los países más ricos, y las tasas de interés han aumentado.

El problema a largo plazo es que el actual sistema de gobernanza global no está equipado para cumplir con los ODS. El poder para tomar decisiones económicas mundiales está en manos de organismos que no rinden cuentas, como el G20, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y las instituciones financieras internacionales, en particular el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. La sociedad civil tiene poco espacio para ejercer presión y asegurar el cumplimiento de los ODS en beneficio de las personas más marginalizadas del mundo. En cambio, las decisiones tienden a reflejar los intereses de los Estados económicamente más poderosos.

Las desfavorables condiciones económicas que experimenta tanta gente están impulsando iniciativas para reformar organismos como el FMI y el Banco Mundial, incluidas algunas para **alinearlos** mejor con la protección del espacio cívico. La sociedad civil los ha criticado durante mucho tiempo por reflejar el equilibrio de poder posterior a la Segunda Guerra Mundial, dominado por intereses estadounidenses y europeos. Esta concepción del orden global entra en contradicción con la apropiación universal de los ODS. La toma de decisiones, sin embargo, refleja este desequilibrio de poder. Por ejemplo, en **casi todos** sus acuerdos de préstamo para hacer frente a la pandemia, el FMI insistió en la ortodoxia económica del norte global, que implica recortes del gasto o impuestos sobre el consumo que afectan desproporcionadamente a los más pobres. Estas medidas son contraproducentes para alcanzar los ODS.

> Es posible vincular el catastrófico fracaso de los ODS al fracaso del sistema de gobernanza global. Las medidas que serían necesarias para cumplir los ODS, en particular el alivio de la deuda y la ampliación de la financiación, requerirían una profunda reforma de la arquitectura financiera internacional. Ahora mismo, no tiene ningún sentido. Si bien el sur global

recibe ayuda oficial al desarrollo y otros flujos financieros, una parte sustancial se evapora en la medida en que el servicio de la deuda se devuelve al norte, sobre todo en casos de deuda con el FMI y el Banco Mundial.



ANDY SUMNER
King's College London, Reino Unido

Las instituciones financieras internacionales también **siguen financiando** proyectos destructivos de combustibles fósiles y otras iniciativas de desarrollo que causan la destrucción del medio ambiente, mientras que los Estados del sur global carecen de fondos para cambiar a energías renovables, adaptarse a los impactos del cambio climático y compensar las pérdidas y daños causados por el cambio climático ▶ **VÉASE CAPÍTULO**.

En abril, la ONU y el gobierno de Barbados **lanzaron** la Iniciativa conjunta Bridgetown 2.0, un amplio plan de estímulo de los ODS que permitiría que los países con problemas de deuda y liquidez inviertan en los ODS y mejoren su resiliencia al cambio climático. La iniciativa también insta a una reforma a largo plazo del sistema financiero internacional. Esta es una de varias propuestas para reorientar el sistema financiero internacional en torno a la respuesta y la resiliencia al cambio climático, pero es necesario actuar con mayor urgencia.

Por estas razones, la ONU celebró una cumbre especial sobre los ODS durante la semana inaugural de alto nivel de la Asamblea General en septiembre. Antes de la cumbre, Guterres presentó un **plan de estímulo** de los ODS con el objetivo de movilizar una financiación de USD 500.000 millones para ayudar a cumplir los objetivos.

Pero la cumbre no produjo nuevos compromisos. Los líderes de algunas de las principales economías, como China, Francia y Reino Unido, estuvieron ausentes, lo que indica la escasa prioridad que conceden a los ODS. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue el único dirigente de un miembro permanente del Consejo de Seguridad que asistió. El plan de estímulo de los ODS no consiguió tracción. A la hora de redactar la **declaración** de la cumbre sobre los ODS, los Estados tuvieron dificultades para ponerse de acuerdo sobre cuestiones fundamentales como el cambio climático y los derechos de las mujeres. Las ideas innovadoras de la sociedad civil -como el canje de deuda por financiación para el clima, nuevas normas fiscales mundiales e impuestos sobre el patrimonio- no fueron integradas, lo que subraya un problema mayor: la exclusión de la sociedad civil de los círculos de diálogo de élite de la ONU y de los procesos nacionales para alcanzar los ODS.

También se excluye a la sociedad civil también del monitoreo del cumplimiento de los ODS. Desde su creación, los ODS se han enfrentado a importantes déficits de rendición de cuentas a nivel nacional y mundial. Demasiados Estados se contentan con una autoevaluación, ya que la presentación de informes ante la ONU es voluntaria y a menudo es utilizada por gobiernos y líderes para hacer elaciones públicas y sus propios logros.

Poco indica que los Estados estén dispuestos a abordar el problema. La declaración de la cumbre sobre los ODS incluía el compromiso de trabajar con todas las partes interesadas, incluida la sociedad civil. Pero no mencionó las restricciones que hacen que **apenas el 2,1%** de la población viva en países con espacios cívicos abiertos.

Esta omisión en la declaración se produjo a pesar de que los ODS 16 y 17 dejan clara la importancia de la sociedad civil en la consecución de los objetivos. La **meta 10 del ODS 16** pide a los Estados que protejan las libertades fundamentales, y uno de sus indicadores ofrece un crudo recordatorio de lo que ocurre cuando no lo hacen, ya que consiste en el número de asesinatos de activistas de derechos humanos y otras personas que defienden los derechos humanos. Ciertos Estados en



los que se registran terribles ataques contra la sociedad civil afirman querer alcanzar los ODS. Sin embargo, los ODS son indisociables y no pueden lograrse sin un espacio cívico abierto que permita que las personas exijan y controlen las decisiones.

En la actualidad, los políticos populistas que atacan los valores implícitos en los ODS están ganando influencia política ▶ **VÉASE CAPÍTULO**. Se observa un aumento de las teorías conspirativas y la desinformación que sostienen que los ODS son parte de un plan para establecer un gobierno global totalitario y que quienes abogan por ellos, incluida la sociedad civil, son una élite global demagógica. Por ello, para avanzar en los ODS es más importante que nunca que los Estados y la ONU reconozcan y defiendan a la sociedad civil, y reformen la gobernanza global. De lo contrario, los ODS se convertirán en otro ejemplo de fracaso global y de hipocresía por parte de los líderes nacionales.

LEER MÁS:

› ODS: HORA DE ENDEREZAR EL RUMBO

LA EXCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD CIVIL EN LA ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU

Además de la cumbre sobre los ODS y de una Cumbre sobre la Ambición Climática que no generó avances significativos en la materia, la semana inaugural de alto nivel de la Asamblea General de la ONU transcurrió como de costumbre. Se reunieron presidentes y primeros ministros en Nueva York para pronunciar discursos de autobombo. Muchos aprovecharon la oportunidad para hablar de sus logros, y otros para difundir desinformación. Entre ellos, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, emitió una lista de declaraciones falsas sobre la guerra de su país contra Ucrania.

Para la sociedad civil, la experiencia fue lamentablemente rutinaria. Al igual que en ocasiones anteriores, las organizaciones de la sociedad civil (OSC) acreditadas que suelen colaborar con la ONU se vieron en gran medida excluidas de la sede y obligadas a organizar actos en lugares cercanos. La única excepción fue la **Zona de Acción de los ODS**, ubicada dentro del perímetro para brindar acceso a la sociedad civil a los debates sobre los Objetivos, pero la entrada a este espacio no era libre.

La posición relegada de la sociedad civil plantea un problema más amplio. A pesar de los **elogios enfáticos** del secretario general, Guterres, hacia la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos en la inauguración de la cumbre de los ODS, hay pocas señales de seguimiento a su **Llamamiento a la acción en favor de los derechos humanos** de 2020 y a la **Nota de orientación sobre el espacio cívico**, que prometían un papel más destacado de la sociedad civil. La sociedad civil insta a la ONU a elaborar un informe de evaluación y un plan de acción para identificar áreas de mejora.

La exclusión persistente de la sociedad civil quedó evidenciada en

otro ritual anual agotador. En febrero, el Comité de ONG del Consejo Económico y Social (ECOSOC) concluyó su sesión anual, durante la cual se determina qué OSC recibirán la acreditación del ECOSOC, un estatus que permite interactuar con las instituciones de la ONU. Este comité, como guardián de la ONU, es utilizado por algunos Estados miembros para mantener la puerta lo más cerrada posible. Varios de sus miembros -Bahréin, China, Cuba, Eritrea y Nicaragua- tienen espacios cívicos cerrados, y son pocos los que lo tienen abierto. Los Estados represivos trasladan su hostilidad interna hacia la sociedad civil a la esfera internacional.

Su herramienta clave es el aplazamiento de las decisiones. Pueden retrasar las solicitudes durante años, haciendo que las OSC malgasten energías y recursos en proporcionar repetidamente información adicional. Durante su sesión de 2023, el Comité **recibió** 239 nuevas solicitudes de acreditación, que se sumaron a las 321 ya aplazadas. Pero de un total de 560 solicitudes, sólo aprobó 214, menos de la mitad. Sólo se aprobaron 56 solicitudes previamente aplazadas, lo que demuestra que los aplazamientos pueden afectar a las OSC año tras año.

Los Estados hostiles a la sociedad civil fueron los que más preguntas plantearon a las OSC solicitantes, con China a la cabeza, seguida de India, Argelia, Pakistán y Turquía. Estos son algunos de los Estados que instrumentalizan el Comité para reprimir a la sociedad civil, incluidas las OSC de sus países.

El Comité viene enfrentando este problema desde hace años. Si la ONU se toma en serio su compromiso con la sociedad civil, debe reflexionar sobre cómo superar este estancamiento.

LEER MÁS:

- ASAMBLEA GENERAL DE LA ONU: RELACIONES PÚBLICAS Y LUGARES COMUNES

UN ORDEN INTERNACIONAL EN MUTACIÓN: LOS BRICS Y EL G20

Mientras tanto, fuera de la ONU, el orden internacional está cambiando, pero la cuestión es quién lo cambiará y con qué fines.

En la cumbre de los BRICS, celebrada el pasado agosto, se acordó la admisión de seis nuevos miembros a este grupo compuesto de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Todos los Estados que tomaron posesión de su cargo en enero de 2024 -Egipto, Etiopía, Irán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos- **restringen severamente** el espacio cívico. Argentina era el único miembro entrante que respetaba de manera general el espacio cívico, pero en diciembre su **nuevo presidente**, Javier Milei, **anunció** que no se incorporaría.

La sociedad civil lleva mucho tiempo trabajando para intentar abrir la ONU y critica a sus instituciones por no ser suficientemente democráticas y responsables. Sin embargo, las alternativas emergentes son aún peores. La ONU tiene normas centradas en los derechos humanos, por muy imperfectamente que se observen, y existen procedimientos de toma de decisiones. Excepto en el Consejo de Seguridad, el voto de cada Estado vale lo mismo. Las alternativas emergentes como los BRICS no cumplen ni con estos requisitos mínimos. Los motivos de la ampliación del grupo BRICS y sus criterios de adhesión no están claros, pero esta nueva incorporación muestra la falta de consideración hacia los derechos humanos.

Hasta ahora, el BRICS se ha centrado sobre todo en el desarrollo y la financiación. En 2015 lanzó su Nuevo Banco de Desarrollo, al que pueden adherirse países no pertenecientes al BRICS. Pero la cumbre anual de los BRICS es un acontecimiento importante y altamente simbólico, y lo seguirá siendo en 2023 a pesar de la ausencia de Vladimir Putin. Esta se debe a que el país anfitrión, Sudáfrica, es miembro de la CPI y por lo tanto hubiera tenido la obligación de arrestarlo. La cumbre proporciona un escenario para que líderes autocráticos, como Xi Jinping de China, se presenten como estadistas internacionales sin ninguna perspectiva de rendición de cuentas.

China impulsó con fuerza la expansión de los BRICS, presentándola como un proceso de democratización para contrarrestar un orden internacional centrado en Occidente. Sin embargo, en lugar de abordar la necesidad real de democratizar la gobernanza global, esta expansión perpetúa la noción de que los líderes nacionales son los únicos capacitados para tomar decisiones sobre cuestiones que afectan a todos. La redistribución propuesta parece resultar en un aumento de poder para algunos dirigentes estatales mientras otros lo pierden.

Una verdadera reforma no ocurrirá a menos que se abran oportunidades para la participación de la sociedad civil. Sin embargo, en lugar de avanzar en esa dirección, los BRICS celebrarán su cumbre de 2024 en Rusia, aunque no sea el turno de Rusia, presumiblemente para permitir que Putin se posicione como líder global. Putin merece el aislamiento internacional en respuesta a la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, pero esta cumbre va en contra de esta tendencia.

La expansión de los BRICS y la elección de Rusia como país anfitrión deberían sin duda suscitar interrogantes sobre su verdadero significado. Lo mismo puede decirse del G20, la reunión anual de líderes de economías poderosas. Su cumbre de 2023, organizada por India, ejemplificó uno de los grandes defectos de las cumbres internacionales centradas únicamente en los Estados.

Celebrada justo antes de la apertura de la Asamblea General de la ONU, la cumbre del G20 ofrecía una oportunidad clave para que los Estados con más poder se comprometieran a avanzar en la resolución de los grandes desafíos actuales. Pero eso no ocurrió.

En cambio, el gobierno anfitrión hizo todo lo posible para proyectar una imagen positiva del líder del país, Narendra Modi, de cara a las elecciones de 2024. El objetivo evidente era posicionar a India como potencia mundial y a Modi como su líder indiscutible. Una cumbre organizada por la India por el simple principio de rotación se presentó como si los líderes mundiales, al asistir, otorgaran a Modi un reconocimiento especial.

La hostilidad del partido gobernante hacia la sociedad civil independiente quedó patente antes de la cumbre en un proceso oficial de consulta. El gobierno indio ejerció un estricto control sobre este proceso, llenándolo de partidarios y excluyendo a activistas indios con opiniones divergentes. Una reunión alternativa organizada por la sociedad civil enfrentó **interrupciones e intimidaciones**.

A pesar de los esfuerzos de relaciones públicas, la cumbre produjo una declaración que no mencionaba a la sociedad civil ni avanzaba en asuntos clave como el cambio climático y la guerra de Rusia contra Ucrania. Con Rusia como miembro del G20, los Estados solo pudieron acordar una declaración de compromiso sobre su invasión, aún más débil que la resultante de la anterior reunión del G20 en Indonesia.

La cumbre del G20 ofreció nuevas pruebas de que la gobernanza global no puede dejarse únicamente en mano de los Estados, y menos aún de una élite de Estados autoseleccionados.

La cumbre del G20 fue quizá el ejemplo más flagrante del año de cómo los Estados y los dirigentes que acogen importantes eventos internacionales los utilizan para reforzar su imagen en lugar de abordar cuestiones de fondo. La sociedad civil formuló críticas similares respecto a los Emiratos Árabes Unidos, anfitriones de la cumbre sobre el clima COP28 ▶ **VÉASE CAPÍTULO**.

LEER MÁS:

- BRICS: ¿NACE UN BLOQUE INTERNACIONAL REPRESIVO?
- LA CUMBRE DEL G20, UN RITUAL INTERNACIONAL CARENTE DE SUSTANCIA

LOS ESFUERZOS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA ESTABLECER NORMAS

A pesar de las deficiencias del sistema de gobernanza global y de los desafíos ligados a la participación, la sociedad civil sigue presionando para que se establezcan nuevas normas globales, que toman la forma de tratados internacionales recientemente acordados o actualmente en fase de negociación.

Sin embargo, también existen muchos problemas en este ámbito. Los tratados a menudo reflejan compromisos que no alcanzan la ambición que reclama la sociedad civil. Una vez acordados, sus mecanismos de aplicación suelen ser débiles: la evidencia demuestra que **solamente** los tratados sobre finanzas y comercio son tomados lo suficientemente en serio como para cumplir sus objetivos. Pero a pesar de estos problemas, la sociedad civil participa porque las convenciones producen estándares a los que deben atenerse los Estados y el sector privado, y los procesos de negociación brindan oportunidades de participación e incidencia.

La sociedad civil es una fuente clave de inspiración. En cada una de las convenciones históricas de las últimas décadas, como el Estatuto de Roma que estableció la CPI, el Tratado sobre Minas Terrestres y el Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares, fue la sociedad civil quien tomó la iniciativa, desarrollando las ideas, creando alianzas e instando a su adopción y ratificación. Y seguirá haciéndolo.

Tratados ambientales

En 2023 se registraron avances desiguales en la mejora de la gobernanza global en materia ambiental. Entre los procesos clave concluidos por los Estados y la ONU en 2023 se encuentra el Tratado Global de los Océanos: el Acuerdo en el marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional. El tratado se acordó en marzo y se



Foto de Tony Karumba/AFP vía Getty Images.

Un monumento de nueve metros de altura, realizado con residuos plásticos por el activista y artista canadiense Benjamin von Wong, se alza frente a la sede del Programa de la ONU para el Medio Ambiente en Nairobi, Kenia, 22 de febrero de 2022.

adoptó en junio. Actualmente cuenta con 86 signatarios y entrará en vigor 120 días después de que sea ratificado por 60 Estados, un hito aún por alcanzar.

Este tratado es muy necesario, ya que la salud de los océanos **se deteriora** rápidamente. Más del 70% de la superficie terrestre es agua y la mayor parte se define como alta mar, es decir aquellas zonas fuera de las jurisdicciones nacionales que son cruciales para el clima y la biodiversidad. El derecho internacional es débil en este ámbito y las negociaciones para fortalecerlo se han prolongado. Dos sesiones supuestamente finales en 2022 **no lograron** acordar un tratado. Los principales desacuerdos se centraron en los derechos de pesca, el reparto de los beneficios de **recursos genéticos marinos** potencialmente lucrativos, la perspectiva de abrir **el Ártico** a la exploración y la provisión de fondos a los países del sur global.

Aunque la sociedad civil no haya tenido representación formal en el proceso de negociación, trabajó duro para desarrollar relaciones con los Estados que la apoyaban y presionar para que se finalizara el tratado. Ahora, la sociedad civil está presionando para que se generalice su ratificación y, lo que es más importante, sea implementado por el mayor número de Estados posible.

La implementación es clave, como demostró el Convenio sobre la Diversidad Biológica en marco del cual, en diciembre de 2022, los Estados **acordaron** un Marco Mundial para la Biodiversidad. Tras una amplia incidencia de la sociedad civil, su objetivo principal es conservar y gestionar el 30% de la tierra y los mares para 2030. Si bien esta petición es clave para la sociedad civil, los activistas son conscientes de que nunca se ha alcanzado ningún objetivo global en materia de biodiversidad.

Hasta el momento, los Estados han tardado en desarrollar estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad, requeridos para la próxima cumbre del Convenio sobre Biodiversidad, la COP16, que se llevará a cabo en Colombia a finales de este año. Y, como suele ocurrir, el financiamiento se destaca como uno de los principales obstáculos.

El acuerdo estableció un fondo que supuestamente aportaría USD 200.000 millones anuales para ayudar a los países del sur a aplicar el marco de biodiversidad para 2030. Las discusiones al respecto estuvieron a punto de impedir que se llegara a un acuerdo, y hasta el día de hoy el fondo sigue siendo **muy inferior** a lo necesario. Solamente Alemania, Canadá y el Reino Unido han aportado contribuciones iniciales. La sociedad civil reclama mucha más financiación. Sus propuestas incluyen la financiación de bancos internacionales e innovaciones como los **canjes de deuda por naturaleza**, en los que los Estados venden bonos que respaldan los esfuerzos de conservación.

Se está negociando otro tratado importante, el de los plásticos, y, como ocurre con otros convenios ambientales, las negociaciones se están alargando. La última ronda de conversaciones se celebró en Nairobi, Kenia en noviembre y no consiguió llegar a un acuerdo sobre puntos clave.

La sociedad civil aboga por un tratado ambicioso porque el problema es enorme. La contaminación por plásticos es omnipresente: afecta al suelo, los océanos y los sistemas sanguíneos humanos y animales. La magnitud de la crisis es cada vez mayor, pero las negociaciones se enfrentan a la influencia significativa de un poderoso grupo de presión industrial: dado que los plásticos se producen a partir de combustibles fósiles, las empresas de esta industria presionan para que continúe la expansión del uso de plásticos, **mitigando así el riesgo empresarial** asociado con una posible caída de la demanda de petróleo y gas para energía y transporte . Al igual que en las cumbres sobre el clima, unos **143 lobbies** de la industria química y de los combustibles fósiles participaron en las negociaciones de Nairobi.

Ciertos Estados como Irán, Rusia y Arabia Saudí están trabajando para ralentizar y limitar el proceso, **insistiendo** en que el tratado no debe incluir objetivos vinculantes y no debe centrarse en la producción de plásticos. Así, tratan de restringir su alcance al reciclaje y al control de residuos. La sociedad civil y algunos Estados están dejando claro que esta respuesta es inadecuada e insuficiente para abordar el problema y abogan por un tratado centrado en todas las fases del ciclo de los plásticos, incluidos el diseño y la producción, con el objetivo de reducir el uso del plástico y que cuando se utilice sea menos nocivo.

Las conversaciones se interrumpieron sin un acuerdo claro sobre el camino a seguir. La próxima ronda se celebrará en abril de 2024 en Ottawa, Canadá, donde la sociedad civil seguirá exigiendo ambición y progreso reales.

> Somos optimistas y creemos que prevalecerá la necesidad de resolver esta crisis planetaria. La comunidad internacional ha fracasado con el cambio climático y no puede fracasar también con los plásticos. El Tratado sobre los Plásticos podría ser una forma de demostrar que la cooperación internacional es la mejor manera de resolver los problemas globales y que la salud humana y el medio ambiente pueden y deben anteponerse a los intereses nacionales y empresariales.



VITO BUONSANTE
Red Internacional por la Eliminación de Contaminantes

LEER MÁS:

- MARCO MUNDIAL DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA: ¿DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS?
- LA CRISIS DEL PLÁSTICO: UNA CARRERA CONTRARRELOJ

El tratado sobre pandemias

En su momento, la sociedad civil albergó grandes esperanzas de que un Tratado sobre Pandemias pudiera ayudar a aprovechar los aprendizajes de la pandemia de COVID-19 para evitar grandes errores en el futuro. En su respuesta a la pandemia, muchos Estados adoptaron enfoques fuertemente nacionalistas e interesados. Las instituciones mundiales fueron dejadas de lado y las vacunas se concentraron en los países del norte, reproduciendo las desigualdades globales. Ante esta situación, la sociedad civil redobló sus **esfuerzos** en favor de un acuerdo internacional y, con la adhesión de más Estados, en diciembre de 2021 la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha un proceso para desarrollar un tratado sobre pandemias. Pero las expectativas de la sociedad civil se están viendo defraudadas.

La OMS ha llevado a cabo varias sesiones de negociación, siendo la última en noviembre pasado. Sin embargo, la sociedad civil sostiene que el actual borrador no tiene debidamente en cuenta las normas de derechos humanos, incluidos el derecho a la salud y el derecho a beneficiarse del progreso científico. Los Estados que negocian el tratado no se han puesto de acuerdo sobre el principio básico de equidad, esencial para evitar que se repita una respuesta desigual a escala global en la próxima pandemia.

Los más afectados por la pandemia han sido excluidos de las negociaciones: de hecho, los Estados del norte global dominan el proceso, priorizando la protección de los intereses de las empresas sanitarias y farmacéuticas privadas, que tienen un gran poder de presión. La determinación de las grandes farmacéuticas de defender sus derechos de propiedad intelectual sólo puede seguir obstaculizando el acceso a las vacunas en los países del sur global.

Aunque se espera que el tratado final se adopte en la Asamblea Mundial de la Salud de 2024 el próximo mes de mayo, la sociedad civil anticipa tener poco que celebrar dado su estado actual.

Fiscalidad, empresas y derechos humanos

Una noticia positiva es que se han producido algunos avances hacia el desarrollo de un marco fiscal global bajo los auspicios de la ONU, respaldado conjuntamente por la sociedad civil y por muchos Estados del sur global. En noviembre, la Asamblea General de la ONU **votó** a favor de la creación de dicho marco fiscal global.

Se trata de una cuestión crucial. Hasta ahora, la OCDE, compuesta por 38 Estados ricos, ha determinado el régimen fiscal global, y todos los demás han tenido que alinearse. Este sistema, además de ser injusto, priva



Foto de Fabrice Coffrini/AFP vía Getty Images.

Activistas reclaman un impuesto climático para los ricos en vísperas de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, el 15 de enero de 2023.

a los Estados del sur global de las herramientas que necesitan para abordar problemas graves como la evasión fiscal de las empresas transnacionales y para aplicar enfoques redistributivos a la riqueza excesiva.

En un mundo globalizado, la fiscalidad debería ser gestionada por un organismo en el que todos los países tengan voz y no por un grupo de élite. La ONU parece ser la sede más adecuada, pero para garantizar que las nuevas normas fiscales internacionales sean justas y transparentes, la sociedad civil, quien ha abogado por este cambio, debe participar plenamente en su desarrollo.

Se avecina una gran lucha. La votación de noviembre reveló una clara división entre los poderosos Estados del norte que defienden el statu quo y los Estados del sur que apoyan ampliamente el cambio. Incluso Chile y Colombia, miembros de la OCDE, rompieron filas para apoyar la resolución, mientras que México y Turquía se abstuvieron. Para avanzar en el cambio, dado el poder de quienes se interponen en su camino, los Estados del sur global necesitan trabajar con la sociedad civil, aunque para algunos esto implicaría un incómodo reconocimiento del papel legítimo de la sociedad civil.

Mientras tanto, también se están viendo avances en la elaboración de un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos. La sociedad civil lleva mucho tiempo abogando por un tratado, ya que las empresas, especialmente las transnacionales, tienen enormes repercusiones en los derechos humanos. La novena sesión del grupo de trabajo se celebró en octubre y podría suponer un paso adelante.

Por primera vez, los países del norte global, que durante mucho tiempo se mostraron renuentes, parecen aceptar la idea de firmar un tratado y, en lugar de debatir acerca de su necesidad, empiezan a entablar conversaciones de fondo. Esto incluye al Reino Unido y a los Estados Unidos, y quizá en menor medida a la Unión Europea (UE). Los Estados africanos y latinoamericanos siguen en primera línea, presionando para conseguir un tratado fuerte con protección de los derechos humanos y el medio ambiente. En el contexto de los ataques en Gaza, varias OSC que participan en los debates también instan a que el texto de la convención haga una referencia firme al derecho internacional humanitario, haciendo hincapié en la necesidad de diligencia debida para las empresas que trabajan en zonas de conflicto.

Los Estados discrepan sobre si el convenio debe aplicarse sólo a las empresas transnacionales, a todas las empresas comerciales o a algún punto intermedio. La sociedad civil también está preocupada por la relativa falta de consulta con los sindicatos y reclama una mayor protección para las mujeres, los pueblos indígenas y otros grupos marginalizados. Todavía hay mucho en juego y mucho que debatir, pero 2023 podría pasar a la historia como el año en que el tratado se convirtió en una perspectiva real.

LEER MÁS:

- LA LUCHA DE LA SOCIEDAD CIVIL POR LA JUSTICIA FISCAL
- TAN DIFÍCIL COMO NECESARIO: EL PROCESO HACIA UN TRATADO VINCULANTE SOBRE EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS

Tecnología e inteligencia artificial

La sociedad civil apoya ampliamente los tratados internacionales porque contribuyen al desarrollo de un orden internacional basado en normas, pero algunas normas podrían causar más problemas de los que resuelven. Existen serias dudas sobre un tratado que se está negociando actualmente, el Tratado de las Naciones Unidas contra la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fines delictivos, conocido como Convenio sobre la Ciberdelincuencia.

La ciberdelincuencia es un problema generalizado y creciente, cuyo coste se estima en unos **USD 11.500 millones** en 2023, y los Estados no pueden hacerle frente sin abordar su naturaleza transfronteriza. Pero el problema yace en la definición del delito – y en la autoridad competente para definirlo. En todo el mundo, las leyes sobre ciberdelincuencia se encuentran entre las herramientas contemporáneas más utilizadas por los Estados represivos para penalizar el disenso en internet. Ahora esos mismos Estados están tratando de utilizar el proceso de un tratado mundial para reforzar su ataque a los derechos.

Resulta preocupante que Rusia iniciara el proceso, respaldada por un grupo de Estados represivos: Bielorrusia, Camboya, China, Irán, Myanmar, Nicaragua, Siria y Venezuela. Esto por sí solo debería generar desconfianza. La sociedad civil tiene dudas sobre la necesidad de un nuevo tratado, remitiéndose al **Convenio de Budapest** del Consejo de Europa, que cualquier Estado puede ratificar, aunque la mayoría no lo ha hecho, y que hasta ahora no es **plenamente operativo**.

Al menos, el proceso de negociación ofrece a la sociedad civil la oportunidad de participar en los debates. La sociedad civil se opone a un tratado amplio que permita a los Estados definir lo que constituye un ciberdelito y les dé más herramientas para restringir las libertades, incluso **ampliando la vigilancia estatal**. En cambio, las OSC piden un tratado que respete **los principios de los derechos humanos**. Sostienen que la convención deber centrarse en una gama reducida de delitos y ser coherente con las normas de derechos humanos, como la **resolución** sobre el derecho a la intimidad en la era digital adoptada por el Consejo de Derechos Humanos el pasado octubre, que contiene normas estrictas sobre los sistemas de vigilancia.

La última ronda de conversaciones se interrumpió en febrero de 2024 sin llegar a un consenso. La sociedad civil seguirá dando la voz de alarma sobre los peligros de un convenio regresivo.

> Las OSC, así como el sector privado, están aportando perspectivas vitales sobre las posibles repercusiones de las propuestas presentadas en las negociaciones del tratado, sobre cuestiones prácticas, en materia de protección de datos y en materia de derechos humanos. Fundamentalmente, las OSC hacen verificación de datos y aportan evidencia para respaldar o rebatir los argumentos de los Estados miembros a medida que éstos presentan sus propuestas y se debaten posibles compromisos.
>
> 
> **IAN TENNANT**
> Alianza de ONG sobre Prevención del Delito y Justicia Penal

La sociedad civil también está señalando problemas de derechos humanos en el cambiante ámbito de la regulación de la IA. El rápido florecimiento de la IA y su capacidad para cambiar prácticamente todas las esferas de la vida humana supera con creces el estado actual de la regulación, y no cabe duda de que se necesitan nuevas normas para evitar daños y mitigar los riesgos de que los Estados y las empresas utilicen la IA para restringir los derechos humanos. La regulación no puede dejarse en manos de los empresarios tecnológicos, felices de actuar con rapidez y preocuparse después de las consecuencias, ni de los Estados, muchos de los cuales ven en la IA un potencial represivo. La UE, y no la ONU, lidera los esfuerzos actuales. Se espera que el Parlamento Europeo vote este año una ley para toda la UE que, dado el poder económico y político del bloque, tendrá repercusiones globales.

Las preocupaciones de la sociedad civil sobre el texto actual del proyecto de ley se centran especialmente en los usos de la IA en la vigilancia masiva y el reconocimiento de emociones, y en la posibilidad de que se utilicen contra grupos excluidos, sobre todo en la vigilancia policial y el control de fronteras. A medida que se ha ido desarrollando

el proyecto de ley de la UE, se han suavizado las protecciones contra el uso de medidas como el reconocimiento facial. Ahora que la ley se acerca a su finalización, la sociedad civil seguirá presionando para eliminar lagunas y proteger los derechos humanos fundamentales.

> Seguiremos presionando para conseguir la mejor protección posible de los derechos humanos y seguiremos centrándonos en las demandas de empoderar a las personas afectadas con un marco de rendición de cuentas, transparencia, accesibilidad y reparación, poner límites a la vigilancia perjudicial y discriminatoria por parte de las autoridades de seguridad nacional, policiales y migratorias, y hacer frente a los grupos de presión de las grandes empresas tecnológicas eliminando las lagunas jurídicas que socavan la regulación.
>
> 
> **NADIA BENAISSA**
> Bits of Freedom

LEER MÁS:

- LA REGULACIÓN DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL RELEGA LOS DERECHOS HUMANOS
- CONVENCIÓN DE LA ONU SOBRE CIBERDELINCUENCIA: ¿PODRÍA EL REMEDIO SER PEOR QUE LA ENFERMEDAD?

REFORMA DE LA ONU: LA AGENDA DE LA CUMBRE DEL FUTURO

Los tratados nuevos y en curso de negociación demuestran una evolución, aunque muy lenta, del sistema de gobernanza global. La sociedad civil seguirá impulsando propuestas de reforma de la ONU, ya que sigue siendo la mejor esperanza para abordar los problemas globales y desarrollar normas internacionales que hagan avanzar los derechos humanos.



Foto de las Naciones Unidas.

Una representante de sociedad civil realiza una declaración oral en una sesión de la ONU.

La próxima oportunidad se presentará en la Cumbre del Futuro de septiembre de 2024, **retrasada un año** por los Estados del sur global que en 2023 prefirieron no desviar la atención de la cumbre de los ODS. La sociedad civil está participando en el proceso preparatorio en la medida de sus posibilidades y buscará verdaderas decisiones de reforma en lugar de simples declaraciones elocuentes. No debemos permitir que se repita la falta de seguimiento del Llamamiento a la Acción de 2020.

> La Cumbre del Futuro será una oportunidad crucial para que las juventudes y las personas defensoras de derechos humanos contribuyan a moldear la ONU que aspiramos y necesitamos tener para ese futuro que formulan las agendas post-2015.



MARTA BENAVIDES
activista por la paz, El Salvador

> Mediante una combinación de masa crítica, ideas de calidad, liderazgo global inteligente y diplomacia multilateral hábil, la sociedad civil puede unirse a los gobiernos defensores de los derechos humanos, junto con los líderes dinámicos de las instituciones globales y regionales, para garantizar que esta Cumbre del Futuro, que se celebra literalmente una vez cada generación, marque una diferencia significativa. Juntos, los gobiernos, la sociedad civil y las instituciones multilaterales deben trabajar con rapidez y determinación para aprovechar esta oportunidad de hacer realidad el futuro que queremos y construir las Naciones Unidas necesarias para las generaciones presentes y futuras.



RICHARD PONZIO
Programa de Gobernanza Global, Seguridad y Justicia, Centro Stimson

> Pasamos de una falta total de reconocimiento a cierto reconocimiento formal del papel de la sociedad civil en la gobernanza global, y a llamamientos en favor de un multilateralismo en red e integrador. Pero el alcance de la participación de la sociedad civil sigue siendo objeto de constante debate. Por ejemplo, el informe Nuestra Agenda Común del secretario general de la ONU aboga por un mayor compromiso del sistema de las Naciones Unidas con la sociedad civil a través de puntos focales, pero las consultas para la Cumbre del Futuro se han celebrado a puerta cerrada. Existe una tensión entre la necesidad de que los Estados miembros debatan con franqueza y la exigencia de transparencia para que la sociedad civil pueda realizar aportaciones y exigir responsabilidades a los Estados miembros.



NUDHARA YUSUF
Red de Innovación para la Gobernanza Global, Centro Stimson

La cumbre tiene muchos asuntos que considerar, pero uno de los actuales focos de atención de la incidencia de la sociedad civil es la **Nueva Agenda para la Paz**, presentada por Guterres el pasado mes de julio. Este plan de 12 puntos plantea como objetivo la mejora de la capacidad de la ONU para ofrecer una respuesta colectiva de prevención y resolución de conflictos. Hay una necesidad urgente de reconstruir la confianza, un desafío importante tras el asalto de Israel a Gaza. No parece posible avanzar en este frente sin asumir la necesidad de reformar el Consejo de Seguridad.

Para reconstruir la confianza se debe empezar por cambiar la propia ONU. Muchas OSC están colaborando para impulsar un programa de reformas. La iniciativa Unmute Civil Society, liderada por Costa Rica y Dinamarca y respaldada por varias OSC y algunos Estados, enumera **cinco propuestas** para mejorar la participación de la sociedad civil en los procesos de la ONU: utilizar las tecnologías digitales para ampliar la participación y la inclusión, reducir la brecha digital centrándose en la conectividad de los más excluidos, modificar los procedimientos y las prácticas para garantizar una interacción y una participación

efectivas y significativas en todas las fases, crear un día de acción anual de la sociedad civil para hacer balance y evaluar los avances en la participación de la sociedad civil, y nombrar un enviado de la ONU para la sociedad civil.

La idea de un **enviado o defensor de la sociedad civil** es una propuesta relativamente modesta que podría servir como primer paso para seguir avanzando. A lo largo de los años, los secretarios generales de la ONU han creado diversas funciones de enviado para señalar la importancia de una cuestión y ayudar a coordinar la acción de toda la ONU. Entre otras cosas, un enviado de la sociedad civil podría fomentar las buenas prácticas de participación de la sociedad civil en toda la ONU, garantizar la participación de diversos sectores de la sociedad civil en el trabajo de la ONU e impulsar el compromiso de la ONU con grupos de la sociedad civil de todo el mundo.

En un momento en el que se evidencian los déficits de los actuales acuerdos de gobernanza global y en el que la sociedad civil está siendo cada vez más atacada, la creación de esta función permitiría a la ONU mejorar su eficacia e indicar la importancia de la sociedad civil. El hecho de que aún no se haya aceptado esta propuesta comienza a simbolizar la exclusión de la sociedad civil.

> El enviado podría explorar formas de implicar a la gente con enfoques digitales y no digitales, y desarrollar la implicación de la sociedad civil con la ONU y también con el Banco Mundial, los bancos regionales y otras instituciones regionales. El enviado también podría hacer un seguimiento de la asignación de fondos y llamar la atención sobre los niveles extremadamente bajos de financiación -como la financiación para el desarrollo y el clima- que se destina a grupos como las organizaciones de mujeres de base.
>
> 
> **NATALIE SAMARASINGHE**
> Open Society Foundations

Muchos miembros de la sociedad civil apoyan también la propuesta de introducir una iniciativa ciudadana mundial. Siguiendo el modelo de los procesos de la UE y de varios países, permitiría a la gente movilizarse para recoger firmas con el fin de incluir un tema en la agenda de la ONU. Podría garantizar que los asuntos que cuenten con un alto nivel de apoyo público mundial sean tenidos en cuenta, incluso durante la semana de apertura de alto nivel de la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad.

Una reforma de este tipo contribuiría a que la atención de la ONU se centre en cuestiones acuciantes, otorgando más legitimidad a los esfuerzos de los Estados que muestran voluntad de avanzar. También generaría un sentimiento de identificación con la ONU, ya que se percibiría como una institución que puede asumir y encarnar las preocupaciones de los ciudadanos.

Otra propuesta de reforma respaldada por muchos miembros de la sociedad civil es la creación de una asamblea parlamentaria de la ONU que complemente a la Asamblea General y dé voz tanto a los ciudadanos como a los gobiernos. Esto podría servir como un valioso correctivo a la naturaleza estado-céntrica de la toma de decisiones y actuar como una fuente de escrutinio y rendición de cuenta sobre las decisiones que la ONU toma o deja de tomar.

> Si la ONU siguiera el modelo federal, además de la Asamblea General que representa los intereses de las naciones, se necesitaría una asamblea parlamentaria para representar al pueblo y tomar decisiones que sirvan al bien común de la humanidad.
> La disfunción de la gobernanza global no se debe fundamentalmente a que la sociedad civil tenga poco acceso. Eso es un síntoma de la disfunción de fondo, que tiene que ver con la toma de decisiones y la legitimidad. Si existiera un parlamento mundial, daría voz a la sociedad civil en virtud de su función.
>
> 
> **JOHN VLASTO**
> Movimiento Federalista Mundial

> Creo en el principio de igualdad de la ciudadanía global, que significa que todas las personas del planeta deben tener las mismas oportunidades de participar en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan a todos. Y creo que la única manera de conseguirla es a través de un parlamento y elecciones globales universales.
> Los desafíos globales son cada vez más abrumadores, sobre todo la crisis climática, y está claro que el modus operandi actual no funciona. Esto se debe a que existe un vacío a nivel global: no hay autoridad para tomar decisiones. Se necesita una política global que cree esa autoridad, pero debe diseñarse de forma democrática.



ANDREAS BUMMEL
Democracia sin Fronteras

Hasta el momento, la sociedad civil ha expresado amplia decepción ante el proceso preparatorio y la evidente falta de sustancia en el Pacto para el Futuro propuesto por la cumbre, pero con un poco de voluntad, esto aún puede cambiar. Un Foro ONU-Sociedad Civil programado en Kenia en mayo de 2024 marca una fecha clave para evaluar los avances y la calidad de la consulta.

En este momento crucial, el mundo no necesita más disputas diplomáticas ni posturas interesadas que conviertan la Cumbre del Futuro en otra oportunidad perdida. La sociedad civil, representada por una amplia gama de actores, debe aprovechar cualquier oportunidad para contribuir y marcar la diferencia. Aquellos con experiencia y conocimiento del sistema de las Naciones Unidas tienen una responsabilidad especial a la hora de utilizar su estatus e influencia para impulsar un diálogo genuino.

Las reformas propuestas por la sociedad civil son solamente pasos incrementales hacia un sistema de gobernanza global más abierto, democrático y responsable. No son recetas mágicas, pero podrían marcar el comienzo de un recorrido. La ONU actual no es la ONU que el mundo necesita, pero la sociedad civil debe comprometerse con la ONU existente para intentar cambiarla, ya que la situación sería mucho peor si esta no existiera.



Foto de las Naciones Unidas.

Una representante de sociedad civil interviene durante la CSW63, la 63ª sesión de la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer, celebrada en la ONU en Nueva York, Estados Unidos, en marzo de 2019.

Los Estados que respaldan estas propuestas deben dar un paso al frente y mostrar su voluntad de impulsar el cambio que pide la sociedad civil. De lo contrario, los líderes mundiales corren el riesgo de permitir que el mundo se fragmente a medida que la ONU se vuelve irrelevante y los Estados represivos crean alternativas autoritarias. Las crisis globales como los conflictos, el cambio climático, la desigualdad y la pobreza se descontrolarán porque los Estados no pueden resolverlas solos. Es hora de que los líderes creen los sistemas que el mundo necesita, y este cambio sólo es posible si se colabora con la sociedad civil.





CLIMA: LA REPRESIÓN COMO NEGACIONISMO





Foto de Jorge Guerrero/AFP vía Getty Images.

Activistas tumbados en la tierra seca durante una manifestación de Acción Climática Global en el embalse de La Viñuela, en la provincia de Málaga, España, el 22 de marzo de 2023.

La necesidad de actuar frente a la crisis climática nunca ha estado tan clara. 2023 fue el **año más cálido de la historia**, y trajo consigo la prueba más clara posible de lo que significa vivir con el cambio climático. Pareciera que cada semana llegaron noticias de un nuevo fenómeno meteorológico extremo que ponía en peligro innumerables vidas y afectaba en mayor medida a las personas más vulnerables. En julio, el secretario general de las Naciones Unidas (ONU), António Guterres, **anunció** sombríamente que "la era de la ebullición global ha llegado".

La respuesta de los Estados y del sector privado no es ni remotamente suficiente. Los planes actuales de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero distan mucho del objetivo declarado en el Acuerdo de París de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales. Las empresas de combustibles fósiles están acumulando grandes beneficios y gastando muy poco en energías renovables, mientras que los gobiernos siguen aprobando nuevos proyectos extractivos. Además, la financiación internacional para hacer frente al cambio climático permanece muy insuficiente.

Los llamamientos para romper el ciclo destructivo proceden en mayor medida de la sociedad civil, que lleva mucho tiempo dando la voz de alarma y sensibilizando a la opinión pública sobre la necesidad de actuar contra el cambio climático. En 2023, esos llamamientos fueron más enérgicos que nunca, pero se enfrentaron a una creciente resistencia. Incluso en países que respetan ampliamente las libertades cívicas, se vuelve cada vez más difícil protestar para exigir medidas contra el cambio climático. En el sur global, los activistas del clima y el medio ambiente que trabajan cerca de los lugares de extracción se enfrentan a una violencia generalizada.

A la sociedad civil le resulta cada vez más difícil exigir medidas contra el cambio climático, y mientras tanto se cierra la ventana de oportunidad. La restricción del activismo climático debe reconocerse como una forma de negacionismo climático.

El negacionismo climático se está volviendo cada vez menos frecuente pero en su lugar se están adoptando formas de negacionismo más sutiles, como el retraso de las medidas por parte de Estados y empresas, la exacerbación de los riesgos asociados a los cambios necesarios y la promoción de acciones simbólicas limitadas. La sociedad civil llama a este negacionismo por su nombre y exige que termine – por esta razón se encuentra en el punto de mira.



2023 FUE EL AÑO MÁS CALUROSO JAMÁS REGISTRADO: 1,48 GRADOS MÁS QUE LA MEDIA A LARGO PLAZO



ALREDEDOR DEL 7% DEL PIB MUNDIAL SE INVIRTIÓ EN ACTIVIDADES CON IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS DIRECTOS



LAS EMISIONES GLOBALES DE CARBONO POR INCENDIOS FORESTALES AUMENTARON 30%



LAS FUERZAS MILITARES REPRESENTARON EL 5,5% DE LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO



AL MENOS 2.456 LOBISTAS DE EMPRESAS DE COMBUSTIBLES FÓSILES PARTICIPARON EN LA COP28

COP28: UN PASO ADELANTE, PERO MUCHO POR HACER

El negacionismo climático también es consecuencia de que se permita a los principales Estados y empresas de combustibles fósiles influir indebidamente en los procesos políticos. Cuando las cumbres sobre el clima se celebran en países con grandes industrias de combustibles fósiles y un espacio cívico cerrado, se impide que la sociedad civil desempeñe su legítimo papel. Y esto no deja de ocurrir.

Mientras el año de temperaturas récord llegaba a su fin, todas las miradas se centraron en la cumbre del clima COP28, acogida por segundo año consecutivo por un Estado con un espacio cívico cerrado. Los Emiratos Árabes Unidos, donde la extracción de petróleo y de gas constituye la piedra angular de la economía, siguieron los pasos de Egipto, anfitrión de la COP27. Y esto volverá a ocurrir en 2024: la COP 29 se celebrará en Azerbaiyán, otro petroestado con un espacio cívico cerrado.

El espacio cívico en las COP es importante porque estas reuniones son puntos de encuentro anuales clave para la incidencia política, en los que representantes de todos los Estados se ven obligados a encontrarse alrededor de una mesa y enfrentarse a la realidad del cambio climático. La sociedad civil tiene que estar presente y debe ser capaz de hablar y exigir a los Estados que rindan cuentas sobre los acuerdos que firmaron.

Lo que hizo que la COP28 fuera más importante que la mayoría de sus predecesoras fue que se concentró en un **balance global**, la primera evaluación exhaustiva de la situación desde el Acuerdo de París de 2015. Esto dejó claro lo lejos que están los esfuerzos de llegar a los objetivos deseados: la implementación de los compromisos actuales llevaría a un aumento de las temperaturas de entre 2,4 y 2,6 grados. Esto expondría a **muchos más millones de personas** a catástrofes y podría llegar al **punto** de desencadenar un cambio climático galopante. No hay forma de evitar esto sin reducir drástica y rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, y no hay forma de lograrlo sin mantener los combustibles fósiles bajo tierra.

Como resultado directo de la incidencia de la sociedad civil, los Estados presentes en la COP28 se vieron finalmente obligados a reconocer lo evidente. Por increíble que parezca, casi tres décadas después de que en 1992 se aprobara la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la declaración final de la cumbre reconoció por primera vez la necesidad de abandonar los combustibles fósiles.

> La mayor influencia de la sociedad civil se produjo en el establecimiento de la agenda. La eliminación progresiva de los combustibles fósiles nunca fue un punto oficial del orden del día de esta COP, pero conseguimos que se convirtiera en el tema número uno del balance global y en el principal indicador de éxito.
> La sociedad civil desempeñó un papel crucial a la hora de definir la agenda de la COP28. Logró que los gobiernos del mundo centraran su atención en la necesidad urgente de eliminar progresivamente los combustibles fósiles, con el fin de mantenerse dentro del límite de calentamiento de 1,5 grados establecido en el Acuerdo de París. Este desplazamiento de la atención, sostenido durante casi dos semanas, supuso un logro sin precedentes durante una cumbre de la ONU sobre el clima. Ya no hay vuelta atrás. A pesar de su lenguaje débil, la declaración anunció claramente el fin de la era de los combustibles fósiles.
>
> 
> **KAISA KOSONEN**
> Greenpeace Nórdica

Un acuerdo plagado de matices

Como siempre, el diablo estaba en los detalles. Las decisiones en las COP se toman por consenso, no por votación: esto tiende a producir acuerdos del mínimo común denominador, ya que cualquier Estado puede insistir en suavizar el lenguaje. Los países petroleros, como Arabia Saudí, se han aprovechado mucho de ello a lo largo de los años. Esto significa que, aunque la defensa de la sociedad civil dio sus frutos y 130 de los 198 Estados de la CMNUCC respaldaron el compromiso de "eliminar gradualmente" los combustibles fósiles, el **texto final**, más débil, sólo se compromete a "ir retrayéndolos".

El acuerdo terminó pareciéndose a una lista de supermercado, en la que el pedido que los Estados "contribuyeran" a la transición hacia el abandono de los combustibles fósiles no era más que uno de los ocho métodos posibles para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La Alianza de Pequeños Estados Insulares, muchos de los cuales experimentan el nivel del mar como una amenaza existencial, denunció una "**letanía de lagunas**".

Un aspecto positivo del acuerdo es que se compromete a "acelerar la acción en esta década crítica": para marcar una gran diferencia, se deben reducir las emisiones desde ya. Pero la referencia a los combustibles fósiles se centra únicamente en su papel en los "sistemas energéticos", una formulación que parece dejar margen para que sigan siendo utilizados en cualquier otra actividad, incluida la agricultura, la industria y el transporte, así como la defensa. Las emisiones militares, muy significativas dada la cantidad de conflictos actuales, quedan exentas del Acuerdo de París.

Y luego está la referencia del acuerdo al potencial de captura y almacenamiento de carbono, una iniciativa impulsada por la élite del petróleo y el gas, con los Emiratos Árabes Unidos a la cabeza, a pesar de que según los científicos esta tecnología no está probada, probablemente no se pueda ampliar a la escala necesaria y potencialmente sólo sea parcialmente efectiva. No es más que una fantasía para permitir la continuidad de la extracción.

Hay muchos más problemas. Aunque el acuerdo se compromete a triplicar la capacidad de las energías renovables y a duplicar la eficiencia energética, no quedan definidos detalles cruciales. Hay una referencia a los "combustibles de transición" que podría utilizarse para justificar la expansión de la extracción de gas. El texto sobre el carbón, el combustible fósil más sucio, no va más allá de lo ya acordado en la **COP26**. En cuanto al enorme problema de las subvenciones a los combustibles fósiles, la redacción está plagada de matices: al hacer referencia a subvenciones "ineficientes", otorga un gran margen de interpretación a los Estados.



Foto de Giuseppe Cacace/AFP vía Getty Images.

Activistas climáticos exigen el fin de los subsidios a los combustibles fósiles en la COP28 el 12 de diciembre de 2023.

Un proceso defectuoso

En última instancia, el texto, a pesar de algunos avances, revela los límites de las COP. Por sí solas estas conferencias no acabarán con la feroz resistencia de los petroestados y de las corporaciones de combustibles fósiles, decididos a continuar con su letal y lucrativo negocio cuanto más tiempo puedan.

El poder de la industria de los combustibles fósiles se reflejó en la presencia de **al menos 2.456 lobistas de este sector** en la COP28, incluidos muchos que formaban parte de delegaciones estatales. Esta cifra multiplicó casi por cuatro el récord anterior, alcanzado justo un año antes, en la COP27. Está claro que las temperaturas globales no son las únicas que están batiendo récords. Su desesperación por obstruir el cambio se puso de manifiesto en las **cartas filtradas** del cártel de la OPEP, en las que se instaba a sus miembros a rechazar cualquier texto que se enfocara en los combustibles fósiles.

> Representantes de empresas de petróleo y gas participan extraoficialmente en las negociaciones sobre el clima. No tienen título, no aparecen como tales en la lista de asistentes, pero sabemos que están ahí porque los hemos visto aprovechar momentos como la COP y la pre-COP para solicitar reuniones informales con jefes de delegaciones o con el secretariado de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.



MARÍA REYES
Futuros Indígenas, México

Una vez concluida la cumbre, continúan los planes de **expansión masiva** de la extracción de combustibles fósiles. Al frente de estos planes se encuentra Adnoc, la empresa estatal de petróleo y gas de los Emiratos Árabes Unidos. Al finalizar la cumbre, el líder de la COP28, Sultan al-Jaber, volvió a su trabajo diario como jefe de Adnoc, **y confirmó** el aumento de las inversiones de la corporación en la extracción de petróleo y gas.

Aunque algunos alabaron a al-Jaber por sus esfuerzos diplomáticos, muchos miembros de la sociedad civil consideraron que poner a un jefe petrolero al frente de la cumbre fue una burla a la crisis climática. Antes de la reunión, al-Jaber **enfrentó acusaciones** de que los Emiratos Árabes Unidos planeaban utilizar la cumbre para cerrar acuerdos petroleros, y durante la COP28 pareció dejar caer la máscara del lavado verde al permitirse negar la ciencia climática.

Cuestión de dinero

Antes de la cumbre, los Estados llegaron a un acuerdo sobre el fondo para compensar a los países del sur global por las pérdidas y daños causados por el cambio climático, que había sido acordado en principio en la COP27. La sociedad civil viene presionando hace años para lograr esto, pero le preocupa el hecho de que el fondo, al menos en sus

primeros años, vaya a ser gestionado por el Banco Mundial. La sociedad civil se había opuesto a ello, entre otras cosas porque el Banco Mundial tiene un historial de apoyo a iniciativas destructivas para el medio ambiente con escasa protección de los derechos humanos. La sociedad civil también ha señalado el elevado precio que el Banco Mundial cobra por la gestión de los fondos -en uno de ellos llega al **17%**-, lo que supone una gran cantidad dinero que debería estar destinado a los países del sur global.

El mayor problema es que las contribuciones al fondo son voluntarias. Con un total de **USD 662 millones** hasta la fecha, está muy lejos de los miles de millones que se necesitan.

Más allá de esto, una de las principales demandas de la sociedad civil y de los Estados del sur global de cara a la COP28 había sido una mayor financiación para la adaptación, con el fin de ayudar a los países a hacer frente a las realidades del cambio climático. Sin embargo, no se logró ningún avance en este frente.

La hipocresía de los Estados del norte global perpetúa una gran injusticia. Su riqueza actual es el resultado de una temprana industrialización, en muchos casos apuntalada por la explotación colonial, y son los principales contribuyentes a la acumulación de gases de efecto invernadero. Mientras que muchos de ellos siguen sin cumplir sus objetivos de reducción de emisiones y han retrasado sus planes de eliminación, en la COP28 presionaron sobre todo a favor de la eliminación de los combustibles fósiles. Esperan que los países del sur global se salteen una etapa de desarrollo y pasen inmediatamente a las energías renovables, pero sin asegurarse de que dispongan de financiación suficiente para hacerlo. Los niveles actuales de financiación para el clima están **muy sobreestimados** y gran parte de lo que se ofrece es en forma de préstamos que se suman a los ya elevados niveles de deuda.

Durante mucho tiempo ha habido un déficit particular en la financiación de la adaptación, pese a que se espera que muchos Estados del sur global con emisiones de gases de efecto invernadero históricamente



Foto de Karim Sahib/AFP vía Getty Images.

Activistas de la red del Foro Asia-Pacífico sobre Mujeres, Derecho y Desarrollo protestan durante la COP28 el 4 de diciembre de 2023.

bajas se adapten rápidamente a un problema que en gran medida no han causado, pero que les afecta de manera desproporcionada.

El sistema está quebrado, y eso no cambió con la COP28. El texto del acuerdo reconoce que se necesitan billones de dólares, pero no dice de dónde saldrán. Insta a los Estados del norte global a elaborar un informe sobre sus avances hacia el objetivo de duplicar la financiación de la adaptación para 2025, pero señala que, incluso si se consiguiera, se necesitaría mucho más.

La negación del rol de la sociedad civil

Los procesos de la COP28 también reflejaron la creciente tendencia a la represión del activismo climático.

Muchas de las referencias del borrador de acuerdo de la COP28 a los derechos humanos y la justicia **nunca** llegaron a incluirse en la declaración final. El texto no contiene ninguna mención a los defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra. Está claro que el anfitrión de la cumbre no tenía ningún interés en impulsar un fuerte reconocimiento de los derechos humanos. Emiratos Árabes Unidos criminaliza el disenso y detiene sistemáticamente a activistas. Las autoridades cometen **torturas** generalizadas en cárceles y centros de detención y mantienen actualmente **en prisión** al menos a 58 presos de conciencia a pesar de haber cumplido sus condenas. Descaradamente, durante la COP28, iniciaron un **juicio masivo** contra más de 80 personas bajo acusaciones falsas de terrorismo.

El gobierno trasladó a la cumbre su hostilidad hacia la sociedad civil, al igual que Egipto durante la COP27. Los organizadores de la cumbre se aseguraron de que los espacios para eventos de la sociedad civil estuvieran aislados del resto de la reunión. **Impusieron** límites estrictos a las protestas, obligando a quienes las planeaban a superar tremendos obstáculos bajo amenaza de expulsión en caso de incumplimiento. A causa del calor no se permitieron protestas durante la hora **del almuerzo**, que suele ser una oportunidad clave para interactuar con las delegaciones. Se **prohibieron** las banderas nacionales en las protestas, lo que impidió que los asistentes mostraran su solidaridad con Palestina. Se utilizó un amplio sistema de videovigilancia en la sede. La sociedad civil no organizó ninguna protesta fuera de la única zona de protesta oficial administrada por la ONU, lo que es muy inusual y muestra la certeza de los asistentes en relación con las represalias que enfrentarían.

Muchos miembros de la sociedad civil consideran que fue la COP más restrictiva de la historia. E, increíblemente, esta situación se repetirá cuando Azerbaiyán acoja la COP29 el próximo mes de noviembre. En 2023, respaldado por su enorme riqueza petrolífera, Azerbaiyán triunfó decisivamente en su largo conflicto con Armenia por el disputado territorio de Nagorno-Karabaj mediante la migración forzosa y la limpieza étnica ▶ VÉASE CAPÍTULO. A ello siguió otra oleada de **restricciones internas** contra la sociedad civil y los medios de comunicación. Azerbaiyán lleva mucho tiempo intentando mejorar su reputación internacional acogiendo eventos internacionales de prestigio. La COP29 amenaza con ser uno más de ellos.

Necesidad de reforma

Aunque inadecuadas e insuficientes, las COP siguen siendo la única oportunidad anual para que todos los Estados se sienten a la mesa y negocien sobre el cambio climático. Deben ser mejoradas.

Un defecto evidente es el requisito de trabajar por consenso. Las resoluciones de la Asamblea General de la ONU pueden aprobarse por mayoría, y la misma norma debería aplicarse a las COP para que Estados regresivos como Irán, Rusia y Arabia Saudí no puedan seguir forzando acuerdos del mínimo común denominador.

Asimismo, se debe mantener fuera de las COP a los grupos de presión de los combustibles fósiles y, en su lugar, dar acceso privilegiado a quienes están en las primeras líneas de los impactos del cambio climático. Como mínimo, debe haber mucha más claridad sobre quién participa y qué intereses representa.

Las COP ya no deberían celebrarse en los petroestados, sino en Estados que muestren liderazgo climático. Tampoco deberían celebrarse en Estados con un espacio cívico fuertemente restringido - una **característica** de muchos países con industrias extractivas importantes - para que a la sociedad civil no le sea negada la posibilidad de movilizarse plenamente. Los anfitriones de la COP deberían comprometerse a respetar los derechos humanos, permitir la participación plena y diversa de la sociedad civil nacional e internacional, y rendir cuentas si no lo hacen.

No se alcanzarán acuerdos ambiciosos a menos que la sociedad civil tenga plena libertad para actuar como la conciencia del mundo y reclamar la acción climática que la humanidad necesita.

LEER MÁS:

- COP28: OTRO PASO MÁS
- COP28: OTRA CUMBRE CLIMÁTICA EN UN ESPACIO CÍVICO CERRADO

EL ESPACIO CÍVICO BAJO PRESIÓN

La sociedad civil no solo actúa en las COP, sino que está activa en todos los niveles. Se encuentra en primera línea de la resistencia contra la extracción, en protestas y acciones directas y en la defensa nacional y transnacional. El negacionismo climático, que toma la forma de represión del espacio cívico, está surgiendo como reacción a todas estas acciones.

El activismo está siendo amenazado a causa del foco de su trabajo. Está siendo penalizado por defender el medio ambiente y exigir medidas contra el cambio climático, porque al hacerlo antagoniza a actores económicos y políticos poderosos.

En contextos de espacio cívico muy restringido, la represión está muy arraigada. Pero incluso en países donde el espacio cívico se respeta ampliamente y donde los líderes políticos y empresariales reconocen públicamente la necesidad de una transición, los activistas climáticos sufren cada vez más reacciones violentas procedentes del Estado, de actores políticos y de empresas. Los políticos convencionales y el sector privado defienden teóricamente la acción climática, pero sus palabras a menudo se ven traicionadas por la realidad restrictiva. Esta tendencia creciente resulta imposible de ignorar en 2023.

El cambio climático es una realidad colectiva, pero la experiencia de la represión es individual. La represión de los activistas por parte de Estados, políticos y empresas tiene como objetivo elevar los costos del activismo, disuadir a la gente de alzar la voz y dificultar las protestas multitudinarias. Entre las tácticas habituales de restricción se encuentran el acoso, las amenazas, las agresiones físicas -una táctica especialmente utilizada contra los activistas indígenas-, el vilipendio público, la criminalización de las tácticas de protesta y la represión violenta de las protestas.

Reacciones violentas en el norte global

Una de las tendencias actuales más alarmantes es la creciente criminalización de los activistas climáticos en los países del norte global que albergan vibrantes movimientos de protesta.

Esta tendencia se fue intensificando a medida que los Estados fueron dando marcha atrás en sus compromisos de reducción del uso de combustibles fósiles en respuesta a las repercusiones en los costos y suministros energéticos de la guerra de Rusia contra Ucrania. Algunos, como Alemania, recurrieron al carbón, mientras que otros como el Reino Unido y Estados Unidos, que cuentan con reservas de petróleo y gas, decidieron aumentar la extracción. Los activistas climáticos están siendo silenciados por señalar la contradicción entre las declaraciones y la práctica.

Además, en muchos países del norte global los políticos populistas y nacionalistas de derecha se están volviendo cada vez más influyentes ▶ **VÉASE CAPÍTULO**. Estos políticos vilipendian a los defensores del clima del mismo modo en que demonizan a los activistas por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+, acusándoles de formar parte de una élite oscura implicada en una **conspiración global**. Difunden desinformación y afirman que las políticas climáticas se desarrollan con el objetivo de controlar al público. Las restricciones que los Estados democráticos imponen a los activistas climáticos pueden llevar a legitimar los ataques extremistas.

Los activistas climáticos se enfrentan a restricciones cada vez mayores en Alemania. En esta potencia económica europea que está sufriendo dificultades, un partido de extrema derecha, Alternativa para Alemania, está subiendo en las encuestas. Por causa de las restricciones gubernamentales impuestas a los activistas climáticos, en 2023 la calificación de su espacio cívico **pasó** de "abierto" a "estrecho" según el CIVICUS Monitor. Este deterioro indica un claro retroceso en la tradición ampliamente respetuosa de las libertades de protesta que se venía desarrollando hace décadas en Alemania.

El movimiento alemán Última Generación utiliza la acción directa, como la interrupción del tráfico mediante bloqueos de calles, para generar conciencia e iniciar conversaciones. Ha reunido a un número cada vez mayor de personas para exigir medidas contra el cambio climático y hacer recomendaciones prácticas, tales como propuestas para reducir el desperdicio de alimentos y hacer más asequible el transporte público. Sus acciones han suscitado debates constructivos con las administraciones locales.

Pero la respuesta a escala nacional ha sido de criminalización, incluso mediante leyes destinadas a combatir la delincuencia organizada. En 2023, los activistas de Última Generación sufrieron redadas en sus domicilios, confiscaciones de ordenadores portátiles y teléfonos y congelaciones de cuentas bancarias.

La actuación policial violenta en las protestas también es un



Foto de Daniel Leal/AFP vía Getty Images.

Un activista de Just Stop Oil yace esposado en el suelo tras ser detenido en Parliament Square en Londres, Reino Unido, el 30 de octubre de 2023.

problema. En enero, la policía alemana desalojó **por medios violentos** a activistas que unos terrenos para intentar impedir la ampliación de una mina de carbón, y luego nuevamente a quienes protestaron contra la represión policial. Sin embargo, hay indicios de que este enfoque de mano dura está siendo contraproducente y contribuyendo a aumentar el apoyo al movimiento.

> La criminalización de protestas pacíficas organizadas por personas que no pretenden hacer daño a nadie, sino proteger vidas, suscita una solidaridad instantánea. Miles de personas se han unido a las marchas de protesta de Última Generación. Los fondos congelados se han repuesto casi por completo gracias a las donaciones que llegan a raudales. La gente se pone en contacto con nosotros para preguntarnos cómo pueden contribuir al activismo climático.



ZOE RUGE
Última Generación, Alemania

Última Generación también está activa en Italia, donde usa tácticas de desobediencia civil no violenta para exigir al gobierno que deje de financiar los combustibles fósiles, reduzca las emisiones, aumente el uso de energías renovables y mejore la eficiencia energética. Pero el **gobierno italiano de extrema** derecha no está dispuesto a escuchar y criminaliza a los manifestantes.

> El gobierno italiano criminaliza a los activistas climáticos porque así puede seguir eludiendo sus responsabilidades en relación con el bienestar de sus ciudadanos. Ha introducido una nueva ley específica para castigar las acciones climáticas que dañen monumentos o lugares culturales, con multas y posibles penas de cárcel para quienes sean sorprendidos en el acto. También recurre a acusaciones de "conspiración criminal", un cargo utilizado históricamente contra la mafia.



GABRIELLA ABBATE
Última Generación, Italia

La situación podría empeorar en Holanda, que dio un giro a la derecha en las **elecciones generales de noviembre**. Las negociaciones para formar gobierno siguen en curso, pero el populista de derecha Geert Wilders, quien promete acabar con la normativa medioambiental, retirarse de los acuerdos internacionales y aumentar la extracción de petróleo y gas, ha obtenido el mayor número de escaños.

Pero mientras tanto, una vociferante campaña de activistas climáticos exige el fin de las subvenciones gubernamentales a los combustibles fósiles, que **ascienden a** unos USD 39.900 millones al año. El gobierno neerlandés se comprometió a acabar con ellas en 2020, pero no lo ha hecho. Los activistas han comunicado esta exigencia mediante acciones directas no violentas, bloqueando repetidamente una de las principales autopistas de La Haya, centro administrativo del país. Las protestas aumentaron en 2023, y unas 25.000 personas participaron en una marcha el 9 de septiembre. La policía desplegó cañones de agua y **detuvo** a 2.400 personas.

Al igual que en Alemania, los intentos de limitar las protestas resultaron contraproducentes y generaron mayores números de asistencia.

> El derecho a la protesta es un derecho fundamental que debe protegerse, respetarse y cumplirse. Las autoridades deben tomar como punto de partida el carácter pacífico de las manifestaciones y facilitarlas en la medida de lo posible. Las restricciones deben ser la excepción y no la regla.



SIEGER SLOOT Extinction Rebellion, Países Bajos
MARJOLEIN KUIJERS Amnistía Internacional, Países Bajos

En el Reino Unido, los grupos de acción directa también han intentado mantener la atención sobre el cambio climático mediante **acciones directas no violentas** y desobediencia civil. El gobierno ha reaccionado **aprobando** leyes restrictivas que criminalizan las protestas disruptivas.

En enero de 2024, el relator especial de la ONU sobre los defensores del medio ambiente, Michael Forst, **condenó** las "nuevas leyes regresivas" del gobierno. Se ha encarcelado a una gran cantidad de

activistas climáticos por acciones pacíficas que, hasta hace poco, no habrían merecido penas de prisión, y se les ha prohibido citar la crisis climática como justificación de sus acciones ante los tribunales. Aquellos que lo hicieron fueron **declarado**s en desacato.

Entre los criminalizados se encuentran activistas de Just Stop Oil, uno de los grupos de acción directa más destacados del Reino Unido, que exige que el gobierno deje de autorizar proyectos de combustibles fósiles.

> Me detuvieron el 19 de julio por marchar a paso lento en la plaza del Parlamento. Sólo estuve en la calle unos segundos antes de que me tiraran de los brazos por la espalda y esposaran. Estuve detenido en una celda durante 13 horas. El sistema judicial británico está permitiendo que grandes empresas contaminantes, como el gigante petrolero Valero, compren la ley en forma de mandamientos judiciales. Soy una de las muchas personas que enfrentan una espiral de costos y una posible bancarrota porque se están pagando mandamientos judiciales civiles para impedir protestas pacíficas en terminales petrolíferas y carreteras. Muchos de nosotros ya hemos pasado tiempo en la cárcel y pagado multas en tribunales penales, y ahora los tribunales civiles buscan condenarnos nuevamente y hacernos pagar más gastos legales.
>
> 
> **MITCH ROSE**
> Just Stop Oil, Reino Unido

La criminalización y el vilipendio político del activismo climático se ha producido al mismo tiempo que el gobierno **anunció** que concedería más de 100 nuevas licencias de perforación de petróleo y de gas. Los activistas señalan que el partido gobernante ha **recibido cuantiosas donaciones** de parte de intereses de los combustibles fósiles, y las leyes antiprotesta adoptadas llevan el sello de un **centro de investigación de derecha** que también recibe tales donaciones.

Varios estados australianos también han aprobado leyes antiprotesta para criminalizar y encarcelar a los activistas climáticos. Entre ellos se cuenta Nueva Gales del Sur, donde se encuentra la activista Deanna "Violet" Coco, del grupo Fireproof Australia. Su sentencia fue anulada en apelación en marzo, pero se enfrentaba a 15 meses de cárcel por bloquear un carril de tráfico en el puente del puerto de Sídney. Otras personas **han sido encarceladas** en virtud de esta ley. La noticia positiva es que en diciembre algunas partes de la ley fueron **declaradas** inconstitucionales en respuesta a una demanda de la sociedad civil.

> Los daños causados por la crisis climática superan de lejos los inconvenientes que conlleva bloquear un carril por 25 minutos. El derecho a la protesta pacífica es fundamental para la democracia, y muchas de las libertades y derechos que apreciamos se ganaron y defendieron mediante protestas pacífica.
>
> 
> **NELLI STEVENSON**
> Greenpeace Australia Pacífico

En Estados Unidos, las autoridades respondieron violentamente a las protestas en defensa de las tierras boscosas de Atlanta que buscaban impedir la construcción de una enorme instalación policial bautizada "Cop City". En enero, la policía mató a tiros al activista indígena Manuel Páez Terán, conocido como "Tortuguita". Tortuguita había acampado en el bosque para protestar contra el proyecto, que, además de tener repercusiones medioambientales, supone una ampliación de la presencia policial en una zona predominantemente negra y de bajos ingresos. En octubre, el fiscal de distrito del estado **anunció** que no se presentarían cargos contra los policías responsables. Simultáneamente los manifestantes han **enfrentado** cargos de terrorismo y blanqueo de dinero. En noviembre, se utilizaron **gases lacrimógenos** contra periodistas que cubrían una marcha de Stop Cop City en Atlanta.

LEER MÁS:

- AUSTRALIA CONTINÚA SILENCIANDO LA ALARMA CLIMÁTICA EN
- PAÍSES BAJOS: LA ACCIÓN CLIMÁTICA ENFRENTA REACCIONES VIOLENTAS EN
- EL REINO UNIDO DA MARCHA ATRÁS EN SUS COMPROMISOS CLIMÁTICOS EN

Peligro mortal en América Latina

Aunque la dirección que está tomando la situación en el norte global es alarmante, los mayores peligros siguen acechando a quienes defienden los derechos ambientales, indígenas y territoriales en los países del sur global, bendecidos con abundantes recursos naturales y maldecidos por intereses rapaces decididos a saquearlos.

Los activistas llevan mucho tiempo en primera línea de la resistencia contra la extracción de combustibles fósiles y los proyectos que causan daños climáticos y ambientales, y desde hace tiempo son blanco de una represión mortífera. Son atacados por agresores independientemente de que se definan como activistas climáticos o como defensores del medio ambiente local y de los derechos de las comunidades. De cualquier modo, se enfrentan a poderosos intereses económicos y políticos, a menudo estrechamente vinculados por redes corruptas, que apoyan la explotación y la extracción. La represión violenta de los defensores del medio ambiente, de la tierra y de los derechos indígenas debe entenderse como parte del modelo global de negacionismo climático mediante la restricción del espacio cívico.

Los defensores de los derechos indígenas, por ejemplo, suelen interponerse en el camino de poderosas fuerzas estatales y del sector privado que quieren explotar la tierra. Cuando se atacan los derechos indígenas, el clima también sufre. En cambio, cuando los derechos de los pueblos indígenas y su libertad para gestionar sus territorios son reconocidos, el clima se beneficia. Las zonas mejor conservadas de la selva amazónica son las reconocidas y protegidas legalmente como tierras indígenas. En estas se limita la deforestación, una de las principales fuentes de emisiones de dióxido de carbono.

Según **Global Witness**, en todo el mundo casi 2.000 personas defensoras de la tierra y del medio ambiente fueron asesinadas como consecuencia de su trabajo entre 2012 y 2022: una cada dos días. Las personas indígenas representan el 34% de las muertes, a pesar de que constituyen apenas alrededor del 5% de la población mundial.

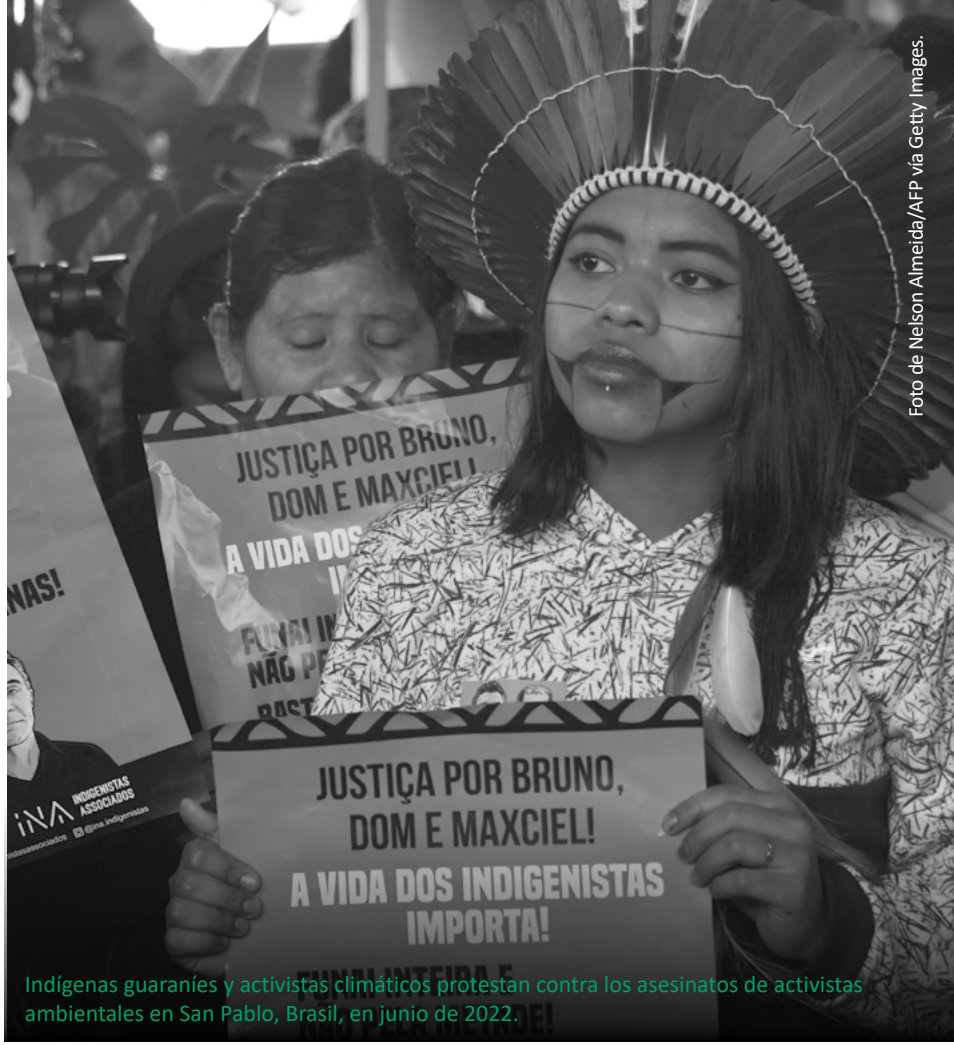


Foto de Nelson Almeida/AFP vía Getty Images.

Indígenas guaraníes y activistas climáticos protestan contra los asesinatos de activistas ambientales en San Pablo, Brasil, en junio de 2022.

América Latina es la región más letal: en 2022, último año completo del que se dispone de información, dio cuenta del 88% de los homicidios. Y esto aún puede empeorar: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos **informó** que, entre enero y abril de 2023, al menos 33 defensores de los derechos humanos fueron asesinados en la región, la mayoría de ellos indígenas, ecologistas y defensores de los derechos, frente a 27 en el mismo periodo de 2022.

En Brasil, país que alberga la mayor parte de la selva amazónica, la deforestación aumentó drásticamente y la violencia y las amenazas

contra los pueblos indígenas se multiplicaron durante los cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro, presidente de extrema derecha negacionista del cambio climático. Brasil fue testigo de **34 asesinatos** en 2022, y de al menos **ocho** en los cuatro primeros meses de 2023, tras la salida de Bolsonaro.

El gobierno progresista que **llegó al poder** en enero ha restaurado y reforzado las instituciones que protegen los derechos de los pueblos indígenas, y ha expulsado a miles de mineros que operaban ilegalmente en zonas indígenas. El ritmo de deforestación ha disminuido drásticamente.

Sin embargo, hay poderosos intereses económicos, bien representados políticamente, que están reaccionando. El Tribunal Supremo de Brasil dio un paso adelante al fallar en septiembre en contra de un principio que limitaba la demarcación y titulación a las tierras indígenas que estuvieran ocupadas en una determinada fecha concreta -una norma que negaba la realidad de los desalojos del pasado. Pero los miembros del Congreso, muchos de ellos vinculados al agronegocio, respondieron aprobando una ley que desafiaba la sentencia del tribunal. El presidente Lula da Silva la vetó parcialmente, pero el Congreso anuló el veto y la nueva ley restrictiva **entró en vigor** en diciembre.

En Ecuador, otro país amazónico, la sociedad civil tuvo cierto éxito en 2023 cuando la población votó en **dos referendos** para detener dos proyectos extractivos: la explotación petrolera en el Parque Nacional Yasuní, un importante territorio indígena, y la minería metálica en el Chocó andino.

Se trató de un resultado histórico, ya que se dice que Yasuní es el primer caso del mundo en que la ciudadanía votó a favor de mantener los combustibles fósiles bajo tierra. Fue un golpe duro para las industrias extractivas, pero queda por verse si se respetarán los deseos de la ciudadanía, dado que sucesivos gobiernos ecuatorianos han abrazado el extractivismo.

La participación de los pueblos indígenas en la toma de decisiones sobre conservación y desarrollo en Ecuador sigue siendo insuficiente e inadecuada. En junio, grupos indígenas y ecologistas presentaron una demanda ante la Corte Constitucional por un **decreto** presidencial aprobado el mes anterior que modificaba las normas sobre consulta medioambiental, facilitando así la concesión de licencias mineras. Al mes siguiente, en una protesta contra este decreto, la policía **disparó gases lacrimógenos** y piedras contra los manifestantes.

En Ecuador, como en otros lugares, la falta de reconocimiento de los derechos territoriales indígenas sigue habilitando la minería, la extracción de petróleo y la deforestación, que destruyen los ecosistemas de los que dependen las personas. La resistencia es peligrosa y conlleva amenazas, acoso, agresiones físicas y violencia letal.

> Desde hace tiempo vivimos en conflicto con una empresa petrolera que invadió nuestro territorio. Experimentamos amenazas y hostigamiento tanto de la empresa como el Estado. Cada día son más nuestros líderes y activistas sociales amenazados. Muchos han sido secuestrados y algunos han sido asesinados. Pero nada de esto nos silencia ni nos detiene, ya que luchamos para salvar nuestros territorios, el espacio de nuestra vida.
>
> 
> **FAUSTO DANIEL SANTI GUALINA**
> pueblo originario de Sarayaku de la Amazonia ecuatoriana

La violencia también es frecuente en varios países centroamericanos. Este año en Honduras, dos activistas por el derecho a la tierra **aparecieron muertos** en el río Gama. Otros dos, Jairo Bonilla y Aly Domínguez, fueron **asesinados a tiros** por asaltantes no identificados. Formaban parte de la comunidad de Guapinol, cuyo pueblo ha sido criminalizado, atacado y hostigado por resistirse a un proyecto minero contaminante. La población afroindígena garífuna también denuncia la violencia sistemática.

> Hemos experimentado represalias por nuestro trabajo, las cuales han incluido amenazas de muerte, intentos de secuestro y procesos de criminalización. Durante 2023 contabilizamos 125 ataques contra la organización y sus miembros. En agosto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares en favor de 11 de nuestros miembros, pero han pasado más de cinco meses y el gobierno todavía no ha implementado ninguna medida en cumplimiento de esas medidas cautelares.
>
> 
> **CHRISTOPHER CASTILLO**
> Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras

En El Salvador, el **presidente populista** Nayib Bukele está dirigiendo un ataque frontal contra el disenso en virtud de los amplios poderes que le concede el estado de excepción. Entre quienes han sido objeto de **intimidación** por parte de las fuerzas de seguridad por protestar contra la construcción en tierras indígenas se cuentan líderes de la comunidad indígena nahua. Otros grupos indígenas se han quejado de la **presencia militar** en sus territorios. En el marco de una campaña generalizada de detenciones masivas, el Estado ha hostigado y detenido arbitrariamente a líderes ambientales. En enero de 2023, las autoridades **detuvieron** a cinco activistas ambientales de la comunidad de Santa Marta por cargos de homicidio inventado tras su resistencia a un proyecto minero. Se produjeron protestas en reclamo de su liberación. Las activistas ambientales mujeres han sido acosadas y estigmatizadas en las redes sociales por personas evidentemente vinculadas al partido de Bukele.

También existen amenazas reales en México. En enero de 2023, dos activistas ambientales, Antonio Díaz Valencia y Ricardo Arturo Lagunes Gasca, **desaparecieron** en el estado de Colima. Habían participado en negociaciones entre la comunidad local y una empresa minera, y sus familias acusaron a la empresa de estar implicada en sus aparentes secuestros. En junio, otros dos activistas ambientales, Álvaro Arvizu y Cuauhtémoc Márquez, fueron **matados** por agresores no identificados en ataques separados que parecían premeditados. Lamentablemente, forman parte de una larga lista de víctimas: al menos 93 defensores del medio ambiente y de los derechos sobre la tierra, la mayoría de ellos pertenecientes a comunidades indígenas, fueron víctimas de desaparición forzada entre diciembre de 2006 y agosto de 2023 - 58 de ellos durante el actual gobierno populista, en el poder desde diciembre de 2018.

EN LIRE PLUS

- BRASIL RETORNA A LA SENDA VERDE
- BRASIL: UN PASO ADELANTE PARA LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS

África: el activismo en las primeras líneas

El activismo enfrenta retos similares en muchos países africanos donde existe una fiebre por extraer combustibles fósiles y explotar zonas boscosas. Las amenazas proceden tanto del Estado como del sector privado, y ambos suelen estar estrechamente relacionados, lo que se traduce en corrupción e impunidad.

A lo largo de 2023, los activistas climáticos y ambientales se enfrentaron a un aluvión de restricciones por oponerse a la construcción del oleoducto de África Oriental (EACOP, por sus siglas en inglés), de 1.500 km de longitud, que conectará Tanzania y Uganda. El activismo considera que el proyecto, impuesto sin consulta real con las comunidades afectadas y en contradicción con los compromisos de reducción de emisiones de ambos gobiernos, tendrá efectos devastadores. La reacción es especialmente feroz porque las empresas estatales de ambos países participan en el proyecto. Los manifestantes han sido **golpeados, detenidos y criminalizados** por la policía.

Pero el activismo local sigue luchando y trabajando con aliados internacionales. Con cierto éxito, ha organizado campañas públicas para



Foto de Badru Katumba/AFP vía Getty Images.

La policía ugandesa detiene a un activista ecologista en una protesta contra el oleoducto de África Oriental en Kampala, Uganda, el 15 de septiembre de 2023.

presionar a potenciales financiadores, elevando los costos reputacionales de la implicación en el proyecto. Hasta ahora, **27 bancos**, entre ellos varios sudafricanos, se han comprometido a no apoyar el proyecto.

> Por el simple intento de hacer que nos escuchen, a nosotros y a las comunidades afectadas, en relación con las consecuencias del oleoducto para el medio ambiente y los derechos humanos, el gobierno nos ha calumniado y nos ha llamado "antigubernamentales" y "antidesarrollo". En consecuencia, hemos sido intimidados, amenazados y detenidos por la policía.
> El tipo de trabajo que realizamos nos ha llevado a chocar con los poderosos intereses de organismos gubernamentales y empresas privadas. EACOP es un proyecto enorme que involucra a poderosas fuerzas estatales y privadas, por lo que enfrentamos muchas restricciones procedentes de ambas.



IREEN TWONGIRWE
Movimiento de Mujeres por una Economía Verde, Uganda

> Cuatro de nuestros activistas fueron **detenidos** y acusados de "incitar a la violencia", transportados en vehículos policiales y mantenidos en la cárcel toda la noche por haber protestado contra el oleoducto. Los activistas protestaban pacíficamente, pero sus detenciones fueron innecesariamente violentas.
> Tenemos un fondo, mantenido por varios de nuestros miembros, para garantizar la fianza o contratar abogados cada vez que detienen a activistas. Organizamos la representación legal y, en los casos en que existe la posibilidad, exploramos la posibilidad de fianza anticipada. También nos hemos asociado con organizaciones especializadas en formación en materia de seguridad para poder proporcionar herramientas a los activistas que les permitan expresar sus preocupaciones sin poner en peligro su seguridad personal.



ZAKI MAMDOO
Stop EACOP, Uganda

En otros lugares de África, los activistas ambientales han sufrido ataques por interponerse en el camino de los intereses económicos. En los últimos años, varios líderes comunitarios sudafricanos han sido asesinados a tiros. En agosto, el defensor del derecho a la tierra Jomo Keromeng fue **asesinado a tiros** delante de su familia. En enero, el Comité de Crisis de Amadiba, que trata de proteger una zona costera, **recibió información** de un informante sobre un complot para asesinar a dos de sus dirigentes.

El vilipendio desde arriba, que se ha vuelto cada vez más frecuente, favorece la violencia. En un ejemplo reciente, el ministro del gobierno Gwede Mantashe utilizó su discurso en una conferencia sobre petróleo y gas para **acusar a las organizaciones de la sociedad civil** (OSC) de ser agentes extranjeros que buscan frenar el desarrollo.

En Camerún, uno de los países que comparten la cuenca del Congo, la segunda mayor selva tropical del mundo después de la Amazonia, la sociedad civil que trabaja para proteger la selva tropical y oponerse

a la deforestación está siendo amenazada por poderosas empresas privadas y grupos delictivos organizados.

> A pesar de todas las medidas legales vigentes para proteger los bosques cameruneses, la explotación forestal, a menudo llevada a cabo en asociación con empresas privadas, da lugar a numerosos abusos. Esto, en conjunto con redes criminales bien organizadas, suele terminar en graves violaciones de los derechos humanos y, en general, conduce al despojo de las tierras de estos pueblos y comunidades.



ESTELLE EWOULE LOBÉ
Acción para la Protección de los Refugiados Ambientales y los Desplazados Internos en África, Camerún

LEER MÁS:

- LA LUCHA CONTINÚA: RESISTENCIA CONTRA EL OLEODUCTO DE ÁFRICA ORIENTAL EN

Intensificación de la represión en Asia

Varios Estados asiáticos bajo regímenes autoritarios, incluidos regímenes de partido único como los de Camboya y Vietnam, están aplicando agresivamente políticas verticalistas de industrialización y extracción. El activismo climático y ambiental es percibido como una amenaza a sus intereses.

El activismo climático y ambiental solía gozar de relativa libertad en Vietnam, pero eso ha cambiado en los últimos años. En septiembre, la destacada activista por el clima Hòang Thị Minh Hồng fue **condenada a tres años de cárcel** bajo falsas acusaciones de evasión fiscal, una táctica que el régimen suele utilizar para encerrar a los disidentes. Al menos otros siete activistas climáticos y ambientales han sido encarcelados bajo el mismo pretexto.

Algunos de los detenidos habían trabajado anteriormente con el gobierno. Ngo Thi To Nhien, **detenida** en septiembre, trabajó en política energética durante más de 20 años, incluso con el Banco Mundial, y dirige un centro de investigación independiente enfocado en la transición energética. Su detención sugiere que los esfuerzos independientes en política energética ya no son tolerados.

Las organizaciones ambientales y climáticas han ayudado al gobierno a conseguir fondos significativos para proyectos ambientales. Sin embargo, el gobierno ha seguido haciendo hincapié en el desarrollo de la energía del carbón. Esto lo pone en contradicción con sus compromisos internacionales, como los del Acuerdo de París o de la Asociación para una Transición Energética Justa, firmada junto a un grupo de Estados del norte global en 2022. A pesar de haber acordado con sus socios internacionales que involucraría a la sociedad civil en la transición climática, el Estado está encerrando a quienes podrían exponer verdades incómodas.

> Las autoridades se han beneficiado enormemente de las diversas actividades de las asociaciones vietnamitas en los campos del desarrollo y la protección del medio ambiente, así como de las importantes contribuciones de las OSC internacionales que trabajan en Vietnam.
> Pero el gobierno vietnamita detesta quedar mal. Tolera al activismo cuando apoya los programas de desarrollo del gobierno, pero no tienn ninguna tolerancia con las críticas, especialmente en el ámbito internacional, por lo que las silencia por cualquier medio. Para evitar la condena internacional, en lugar de basar sus acusaciones en las leyes de seguridad nacional, el gobierno ha recurrido al viejo pretexto de los cargos por evasión fiscal.



PENELOPE FAULKNER
Penelope Faulkner, Quê Me: Comité de Derechos Humanos de Vietnam

En la vecina Camboya, donde el acaparamiento de tierras por parte de funcionarios del Estado es habitual, el activismo ambiental y por

el derecho a la tierra es atacado por interponerse en el camino de los intereses económicos de una élite estrechamente asociada a la familia gobernante.

Entre los amenazados se encuentra el grupo ecologista dirigido por jóvenes Madre Naturaleza, que el Estado **considera** una organización ilegal. En septiembre, a tres representantes de Madre Naturaleza que cumplían penas de cárcel como consecuencia de su activismo se les **denegó el permiso** para viajar a Suecia a recibir el **Right Livelihood Award**, un premio por su activismo.

Estos problemas no se circunscriben a los Estados unipartidistas. En países con un cierto nivel de competencia democrática, como India y Filipinas, la restricción del activismo climático y ambiental forma parte de los esfuerzos de las élites por consolidar el poder.

Las desapariciones forzadas son un peligro constante para los activistas ambientales de Filipinas. En abril desaparecieron dos activistas de los derechos indígenas, Dexter Capuyan y Gene Roz Jamil "Bazoo" de Jesus, y se sospecha que las fuerzas de seguridad del Estado están implicadas. Sus familias y simpatizantes siguen **reclamando** su regreso. En junio, el gobierno **calificó** de terroristas a cinco líderes y activistas indígenas, lo que le permitió congelar sus cuentas bancarias. En septiembre, dos estudiantes que participaban en protestas ecologistas **fueron secuestrados** y desaparecieron durante casi dos semanas.

En India, el gobierno nacionalista hindú persigue el desarrollo económico a toda costa y, de paso, reprime el disenso. Entre los activistas amenazados se cuenta al movimiento dirigido por jóvenes Fridays for Future.

Las consecuencias pueden ser fatales. Sendhu Munda, activista contra la tala ilegal de árboles, murió detenido en mayo, al parecer tras una paliza de sus captores. Munda era miembro de un comité de protección forestal en el estado de Jharkhand.

Las personas indígenas del estado de Odisha también sufren una **represión** policial que ha incluido secuestros, detenciones arbitrarias, tortura y uso de la fuerza contra manifestantes opuestos a dos proyectos mineros. Los activistas afirman que los proyectos, autorizados por el gobierno nacional tras modificación de una ley de gestión forestal que eliminó los derechos de consulta, desplazarán a más de 200.000 personas de grupos tribales.

No cabe duda de que la represión aumentará en vísperas de las elecciones generales que se celebrarán en la India entre abril y mayo de 2024.

> Ser activista en India da miedo. India es el sexto país más peligroso del mundo para el activismo ambiental. Históricamente, las amenazas y la criminalización se cernían sobre los defensores del medio ambiente que vivían en zonas rurales. Sin embargo, el alcance de estas amenazas ha evolucionado y ahora se extiende también a los activistas urbanos como yo. La marea se ha revertido, y cada vez se nos percibe más como formidables enemigos de la agenda del gobierno.
>
> 
> **DISHA RAVI**
> Viernes por el Futuro India

Incluso en países como Mongolia, que ha experimentado avances recientes en el respeto por el espacio cívico, el activismo ambiental es arriesgado. El gobierno ha intentado silenciar las críticas dirigidas a las explotaciones mineras, y los activistas ambientales **han denunciado** haber sufrido acoso judicial, intimidación, amenazas y violencia procedentes de fuentes estatales y no estatales.

LEER MÁS:

› VIETNAM: OTRA VUELTA DE TUERCA EN

LA VOZ DE ALARMA

El cambio climático se disparó en la agenda global a raíz de la oleada de protestas masivas que se desarrollaron **a partir de 2019**. La rapidez con la que se fijó una nueva agenda demostró el valor de la protesta. Los activistas climáticos siguen utilizando las protestas y la acción directa no violenta para mantener el cambio climático en los titulares.

Recientemente, algunos grupos, como Extinction Rebellion en el Reino Unido, **se han alejado** de las tácticas disruptivas, por temor a que puedan alienar al público al que intentan llegar. Otros, como Just Stop Oil en el mismo país, siguen utilizándolas, pues no ven pruebas de que reduzcan el apoyo a la acción climática. Ciertas maniobras, como la interrupción de acontecimientos deportivos de alto nivel o el ataque a obras de arte famosas -sin causarles daños-, reciben mucha atención en los medios de comunicación, y pueden ser la única manera de que el cambio climático aparezca en primera plana. Y si bien pueden generar reacciones negativas, también pueden llevar a la **legitimación** de acciones más convencionales por la misma causa.

El movimiento por el clima es amplio y ofrece diversas respuestas. Lo importante es que haya solidaridad, un diálogo constructivo sobre las diferencias tácticas y una lógica clara detrás de las intervenciones. El activismo debe renovar sus tácticas a medida que la lucha avanza, ya que el rendimiento va decreciendo a medida que las acciones se vuelven repetitivas, como quizás se haya podido observar con las obras de arte.

La sociedad civil sabe que su repertorio de acción no puede circunscribirse a la protesta, y que debe abarcar todos los medios pacíficos disponibles para impulsar el cambio. Sus métodos incluyen la incidencia y las campañas, los llamamientos a la solidaridad internacional, los litigios y el creciente campo del activismo de los accionistas.



Foto de Jewel Samad/AFP via Getty Images.

Estudiantes en una protesta de Viernes por el Futuro en Nueva Delhi, India, el 25 de septiembre de 2020.

> La sociedad civil desempeña un papel fundamental a la hora de impulsar nuevas leyes, programas, políticas y estrategias sobre cambio climático, obligar a los gobiernos a rendir cuentas del cumplimiento de sus compromisos, detectar la falta de respuestas gubernamentales coordinadas y garantizar que la elaboración de políticas nacionales no olvide a los pobres.



CAROLINE OWASHABA
Acción para el Desarrollo de la Juventud Uganda

Las acciones judiciales de la sociedad civil contra Estados y empresas dieron cada vez más frutos en 2023. En noviembre, el Tribunal de Apelación de Bruselas **impuso** a las autoridades belgas un objetivo vinculante de reducción de emisiones. Ese mismo mes, un tribunal alemán **ordenó** al bierno que adopte inmediatamente un programa de acción para cumplir sus objetivos de emisiones en el ámbito de la construcción y del transporte. En agosto, 16 jóvenes activistas **ganaron un caso** en Montana, Estados Unidos, en el que el tribunal determinó que las políticas del gobierno estatal en apoyo de los combustibles fósiles violaban su derecho a un medio ambiente sano. Hay muchos otros casos judiciales en curso, entre ellos uno iniciado por **seis jóvenes activistas portugueses** contra 32 gobiernos europeos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

> Nuestro caso forma parte de una tendencia más amplia y sienta un importante precedente jurídico que ya se está utilizando hoy en otras jurisdicciones para intentar imponer objetivos climáticos similares. Para que las políticas climáticas tengan alguna posibilidad de ser eficientes, se deben elaborar urgentemente objetivos nacionales de reducción de emisiones. Nuestro caso ya está siendo consultado y referenciado por la sociedad civil de otros países.



SARAH TAK
Caso Climático, Bélgica

El activismo también está utilizando con éxito las juntas generales anuales de las empresas para promover resoluciones sobre el clima. En 2023, importantes financiadores **apoyaron resoluciones** de reducción de emisiones en las juntas generales de algunas de las mayores empresas de petróleo y gas. El activismo también está presionando a las instituciones para que abandonen las inversiones en combustibles fósiles. En septiembre, en respuesta a la incidencia sostenida de sus estudiantes, la Universidad de Nueva York **se comprometió a desinvertir**. En el Reino Unido, el **72%** de las universidades se han comprometido a desinvertir. Y la presión continúa.

ES HORA DE RESPETAR LAS LIBERTADES

No cabe duda de que la represión está minando las energías del movimiento global por el clima. Pero el negacionismo climático a través de la restricción del espacio cívico no puede, en última instancia, frenar la marea. Los gobiernos y las empresas están tomando decisiones a corto plazo, pensando que se ocuparán de la crisis más adelante. Pero no se puede ocultar el problema: en todo el mundo la gente está sufriendo los efectos del cambio climático. Y aunque las corrientes políticas en muchos países son actualmente poco prometedoras, las **encuestas de opinión** en un país tras otro también muestran que la crisis climática se ha convertido en una preocupación importante, sobre todo entre los jóvenes dispuestos a utilizar su voz y su voto.

En muchos países, los actos de represión han sido contraproducentes: generaron simpatía hacia el activismo climático, aumentando el apoyo al movimiento y alimentando nuevas protestas. Incluso en contextos de represión, el movimiento global por el clima sigue creciendo.

El movimiento por el clima debe su resistencia a su capacidad para establecer conexiones entre las distintas facetas del problema y combinar de forma productiva diversas tácticas entrelazadas, que van desde la creación de coaliciones, la producción de conocimientos y el intercambio de información, hasta la incidencia a escala local, nacional e internacional.

> Última Generación integra la **coalición A22**, una red internacional de activistas que emplean la desobediencia civil no violenta. Esta red es una gran fuente de apoyo. Nos ayudamos mutuamente a aumentar la visibilidad de nuestras campañas. Sin duda nos ha ayudado a atraer a más gente a **Non Paghiamo il Fossile** ("No pagamos por los fósiles") y a otras campañas ambientales en Italia como fuera de ella.



GABRIELLA ABBATE
Última Generación, Italia

Pero el movimiento está teniendo que centrarse cada vez más en estrategias defensivas para hacer frente a la represión. Esto implica costos de oportunidad: gran parte de la energía que podría invertirse en impulsar soluciones climáticas creativas se gasta, en cambio, en esquivar las restricciones. Si lo único que puede hacer la sociedad civil es resistirse a la represión, no quedará nadie para mantener la atención sobre la crisis climática. Y eso se hará notar. Sin la presión de la sociedad civil, por ejemplo, la COP28 no se habría visto obligada a enfrentar el problema de los combustibles fósiles.

En última instancia, los Estados y el sector privado deben reconocer el derecho de las personas a utilizar todos los medios pacíficos posibles, incluida la protesta. Es una de las libertades fundamentales garantizadas en los convenios internacionales que han sido suscritos por casi todos los Estados. Hay que entender que las protestas que provocan disrupciones no dejan por ello de ser pacíficas, y hay que tratarlas como tales. Históricamente, las protestas han sido un medio clave para conseguir el reconocimiento de derechos fundamentales.

El pasado diciembre, el nuevo **responsable de derechos humanos** de la ONU, Volker Türk, reconoció el papel de las protestas en el impulso de la acción por el clima, expresando su gratitud a los muchos jóvenes que se han movilizado. **Añadió** que "debemos asegurarnos de que se proteja y salvaguarde su espacio cívico, y no tomar medidas represivas como las que hemos visto en muchas partes del mundo".



Foto de John MacDougall/AFP vía Getty Images.

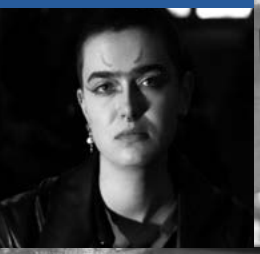
Un activista de Greenpeace en el río Spree sostiene un cartel en el que pide más fondos para la protección del clima durante el debate parlamentario del presupuesto federal de 2024 en Berlín, Alemania, el 30 de enero de 2024.

Los Estados deberían prestarle atención. No se superarán los poderosos intereses que impiden la acción climática a menos que la sociedad civil pueda desempeñar todo el espectro de sus funciones vitales. Un espacio cívico abierto y habilitado es esencial para abordar la crisis climática y dejar el negacionismo climático en el pasado.



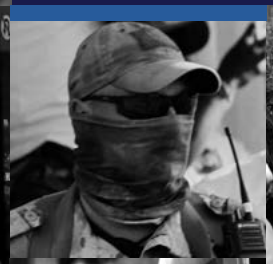
















DEMOCRACIA: TERRITORIO EN DISPUTA



Foto de Juan Carlos Rojas/picture alliance via Getty Images

Participantes de la marcha del Orgullo en Madrid, España, el 1º de julio, piden a los votantes que "voten con orgullo" para proteger sus derechos frente a la extrema derecha.

La democracia está retrocediendo, y los múltiples conflictos y crisis de 2023 agravaron una tendencia regresiva que ya lleva varios años. En varios países de África, Europa y Medio Oriente los conflictos alejaron las perspectivas de cambio democrático ▶VÉASE CAPÍTULO.

En un Sudán asolado por la guerra, las esperanzas de democracia, repetidamente defraudadas desde el derrocamiento del dictador Omar al-Bashir en 2019, retrocedieron aún más. Las elecciones anunciadas para julio de 2023 se vieron imposibilitadas por la guerra civil entre fuerzas militares y milicias estallada el pasado mes de abril.

El asalto sostenido contra Ucrania intensificó la represión del disenso dentro de Rusia. En marzo de 2024 unas elecciones sin competencia darán el sello de aprobación a un nuevo mandato de Vladimir Putin. En Ucrania, por el contrario, la sociedad civil continúa desempeñando vitales roles humanitarios y de rendición de cuentas. Sin embargo, es improbable que las elecciones previstas para 2024 puedan realizarse, ya que rige la ley marcial y hay obvios problemas de seguridad y una enorme cantidad de gente desplazada o viviendo en territorio ocupado.

La ineficacia de los gobiernos civiles para hacer frente a la insurgencia yihadista fue el principal argumento que utilizaron los líderes militares que tomaron o conservaron el poder en África Central y Occidental. Como consecuencia, los golpes de Estado corren el riesgo de normalizarse en algunas regiones, tras décadas en las que parecían cosa del pasado. Un "cinturón de golpes de Estado" se extiende ahora de un lado a otro de África. Ninguno de los Estados que cayeron víctimas de golpes militares en los últimos años volvió al gobierno civil en 2023, y dos más -Gabón y Níger- se sumaron a sus filas. En estos países la gente sigue viviendo en contextos de violencia e inestabilidad.

Una amenaza a la seguridad de otro tipo -la violencia de las pandillas- ha provocado el deslizamiento de El Salvador hacia el autoritarismo populista. La violencia vinculada al narcotráfico podría llevar a Ecuador por un camino similar.

Más de tres décadas de avances globales en materia de democratización se han **esfumado** en los últimos años. En 2023, ningún Estado autoritario se convirtió en democracia, y aunque algunos países lograron mejoras marginales en la calidad de sus democracias



CASI 3 DE CADA 4 PERSONAS VIVEN BAJO REGÍMENES AUTORITARIOS



APENAS EL 2,1% DE LA GENTE VIVE EN PAÍSES CON ESPACIO CÍVICO ABIERTO



HUBO GOLPES MILITARES EN 2 PAÍSES



10 ESTADOS AUTORITARIOS CONCENTRAN EL 80% DE LA REPRESIÓN TRANSNACIONAL DEL ACTIVISMO



MÁS DEL 50% DE LA POBLACIÓN MUNDIAL PODRÁ VOTAR EN 2024

-mejorando el espacio cívico, avanzando en la lucha contra la corrupción o reforzando las instituciones-, muchos más experimentaron retrocesos, a menudo graves. Las tendencias regresivas se dan en todas las regiones del mundo, pero la declinación es especialmente acusada en África Central y Occidental, América Central y Oriente Medio. Escasean las historias de éxito.

Los regímenes autoritarios que experimentaron movimientos de protesta masiva en los últimos años, como Irán, Nicaragua y Venezuela, recuperaron el control y endurecieron la represión. En Estados con regímenes autocráticos de larga data, muchos activistas de la sociedad civil, periodistas y disidentes políticos han buscado en el exilio la seguridad que necesitaban para continuar su labor. Pero a menudo no la han encontrado, ya que los Estados represivos -con China, Turquía, Tayikistán, Egipto y Rusia a la cabeza- han utilizado cada vez más la represión transnacional contra ellos.

Muchas de las numerosas elecciones que tuvieron lugar en 2023 -un anticipo del super año electoral que se avecina, cuando aproximadamente la mitad de la población global tendrá la oportunidad de votar- no estuvieron ni cerca de ser razonablemente libres y justas.

Varios Estados no democráticos de diversa índole -como Camboya, la República Centroafricana, Cuba, Eswatini, Uzbekistán y Zimbabue- celebraron elecciones en las que el poder autocrático nunca estuvo en cuestión. La votación fue ceremonial y no tuvo más propósito que el de añadir un barniz de legitimidad.

En muchos más países con sistemas que combinan rasgos democráticos y autoritarios se celebraron elecciones con resultados menos predeterminados, en las que al menos hubo alguna posibilidad de que el partido gobernante fuera derrotado. Pero la ventaja de estar en el poder se reflejó en el hecho de que el cambio rara vez se materializó, como se vio en Nigeria, Paraguay, Sierra Leona y Turquía. La excepción fue Maldivas, donde hay un historial de rechazo de los presidentes de turno.

Algunos de estos regímenes, en particular El Salvador, experimentaron ulteriores **retrocesos democráticos** mediante la erosión de las libertades y de los frenos y contrapesos institucionales, un camino que suelen recorrer los autoritarios populistas que dicen hablar en nombre del pueblo e insisten en que necesitan concentrar el poder para hacer frente a las crisis.

En contextos en los que los líderes elegidos democráticamente hicieron caso omiso de las normas constitucionales y trataron de anular los frenos y contrapesos, además de ejercer sus funciones habituales de educar a los votantes y velar por la integridad de las elecciones, la sociedad civil salió a las calles a protestar. Esto se vio **a lo largo de 2023** en México.

> La reacción defensiva de la sociedad civil ante la erosión institucional y el deterioro de la división de poderes se observó recientemente en las calles, cuando mucha gente se movilizó en la Ciudad de México y en otras ciudades del país en la llamada “Marcha por la Democracia”. La ciudadanía se movilizó contra los ataques del gobierno contra el Instituto Nacional Electoral, en defensa de la independencia del Poder Judicial y de los órganos autónomos, y contra la incidencia indebida del presidente en la competencia electoral y sus actitudes polarizantes.



CARLOS G GUERRERO OROZCO
Derechos Humanos y Litigio Estratégico Mexicano

En Europa y las Américas se produjeron resultados preocupantes en varias elecciones libres y competitivas incluso en países con una larga tradición de respeto de los principios democráticos y las libertades cívicas fundamentales. Ante la posibilidad real de elegir, la ciudadanía a menudo rechazó a los partidos y políticos en el poder. Expresó su decepción con lo que la democracia ha tenido para ofrecerle. En una época de alta inflación, estuvo dispuesta a aceptar ideas que se presentaban como nuevas, radicales y antielitistas.

Los empresarios políticos de extrema derecha han demostrado ser expertos en manipular ansiedades y vulnerabilidades. En 2023 intensificaron el uso de los inmigrantes como chivos expiatorios y reaccionaron con fuerza ante la creciente visibilidad de las reivindicaciones de derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+. Populistas de derecha llegaron al poder en Argentina, quedaron primeros en las elecciones de Holanda y Suiza y entraron al gobierno en Finlandia. Pero la amenaza regresiva no logró abrirse paso en España, mientras que en Polonia el rechazo de muchos votantes al oficialismo llevó a la sustitución del partido nacionalista de derecha en el poder por una amplia coalición progresista.

Pero en muchos casos, la extrema derecha logró ganar incluso cuando perdió, ya que sus ideas fueron adoptadas cada vez más por partidos del mainstream, ostensiblemente para mantenerla a raya. Se espera que consiga grandes avances en las elecciones al Parlamento Europeo de junio de 2024.

Ha comenzado el que será el mayor ciclo electoral en décadas. Las elecciones de 2024 ya están demostrando ser un campo de pruebas para tácticas de basadas en inteligencia artificial (IA) que ofrecen niveles de manipulación sin precedentes. La primera votación del año, celebrada en Bangladesh el 7 de enero, fue un comienzo inquietante. Como resultado de unas elecciones celebradas en un terreno fuertemente inclinado en favor del oficialismo, sin competencia real y plagadas de **desinformación generada mediante IA**, Bangladesh acabó por convertirse en un Estado unipartidista de hecho.

Pero poco después se vio la otra cara de la moneda. Contra los intentos concertados de China por desbaratarlas, incluso mediante ciberataques, **Taiwán** celebró unas elecciones libres y competitivas caracterizadas por una campaña vibrante y muy activa. En tiempos difíciles para la democracia, Taiwán siguió demostrando a la región y al mundo entero que las elecciones democráticas y el espacio cívico abierto son posibles.

NORMALIZACIÓN DEL GOBIERNO MILITAR

Cada vez más el gobierno militar corre el riesgo de convertirse en la norma regional en África Central y Occidental. En 2023 dos países, Gabón y Níger, engrosaron las filas de las dictaduras militares, y en otros dos, **Guinea-Bissau** y **Sierra Leona**, hubo intentos de golpe de Estado fallidos.

El 26 de agosto Gabón celebró elecciones legislativas. Los resultados oficiales se anunciaron cuatro días después, en la mitad de la noche, con el país bajo toque de queda y en medio de un apagón de internet. El presidente Ali Bongo, en el poder desde la muerte de su padre y predecesor en 2009, obtuvo un tercer mandato. Al igual que en



Foto de AFP vía Getty Images.

La gente celebra el fin de la dictadura de Ali Bongo en Libreville, Gabón, el 30 de agosto de 2023.

elecciones anteriores, abundaron las acusaciones de fraude. Pero esta vez ocurrió algo sin precedentes: menos de una hora después, los militares habían tomado el poder y los 56 años de reinado de la familia Bongo habían pasado a la historia.

La gente salió a la calle para celebrar el fin de más de medio siglo de autoritarismo dinástico. La sociedad civil gabonesa, durante mucho tiempo víctima de la represión, expresó **alivio**. Pero el entusiasmo no puede durar: derrocar un régimen opresivo no es lo mismo que instaurar la libertad democrática. Es infrecuente que un golpe militar dé lugar inmediatamente a la instauración de instituciones libres. Lo más común es que instaure nuevos regímenes autoritarios con niveles aún mayores de violencia y violaciones de derechos humanos condonadas por el Estado.

Los de Níger y Gabón fueron el séptimo y octavo golpes militares exitosos producidos en África Central y Occidental en los últimos cinco años, y el séptimo en el África francófona. Dos tuvieron lugar en **Mali** en 2020 y 2021, y otros dos en **Burkina Faso** en 2022. También se produjeron golpes de Estado en **Chad**, **Guinea** y **Sudán** en 2021. En Níger, como antes en Burkina Faso y Mali, la motivación ostensible de los golpistas fue el fracaso de los gobiernos civiles a la hora de hacer frente a la insurgencia yihadista. Se aprovecharon de la desesperación de la población, obligada a convivir con la violencia y enfadada por la ineficaz presencia militar de la antigua potencia colonial, Francia. Muchos apoyaron los golpes con la esperanza de que los militares, que ya estaban cambiando sus alianzas internacionales hacia Rusia, hicieran un mejor trabajo en la lucha contra la insurgencia, aunque hay pocas pruebas que avalen esta expectativa ►VÉASE CAPÍTULO.

En ninguno de estos países los militares se han retirado a los cuarteles tras aplicar las medidas supuestamente temporarias que habían prometido. La junta de Sudán fue la más notoria por dar marcha atrás en cada acuerdo alcanzado para lograr una transición democrática antes del estallido de la guerra, pero no fue una excepción: es habitual que los militares se fijen objetivos a largo plazo que contradicen rotundamente las promesas de transición a corto plazo.

> En Níger, la junta se ha fijado una serie de objetivos a largo plazo y, aunque todavía no ha dado ninguna indicación sobre cuánto tiempo piensa permanecer en el poder, no parece que tenga previsto abandonarlo en un futuro próximo.
>
> 
> **CLÉMENT KOCOU GBEDEY**
> Red de África Occidental para la Consolidación de la Paz

En todos los países controlados por el ejército, las juntas han intensificado la represión. Las autoridades militares han atacado a los medios de comunicación independientes y al periodismo crítico con amenazas, intimidaciones y detenciones, y han cerrado algunos medios y prohibido las emisiones de otros. Han apagado internet y limitado el acceso a sitios web y plataformas de redes sociales. En Burkina Faso,

la junta ha **secuestrado** cada vez a más activistas. Algunos de los casos más recientes son los de Rasmané Zinaba y Bassirou Badjo, del grupo de base de sociedad civil Balai Citoyen. En febrero de 2024, varios asaltantes armados vestidos de civil se llevaron a Zinaba de su domicilio en Uagadugú, la capital. Al día siguiente, unos hombres vestidos de civil que dijeron ser agentes de seguridad del gobierno secuestraron a Badjo en una oficina gubernamental.

> Tras el golpe militar de 2021, las condiciones para medios y periodistas se han deteriorado considerablemente. Varios periodistas y editorialistas han sido encarcelados por expresar opiniones consideradas ofensivas para con el Estado. La Alta Autoridad de Comunicaciones suspendió numerosos medios de comunicación. En un momento en que los medios de comunicación y el periodismo más necesitan organizarse y trabajar juntos para protegerse, tanto más difícil les resulta hacerlo. La presión sobre las voces disidentes y las amenazas de represión limitan su capacidad para reunirse y actuar colectivamente en defensa de sus derechos.
>
> 
> **NAFISSATOU MAIGA**
> Mujeres e Iniciativas para el Desarrollo, Mali

La dictadura de la junta militar ha entrado en su cuarto año en Myanmar, y ha resultado ser una experiencia especialmente sangrienta. La población rechazó la toma del poder con protestas en las calles y desobediencia civil, mientras que las milicias étnicas se unieron al gobierno derrocado para organizar la resistencia armada.

Ante la decepcionante respuesta regional e internacional a las numerosas atrocidades cometidas por el ejército, la sociedad civil de Myanmar se unió para elaborar una **agenda de cinco puntos** que incluye llamamientos a una estrategia para poner fin a la violencia militar mediante sanciones, un embargo de armas y la remisión de Myanmar a la Corte Penal Internacional. El plan también insta a la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, el principal organismo regional, a entrar en diálogo con actores más allá de la junta, y en particular con la sociedad civil y otras fuerzas democráticas, incluido el gobierno democrático en el exilio. Pero hasta ahora la comunidad internacional y los Estados de la región no parecen querer escuchar a la sociedad civil.

LEER MÁS:

- GOLPE DE ESTADO EN NÍGER: UN NUEVO GOLPE PARA LA DEMOCRACIA EN ÁFRICA OCCIDENTAL EN
- GABÓN: ¿EL FIN DE UNA DICTADURA... Y EL PRINCIPIO DE OTRA? EN
- SUDÁN: NO HAY DEMOCRACIA SIN SOCIEDAD CIVIL EN
- MYANMAR: LA JUNTA MILITAR RECIBE CARTA BLANCA EN

AUTORITARISMOS CONSOLIDADOS

Varios regímenes autoritarios reforzaron su control en 2023, recuperándolo tras olas de protestas u otras formas de activismo que desafiaron su poder. Tales fueron los casos de la teocracia iraní, la monarquía bahreiní y las dictaduras de izquierda de Nicaragua y Venezuela.

Pero por sangriento que fuera el régimen y por cerrado que estuviera el espacio cívico, la sociedad civil siguió resistiendo, aunque fuera de forma subterránea y encubierta o trasladando sus operaciones al extranjero.

En Irán, el 16 de septiembre se cumplió un año del inicio de una oleada de protestas masivas contra el régimen teocrático que se desencadenaron con el asesinato, a manos de la policía de moralidad, de una joven, Mahsa Amini, por supuestas infracciones al estricto código de vestimenta que se impone a las mujeres ▶ VÉASE CAPÍTULO. Ces manifestations de grande ampleur représentaient une menace Las protestas generalizadas representaron una amenaza existencial para el régimen, lo cual que se reflejó en la brutalidad de su respuesta represiva.

> Los iraníes tienen menos miedo de las consecuencias de su activismo. Se atreven a actuar contra el régimen. La voz de la protesta es más fuerte y la severidad de la represión sólo demuestra lo atemorizado que está el régimen ante el movimiento de protesta. El régimen comprende que no será fácil acabar con este movimiento de protesta, que amenaza la legitimidad y, por tanto, la existencia del régimen.



SOHRAB RAZAGHI
Activistas Voluntarios

El régimen asesinó a centenares de personas, hirió a miles y detuvo a decenas de miles. Sometió a muchos detenidos a tortura, abusos sexuales y denegación de tratamiento médico. Utilizó el sistema de justicia penal contra ellos, celebrando juicios exprés a puertas cerradas en "**tribunales revolucionarios**" presididos por clérigos, sin garantías procesales. Condenó a cientos de activistas, manifestantes y periodistas a años de cárcel y dictó varias sentencias de muerte, llevando a cabo al menos **siete ejecuciones** hasta mayo de 2023. Según el relator especial de la ONU sobre Irán, Javaid Rehman, algunas de las violaciones de derechos humanos del régimen podrían constituir crímenes de lesa humanidad según el derecho internacional.

La protesta debió tornarse más sutil pero no desapareció, sino que se enfocó en pequeños actos cotidianos de desobediencia que incluyeron sutiles desafíos a los códigos de peinado, vestimenta y comportamiento. El rechazo al régimen también se expresó un **abstencionismo sin precedentes** en las elecciones de febrero de 2024, diseñadas para mantener a la línea dura al mando. Pero el activismo abierto solo ha podido continuar abiertamente en el exilio.

> La represión del régimen de la República Islámica se ha intensificado con ejecuciones de manifestantes, destinadas a generar miedo para reprimir toda tentativa de nuevas movilizaciones. Pero la lucha continúa bajo la superficie. Aunque la República Islámica y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica reprimen con dureza todo intento de protesta, la gente sigue abrazando la resistencia civil a pesar de sus costos potencialmente elevados.



ASAL ABASIAN
periodista y activista feminista queer iraní en el exilio

En Bahréin, una monarquía del Golfo donde se produjeron protestas democráticas masivas en 2011, las consecuencias de la severa **represión** que siguió continúan siendo visibles hasta hoy. Muchos de los detenidos tras aquellas protestas siguen entre rejas. Según **estimaciones** del Centro de Derechos Humanos de Bahréin, en la última década el gobierno ha detenido a casi 15.000 personas por sus opiniones políticas, y entre 1.200 y 1.400 están actualmente entre rejas.

De la misma manera en que petroestados como los E y Azerbaiyán han tratado de lavar su reputación acogiendo cumbres globales sobre el clima, Bahréin, un país con un parlamento de adorno y ni sombra de democracia, fue sede de la asamblea mundial de la Unión Interparlamentaria en marzo de 2023. Su gobierno autocrático trató de reforzar su posición internacional proyectando una falsa imagen de modernizador democrático. Pero la sociedad civil también aprovechó la oportunidad para poner bajo los reflectores internacionales las violaciones sistemáticas de las libertades cívicas y los derechos humanos y exigir la liberación de los presos políticos. Delegaciones parlamentarias visitantes de varios Estados democráticos **se hicieron eco** de estas exigencias, desbaratando el plan del régimen de proyectar una imagen positiva.

Pocos meses después, la mayor protesta que tuvo Bahréin en años salió de las catacumbas de su sistema represivo, cuando centenares de presos políticos iniciaron una huelga de hambre para exigir mejoras en las inhumanas condiciones carcelarias. Como tantas otras veces, sus familias **salieron a la calle** para pedir su liberación, y la sociedad civil internacional respaldó sus demandas.



Foto de Mohammed Al-Shaikh/AFP vía Getty Images.

Una niña sostiene un cartel con una foto del defensor de derechos humanos encarcelado Abdulhadi al-Khawaja en una protesta en Jannusan, Bahréin, el 5 de septiembre de 2014.

Pero como es costumbre, algunos Estados ostensiblemente prodemocráticos antepusieron su preocupación por la estabilidad y la seguridad. Bahréin es un aliado estratégico de los Estados Unidos. Alberga el cuartel general del Mando Central de las Fuerzas Navales estadounidenses y la Quinta Flota de su armada. En consecuencia, el gobierno estadounidense prefiere ignorar en Bahréin las violaciones de derechos humanos que condena cuando se producen en países no aliados.

Contra viento y marea, el activismo en Bahréin y en el exilio sigue colaborando para abrir grietas en el sistema e impulsar la democratización.

> Bahréin ha cerrado el espacio cívico. No podemos ejercer nuestro derecho de reunión pacífica, y mucho menos hacer campaña abiertamente por las libertades de asociación y expresión, la liberación de presos injustamente juzgados y encarcelados o una moratoria de la pena de muerte. Sin embargo, el activismo cívico no es totalmente imposible. Colaboramos con aliados y activistas afines, así como con las pocas organizaciones de la sociedad civil que plantean abiertamente, aunque con cautela, cuestiones de derechos humanos, para que la sociedad bahreiní escuche nuestro mensaje. Somos un catalizador: ayudamos al activismo bahreiní a acceder a plataformas para llegar al público nacional e internacional.
>
> 
> **JAWAD FAIROOZ**
> Salam para la Democracia y los Derechos Humanos, Bahréin

Tanto en Nicaragua como en Venezuela, la regresión democrática y la represión del espacio cívico se aceleraron cuando los gobiernos enfrentaron picos de disenso.

En Nicaragua esto sucedió en abril de 2018, cuando el presidente Daniel Ortega anunció cambios en el sistema de seguridad social que desencadenaron una ola de protestas. El plan fue pronto retirado, pero para entonces múltiples descontentos habían convergido en las calles y no se dejaron disuadir por las habituales demostraciones de poder de las fuerzas del Estado y de grupos armados progubernamentales. A medida que las imágenes de la represión se difundieron en las redes sociales, más gente se sumó a las protestas. En respuesta, el Estado intensificó la violencia, asesinando a **centenares** de personas. Encarceló a muchas más, acusándolas de terrorismo y crimen organizado, entre otros delitos graves. Más de 150.000 nicaragüenses huyeron al exilio, principalmente a la vecina Costa Rica.

En los años transcurridos desde entonces, el régimen, cada vez más autoritario, ha desmantelado el espacio cívico, reforzado la arquitectura legal de la represión, criminalizado toda expresión de disenso,

encarcelado a sus críticos y eliminado todo rastro de competencia política. En una ulterior demostración de poder, en febrero de 2023 Ortega **ordenó** inesperadamente la liberación de 222 presos políticos, embarcándolos en un vuelo chárter con destino a Estados Unidos y despojándolos de su ciudadanía y de sus derechos civiles y políticos bajo acusaciones de mercenarismo antinacional y traición a la patria.

También en Venezuela, el punto de inflexión hacia la autocracia fue un desafío callejero al poder gubernamental. La ola de protestas comenzó en marzo de 2017, en rechazo a la decisión del Tribunal Supremo, controlado por el gobierno, de despojar de sus poderes a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora. Las manifestaciones que exigían el restablecimiento del orden constitucional se prolongaron durante dos meses, intensificándose ante un decreto presidencial de convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente como alternativa al parlamento electo.

Al reprimir las protestas, las fuerzas del Estado provocaron decenas de muertos y centenares de heridos y detuvieron a cerca de 2.000 personas. Cientos de ellas permanecieron largo tiempo detenidas. Se ha denunciado que las personas que permanecen en las cárceles sufren torturas y otros malos tratos y que el Estado cometió numerosas violaciones de las garantías procesales, incluido el procesamiento de civiles bajo jurisdicción militar. También hubo numerosas agresiones y detenciones arbitrarias de periodistas, además de censura a medios de comunicación. La represión sostenida y el colapso económico produjeron un éxodo venezolano de dimensiones sin precedentes
▶ VÉASE CAPÍTULO.

A medida que se han ido acercando las elecciones presidenciales previstas para 2024, el gobierno ha restringido aún más los derechos y libertades. A principios de 2023 propinó un ataque frontal al espacio cívico, bajo la forma de un proyecto de **ley de ONG** destinado a controlar, restringir y, potencialmente, cerrar OSC que no cumplieran ciertas normas y a procesar a sus líderes y empleados. Numerosas OSC nacionales e internacionales **rechazaron enérgicamente** el proyecto de ley, señalando que el objetivo del gobierno no era otro que subordinar la sociedad civil a sus intereses.

> Aunque el proyecto de ley parezca apuntar exclusivamente contra las organizaciones de derechos humanos, sus impactos serán mucho más amplios, ya que pretende tomar el control de todo el tejido asociativo. Cualquier forma organizativa, incluidos partidos políticos y organizaciones educativas y académicas, es un potencial objetivo. Las víctimas de violaciones de derechos humanos podrían quedarse sin apoyo jurídico. Las personas afectadas por la emergencia humanitaria podrían perder el acceso a programas humanitarios de la sociedad civil, que podrían ser sustituidos por programas gubernamentales con condiciones de acceso restrictivas.
>
> 
> **RIGOBERTO LOBO PUENTES**
> Promoción, Educación y Defensa en Derechos Humanos, Venezuela

Luego, en respuesta a la estrategia de la oposición de promover una candidatura conjunta para enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones, el poder judicial al servicio del gobierno **inhabilitó** a la líder opositora María Corina Machado y **declaró** nulas las primarias que la eligieron. Ante la presión para celebrar unas elecciones libres que probablemente perdería, Maduro también trató de **explotar el fervor nacionalista** reavivando una disputa territorial con la vecina Guyana.

Como resultado de las crecientes restricciones, el CIVICUS Monitor **rebajó** la calificación del espacio cívico de Venezuela de “represivo” a “cerrado” en diciembre de 2023.

La sociedad civil tiene buenas razones para temer que las elecciones de 2024 sean una simulación que, sin embargo, la comunidad internacional podría estar dispuesta a aceptar como válida, reduciendo así su solidaridad con la asediada sociedad civil venezolana.

> El gobierno se ve obligado a realizar elecciones por varias razones, entre las que se destaca la necesidad de obtener cierto grado de legitimidad frente a la comunidad internacional. Pero Maduro no está dispuesto a organizar unas elecciones que pueda perder, y hará muchos esfuerzos para dividir y desestimular el voto en contra.
> Un mensaje negativo que estamos recibiendo es que las elecciones de 2024, independientemente de cómo se organicen, serán un hito para normalizar las relaciones con Venezuela.



RAFAEL UZCÁTEGUI
Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos

LEER MÁS:

- IRÁN: UN AÑO DESPUÉS, ¿QUÉ HA CAMBIADO? EN
- IRÁN, DE VUELTA A LA SOMBRÍA NORMALIDAD EN
- BAHRÉIN: FALLIDA OPERACIÓN DE LAVADO DE IMAGEN EN
- LOS PRESOS POLÍTICOS DE BAHRÉIN: RESISTENCIA CONTRA VIENTO Y MAREA EN
- NICARAGUA: UNA OPORTUNIDAD PARA LA SOLIDARIDAD DEMOCRÁTICA
- NICARAGUA, A CINCO AÑOS DE LAS PROTESTAS DE ABRIL
- VENEZUELA: ¿EL FIN DE LA SOCIEDAD CIVIL TAL COMO LA CONOCEMOS?

Activismo en el exilio y represión transnacional

Frente a regímenes autoritarios de larga data, activistas de sociedad civil, periodistas y disidentes políticos se ven a menudo obligados a marcharse para continuar su labor. La mayoría de los entrevistados procedentes de países autocráticos con espacio cívico muy restringido, como **Azerbaiyán**, **Bielorrusia**, **Burundi**, **Egipto** e **Irán**, se encontraban en el exilio, luchando por la democracia y los derechos humanos a distancia. Lo hacían apoyando a quienes se habían quedado, en su mayoría en la clandestinidad, documentando las violaciones de derechos humanos, y amplificando sus voces en los foros internacionales.

En el caso extremo de **Corea del Norte**, un Estado totalitario herméticamente cerrado, las OSC, la mayoría de ellas con sede en Corea del Sur, dedican gran parte de su trabajo a apoyar a los norcoreanos que han logrado escapar. Los activistas exiliados suelen enfrentar enormes dificultades para trabajar conjuntamente con quienes han permanecido en el país. En muchos casos, como el de **Hong Kong**, el desafío es que las personas con quienes estén en contacto probablemente serán detenidas si son descubiertas. En otros, como **Eritrea**, también existe el problema de las restricciones de internet. Pero incluso en las circunstancias más difíciles, los activistas exiliados perseveran en su labor.

> Los miembros de las OSC que han permanecido en Bielorrusia están siendo perseguidos. Todas las organizaciones de derechos humanos ya han sido privadas de registro, por lo que les es imposible trabajar legalmente dentro de Bielorrusia. Para seguir funcionando, la mayoría de las OSC de derechos humanos, incluida Viasna, se han visto obligadas a abandonar Bielorrusia y continuar su labor desde el extranjero. Casi todas las reuniones y consultas jurídicas con personas que han sido objeto de represión tienen lugar ahora vía internet. Las secciones regionales de nuestra organización también han podido seguir trabajando desde el extranjero, recopilando información sobre la represión en sus regiones a través de voluntarios locales que corren riesgos todos los días, así como mediante técnicas de investigación de fuente abierta.



ANASTASIYA VASILCHUK
Viasna, Bielorrusia

> Los exiliados recientes han logrado continuar sin problemas la labor que realizaban en Irán, ayudados por herramientas virtuales. Y muchos más se han unido a sus luchas desde la distancia, organizando protestas en ciudades desde Berlín y París hasta Sídney y Toronto.
> Otros han ayudado a activistas en Irán a desafiar la vigilancia y el filtrado de contenidos en línea por parte del régimen iraní creando y pagando redes privadas virtuales (VPN). Éstas permiten a los usuarios eludir los controles conectándose a un servidor remoto de VPN ubicado fuera del país. También crean canales seguros para el activismo enmascarando la dirección IP del usuario y cifrando sus datos personales.



ASAL ABASIAN
periodista y activista feminista queer, Irán

> Estar en el exilio es extremadamente frustrante porque hace que nuestro trabajo sea menos eficaz. Conectar con la gente dentro de Eritrea es muy difícil, ya que la penetración de internet en Eritrea es de apenas 2%. El gobierno controla básicamente todos los medios de comunicación: los medios independientes dejaron de existir en 2001. Por eso, la mayor parte de la información nos la traen personas que acaban de salir del país. Pero, aunque el trabajo es difícil, todavía es posible conseguir información. Y cuando el gobierno reacciona ante nuestro trabajo, sabemos que lo que hacemos está teniendo impacto.



HELEN KIDAN
Movimiento Eritreo para la Democracia y los Derechos Humanos

Pero el activismo no siempre encuentra seguridad en el exilio. Cada vez más, los Estados autoritarios están recurriendo a la represión transnacional. Hong Kong ofrece un ejemplo de ello. La reacción de China frente a las protestas por la democracia que se movilizaron en 2019 puso fin de hecho a la promesa de “un país, dos sistemas” que



Foto de Echo Iran/Middle East Images/AFP via Getty Images.

Miembros de la diáspora iraní protestan contra las ejecuciones en Irán frente al Ministerio Federal de Asuntos Exteriores en Berlín, Alemania, el 27 de enero de 2024.

había permitido a la gente de Hong Kong seguir gozando de libertades cívicas fundamentales largamente suprimidas en la China continental. En la prolongada represión que siguió, las autoridades detuvieron a cientos de personas en virtud de la **Ley de Seguridad Nacional**, y a la mayoría se les denegó la libertad bajo fianza. Varios activistas prodemocracia fueron sometidos a múltiples juicios y condenados a largas penas. El exilio fue la única forma que otros tuvieron de evitar el mismo destino.

Pero la policía de Hong Kong empezó entonces a dictar órdenes internacionales de detención contra destacados activistas exiliados. Entre ellos se cuenta Nathan Law, un antiguo líder estudiantil muy activo en el Movimiento de los Paraguas de 2014, que luego fundó un partido prodemocrático y se convirtió en el legislador más joven de la historia de su país. Los exiliados afectados por las órdenes de detención se encuentran en Australia, Estados Unidos y el Reino Unido, países que suspendieron sus acuerdos de extradición con Hong Kong en reacción a la Ley de Seguridad Nacional, por lo que China no puede utilizar los canales de los que suele abusar, como el **sistema de notificaciones rojas** de Interpol.

Hong Kong ha puesto precio a sus cabezas y, lo que es más escalofriante, el líder de Hong Kong, John Lee, ha **declarado** que se los perseguirá de por vida, bajo acusaciones de connivencia con gobiernos extranjeros por haber solicitado sanciones, y otros cargos en virtud de la Ley de Seguridad Nacional. El Estado está ejerciendo presión adicional intimidando a sus familias que permanecen en el país.

Ésta no es ni mucho menos la única forma en que China internacionaliza su represión. En 2022 se reveló que China mantenía una red de más de 100 "**comisarías de policía**" secretas en 53 países -incluidos aquellos donde viven los activistas de Hong Kong contra los que apunta la represión- que se utilizan para intimidar a los exiliados y, en algunos casos, capturarlos y devolverlos a China. En abril de 2023, las autoridades estadounidenses **acusaron** a más de 40 agentes chinos de "represión transnacional" contra ciudadanos chinos residentes en los Estados Unidos, entre otras cosas por tener una comisaría secreta en Nueva York.

> Es importante seguir defendiendo a la población de Hong Kong y a las personas defensoras de derechos humanos en el exilio. Por ejemplo, hace poco la policía de seguridad nacional de Hong Kong emitió cinco órdenes de detención ofreciendo recompensas de 1 millón de dólares hongkoneses (unos USD 128.000) por activistas prodemocráticos de Hong Kong exiliados en Estados Unidos y el Reino Unido. Condenamos enérgicamente este ataque ilegal contra nuestros amigos y colegas. Instamos a los gobiernos a que tomen partido por la protección de las personas defensoras de derechos humanos de Hong Kong dentro de sus jurisdicciones.
>
> 
> **ANOUK WEAR**
> Hong Kong Watch

China también está utilizando su influencia económica en el Sudeste Asiático para conseguir que las autoridades locales detengan y deporten a disidentes, activistas, periodistas y abogados de derechos humanos. Un objetivo reciente fue el abogado de derechos humanos **Lu Siwei**, detenido en Laos cuando se dirigía a Tailandia, donde tenía previsto tomar un vuelo a Estados Unidos para reunirse con su esposa y su hija.

Allí donde su influencia es menos directa, como en los Estados Unidos, el Estado chino también dispone de medios para acosar a sus ciudadanos. Recientemente, un **estudiante chino** en Washington DC fue acosado por la policía de seguridad del Estado chino por su activismo en favor de la democracia, mientras que sus familiares en China fueron detenidos, interrogados por la policía y liberados con una advertencia. Los estudiantes chinos en el extranjero también se ven empujados a la autocensura por miedo a ser denunciados por sus propios compañeros de origen chino, ya que las asociaciones de estudiantes chinos los animan a vigilarse mutuamente.

China dista mucho de ser el único represor transnacional. Según un informe de **Freedom House** que analiza ocho años de datos, de 2014 a 2022, los cinco principales perpetradores fueron China, Turquía, Tayikistán, Egipto y Rusia, seguidos de Turkmenistán, Uzbekistán, Irán,

Bielorrusia y Ruanda. Estos 10 países representaron el 80% de los casos registrados.

> Los activistas exiliados que residen en Europa o Canadá están relativamente a salvo, mientras que los que se encuentran en Ruanda pueden sufrir presiones adicionales. El gobierno de Burundi ha aprovechado la reciente mejora de las relaciones con Ruanda para presionar al país anfitrión para que silencie a los periodistas burundeses exiliados o los entregue. El gobierno ruandés dio a algunos de estos periodistas un ultimátum para que guardaran silencio o se marcharan, lo que obligó a algunos a interrumpir sus operaciones desde Ruanda y trasladarse nuevamente. Algunos de estos periodistas formaban parte de un grupo más amplio, que incluía a otros defensores de derechos humanos, que fueron juzgados y condenados en rebeldía.



CARINA TERTSAKIAN
Iniciativa de Derechos Humanos, Burundi

> Los activistas que trabajan desde el extranjero están en el punto de mira a través de sus familias. Por ejemplo, el defensor de derechos humanos egipcio-estadounidense Mohamed Soltan, que demandó al ex primer ministro Hazem el-Beblawi, vio cómo cinco miembros de su familia eran acosados y detenidos como consecuencia de su activismo. El padre del periodista y defensor de derechos humanos Ahmed Gamal Ziada, residente en Bélgica, recientemente ha sido detenido y acusado de uso indebido de las comunicaciones, difusión de noticias falsas y pertenencia a un grupo prohibido. Esta estrategia busca silenciar al activismo e imponerles costos personales aún mayores por realizar su trabajo.



AHMED ATTALLA
Frente Egipcio para los Derechos Humanos



Foto de Kacper Pempel/Reuters vía Gallo Images.

Bielorrusos exiliados marchan en Varsovia, Polonia, el 9 de agosto de 2023, en el tercer aniversario de las elecciones presidenciales robadas por el dictador Alexander Lukashenko.

> Cuando sigues trabajando desde el exilio, sacrificas mucho como persona y como familia. Ha habido muchos casos de activistas cuyos familiares han sido detenidos arbitrariamente. Han sido acosados y encarcelados. Por ejemplo, la madre de un periodista exiliado recibe visitas periódicas de las fuerzas de seguridad a medianoche o de madrugada, preguntando por las actividades periodísticas de su hijo. La familia no tiene nada que ver con el trabajo profesional del periodista, y sin embargo la acosan por ello. Mi familia no debería ser castigada, incluso si yo hubiera cometido un delito. Los activistas pagan un alto precio por continuar su trabajo.



ZAMAN ASHRAF
defensor de derechos humanos, Bangladesh

Activistas iraníes exiliados en varios países europeos han sufrido piratería informática, ciberataques y acoso en línea, amenazas de muerte, vigilancia e intimidación. Al parecer, detrás de todo ello hay agentes de seguridad iraníes. Dos activistas de distintos países denunciaron que les cortaron las cubiertas de sus coches, y varios describieron a hombres sospechosos que les siguieron a casa desde la salida de sus reuniones.

Las autoridades **bielorrusas** recientemente encontraron una nueva arma para usar contra los exiliados: la prohibición de renovar sus pasaportes y otros documentos imprescindibles fuera de Bielorrusia. El objetivo es obligarles a regresar a casa, donde les aguardan el arresto y la detención. También la junta militar que gobierna **Myanmar** ha empezado a anular los pasaportes de sus nacionales que viven en Singapur para impedir que puedan viajar al extranjero.

Algunos llegan incluso al asesinato. **Bounsuan Kitiyano**, integrante de Laos Libre, una red de trabajadores migrantes y activistas de Laos en Tailandia, apareció muerto en una ciudad fronteriza de Tailandia en el mes de mayo. Había participado en reuniones sobre derechos humanos y en protestas pacíficas ante la embajada de Laos en Bangkok. En agosto, el periodista y activista de la oposición argelina **Abdou Semmar** sobrevivió a un intento de asesinato en París, donde vive exiliado desde 2019.

Tailandia, hogar de acogida de miles de activistas birmanos, chinos, camboyanos, laosianos y vietnamitas exiliados, ha dejado de ser un refugio seguro. Cada vez más sus autoridades colaboran con sus homólogas de la región o permiten a sus agencias de inteligencia operar en su territorio.

Duong Van Thai, un destacado bloguero y YouTuber vietnamita solicitante de asilo, fue secuestrado por agentes de inteligencia vietnamitas en Tailandia y devuelto por la fuerza a su país el pasado abril. El activista camboyano **Thol Samnang**, del proscrito Candlelight Party, fue detenido por las autoridades tailandesas en julio cuando ingresó al país en busca de asilo. En diciembre, la policía tailandesa detuvo también al activista vietnamita de derechos humanos **Lù A Da**, dos semanas después de que denunciara públicamente la represión sistemática del gobierno vietnamita contra el pueblo indígena hmong.

El periodista independiente paquistaní **Syed Fawad Ali Shah** vio truncado su exilio. En marzo de 2023 se supo que había estado encarcelado en Pakistán durante varios meses tras desaparecer en Malasia, donde vivía desde hacía 13 años. Denunció haber sido secuestrado por funcionarios de inmigración malasios en una operación conjunta con los servicios de inteligencia paquistaníes, deportado y retenido durante seis meses en un sitio clandestino de detención. Finalmente, Syed fue entregado a la sección de ciberdelincuencia de la Agencia Federal de Investigación, que le imputó varios cargos falsos antes de concederle libertad temporaria bajo fianza, manteniéndolo en el temor constante de ser regresado a la cárcel.

> El miedo no me deja dormir. Cada vez que llaman a la puerta entro en pánico. Pido a las organizaciones que trabajan por los derechos de refugiados y periodistas de todo el mundo, así como a los líderes de todos los Estados que han firmado la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, a que me proporcionen protección y me trasladen inmediatamente a un país seguro en circunstancias especiales. También insto a los dirigentes de los Estados democráticos a que presionen al gobierno paquistaní en relación con mi situación y me proporcionen alguna forma de abandonar el país en condiciones seguras.
>
> 
> **SYED FAWAD ALI SHAH**
> escritor y periodista, Pakistán

Frente a los intentos de infiltración de sus gobiernos represivos, activistas y organizaciones exiliados forman estrechas redes de apoyo y se equipan para responder a las amenazas. Adoptan medidas de seguridad digital y estrategias de autoprotección y se organizan para denunciar violaciones cuando el historial de derechos humanos del país es examinado en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Pero necesitan mucho más **apoyo** de los gobiernos de acogida y de la comunidad internacional en general. Éstos deberían emitir advertencias creíbles contra quienes operan ilegalmente en suelo extranjero, un mayor respeto del derecho a solicitar asilo, mayores protecciones para activistas en peligro y un tratamiento más focalizado de las solicitudes de extradición y alertas de Interpol emitidas por Estados conocidos por su represión transnacional.

LEER MÁS:

- LAS LUCES DE LA LIBERTAD SE APAGAN EN HONG KONG EN
- HONG KONG PERSIGUE A SUS EXILIADOS EN

Elecciones autoritarias

En 2023, varios gobiernos autoritarios celebraron elecciones en las que su poder nunca fue cuestionado. Estas elecciones sirvieron para legitimar, a nivel nacional e internacional, a regímenes represivos que pretendían presentarse como democracias. En algunos casos, también permitieron a sus dictadores cooptar y movilizar a sus partidarios y desmoralizar a la oposición.

En tales contextos, la sociedad civil se vio imposibilitada de cumplir las funciones que le son propias, como la educación de votantes y el monitoreo del proceso electoral y el recuento de votos. En algunos casos, las autoridades prohibieron toda forma de observación, inclusive por parte de misiones internacionales, mientras que en otros permitieron un acceso limitado con el objeto de hacerse acreedores de mayor credibilidad. La sociedad civil siguió denunciando las elecciones amañadas y reclamó a la comunidad internacional que evitara conferir legitimidad a regímenes autoritarios y en cambio apoyara al activismo de la sociedad civil y a periodistas en apuros.

La incertidumbre propia de las elecciones democráticas estuvo ausente en Cuba en el mes de marzo, cuando la ciudadanía fue convocada para designar a los integrantes de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Cuba es un régimen de partido único donde el Partido Comunista de Cuba es indistinguible del Estado, por lo que el pueblo no pudo elegir a sus representantes. Su única función consistió en **ratificar** a las personas que el partido había seleccionado como candidatas.

Cabía la posibilidad de abstenerse, pero a propia cuenta y riesgo. En esta república comunista, donde el gobierno afirma representar los intereses del pueblo, se espera de la ciudadanía no solamente aquiescencia sino también apoyo activo, preferiblemente acompañado de muestras públicas de entusiasmo. La oposición política y el activismo prodemocracia promovieron la abstención, con campañas en redes sociales movilizadas en torno a hashtags tales como #YoNoVoto y #EnDictaduraNoSeVota. El gobierno no escatimó esfuerzos propagandísticos para evitar que se repitieran los altos índices de abstención de las elecciones municipales de 2022: hizo un uso intensivo de las redes sociales, pegó carteles con sus propias consignas en forma de hashtag en las paredes de las ciudades, envió a sus candidatos de gira, distribuyó merchandising y organizó eventos culturales y deportivos y ferias comerciales.

En julio, Camboya celebró elecciones parlamentarias sin competencia, bajo el liderazgo de uno de los autócratas que **más tiempo** lleva en el poder, el primer ministro Hun Sen. Este antiguo comandante militar gobierna desde 1985 en el vértice de un sistema de partido único de hecho, actualmente en proceso de convertirse en dinastía.

Tras inhabilitar por un tecnicismo al único partido que representaba una oposición creíble, el partido gobernante se hizo con más del 80% de los votos y casi todos los escaños parlamentarios. Uno de ellos fue ocupado por el hijo mayor de Hun Sen, Hun Manet, que rápidamente fue anunciado como nuevo primer ministro. La farsa electoral, celebrado en medio de una represión del disenso que llevaba años, sirvió para planificar la sucesión familiar.

En agosto, el presidente de Zimbabue, Emmerson Mnangagwa, del partido ZANU-PF, en el poder desde la independencia, se impuso para un nuevo mandato mediante unas elecciones en las que utilizó todas las artimañas posibles para asegurarse un resultado favorable. Las autoridades prohibieron los actos de la oposición, encarcelaron a prominentes políticos opositores y detuvieron a activistas de la oposición, mientras los partidarios del ZANU-PF proferían amenazas, ejecutaban actos intimidatorios y recurrían a la violencia política.

Antes de las elecciones, el gobierno introdujo nuevas leyes que restringieron aún más el espacio cívico. La Ley Patriótica, que entró en vigor en julio, tipificó como delito al acto de "atentar deliberadamente contra la soberanía y el interés nacional de Zimbabue". Definido de modo intencionadamente amplio y vago, este delito podría ser utilizado por el gobierno para criminalizar a casi cualquiera que discrepara de él.

Otra ley, la Enmienda a la Ley de Organizaciones Voluntarias Privadas, fue aprobada en febrero por un parlamento dominado por el ZANU-PF. Con el **pretexto** de cumplir las normas internacionales contra el blanqueo de dinero, esta ley **amplió** los poderes del Estado sobre los grupos de la sociedad civil, permitiéndole someterlos a vigilancia, apoderarse de ellos y cerrarlos.

> Esperábamos un avance democrático y económico tras años de dictadura y estancamiento económico. Pero fuimos decepcionados. La sociedad civil intentó participar en el proceso electoral y desempeñar un rol de monitoreo, pero fue criminalizada.
> En el periodo previo a las elecciones también hicimos una gran labor de educación de votantes. Conseguimos generar entusiasmo en la ciudadanía, pero el día de la votación la gente se frustró. Se trató de una farsa, no de verdaderas elecciones. Fue un circo y un despilfarro de recursos que subvirtió la voluntad del pueblo y mantuvo ilegalmente al gobierno en el poder.



OBERT MASARAURE
Coalición Crisis en Zimbabue



Foto de Leger Kokpakpa/Reuters vía Gallo Images.

Un mercenario ruso monta guardia como parte del dispositivo de seguridad presidencial durante la campaña para el referéndum constitucional en Bangui, República Centroafricana, el 16 de julio de 2023.

En septiembre fue el turno de Eswatini. En este país, gobernado por el último monarca absoluto de África, el rey Mswati III, se celebraron elecciones sin partidos para la Cámara de la Asamblea, un parlamento cuyo rol es principalmente consultivo. El rey sigue manejando todos los resortes del poder, y sus promesas de celebrar un diálogo tras las protestas masivas prodemocracia de 2021 siguen sin concretarse. Nadie ha rendido cuentas por la violencia letal desplegada entonces por las fuerzas de seguridad, y los políticos que rompieron filas para reclamar reformas fueron declarados culpables de cargos absurdos por un poder judicial controlado por el rey. El indicio más claro de que no cabía esperar nada de estas elecciones fue el asesinato, en enero de 2023, del abogado de derechos humanos **Thulani Maseko**, líder del movimiento prodemocracia de Eswatini y una verdadera piedra en el zapato de Mswati.

A finales de año se celebraron unas **elecciones profundamente viciadas** en la República Democrática del Congo, en medio de un recrudecimiento de la violencia rebelde y cuando las fuerzas de mantenimiento de la paz de la ONU comenzaban a retirarse tras más de dos décadas en el país, a petición del presidente Félix Tshisekedi. Tras una votación plagada de irregularidades, Tshisekedi obtuvo el 73,5% de los votos. Este apoyo de dimensiones sin precedentes contrastó fuertemente con los datos que arrojaban los sondeos preelectorales.

La comisión electoral detectó numerosas irregularidades en las elecciones parlamentarias y municipales celebradas al mismo tiempo y con las mismas papeletas, pero afirmó no haber detectado ninguna en la votación presidencial. La sociedad civil se movilizó para intentar garantizar una votación limpia, pero fue en vano.

> Las elecciones presidenciales sirvieron para mostrar al mundo que el gobierno las celebraba dentro del plazo constitucional, pero se vieron empañadas por el fraude y las irregularidades. En el periodo preelectoral lanzamos campañas de concientización para promover una votación pacífica. Formamos en observación electoral y cobertura mediática a grupos de la sociedad civil y a periodistas. Observamos los comicios y contribuimos a un informe de resultados producido por la sociedad civil. Sin embargo, este informe no fue tenido en cuenta por los organismos relevantes.



JONATHAN MAGOMA
activista de derechos humanos, RDC

Además de elecciones ceremoniales o fraudulentas, algunos presidentes celebraron referendos simulados para prolongar su permanencia en el poder, como ocurrió en la República Centroafricana (RCA) y en Uzbekistán, países sólidamente autoritarios.

En Uzbekistán, un referéndum celebrado en abril de 2023 aprobó un paquete de reformas constitucionales, ampliando los mandatos presidenciales y restableciendo el límite de dos mandatos para permitir al presidente Shavkat Mirziyoyev mantenerse en el cargo hasta 2040. Nunca hubo dudas sobre el resultado de la votación: con el disenso estrictamente controlado en condiciones de espacio cívico cerrado, no hubo posibilidad de verdadero debate, campaña en contra o voto negativo. La participación en el referéndum y el número total de votos se situaron en torno a los mismos niveles que en las elecciones presidenciales no competitivas celebradas dos años antes: según las cifras oficiales, más del 90% respaldó los cambios con un presentismo electoral de casi 85%.

En situaciones de control total del Estado no es posible confiar en las cifras oficiales. Pese a la falta de acceso de observadores independientes de la sociedad civil y los medios de comunicación, se denunció coerción electoral. Los observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) **señalaron** que las elecciones carecieron de competencia, ya que hubo una campaña totalmente unilateral en la que todo el poder del Estado se movilizó por el sí y no hubo ninguna oportunidad de expresar desacuerdo.

En la RCA se introdujeron cambios constitucionales similares mediante referéndum, lo que permitió al presidente Faustin-Archange Touadéra, a punto de terminar el que debería haber sido su segundo y último mandato, permanecer en el poder todo el tiempo que lo desee. La nueva constitución se elaboró con niveles mínimos de consulta y se prohibieron las protestas de la oposición durante una campaña que ofreció pocas oportunidades para el debate.

El presidente Touadéra sabía que lo lograría porque tiene amigos muy poderosos. La RCA es el epicentro de la penetración en África de **mercenarios rusos**, que se cree desempeñan algún tipo de papel en al menos **18 países africanos** ▶ **VÉASE CAPÍTULO**. Touadéra se puso en contacto con Rusia poco después de tomar el poder, y enseguida recibió de su aliado instructores militares y armas. Los mercenarios no tardaron en llegar, ayudando a mantener a Touadéra en el poder en un país que ha vivido en guerra civil durante más de una década.

LEER MÁS:

- CUBA: ELECCIONES SIN OPCIONES
- LAS ELECCIONES DE CAMBOYA, UNA FARSA FLAGRANTE EN
- ZIMBABUE: PERSPECTIVAS DE CAMBIO NEGADAS EN ELECCIONES SESGADAS EN
- ESWATINI: ELECCIONES SIN DEMOCRACIA EN EL HORIZONTE EN
- UZBEKISTÁN: ¿PRESIDENTE DE POR VIDA? EN
- LA REPÚBLICA CENTROAFRICANA, CON PRESIDENTE PARA RATO EN

EL PANORAMA DESIGUAL DE LOS REGÍMENES HÍBRIDOS

En gran parte del mundo, las elecciones de 2023 tuvieron implicancias menos claras que en los Estados plenamente democráticos, donde los resultados son confiables y respetados, o en los regímenes autoritarios, donde los ganadores están designados de antemano y las preferencias de la ciudadanía no cuentan. En muchos países, las elecciones de este año se situaron en algún punto intermedio.

En general, las elecciones en regímenes híbridos -definidos como aquellos que combinan rasgos democráticos y autoritarios- suelen presentar importantes irregularidades que impiden que sean libres competitivas, pero tampoco son meras fachadas.

Estas elecciones pueden ofrecer algunas ventanas de oportunidad para el cambio político, pero quienes buscan la renovación suelen tener dificultades para abrirlas debido a las fuertes restricciones del espacio cívico y a las presiones que los ocupantes del poder logran ejercer sobre la oposición. Los regímenes híbridos suelen caracterizarse por fuertes desequilibrios de poder, con ejecutivos desproporcionadamente poderosos y poderes judiciales subordinados. Como consecuencia, la corrupción suele estar muy extendida y el Estado de derecho es débil. La sociedad civil enfrenta el enorme desafío de ejercer un rol de contrapeso del poder del gobierno y garantizar que las elecciones reflejen las opiniones de la ciudadanía.

2023 ofreció ejemplos de todos los continentes de elecciones celebradas en el marco de regímenes híbridos que no alcanzaron estándares democráticos mínimos, frustraron las expectativas de cambio y conservaron el statu quo. Dos países centroamericanos pusieron en evidencia los desafíos y las oportunidades de las elecciones en estos contextos. Uno de ellos, El Salvador, se desliza rápidamente hacia el autoritarismo como resultado del vaciamiento de la democracia por parte del líder electo. Pero en el otro, Guatemala, la sociedad civil contribuyó a materializar un cambio sin precedentes que renovó las esperanzas en el futuro de la democracia en el país.

Expectativas de cambio defraudadas

Las esperanzas de cambio quedaron en la nada en Turquía, donde el presidente Recep Tayyip Erdoğan se impuso en segunda vuelta en mayo, por un margen estrecho pero decisivo, sobre una oposición unida que aspiraba a restaurar las normas democráticas. El resultado se produjo tras una campaña profundamente polarizadora en la que Erdoğan movilizó una estrategia de guerra cultural anti-LGBTQI+ y ambos bandos apelaron al sentimiento nacionalista y antiinmigración.

> Erdoğan utiliza un lenguaje totalmente contrario a los derechos humanos y su Partido de la Justicia y el Desarrollo ha conservado su mayoría parlamentaria aliándose con un partido extremista. Ahora la situación se volverá peligrosa, sobre todo para las mujeres, las personas LGBTQI+ y el pueblo kurdo.
>
> 
> **EREN KESKIN**
> Asociación de Derechos Humanos, Turquía

Un panorama mediático muy desigual contribuyó en gran medida a la victoria de Erdoğan. Tanto los medios de comunicación estatales como los privados, propiedad de empresarios estrechamente vinculados con el gobierno, que dominan el ecosistema de medios, centraron la cobertura casi exclusivamente en Erdoğan, privando de aire a la oposición. Los observadores de la OSCE **llegaron a la conclusión** de que, aunque las elecciones fueron competitivas, las condiciones de la competencia no fueron equitativas, ya que las restricciones de la libertad de expresión y la parcialidad de los medios de comunicación favorecieron a Erdoğan. Algunos partidarios de la oposición también sufrieron acoso e intimidación, con casos de violencia, como lanzamientos de piedras, contra actos de la oposición.



Foto de Jack Taylor/AFP vía Getty Images.

Manifestantes urgen a los senadores tailandeses a respetar el resultado de las elecciones generales del 14 de mayo en Bangkok, Tailandia, el 29 de julio de 2023.

> La nueva ley de prensa, introducida recientemente por el gobierno con el pretexto de la "lucha contra la desinformación", ha dado lugar a un nuevo periodo de represión contra cualquiera que exprese una postura crítica hacia el régimen. Se interponen demandas contra nosotros por noticias y artículos publicados en nuestro periódico impreso y en nuestro sitio web. Nuestro sitio web es frecuentemente objeto de órdenes de bloqueo de acceso.
>
> 
> **FATIH POLAT**
> periódico Evrensel, Turquía

En Paraguay ocurrió algo parecido. Las encuestas pronosticaban un cambio, pero el gobernante Partido Colorado, que ha dominado la política paraguaya durante décadas, ganó cómodamente las elecciones de abril de 2023 e incluso aumentó su representación parlamentaria y su participación en las **gobernaciones departamentales**.

La votación fue aparentemente limpia, aunque el tribunal electoral **rechazó** las solicitudes de estatus de observador nacional de dos grupos nacionales de la sociedad civil, Alma Cívica y Decidamos. Pero en la campaña prevalecieron los ataques personales, las acusaciones de corrupción y las narrativas antiderechos sobre el debate informado sobre alternativas de políticas. También estuvo plagada de **desinformación**, como encuestas de opinión falsas, teorías conspirativas y narrativas de fraude electoral, que obligaron a la sociedad civil y a los medios digitales a realizar intensos **esfuerzos** de verificación de datos e identificación de desinformación.

> Los ganadores de las elecciones son antiderechos, autodefinidos como "provida", están en contra del matrimonio igualitario, de los derechos sexuales y reproductivos y atacan todos los temas relativos a la agenda de género. Por eso creo que a la sociedad civil nos esperan años muy duros. Vamos a tener que hacer esfuerzos para unirnos y articular acciones entre los distintos sectores de la sociedad civil, sobre todo los que trabajamos temas de derechos.
>
> 
> **MARTA FERRARA**
> Semillas para la Democracia, Paraguay

Los oficialismos también conservaron el poder en Nigeria y Sierra Leona. En Nigeria, el descontento popular, sobre todo entre la juventud, hizo que por primera vez emergiera un candidato creíble de un tercer partido. Sin embargo, el partido gobernante, Congreso de Todos los Progresistas, se deshizo de la amenaza en unas elecciones que tuvieron la participación más baja de la historia democrática del país y estuvieron empañadas por numerosas irregularidades. Los dos principales candidatos derrotados rechazaron los resultados. Con apenas el 37% de los votos emitidos, el ganador, Bola Tinubu, recibió un mandato débil.

En Sierra Leona, en comparación, las elecciones dieron una clara victoria al presidente en funciones y al partido gobernante. El candidato que salió segundo **alegó fraude**, como es habitual entre los

derrotados, pero los observadores internacionales y de la sociedad civil señalaron incoherencias en el recuento y falta de transparencia en el funcionamiento de la comisión electoral. No obstante, es posible que las irregularidades no fueran tan marcadas como para afectar al resultado, y la sociedad civil destacó importantes avances en materia de integridad electoral. Pero el intento de golpe de Estado llevado a cabo por militares disidentes en noviembre demostró que los cimientos de la democracia pueden seguir tambaleándose. A modo de salvaguarda, el gobierno debe ampliar, en vez de restringir, las prácticas y principios democráticos.

> Sierra Leona dio la bienvenida a observadores electorales internacionales que proporcionaron una evaluación imparcial y promovieron la transparencia. La sociedad civil desempeñó un papel crucial en la educación de votantes, la supervisión del proceso electoral y la defensa de reformas electorales.
>
> 
> **JOHN CAULKER**
> Fambul Tok, Sierra Leona

El cambio se frustró de forma más flagrante en Tailandia, donde el partido que ganó la elección fue excluido del gobierno. El partido progresista y juvenil Move Forward ("Hacia Adelante") hizo campaña con un programa de cambio, prometiendo limitar el poder del rey y los militares e introducir reformas económicas y sociales. Mucha gente se sintió atraída por esta propuesta, pero los senadores designados por los militares impidieron que el partido ganador liderara la formación del gobierno. En cambio, apoyaron una incómoda coalición entre un partido dos veces depuesto por golpes militares y partidos alineados con los militares. Mucha gente que había depositado sus expectativas en el proceso electoral se sintió decepcionada. El hecho de que las elecciones revelaran un apetito de participación activa en busca de renovación, sin embargo, continúa ofreciendo cierta esperanza.

> La gente no solamente votó, sino que también participó en el proceso de observación. La gente comprendió que su participación era importante y no dejó que fueran solamente los funcionarios públicos los que informaran de los resultados, sin ningún tipo de control. Ha surgido una nueva cultura política y no hay vuelta atrás: ella permanecerá independientemente de los resultados.
>
> 
> **YINGCHEEP ATCHANONT**
> Internet Law Reform Dialogue, Tailandia

Maldivas fue la excepción del año. En la segunda vuelta presidencial realizada en septiembre, el oficialista Ibrahim Mohamed fue derrotado por un candidato opositor, Mohamed Muizzu. Previo a la elección, la sociedad civil llamó la atención sobre la disparidad de condiciones. La Comisión Electoral carecía de independencia y el gobierno ponía obstáculos judiciales a los partidos de la oposición. La cobertura mediática **parecía** propaganda gubernamental y el gobierno intentó comprar a los votantes con promesas de entregarles tierras.

Pero, aun así, el presidente en funciones perdió, lo cual ocurrió por cuarta vez consecutiva. El cambio en la cúspide supuso un giro en las relaciones internacionales del país, ya que el nuevo presidente es más cercano a China que su predecesor, que era más favorable a la India. La campaña se centró en esta cuestión, y en cambio se prestó muy poca atención al hecho de que ninguno de los candidatos ofrecía un plan para mejorar la calidad del espacio cívico y la democracia o trabajar de forma significativa con la sociedad civil.

LEER MÁS:

- LAS ESPERANZAS DE RENOVACIÓN SE DESVANECEN EN TURQUÍA EN
- PARAGUAY: EL CAMBIO QUE NO FUE
- TAILANDIA: EXIGENCIAS DE CAMBIO DEMOCRÁTICO FRUSTRADAS EN
- TAILANDIA: ES LA HORA DE LA DEMOCRACIA EN
- ELECCIONES EN NIGERIA: LO MISMO DE SIEMPRE EN
- UNA NUBE SE CIERNE SOBRE LAS ELECCIONES EN SIERRA LEONA EN
- ELECCIONES EN MALDIVAS: ¿Y AHORA QUÉ PARA LA SOCIEDAD CIVIL? EN

La democracia erosionada desde dentro

El Salvador ofrece el ejemplo latinoamericano más claro de la erosión desde dentro que provoca la muerte lenta de la democracia. Las señales de peligro aparecen cuando líderes elegidos democráticamente, a menudo populistas, concentran el poder cooptando las instituciones, recortando las libertades cívicas y las garantías de derechos humanos y atacando a la sociedad civil, a los medios de comunicación independientes y a la oposición política.

El Salvador se inclinó peligrosamente hacia el autoritarismo cuando su popular presidente, Nayib Bukele, intensificó sus ataques contra los frenos y contrapesos institucionales antes de las elecciones generales celebradas en febrero de 2024.

Bukele ganó la reelección por goleada, aunque nunca debería haber sido candidato. Los presidentes salvadoreños tienen un límite de un solo mandato; sin embargo, él se presentó para la reelección gracias a maniobras judiciales violatorias de la Constitución. Y la elección estuvo lejos de ser justa. Se celebró bajo un prolongado estado de excepción que conllevaba la suspensión de las libertades de asociación y reunión pacífica y de las garantías procesales.

Bajo el estado de excepción aumentaron las agresiones contra periodistas, y muchos se vieron obligados a exiliarse. En abril, el medio de investigación El Faro se trasladó a Costa Rica. La perspectiva de represalias ha redundado en autocensura generalizada. Altos funcionarios públicos y trolls de las redes sociales han vilipendiado sistemáticamente a las voces críticas, algo que también disuade a las empresas de anunciarse en medios independientes, comprometiendo aún más la sostenibilidad financiera de las pocas fuentes informativas que permanecen en pie. El presidente Bukele, en cambio, pudo abusar de los medios y recursos estatales a su antojo durante la campaña.

> Algunas OSC denuncian la falta de un ambiente libre para opinar, pero estas denuncias no han surtido mayor efecto. La libertad de expresión ha continuado degradándose. Un país sin libertad de expresión, donde se violan derechos humanos y las personas defensoras de derechos humanos son perseguidas, no es otra cosa que una dictadura.
>
> 
> **CAROLINA AMAYA**
> periodista independiente, El Salvador

El activismo de la sociedad civil ha enfrentado acusaciones, procedentes de seguidores del partido gobernante, de mantener vínculos con las pandillas, y ha sido crecientemente criminalizado. En noviembre, grupos de la sociedad civil salvadoreña **afirmaron** que atravesaban una de las peores situaciones desde el final de la guerra civil que se extendió entre 1980 y 1992, debido al acoso policial, la censura y el cierre de canales de diálogo con el gobierno.

Pero no hubo fraude electoral: la mayoría de la gente optó por recompensar en las urnas la aparentemente exitosa “guerra contra las pandillas” de Bukele por haberles dado más seguridad, a pesar de sus elevados costos en materia de derechos humanos.

> Tras la votación, oficialmente estamos entrando en dictadura. En estos tiempos las dictaduras no son como las de los años ‘70 y ‘80. En muchos casos como este, no resultan de golpes militares, sino del acaparamiento del poder por parte de líderes que inicialmente son electos democráticamente. Y las tácticas también han cambiado, son bastante más sutiles. Esta democracia se muere por deterioro del espacio cívico.
>
> 
> **CÉSAR ARTIGA**
> Llamado Global de Acción contra la Pobreza, El Salvador

Los líderes autoritarios populares plantean un desafío monumental para la democracia. Cuando están en la cresta de la ola, saboreando el

éxito de sus políticas, la gente puede estar dispuesta a recompensarlos con un poder abrumador. Pero habrá de llegar el momento en que la gente querrá un cambio, y le resultará difícil conseguirlo porque el líder autocrático al que antes apoyaron habrá desmantelado las instituciones democráticas y las habrá puesto al servicio de su perpetuación en el poder.

Otro país latinoamericano plagado de problemas de seguridad, Ecuador, celebró elecciones presidenciales en 2023. Las instituciones gubernamentales ecuatorianas están plagadas de corrupción y se han mostrado ineficaces frente al **crimen organizado** y la violencia resultante.

Las elecciones, razonablemente libres y competitivas, se celebraron en un contexto de creciente violencia en el que fueron **asesinados** varios candidatos, entre ellos el aspirante presidencial anticorrupción Fernando Villavicencio. El ganador de la segunda vuelta, Daniel Noboa, fue elegido para gobernar por un breve período de 18 meses, destinado a completar el mandato de su predecesor, que llegó a su fin cuando éste disolvió el Congreso para evitar su destitución. La inseguridad fue uno de los temas clave de la campaña, en la que Noboa ofreció un enfoque fuertemente securitario, haciendo hincapié en la respuesta policial y militar y en la imposición de severos penas y castigos.

Un año y medio es muy poco tiempo para abordar la violencia y la inseguridad, así como otros problemas complejos, y Noboa carece de mayoría legislativa, al igual que su predecesor. Pero ha utilizado otras herramientas para afirmar su poder. Poco después de asumir el cargo, Noboa decretó el "estado de conflicto armado interno" para permitir a las fuerzas armadas combatir a las bandas de narcotraficantes tratándolas como objetivos terroristas, e impuso un toque de queda de 60 días. Firmó varios acuerdos con Estados Unidos, entre ellos uno para conceder inmunidad a los militares estadounidenses. Propuso construir más prisiones y convocó a un **referéndum** constitucional, que se celebraría en abril, sobre cuestiones tales como la extradición, la creación de tribunales especializados y el rol del ejército en la lucha contra el crimen organizado, además de una consulta popular para modificar ciertas leyes de modo de aumentar las penas por diversos



Foto de Martín Bernetti/AFP vía Getty Images.

El candidato presidencial Christian Zurita, del partido Construye, vota bajo fuertes medidas de seguridad en Quito, Ecuador, el 20 de agosto de 2023.

delitos graves. A los **cien días** de su mandato, Noboa sigue gozando de índices de aprobación superiores al 80%.

Es demasiado pronto para decir si Noboa seguirá el camino de Bukele, pero el "modelo Bukele" es popular en Ecuador y varias de las primeras medidas de Noboa se parecieron a las de Bukele a pesar de las diferencias en los contextos de ambos países. Es posible que en las decisiones que Noboa ha tomado hasta la fecha haya un importante componente de cálculo electoral.

> Con una ciudadanía cada vez más preocupada por la inseguridad, el presidente respondió a la violencia desatada con la toma de cárceles mediante la declaración del estado de excepción y la imposición de un toque de queda por 60 días. Es posible que con estas medidas también buscara aumentar su popularidad y mejorar la evaluación de su gobierno en vista de las elecciones del próximo año, en las que ha manifestado la intención de participar. La posición del gobierno ha sido replicada por los principales medios de comunicación y aparentemente refrendada por amplios sectores de la opinión pública. Frente a ello la oposición política prácticamente no se ha manifestado.



MAURO CERBINO
FLACSO Ecuador

Guatemala: razones para la esperanza

Guatemala, un régimen híbrido cuyos tenues rasgos democráticos casi habían desaparecido, ofreció motivos de esperanza cuando tomó la dirección opuesta a la de su vecino El Salvador. Se trató de una gran victoria para la sociedad civil.

Con su Estado cooptado por élites corruptas y autointeresadas, Guatemala celebró elecciones el 25 de junio en un contexto de gran escepticismo público. Pero ocurrió lo inesperado: pasó a la segunda vuelta Bernardo Arévalo, un candidato presidencial ajeno a la clase política y líder del Movimiento Semilla, un nuevo partido nacido de las masivas protestas anticorrupción de 2015. Las élites atrincheradas, a las que los guatemaltecos llaman "el pacto de corruptos", orquestaron múltiples maniobras judiciales para intentar anular los resultados y excluir a Arévalo de la segunda vuelta.

A través de manifestaciones públicas permanentes, la ciudadanía presionó a las instituciones clave para que aseguraran que Arévalo pudiera presentarse a la segunda vuelta del 20 de agosto, que ganó por amplia mayoría. Durante el prolongado paréntesis entre las elecciones y la toma de posesión, las élites siguieron intentando impedir por todos los medios la investidura de Arévalo, pero la ciudadanía sostuvo la protesta durante meses y no bajó la guardia hasta que lo vio tomar posesión de su cargo.

> El solo hecho de que se llevara a cabo la elección fue un hito en sí mismo. Que, además, el candidato ganador tuviera una clara perspectiva democrática y progresista lo hizo aún más remarcable. La victoria de Bernardo Arévalo representa el repudio de la sociedad a la élite política corrupta. Nos encontrábamos ante una encrucijada histórica, entre un pasado autoritario y un futuro posible de construcción de un Estado democrático.
> El nuevo gobierno deberá enfrentar a una de las oligarquías más conservadoras y atrasadas del continente, responsable del delito de genocidio. Quitarles sus privilegios a estos sectores no será tarea fácil. El continuo acompañamiento y la vigilancia de la comunidad internacional serán sumamente necesarios.



JORGE SANTOS
Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala

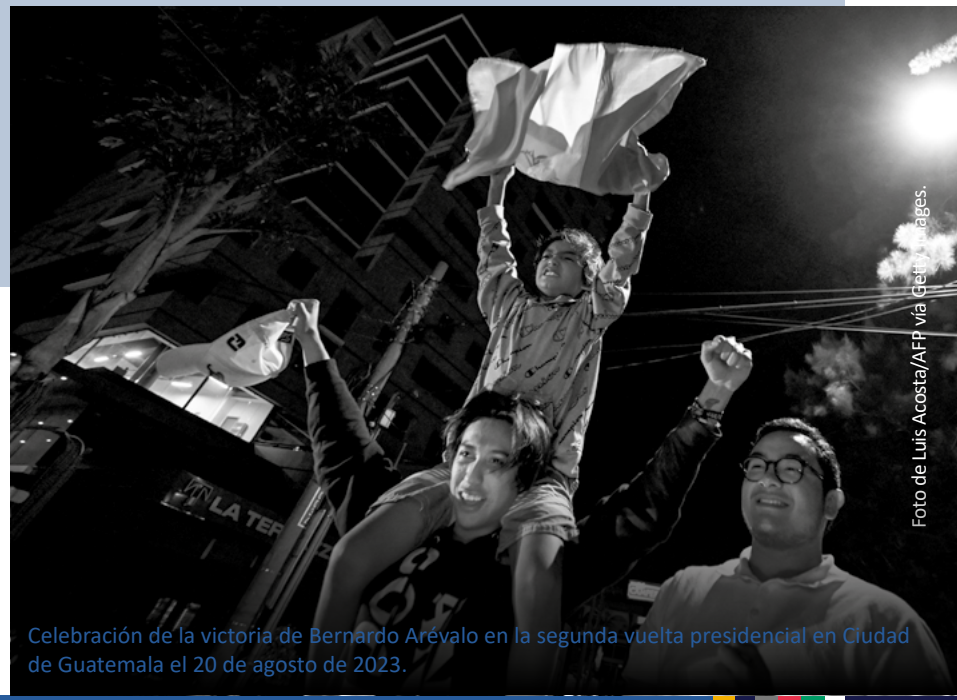


Foto de Luis Acosta/AFP vía Getty Images.

Celebración de la victoria de Bernardo Arévalo en la segunda vuelta presidencial en Ciudad de Guatemala el 20 de agosto de 2023.

LEER MÁS:

- EL SALVADOR: VICTORIA DEL AUTORITARISMO POPULAR
- ECUADOR: LO QUE ESTÁ EN JUEGO EN LA SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL
- ECUADOR: ¿EL FIN DE LA INESTABILIDAD?
- GUATEMALA SE AFERRA A LA PROMESA DEMOCRÁTICA
- GUATEMALA: EL CAMBIO AL ALCANCE DE LA MANO
- GUATEMALA ANTE LA OPORTUNIDAD DE UN NUEVO COMIENZO

POLARIZACIÓN Y AUGE DE LA EXTREMA DERECHA

En 2023, Europa fue el epicentro del fenómeno de los políticos oportunistas que utilizan estrategias de guerra cultural para sacar provecho de la polarización ▶VÉASE CAPÍTULO. En elección tras elección, fuerzas nacionalistas y populistas promovieron múltiples formas de negacionismo -del cambio climático, de la ciencia, del racismo sistémico, de la diversidad de género y de las realidades de la migración- para mejorar sus perspectivas electorales.

Fuerzas nacionalistas de derecha llevan largo tiempo en el poder en Hungría y, hasta hace poco, también en Polonia. El año 2022 trajo la victoria de los Hermanos de Italia, un partido surgido del movimiento neofascista, cuya líder, Giorgia Meloni, se convirtió en primera ministra de Italia. Los Demócratas Suecos, antaño en los márgenes de la política, quedaron segundos en las **elecciones suecas** de 2022 y el gobierno resultante depende de su apoyo.

La tendencia continuó en 2023, un año en que diversos partidos de extrema derecha sintonizaron con las preocupaciones de la gente y explotaron sus ansiedades frente a las dificultades económicas y el cambio social, consiguiendo en consecuencia avances electorales. En todos los lugares donde ganaron espacio, trajeron malas noticias para los grupos excluidos -migrantes y refugiados, mujeres, personas LGBTQI+, minorías religiosas- y para la sociedad civil que defiende sus derechos, además de nuevos reveses para la acción por el clima.

Tras las elecciones de abril en Finlandia, el Partido Finlandés se hizo con el control de siete ministerios y situó su retórica antiinmigrante en el centro de las promesas del nuevo gobierno de recortar drásticamente la financiación de la asistencia social como parte de un paquete de recortes del gasto público. Se esperaba también que el cambio de gobierno tuviera repercusiones internacionales por efecto de drásticos cambios en las prioridades de financiación del desarrollo internacional, que, como **señaló** la plataforma nacional de la sociedad civil finlandesa Fingo, pasaron de inmediato a excluir los derechos reproductivos.



Foto de Carl Court/Getty Images.

Protesta en reacción a la victoria electoral del líder de extrema derecha Geert Wilders en Utrecht, Países Bajos, el 23 de noviembre de 2023.

El Partido Popular Suizo (SVP), de extrema derecha y euroescéptico, también dominó con su retórica antiinmigración la campaña para las elecciones suizas de octubre. Obtuvo el **28,6%** de los votos y 62 de los 200 escaños del Consejo Nacional, la cámara baja del Parlamento suizo. Habiendo aprendido de la experiencia de otros países, la sociedad civil suiza trató de transmitir la necesidad de que los partidos no extremistas trabajaran juntos y limitan la influencia de la extrema derecha en el gobierno.

> Los populistas de derecha suponen una verdadera amenaza cuando otros partidos satisfacen sus demandas, una tendencia que ya se observa en países como Alemania. Sería un gran error que los partidos conservadores respondieran a los resultados electorales alineándose aún más con el SVP. El SVP debe ser tratado como un outsider radical de modo que continúe siendo una minoría, aunque numerosa, ya que recibió el 28% de los votos. Los liberales suizos deben distanciarse del SVP, que a menudo oculta su naturaleza populista y extremista tras una fachada conservadora.



LEA SCHLENKER
Operación Líbero, Suiza

En Holanda, el populista rebelde de extrema derecha Geert Wilders quedó primero en las elecciones de noviembre. Aunque el largo proceso de formación de gobierno aún **continúa**, podría convertirse en el próximo primer ministro de su país. Cualquier papel que desempeñe en el gobierno sólo podría significar nuevos ataques a los derechos de los inmigrantes y las minorías religiosas.

> El tema clave de Wilders, el que le ha hecho más popular, tiene que ver con las personas inmigrantes y solicitantes de asilo. Wilders quiere cerrar el sistema de asilo y no permitir la entrada de nuevos solicitantes. De este modo, los Países Bajos incumplirían las obligaciones que les impone el derecho internacional de asistir a las personas refugiadas. Pedimos a los posibles socios de coalición que defiendan la reputación internacional de Holanda.



NIELS HOOGERHEIJDE
Partos, Países Bajos

Una regresión similar se produjo en Eslovaquia, donde las elecciones de septiembre propiciaron el regreso del ex primer ministro Robert Fico. Fico, un populista nacionalista del partido Smer, supuestamente de izquierda, se vio obligado a dimitir en 2018 en medio de masivas protestas anticorrupción desencadenadas por el asesinato del joven periodista de investigación Ján Kuciak y su pareja, Martina Kušnírová. Famoso por sus virulentos ataques contra los derechos de las personas LGBTQI+ y el vilipendio de la sociedad civil, Fico prometió adoptar una línea prorrusa y revertir el apoyo a Ucrania. Tras una campaña plagada de discurso de odio y teorías conspirativas, formó un **gobierno de coalición** tripartito que incluyó al partido de izquierda Hlas ("Voz") y al ultranacionalista de extrema derecha Partido Nacional Eslovaco.

En Austria, que celebra elecciones parlamentarias en 2024, y en Alemania, donde habrá elecciones regionales en el este del país, el **Partido de la Libertad de Austria** (FPÖ) y **Alternativa para Alemania** (AfD) están subiendo en las encuestas. Fuertemente antiinmigración y antimusulmanes, estos partidos también se enzarzan en cuestiones de guerra cultural, sobre todo en materia de derechos de género. A partir de la pandemia, cada vez más han buscado sacar partido de la ansiedad económica de la gente y las preocupaciones legítimas de quienes han sido dejados atrás, como los agricultores movilizados contra los recortes de las subvenciones agrícolas.

A principios de 2024 se reveló que en una **conferencia secreta** celebrada en Alemania en noviembre, políticos de extrema derecha, líderes empresariales e incluso algunos miembros de partidos conservadores tradicionales como la Unión Demócrata Cristiana, el partido de Angela Merkel, debatieron planes de "re-emigración forzosa", un eufemismo para referirse a la deportación de solicitantes de asilo, extranjeros con permiso de residencia e incluso ciudadanos alemanes considerados "no asimilados". También estuvo presente el conocido activista austríaco de extrema derecha Martin Sellner.

Fue un llamado de atención. La gente salió a las calles a protestar en numerosas ciudades alemanas, lo cual **inspiró a los austríacos** a protestar en Viena y otras ciudades de su país. Los grupos de manifestantes fueron bastante diversos, e incluyeron a variados grupos de la sociedad civil, diferentes partidos políticos, iglesias y sindicatos, unidos para resistir ante el resurgimiento de la extrema derecha.



Foto de Tomás Cuesta/Getty Images.

El candidato presidencial de extrema derecha Javier Milei, de La Libertad Avanza, levanta una motosierra, símbolo de su promesa de reducir el tamaño del Estado, en un acto en Buenos Aires, Argentina, el 25 de septiembre de 2023.

> En las dos últimas décadas, los Estados occidentales han invertido miles de millones en el sur global para fomentar la democracia, facilitar la consolidación de la paz y desactivar la violencia que supone una amenaza para los intereses occidentales. Sin embargo, la mayor amenaza actual la representan los movimientos de extrema derecha que operan dentro de los propios países occidentales. Esta situación exige un cambio urgente de enfoque. Dado el carácter internacionalmente interconectado de los grupos violentos de extrema derecha, nuestra respuesta también debe estar globalmente interconectada.



PETER ANHALT y MAXIMILIAN RUF
Red de Prevención de la Violencia, Alemania

Al otro lado del mundo, en Sudamérica, la extrema derecha irrumpió en mayo en el proceso de redacción de la Constitución chilena, y un libertario de derecha se alzó con la presidencia argentina en noviembre.

En Chile, la extrema derecha obtuvo el primer puesto en la votación para constituir el órgano encargado de elaborar una nueva Constitución. El Partido Republicano, liderado por el derrotado candidato presidencial José Antonio Kast, obtuvo el primer puesto en la votación general y en el 70% de los municipios, con lo que se hizo con poder de veto sobre el proceso. Esta elección se produjo en el marco de un proceso constituyente tradicional a puertas cerradas, después de que un primer intento de sustituir la Constitución legada por la dictadura por una alternativa progresista y con perspectiva de derechos, elaborada mediante un proceso inclusivo y participativo, fuera rechazado en referéndum. Sin embargo, el nuevo borrador también fue **rechazado** en un referéndum celebrado en diciembre, con lo que el proceso volvió a fojas cero.

En Argentina, la polarización alcanzó un nivel sin precedentes en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, ganadas por el libertario Javier Milei, un outsider político al frente del recientemente fundado partido de extrema derecha La Libertad Avanza, con un programa radical, libertario y libremercadista a ultranza.

> En términos generales, las instituciones democráticas en Argentina funcionan. A pesar de las denuncias de la oposición sobre el sistema electoral, las elecciones se desarrollaron con normalidad e incluso los resultados se conocieron muy rápido. En cambio, sí hemos visto un retroceso enorme a nivel de debate público. Hay mucha intolerancia y violencia discursiva. Partidarios de las distintas opciones políticas casi no pueden dialogar. Hay mucha agresividad en las redes sociales. Todas estas son señales de alerta de mediana intensidad que, si no son abordadas, abonan el terreno para salidas más violentas y autoritarias.



YANINA WELP
Centro Albert Hirschman sobre la Democracia



Foto de Carla Carniel/Reuters vía Gallo Images.

En reacción a los ataques contra las sedes del gobierno federal por partidarios del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, la gente se moviliza en defensa de la democracia en San Pablo, Brasil, el 9 de enero de 2023.

Milei, un economista iracundo que había entrado en política apenas dos años antes, hizo campaña con dos promesas: despojar de sus privilegios a lo que caracterizó como una clase política parasitaria y, en una retórica similar a la de Trump, "volver a hacer grande a Argentina". Según su narrativa, las necesarias medidas económicas de shock, que incluirían una estricta austeridad fiscal, perjudicarían a las élites políticas y no a la "gente común" a la que decía representar.

Aunque su filosofía libertaria lo enfrentaba al conservadurismo tradicional, Milei hizo un matrimonio de conveniencia con la derecha socialmente conservadora para ganar las elecciones, amenazando los avances realizados en materia de derechos sexuales y reproductivos y transversalización de la perspectiva de género en las políticas públicas.

Pero en ninguna parte de la región la extrema derecha mostró una cara más desagradable que en Brasil. Una semana después de asumir su cargo el 1º de enero de 2023, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva enfrentó una insurrección de los seguidores descontentos de su predecesor de extrema derecha, Jair Bolsonaro. Aunque Bolsonaro no parece haber participado personalmente en la organización de la invasión de las sedes de las principales instituciones federales de Brasil, dejó preparado el terreno al sembrar desinformación, avivar las dudas sobre la integridad de las elecciones y demonizar a sus oponentes, haciendo que sus partidarios vieran a su gobierno como ilegítimo. Los ataques evidenciaron una profunda división entre los brasileños en torno de los principios básicos de la democracia. Se trata de una división que está lejos de saldarse, como volvió a quedar en evidencia cuando una **gran manifestación** se movilizó en febrero de 2024 en apoyo a un Bolsonaro asediado por acusaciones policiales.

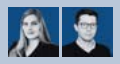
El consenso democrático se ha erosionado y las fuerzas desatadas por Bolsonaro, fuera de control, amenazan con convertirse en una presencia duradera en la vida política de Brasil.

Revés para la extrema derecha en Polonia y España

La extrema derecha europea también sufrió reveses en 2023. El mayor de ellos se produjo en Polonia en octubre, cuando a pesar de los esfuerzos por inclinar las elecciones a su favor, el partido nacionalista de derecha Ley y Justicia (PiS) perdió la mayoría. Aunque quedó primero, no pudo formar gobierno. Tres grupos de la oposición se comprometieron a dejar a un lado sus diferencias y formar una administración conjunta para poner fin a ocho años de gobierno del PiS y, con él, a sus ataques contra la independencia judicial, el Estado de derecho, la sociedad civil y los derechos de las mujeres y las personas LGBTQI+.

El cambio debió mucho a la sociedad civil, cuyo apoyo el nuevo gobierno seguirá necesitando para restablecer las libertades cívicas y las salvaguardias democráticas, al tiempo que se enfrenta a un presidente alineado con el PiS y a una maquinaria administrativa y judicial repleta de funcionarios leales al PiS.

> La sociedad civil desempeñó un papel crucial para garantizar la imparcialidad de las elecciones. Varias organizaciones impartieron una amplia formación a miles de personas que se ofrecieron de voluntarias para convertirse en observadores electorales, capacitándolas para monitorear las elecciones y garantizar el cumplimiento de la ley. La sociedad civil educó a los votantes sobre participación electoral y organizó varias campañas de gran alcance para fomentar la participación, apuntando especialmente a las mujeres y la juventud, lo que resultó en una participación electoral de 74,4%, un récord para Polonia.



SONIA HORONZIAK y FILIP PAZDERSKI
Instituto de Asuntos Públicos, Polonia

Otro revés para las fuerzas de la regresión se produjo en España, donde el partido de extrema derecha Vox perdió más de la mitad de sus escaños en las elecciones anticipadas de julio. La feroz campaña de Vox contra los derechos humanos resultó contraproducente y le acarreó importantes pérdidas.



Foto de Thomas Coex /AFP vía Getty Images.

Cartel que representa al candidato socialista con la palabra “Adelante” y a los candidatos conservador y de extrema derecha con la palabra “Atrás” durante la campaña electoral en Madrid, España, julio de 2023.

> La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+.



EMILIO DE BENITO
Colectivo LGTB+ de Madrid, España

Contra todo pronóstico, Vox no ingresó al gobierno junto con el Partido Popular, cuya victoria sobre el Partido Socialista (PSOE) fue mucho más ajustada de lo esperado. Al no haber ningún otro partido dispuesto a apoyar a un gobierno que incluyera a Vox, fue el PSOE el que acabó liderando el proceso de formación de una nueva coalición de gobierno.

Pero los peligros siguen acechando a la vuelta de la esquina, ya que Vox espera sacar provecho si el gobierno de minoría liderado por el PSOE, apuntalado por varios partidos independentistas regionales, acaba deshaciéndose.

LEER MÁS:

- FINLANDIA SE INCLINA HACIA LA EXTREMA DERECHA EN
- HOLANDA, ÚLTIMO PAÍS EN INCLINARSE A LA DERECHA EN
- ESLOVAQUIA: LAS ELECCIONES APUNTAN A UN GIRO REGRESIVO EN
- CHILE: LA NUEVA CONSTITUCIÓN, EN MANOS DE LA EXTREMA DERECHA
- ARGENTINA SE ZAMBULLE EN LO DESCONOCIDO
- BRASIL: ¿ES POSIBLE VOLVER A METER EN LA BOTELLA AL GENIO DE LA EXTREMA DERECHA?
- ESPERANZA DE CAMBIO EN POLONIA EN
- LA EXTREMA DERECHA ESPAÑOLA, FRENADA EN SECO

QUÉ ESPERAR EN 2024

Desafíos de la inteligencia artificial

Aproximadamente la mitad de la población del mundo tendrá la oportunidad de votar en 2024, que será por lo tanto el **mayor** año electoral de la historia. Algunos de los países más poblados del planeta celebrarán elecciones: India, Estados Unidos, Indonesia, Pakistán, Bangladesh, Rusia y México. Las de Rusia tendrán apenas la apariencia superficial de elecciones, pero en las elecciones competitivas es mucho lo que estará en juego. Es de temerse que en ellas se despliegue el **potencial** de la inteligencia artificial (IA) para causar estragos, que ya ha empezado a manifestarse.

En la reñida contienda **eslovaca**, es posible que unas grabaciones de audio falsas difundidas días antes de la votación hayan tenido un impacto decisivo. El deepfake (literalmente, “falsedad profunda”) generado mediante IA imitaba la voz del líder del partido Eslovaquia Progresista hablando de tácticas de manipulación electoral. Tanto él



Foto de Willy Kurniawan/Reuters vía Gallo Images.

Cartel publicitario con los avatares del candidato presidencial Prabowo Subianto y su compañero de fórmula en Yakarta, Indonesia, enero de 2024.

como la periodista con quien supuestamente hablaba denunciaron inmediatamente que el audio era falso, pero la desmentida fue publicada durante la veda de 48 horas que precede a la apertura de las urnas, lo cual dificultó su difusión. Por estar en formato de audio, el deepfake sacó provecho de una laguna en la normativa de Meta, según la cual solamente los videos falsos infringen las normas de la plataforma.

En **Estados Unidos** se produjeron abusos similares de la IA con fines electorales incluso antes de que comenzara la verdadera temporada electoral. En enero, antes de las primarias de New Hampshire, una llamada robotizada generada por IA que reproducía la voz del presidente Joe Biden instó a los votantes a no acudir a las urnas y a "guardarse" el voto para las elecciones generales.

Y no sólo los malhechores anónimos utilizan herramientas de IA; también lo hacen las campañas oficiales. En **India**, figuras respetadas y fallecidas tiempo atrás han sido resucitadas por la IA para elogiar a los políticos en campaña. En **Indonesia**, el candidato ganador, un general retirado acusado de violaciones graves de derechos humanos, utilizó un avatar generado por IA para cambiar su imagen por la de un "abuelito simpático" y convertirse en una estrella de TikTok que cautivó a los votantes de la Generación Z. En **Pakistán**, activistas políticos opositores utilizaron IA para crear mensajes del ex primer ministro Imran Khan, actualmente en prisión.

En enero, ChatGPT publicó **nuevas normas** que prohíben el uso de la herramienta para hacer campaña política. Esto incluye la prohibición de crear imágenes de personas reales, incluidos políticos. Está claro que la regulación va muy por detrás de los acontecimientos, y no parece que las empresas de tecnología estén preparadas para hacer frente a los desafíos de este super año electoral.

Entre los problemas que la IA **plantea** a la integridad de las elecciones se cuentan las campañas de desinformación alimentadas por videos falsos y la micro focalización de votantes mediante la explotación de sus datos. La sociedad civil está trabajando para hacer frente a estos problemas -a veces en colaboración con los gobiernos, a veces por su cuenta- mediante una **combinación de tácticas**. Entre ellas se cuentan el apoyo al periodismo local, la realización de campañas de alfabetización mediática, el chequeo de datos, el etiquetado de contenidos en redes sociales, el desarrollo de estrategias de contra mensaje, el mejoramiento de la ciberseguridad para elecciones y campañas y el cambio de los algoritmos de las recomendaciones. La sociedad civil también reclama una regulación internacional más efectiva de la IA ▶**VÉASE CAPÍTULO**.

Inicios problemáticos

El 7 de enero acudió a las urnas Bangladesh, un país con espacio cívico cerrado. En las elecciones, la oficialista Liga Awami retuvo el poder y la primera ministra, Sheikh Hasina, inició su cuarto mandato consecutivo. El resultado nunca estuvo en duda, ya que el principal partido de oposición se negó a presentarse a los comicios a raíz de fundadas preocupaciones sobre la integridad electoral. A efectos prácticos, Bangladesh ha quedado convertido en un Estado de partido único.

La votación estuvo precedida por una intensa represión preelectoral en la que las autoridades acosaron, criminalizaron y encarcelaron a miles de activistas de la oposición y respondieron a las protestas con **violencia**. La falta de opciones electorales se reflejó en unas papeletas completadas con los nombres de falsos candidatos de oposición y la caída en picada de la participación.

> El espacio para la sociedad civil en Bangladesh está cerrado. Las OSC sólo son libres de operar mientras no desafíen al sistema gobernante. Las libertades de expresión y reunión pacífica están siendo restringidas y violadas por la fuerza. Las instituciones estatales, extremadamente politizadas, están siendo utilizadas como una extensión del partido gobernante, una tendencia que muchos sostienen que podría conducir a la materialización de un Estado totalitario. Han sido unas elecciones unilaterales en las que ya sabíamos quién iba a ser el ganador.
>
> 
> **DR MUBASHAR HASAN**
> académico y activista por la justicia social, Bangladesh

Un mes después, **Pakistán** -un país con espacio cívico represivo- celebró las que posiblemente fueran sus elecciones **menos limpias** desde la década de 1980. El político más popular, Imran Khan, había sido encarcelado bajo acusaciones inventadas. Las autoridades hicieron todo lo posible por bloquear los avances de su partido, y la jornada electoral se vio empañada por la violencia. A pesar de todo, el partido de Khan consiguió el mayor número de escaños y, en respuesta, los dos partidos del establishment, que obtuvieron el segundo y tercer lugares, anunciaron rápidamente una coalición, instalando un gobierno que probablemente no responderá al descontento expresado por muchos votantes ante el poder militar, las dinastías políticas y los conflictos económicos.

Luego fue el turno de Indonesia y sus más de 200 millones de votantes registrados. El presidente saliente, Jokowi, socavó el Estado de derecho para lograr que su hijo, Gibran Rakabuming Raka, se convirtiera en el compañero de fórmula de Prabowo Subianto y ganara la elección. La represión estatal de los críticos del gobierno, periodistas, activistas y académicos se intensificó antes de la votación. Los funcionarios del gobierno, del presidente para abajo, usaron y abusaron de los recursos estatales para respaldar la campaña oficial. Obtuvieron el resultado que querían.

> El declive democrático ha sido evidente en los últimos cinco años bajo el gobierno de Jokowi, y es poco probable que la victoria de Prabowo mejore la situación. La victoria de Prabowo representa el peor escenario posible para el futuro de los derechos humanos en Indonesia. No solamente carece de perspectiva y compromiso con los derechos humanos, sino que además estuvo implicado en el secuestro de activistas en 1998, cuando era comandante de las fuerzas militares especiales de Indonesia.



RIZKY ARGAMA y VIOLLA REININDA
Centro de Estudios de Derecho y Política de Indonesia

Cabe esperar mucho más de lo mismo, porque las condiciones que permiten la competencia libre y justa están siendo atacadas en muchos países que pronto celebrarán elecciones, como **India**, **México** y **Senegal**.

Cuando puedan votar libremente, en contextos de gran ansiedad y un futuro incierto, muchos votantes insatisfechos con el actual estado de cosas seguirán optando por alternativas que les sean presentadas como radicales. Es de esperar que muchas de las elecciones de 2024 se salden con un colapso del apoyo al oficialismo y al establishment político, y que políticos temerarios con respuestas simplistas y sensacionalistas para problemas complejos se hagan con el poder. Una vez en el poder, seguramente decepcionarán a la ciudadanía y atacarán a la sociedad civil. Aún si no ganan, enrarecerán clima político.

La sociedad civil seguirá presionando para que los gobiernos reacios a hacerlo convoquen elecciones, para que las elecciones se celebren en condiciones libres y justas, para que la gente tenga la información que necesita para elegir con conocimiento de causa, para que los votos se cuenten correctamente, para que los perdedores acepten su derrota y para que los ganadores gobiernen en interés de todos y no solamente de sus partidarios, y para que lo hagan con pleno respeto de los derechos y libertades de las personas.

LEER MÁS:

- BANGLADESH: ELECCIONES CON FINAL ANUNCIADO EN
- LA SOCIEDAD CIVIL DE PAKISTÁN BAJO PRESIÓN EN
- SENEGAL: ¿LA DEMOCRACIA EN LA CUERDA FLOJA? EN





GÉNERO: RESISTENCIA CONTRA LA REGRESIÓN





Foto de Alain Pitton/NurPhoto vía Getty Images.

Miles de personas salen a las calles de Toulouse, Francia, el 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer.

Tras décadas de progreso constante, el género está ahora siendo amargamente disputado. Los movimientos globales por los derechos de las mujeres y de las personas LGBTQI+ provocaron profundos cambios en las conciencias, las costumbres y las instituciones. Elevaron a la categoría de titulares de derechos a más de la mitad de la humanidad, excluida durante siglos.

Pero estos logros trajeron consigo una brutal reacción que prácticamente ha frenado los avances. En 2023, los movimientos de mujeres y LGBTQI+ tuvieron que dedicar cada vez más esfuerzos a defender sus derechos en lugar de ampliarlos. Aun así, consiguieron algunas victorias memorables, como la legalización del aborto en México y el reconocimiento del matrimonio entre personas del mismo sexo en Estonia, pero las fuertes tendencias regresivas eclipsaron estos y otros avances. Desde la represión de la comunidad LGBTQ+ en Rusia hasta la ley antigay de Uganda, y desde el sistema de apartheid de género de Afganistán hasta los niveles récord de femicidio en numerosos países, 2023 fue testigo del ataque contra estos derechos.

Las perspectivas de igualdad han retrocedido. El **informe** de 2023 de las Naciones Unidas (ONU) sobre los avances en materia de género en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible confirmó que la igualdad de género no se alcanzará en absoluto en la fecha prevista de 2030 ▶**VÉASE CAPÍTULO**. Por el contrario, el Foro Económico Mundial estima que, al ritmo actual, se tardarán **otros 131 años** en alcanzar la paridad de género. El Índice de Normas Sociales de Género señala que nueve de cada 10 personas de todos los géneros tienen prejuicios contra las mujeres. Esta cifra no ha variado en una década.

Las crisis -que invariablemente golpean con **mayor dureza** a mujeres y niñas- empeoraron en 2023. El número de mujeres y niñas que viven en contextos de conflicto alcanzó los **614 millones** en 2022, un 50% más que en 2017. Debido a los múltiples conflictos que devastan el planeta en 2023, esta cifra está en aumento ▶**VÉASE CAPÍTULO**. En una guerra tras otra, los cuerpos de las mujeres se han convertido en campos de batalla, armas y botín. Sin embargo, las mujeres se han negado a ser encasilladas como víctimas, situándose a la vanguardia de la respuesta humanitaria y los esfuerzos de consolidación de la paz en lugares como **Gaza**, **Sudán** y **Ucrania**.

Las mujeres tienen más probabilidades de vivir en la pobreza extrema que los hombres y, cuando escasean los alimentos, suelen ser las últimas en comer y las que menos comen. El **60%** de las 690 millones de personas que sufren actualmente inseguridad alimentaria son mujeres, y la creciente inseguridad alimentaria causada por el cambio climático **afectará** desproporcionadamente a las mujeres y niñas.

En 2023, una corriente política regresiva empeoró la situación.



AL RITMO ACTUAL, LA PARIDAD DE GÉNERO TARDARÁ 131 AÑOS MÁS



SOLAMENTE EL 10% DE LOS ESTADOS SON LIDERADOS POR MUJERES



1 DE CADA 3 MUJERES HA PADECIDO VIOLENCIA FÍSICA O SEXUAL AL MENOS UNA VEZ EN SU VIDA



65 PAÍSES CONTINÚAN CRIMINALIZANDO LAS RELACIONES ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO



EL MATRIMONIO ENTRE PERSONAS DEL MISMO SEXO ES LEGAL EN 37 PAÍSES

A lo largo del año, el discurso antigénero se abrió paso en todos los continentes y en todas las culturas e ideologías, impulsado por movimientos antiderechos bien organizados y conectados. Apoyados por poderosas fundaciones conservadoras, los movimientos antiderechos están **mucho mejor financiados** que sus homólogos progresistas, y han cooptado el lenguaje de los derechos humanos para cambiar la narrativa. En 2023, esto aumentó la violencia y el acoso contra activistas feministas y personas LGBTQI+.

Mientras que las luchas feministas se volvieron más necesarias que nunca, también enfrentaron grandes dificultades. Tres cuartas partes de las activistas **encuestadas** en 67 países denunciaron amenazas o acoso contra ellas o sus organizaciones. Un tercio denunció incidentes contra sus familias y una cuarta parte dijo haber recibido amenazas de muerte. Como reflejo de los retrocesos democráticos en muchos países, casi el 60% identificó a las autoridades estatales como la fuente de mayor riesgo. Las condiciones para el activismo han disminuido rápida y drásticamente pero, en un contexto mundial de violencia de género generalizada, el acoso por motivos políticos tiende a equipararse con la violencia cotidiana que sufren las mujeres o las personas LGBTQI+, cuando en realidad se trata de un arma específica de represión que está causando graves estragos.

Aun así, la sociedad civil resistió apoyando a las personas activistas amenazadas, reivindicando los derechos humanos, haciendo campaña por el cambio social, promoviendo reformas jurídicas, exigiendo rendición de cuentas y desafiando la impunidad. Además de las victorias de Estonia y México, los activistas de Mauricio consiguieron una victoria judicial crucial que despenalizó las relaciones entre personas del mismo sexo. En Estados Unidos, origen de gran parte de la reacción global contra el aborto y el género, la sociedad civil y sus aliados han dado un paso adelante, creando redes de apoyo y aprobando leyes para proteger el aborto y los derechos de las personas LGBTQI+. Aunque estos esfuerzos no pudieron compensar el retroceso en los derechos, mejoraron muchas vidas y demostraron que la lucha por la igualdad aún no ha terminado.

LA BRECHA DE GÉNERO

Incluso antes de los retrocesos de 2023, la igualdad de género seguía estando muy lejos. Al comenzar el año, la **brecha de género** -las injustas disparidades entre mujeres y hombres en cuanto a estatus y oportunidades- apenas había vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, y sólo nueve países, cinco de ellos europeos, la mantenían en al menos un 80%. Sólo 14 países -13 europeos y Canadá- garantizaban legalmente la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Asimismo, nada más que el 61,4% de las mujeres en edad de



Foto de Tony Karumba/AFP vía Getty Images.

Estudiantes levantan velas y rosas rojas durante una vigilia en memoria de las jóvenes víctimas de femicidios en la Universidad de Nairobi, Kenia, el 14 de febrero de 2024.

trabajar se encontraban en la población activa mundial, frente al 90% de los hombres. La próxima generación de mujeres seguirá dedicando un promedio de más de dos horas diarias adicionales a trabajos domésticos y de cuidados no remunerados en comparación con sus homólogos masculinos.

También falta mucho para alcanzar la paridad en la toma de decisiones. Aunque a principios de 2023 había **más mujeres que nunca** en posiciones de poder en todo el mundo, las mujeres seguían estando enormemente subrepresentadas en el liderazgo. Sólo el 9,8% de los países contaban con jefas de Estado y el 11,3% con jefas de gobierno, lo que supone un leve avance en la última década. Sólo 13 países, en su mayoría europeos, tenían gabinetes paritarios, mientras que nueve carecían de ministras.

2023 no fue un año de primicias, pero en 2024 es probable que **México** elija a su primera mujer presidenta de su historia, ya que las dos candidatas son mujeres. Sin embargo, las mujeres que asumen estos cargos no necesariamente son feministas ni defensoras de los derechos de las mujeres, como se evidenció en Italia con la **primera ministra de extrema derecha** Giorgia Meloni. Además, cuando lo son, a menudo enfrentan **acoso en línea** implacable por cuestiones de género, como fue la experiencia de la ex **primera ministra de Nueva Zelanda** Jacinda Ardern, quien dimitió en enero de 2023.

LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN PRIMER PLANO

Entre las muchas luchas cotidianas de los movimientos de mujeres de todo el mundo, la violencia de género ocupó sin duda un lugar destacado en la agenda de 2023. A lo largo del año, los movimientos de mujeres prestaron apoyo a víctimas y supervivientes y salieron a la calle para exigir la actuación de los gobiernos para poner fin a la violencia.

La **epidemia de femicidios** sigue en marcha. **Alrededor de 48.800** mujeres y niñas fueron asesinadas por sus parejas u otros familiares en 2022, lo que representa más de la mitad -el 55%- de todos los homicidios de mujeres, frente a solo el 12% de los hombres. Se estima que África y Asia registraron la mayor prevalencia de femicidios, pero ningún organismo nacional parece estar llevando la cuenta.

Aunque todavía no hay nuevas estimaciones globales, tampoco hay motivos para esperar que la situación mejore en 2023. En todo caso, los múltiples conflictos y crisis del año la deben haber empeorado. Algunos países de América Latina, como **Argentina** y **Brasil**, registraron cifras récord de **femicidios** en 2023. Incluso donde el número total

disminuyó, como en **México**, la cantidad de personas asesinadas por su género sigue siendo asombrosamente alto. En general, **ningún país** se acercó a la erradicación de la violencia de pareja en 2023, y sólo 27 cuentan con sistemas integrales de seguimiento y financiación de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

Se **calcula** que casi una de cada tres mujeres -unos 736 millones- ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, o violencia sexual fuera de la pareja al menos una vez en su vida. Dado que muchos casos no son denunciados, es probable que la cifra real sea mucho mayor.

> Personalmente no conozco a ninguna mujer que no haya sido afectada por alguna forma de esta violencia insidiosa. Las mujeres tienen derecho a sentirse libres y seguras en su propio cuerpo, en casa, en la calle y en cualquier espacio público, pero desgraciadamente esa no es su realidad, y nunca lo ha sido. Debemos empezar a confiar en las supervivientes para que los agresores comparezcan ante la justicia. Cuando las mujeres vean que la ley está de su lado, serán más las que se animen a denunciar.
>
> 
> **LINA ABIRAFEH**
> Instituto Árabe de la Mujer, Líbano

Si las mujeres hicieran las políticas, seguramente no se ignoraría un problema de esta magnitud. Pero ya que en casi todos lados las mujeres se encuentran excluidas del poder político, no es de extrañar que los gobiernos destinen presupuestos ridículamente insuficientes a responder y prevenir la violencia de género. Muchos ni siquiera reconocen el problema.

Frente a esta injusticia, las organizaciones de mujeres y activistas de todo el mundo trabajan a diario para crear espacios seguros, apoyar a víctimas y supervivientes, aumentar la sensibilización pública, movilizarse y reclamar la adopción y aplicación de políticas que aborden el problema. Algunas son víctimas de la violencia que se esfuerzan por eliminar, como **Lilia Patricia Cardozo**, directora de una organización de defensa de los derechos de las mujeres en la región colombiana de Boyacá, que resultó herida en abril en un ataque con ácido.

Una de las actividades **más peligrosas** de las activistas por los derechos de las mujeres, sobre todo en contextos de espacio cívico cerrado, es la incidencia contra los arraigados valores discriminatorios que sustentan la violencia contra las mujeres. Las represalias suelen incluir acoso y criminalización, como se observa en países como **Afganistán**, **Arabia Saudita**, **Irán** y **Siria**.

Protestas contra la violencia de género

Las protestas organizadas en fechas clave para el movimiento feminista se centraron a menudo en la violencia de género. Si bien el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la violencia de género compartió el protagonismo con otras cuestiones, el 25 de noviembre, Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, se dedicó exclusivamente a este problema. También se organizaron protestas respecto a casos específicos de violencia de género.

La violencia de género fue destacada en muchos actos del Día Internacional de la Mujer en Asia, Europa y América Latina. La atención que se le prestó fue especialmente notoria en **Italia**, **México**, **Pakistán** y **Turquía**. Incluso en países donde las protestas son relativamente infrecuentes debido a las restricciones, como **Kirguistán**, las manifestaciones del 8 de marzo exigieron el fin de la violencia de género.

Una vez más, el 25 de noviembre, organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres de todo el mundo se unieron a expertos de la ONU para **reclamar a los Estados** que redoblen sus esfuerzos y dediquen mayores recursos a la prevención de la violencia y el apoyo a las sobrevivientes. Las mujeres **se movilizaron** en toda América Latina. Hubo marchas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, **Uruguay** y Venezuela, así como en numerosas **ciudades**

francesas, italianas y españolas, y en toda Europa, desde Portugal hasta Turquía.

En Italia, la marcha de este año reflejó una nueva oleada de indignación por el femicidio de Giulia Cecchettin, una estudiante de 22 años, que se suponía desaparecida hasta que se encontró su cadáver el 18 de noviembre. Frente a la cobertura mediática que retrataba con simpatía a su controlador ex novio, sospechoso de su **asesinato**, las feministas **insistieron** en que "**el femicidio** no es un crimen pasional, es un crimen de poder".

La presión funcionó, y el 22 de noviembre los legisladores italianos **respaldaron** por unanimidad una serie de medidas para frenar la violencia contra las mujeres. El Ministerio de Educación presentó una iniciativa que incluía actividades de sensibilización en las escuelas y campañas informativas, pero recibió críticas por no haber incluido expertos en violencia de género en su diseño.

Cuando el ministro de Educación convocó un minuto de silencio en honor a Giulia en escuelas y universidades, muchos estudiantes optaron por hacer un minuto de ruido, simbolizando su exigencia de romper el silencio en torno a los femicidios. En vísperas del 25 de noviembre los colectivos feministas **organizaron** marchas con antorchas y "marchas de la bronca" en varias ciudades. El 25 de noviembre, se estima que medio millón de personas marcharon en Roma en una protesta nacional organizada por el movimiento **Non Una Di Meno**.

En enero de 2024, la indignación provocada por el **aumento de los femicidios** también impulsó protestas en Kenia. Al igual que en Argentina en 2015, cuando una serie de horribles femicidios desencadenó el movimiento #NiUnaMenos que se convirtió en un hito regional, fue la sociedad civil keniana quien dio la voz de alarma. Mientras las instituciones estatales no prestaban atención, una organización de la sociedad civil, Femicide Count Kenya, **documentó casos** de manera constante para introducir el tema en la agenda política e instar al Estado a producir políticas públicas que abarquen el problema. En su mayoría, los crímenes que desencadenaron esta movilización fueron perpetrados por hombres que mantenían relaciones íntimas con sus víctimas.

En Bulgaria también se logró centrar el debate público en este problema, cuando un infame caso de violencia de género desencadenó grandes manifestaciones y propició un cambio positivo.

Tras años de esfuerzos del activismo por los derechos de las mujeres, en julio de 2023 el Parlamento búlgaro finalmente reformó la Ley de Protección contra la Violencia Doméstica para tipificar como delito la violencia en las relaciones íntimas. El cambio generó una reacción antiderechos inmediata de parte de aquellos que afirmaron que se trataba de un intento de aplicación de la supuesta "ideología de género", un **término comodín** utilizado por los opositores de todo el mundo para difamar la defensa de la igualdad de derechos. También afirmaron que la intención era forzar la ratificación del Convenio de Estambul, el tratado del Consejo de Europa contra la violencia de género que Bulgaria, a diferencia de la mayoría de los Estados europeos, no ha ratificado. El Partido Socialista Búlgaro **juntó firmas** para un referéndum contra la "ideología de género" en las escuelas.

El movimiento feminista tampoco quedó satisfecho con esta modificación, ya que la definición estrecha que se le dio a la "relación íntima" dejó desprotegidas a aquellas personas que mantienen relaciones distintas del matrimonio o de la unión convivencial. Por ejemplo, una mujer de 18 años fue golpeada y desfigurada por su novio en la ciudad de Stara Zagora. La agresión ocurrió en junio, pero no se hizo pública hasta finales de julio, cuando su familia habló con los medios de comunicación, frustrada por la lentitud de la investigación. Las protestas masivas sin precedentes que siguieron en la capital, Sofía, y en todo el país, obligaron al Parlamento a modificar la ley para ampliar su ámbito de aplicación.

Aun así, las protecciones de la nueva versión del proyecto de ley sólo se aplican a las relaciones de al menos 60 días de antigüedad. Además, un cambio de última hora introdujo las palabras "hombre" y "mujer" en la definición, excluyendo a las personas en relaciones



Foto de Oscar del Pozo/AFP vía Getty Images.

Activistas del grupo feminista Femen protagonizan una protesta contra los femicidios en Madrid, España, el 27 de enero de 2024.

homosexuales. El activismo por los derechos de las mujeres sigue exigiendo modificaciones.

> Se produjo un cambio en el sentimiento público que reveló una mayor sensibilización y empatía hacia las víctimas. Habitualmente en estos casos se responsabiliza mucho a las víctimas. Esta vez, sin embargo, mucha más gente se puso de su lado. Aunque surgieron algunas voces antiderechos que cuestionaban la inocencia de la víctima, especialmente en las redes sociales, la mayoría de las figuras públicas se abstuvieron de tal insensibilidad. Como resultado, hemos empezado a ver cada vez más casos de violencia doméstica en los medios de comunicación.
>
> 
> **VICTORIA PETROVA**
> Fondo Búlgaro para la Mujer

LEER MÁS:

- DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 2023: NI UN PASO ATRÁS

#METOO CONTRAATACA

Ocho años después de que estallara por primera vez, #MeToo volvió a causar sensación en 2023. En **Taiwán**, una serie de televisión sobre el acoso sexual en la política abrió un debate largamente esperado sobre el tema y dio a varias empleadas del partido gobernante una oportunidad para acusar a políticos poderosos de acoso y agresión sexual. Cuando el movimiento se extendió a los círculos culturales y académicos, más mujeres presentaron denuncias contra cientos de famosos, médicos y profesores que llevaban tiempo aprovechándose de sus cargos para cometer abusos contra mujeres.

Poco después, el **fútbol español** vivió un momento #MeToo cuando España ganó la Copa del Mundo Femenina y el presidente masculino de la federación de fútbol besó públicamente a una jugadora sin su consentimiento. En un contexto de polarización político ante las elecciones de julio, donde el partido de extrema derecha Vox buscaba avanzar, las opiniones se dividieron entre quienes apoyaban las demandas del movimiento feminista y quienes juzgaban su indignación fuera de lugar o exagerada. Tres semanas después de que estallara el escándalo, el culpable **dimitió**.

> La opinión pública se ha dividido. Hay quienes consideramos que tenemos la responsabilidad de trabajar por la igualdad en el deporte y por erradicar todas las expresiones de violencia machista. Sin embargo, otras personas han banalizado, minimizado, negado, ignorado o ridiculizado este episodio.



ISABEL ABELLA RUIZ DE MENDOZA
abogada y consultora de igualdad, España

> Evidentemente hay quienes piensan que las mujeres estamos exagerando. Pero la realidad es que ya no estamos dispuestas a tolerar faltas de respeto o abusos de poder. Ya no hay vuelta atrás.



ELEONORA GIOVIO
diario El País, España

Unos meses antes, el Parlamento español aprobó una ley sobre **licencias menstruales pagas** que permitía que las mujeres se tomaran el día en caso de "menstruación incapacitante". Se observó la misma polarización: las feministas celebraron el cambio, pero la extrema derecha lo tachó de exagerado. Esta reacción refleja una realidad: las **encuestas** muestran que el número de españoles que piensan que la igualdad ha ido "demasiado lejos" y la consideran una discriminación antimasculina está en aumento. Se trata en su inmensa mayoría de hombres, pero no sólo.

En España y fuera de ella, los influencers de los "derechos de los hombres" están en auge, moldeando las visiones del mundo de niños y jóvenes que se ven absorbidos por la "**manosfera**", el universo online de los grupos de hombres antifeministas.

Estos grupos antifeministas están proliferando más allá de Europa y Norteamérica, extendiéndose cada vez más en América Latina y llegando también a África y Asia. En Corea del Sur, este tipo de antifeminismo ha tenido un impacto decisivo en la política. En las **elecciones presidenciales de 2022**, el candidato ganador – cuya victoria se dio solo por un estrecho margen – llamó la atención de hombres jóvenes descontentos que perciben los escasos avances en la igualdad de género como perjudiciales para ellos. A pesar de la flagrante persistencia de las desigualdades de género, el nuevo gobierno **anunció** que suprimiría el Ministerio de Igualdad de Género, lo que desató protestas de mujeres. Bajo su mandato, ha aumentado el **acoso** a mujeres percibidas como feministas.

EL APARTHEID DE GÉNERO

Las expresiones más extremas de represión contra las mujeres en 2023 se produjeron en Afganistán e Irán. En Afganistán los talibanes, de nuevo en el poder desde agosto de 2021, consolidaron su dominio, y en Irán el régimen teocrático de los ayatolás recuperó su equilibrio. Aunque se trate de casos extremos, demuestran hasta dónde puede llegar la opresión.

En Afganistán, el año comenzó con la **prohibición** por parte de los talibanes del acceso de las mujeres a las universidades y a los empleos de la sociedad civil. En julio, las autoridades ordenaron el cierre de los **salones de belleza**, uno de los pocos lugares de reunión que quedaban para las mujeres fuera de sus casas. Luego de dos años en poder, el régimen ha logrado despojar a las mujeres de todos sus derechos, casi borrándolas por completo de la vida pública.

Pero las mujeres afganas siguen negándose a acatar las normas y se mantienen al frente de los actos de rebeldía contra el régimen. El anuncio del cierre forzoso de los salones de belleza provocó una pequeña **protesta de mujeres** en Kabul el 19 de julio. En agosto, antes del segundo aniversario del regreso de los talibanes, un grupo de mujeres con burka **se reunió** para exigir el derecho a la educación en la ciudad de Mazar-e Sharif.

Ciertas protestas previstas, como las del Día de la Independencia en septiembre, fueron reprimidas preventivamente por las autoridades. El activismo adaptó sus actividades para reducir los riesgos, llevando a

cabo **concentraciones** en domicilios particulares y compartiendo fotos y vídeos de sus actos en las redes sociales y a través de sus **redes** en el país y en el extranjero. A pesar de las restricciones, se ha seguido produciendo información y defendiendo los derechos a través de una **revista electrónica** y una emisora de radio.

En Irán ocurre algo parecido. Una brutal represión gubernamental que se prolongó hasta 2023 sofocó la oleada de protestas desencadenada por la muerte de Mahsa Amini a manos de la policía de la moralidad en septiembre de 2022. Con más de 500 muertos, los actos de desobediencia civil iraníes se han vuelto más sutiles. Pero no han desaparecido.

> A pesar de que las autoridades han logrado recuperar el control, seguimos viendo actos de desobediencia civil en todo Irán. Activistas, artistas y académicas se expresan a través de las redes sociales y manifiestan su descontento públicamente al no llevar hiyab. El hecho de que estas voces no hayan sido silenciadas mantiene la esperanza.
>
> 
> **SOHRAB RAZAGHI**
> Activistas Voluntarios, Irán

Las activistas iraníes, tanto en el país como desde la diáspora, lograron presionar para mantener la atención internacional en la difícil situación de las mujeres iraníes, incluso mientras se producían muchas otras tragedias en otros lugares. Por todo el mundo las mujeres **expresaron su solidaridad** con sus hermanas afganas e iraníes durante el Día Internacional de la Mujer, y nuevamente poco después del primer aniversario de las protestas, cuando el Comité Nobel concedió el **Premio Nobel de la Paz 2023** a Narges Mohammadi. Esta activista iraní encarcelada ha reivindicado la democracia, los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Irán durante más de 20 años.

Sin embargo, la comunidad internacional no ha tomado nuevas medidas respecto al trato que Irán dispensa a las mujeres. El aumento de los conflictos en Oriente Medio permite que Irán aproveche su papel estratégico en la región, fortaleciendo su sistema teocrático y disminuyendo las posibilidades de presión internacional
▶ VÉASE CAPÍTULO.

> Lamentablemente, el pueblo de Irán no está recibiendo el apoyo internacional que necesita. Mientras que no se les brinde apoyo a las luchas internas, la República Islámica conservará su poder.
>
> 
> **ASAL ABASIAN**
> periodista y activista feminista queer, Irán

Mientras resistían a nivel nacional, las mujeres afganas e iraníes buscaron apoyo internacional para el reconocimiento del **apartheid** de género como delito en el derecho internacional, de modo que los responsables puedan ser procesados y castigados. La Convención de la ONU sobre la Represión y el Castigo del Crimen de Apartheid de 1973 sólo se aplica a las jerarquías raciales, pero las activistas buscan ampliarlo a la forma específica y extrema de discriminación y exclusión por motivos de género que sufren a diario. Sus demandas han recibido respaldo en pronunciamientos de **expertos de la ONU** y del **Parlamento** Europeo, mientras que la sociedad civil ha **advertido** sobre la posibilidad de que se impongan regímenes restrictivos similares en otros lugares, especialmente en partes de Yemen controladas por los rebeldes Houthi.

LEER MÁS:

- AFGANISTÁN: HAY QUE ACABAR CON EL APARTHEID DE GÉNERO (EN)
- IRÁN, DE VUELTA A LA SOMBRÍA NORMALIDAD (EN)



Foto de Silvana Flores/AFP vía Getty Images.

Activistas feministas exigen la despenalización del aborto en Ciudad de México en el Día Internacional del Aborto Seguro, el 28 de septiembre de 2023.

LA LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO CONTINÚA

En 2023 las redes internacionales de fuerzas ultraconservadoras, bien organizadas y profusamente financiadas hicieron del aborto el objeto de una guerra cultural. Como resultado, los movimientos de mujeres tuvieron que adoptar actitudes cada vez más defensivas.

La tendencia a largo plazo en el derecho al aborto es de progreso: **más de 60 países** han liberalizado su legislación sobre el aborto en las últimas tres década, mientras que sólo cuatro han ido en sentido contrario. Pero en los últimos años la regresión se ha acelerado. El Salvador impuso una prohibición total a finales de la década de 1990 y Nicaragua lo hizo en 2006. Polonia endureció sus leyes para eliminar casi todas las excepciones en 2020 y el Tribunal Supremo de Estados Unidos eliminó el aborto como derecho federal en 2022. Las regresiones son poco frecuentes pero, sobre todo en el caso de Estados Unidos, tienen la capacidad de frenar significativamente el progreso global.

El aborto, al ser la máxima expresión del derecho de la mujer a tomar decisiones sobre su cuerpo y su vida, es un tema central en las luchas de los movimientos por los derechos de las mujeres en muchas partes del mundo, especialmente en las Américas. Si bien muchas han tenido que enfocarse en resistir a la reciente ola reaccionaria, otras han podido seguir presionando para conseguir más. A menudo han sufrido decepciones -como en **Chile**, donde se frustraron las esperanzas de una nueva Constitución progresista que hubiera reconocido los derechos sexuales y reproductivos-, pero otras veces décadas de lucha se ven coronadas por éxitos significativos, como ocurrió en México.

Incluso en Estados Unidos, el epicentro de la reacción antiderechos, los derechos sexuales y reproductivos no han sido derrotados, ya que las personas defensoras del derecho al aborto se apresuraron a promulgar medidas de protección antes de que se pudieran introducir prohibiciones.

En 2023, el primer año completo desde que el Tribunal Supremo de Estados Unidos anuló el caso Roe contra Wade, el Instituto Guttmacher **documentó** que en los estados de Estados Unidos se promulgaron 417 disposiciones para proteger los derechos reproductivos o ampliar el acceso a la salud reproductiva, frente a 148 que restringían el acceso o recortaban los derechos. Como reacción a las prohibiciones, 22 estados y el Distrito de Columbia aprobaron medidas para proteger el acceso al aborto, entre ellas "**leyes escudo**" que protegen a los profesionales sanitarios que proporcionan medicación abortiva. Estas leyes están siendo utilizadas por los defensores del derecho al aborto para ayudar a las mujeres que necesitan abortar en los estados en los que es ilegal.

Sin embargo, para fines de año, en 14 estados el aborto se encontraba totalmente prohibido, y en siete su acceso limitado. Las prohibiciones del aborto ya han tenido consecuencias catastróficas: decenas de miles de **víctimas de violación** no han podido interrumpir embarazos

provocados por una violación, las mujeres que sufren abortos espontáneos están **expuestas** a criminalización y las que padecen complicaciones graves del embarazo **corren peligro de muerte**. Debido a su papel clave para eludir las prohibiciones, la medicación abortiva se ha convertido cada vez más en objeto de **demandas judiciales**.

El derecho al aborto en Estados Unidos se encuentra en su punto más débil en medio siglo, pero la represión también parece estar siendo contraproducente. Las mujeres embarazadas están asumiendo **roles protagónicos** en la impugnación legal de la prohibición del aborto, sumándose al activismo tras experimentar los efectos de las políticas restrictivas.

Las prohibiciones totales son increíblemente impopulares. Según una **encuesta** de mayo de 2023, sólo el 13% piensa que el aborto debería ser completamente ilegal, mientras que el 51% cree que debería ser legal en algunas circunstancias y el 34% en todas las circunstancias. Esto ha hecho del aborto un potencial salvavidas electoral para el Partido Demócrata, que a medida que se acercan las elecciones presidenciales de 2024 ha ido **priorizando** esta cuestión. Aprovechando la experiencia de las elecciones de mitad de mandato de 2022, cuando muchos votantes **rechazaron** a candidatos e iniciativas republicanas en contra del aborto, los grupos de defensa de los derechos han lanzado **iniciativas** para incluir al aborto en consultas populares en varios estados, con el fin de consagrar este derecho en las constituciones estatales.

La experiencia fue distinta al sur de la frontera. Después de Argentina en 2020 y Colombia en 2022, México, el segundo país más grande de América Latina, se convirtió en el quinto en consagrar el derecho al aborto.

En respuesta a la acción legal emprendida por una organización de defensa de los derechos de las mujeres, el 6 de septiembre la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que penalizaban el aborto. El aborto ya había sido despenalizado en una docena de estados mexicanos, pero esta sentencia lo despenalizó de hecho en los 32, obligando a las instituciones sanitarias federales a facilitar el acceso a cualquier persona que solicite el procedimiento. Ahora, las feministas mexicanas siguen presionando para que se modifiquen las leyes que penalizan el aborto y que siguen vigentes en 20 estados, al tiempo que vigilan su cumplimiento para que la resistencia de las burocracias y las instituciones médicas no obstaculice el acceso, sobre todo de las personas pertenecientes a grupos excluidos.

> Todo el tiempo hay reacciones y resistencias conservadoras, pero a diferencia de lo que veíamos hace algunos años, éstas ya no son tan frontales. La barrera más importante que enfrentamos hoy en día es la ausencia de garantías del servicio. Aunque nunca ha garantía de que no se produzcan retrocesos, actualmente contamos con la ventaja de una opinión pública muy favorable al derecho a decidir.



BRENDA RODRIGUEZ
Grupo de Información en Reproducción Elegida, México

La victoria mexicana tuvo una fuerte dimensión regional, ya que el feminismo latinoamericano trabaja conjuntamente para impulsar la liberalización en países con prohibiciones totales como **El Salvador**, donde las mujeres de entornos pobres pueden recibir largas penas de prisión por abortos espontáneos y otras emergencias obstétricas.

> Nuestro movimiento es parte de un movimiento más amplio que abarca a toda América Latina y el Caribe. La marea verde ha sido una inspiración para toda la región, llegando incluso a Estados Unidos. La marea ya se ha convertido en un tsunami que ya no para. Estamos muy comprometidas con lo que pasa con nuestras colegas de Centroamérica, donde el aborto está extremadamente criminalizado. Hemos trabajado intensamente para lograr que la despenalización del aborto y el acceso efectivo a este derecho se concreten no solamente en México, sino en toda la región.



ALBA ADRIANA JIMÉNEZ PATLÁN
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México

El movimiento salvadoreño por los derechos de las mujeres aguarda con expectativas las noticias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se espera que el tribunal regional emita próximamente una sentencia en el caso **Beatriz contra El Salvador**, centrado en una mujer de 21 años con complicaciones de salud que llevaba un feto que no sobreviviría fuera del útero, pero a la que se denegó la solicitud de interrumpir su embarazo. Las personas defensoras de los derechos de las mujeres sostienen que el Estado violó múltiples derechos amparados por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Se espera que la sentencia establezca que las prohibiciones absolutas del aborto violan los derechos humanos, lo que tendría repercusiones regionales significativas.

Junto con Estados Unidos, Polonia es un notorio caso atípico en el que la tendencia a largo plazo parece ir en contra de la liberalización del aborto. En marzo de 2023, un tribunal polaco **condenó** a Justyna Wydrzynska, activista por el derecho al aborto y miembro de la organización Abortion Dream Team, por ayudar a una mujer embarazada a acceder a píldoras abortivas. Los esfuerzos de su organización, así como la causa más amplia del derecho al aborto, fueron reivindicados en diciembre, cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos **dictaminó** que la restrictiva legislación polaca, que impedía a una mujer acceder a un aborto y la obligaba a viajar al extranjero, violaba su derecho a la intimidad y a la vida familiar protegidos por el Convenio Europeo de Derechos Humanos.

Pero quizá la situación evolucione en Polonia, donde el Primer Ministro Donald Tusk **asumió** en octubre de 2023 con la promesa de liberalizar la legislación sobre el aborto dentro de sus primeros 100 días ▶ **VÉASE CAPÍTULO**. Sin embargo, esta medida permanece en discusión, ya que tanto el partido nacionalista de extrema derecha Ley y Justicia, el antiguo partido gobernante que introdujo la prohibición, como la nueva coalición gobernante, han manifestado su **oposición** al proyecto. No obstante, las mujeres movilizadas desde hace tres años contra la prohibición del aborto fueron un factor clave en la victoria de Tusk, y **se asegurarán** de que cumpla su promesa.

Otros países de Europa se están inclinando a favor de los derechos de las mujeres. En octubre de 2022, el Parlamento finlandés aprobó una **ley** que eliminaba el requisito de justificación y aprobación de dos médicos para aquellas mujeres que quisieran abortar. La legislación actualizada entró en vigor en septiembre. Y en Francia, como reacción a la regresión global, el Presidente Emmanuel Macron **anunció** en el Día Internacional de la Mujer una iniciativa para consagrar el derecho al aborto en la Constitución, de modo que fuera "**irreversible**". El **cambio** se materializó a principios de 2024.

LEER MÁS:

- MÉXICO EN LA SENDA DE LOS DERECHOS
- ESTADOS UNIDOS: LA LUCHA POR EL DERECHO AL ABORTO CONTINÚA EN

ORGULLO, REGRESIÓN Y DESAFÍO

Las mismas fuerzas que impulsan el retroceso en los derechos de las mujeres están impulsando los ataques contra los derechos de las personas LGBTQI+. En este difícil contexto, las personas LGBTQI+ de todo el mundo siguen movilizándose para afirmar su visibilidad, exigir respeto por la diversidad y reclamar la igualdad de derechos.

A largo plazo, los derechos de las personas LGBTQI+ siguen una tendencia similar a la de los derechos de las mujeres: la mayoría de los países despenalizaron las relaciones entre personas del mismo sexo en la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI, inicialmente en Europa y América y después en otras regiones del mundo, con un punto álgido en la década de 1990 y un goteo constante después. A la despenalización siguió el reconocimiento de otros derechos, como el matrimonio igualitario y los derechos de adopción, el derecho a cambiar legalmente de género, el reconocimiento de géneros más

allá del binario hombre-mujer y la prohibición de múltiples formas de discriminación.

Pero aún hoy, **65 países y territorios** -la mayoría en África, seguidos de Asia y Oriente Medio- siguen penalizando la actividad sexual privada y consentida entre personas del mismo sexo, especialmente entre hombres. En doce, las personas declaradas culpables pueden ser condenadas a muerte, y en seis esta pena ha sido aplicada.

Un punto positivo es que en la lista de Estados criminalizadores ya no figuran Mauricio y Nepal, que liberalizaron sus leyes en 2023. Pero algunos países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo tomaron el camino de una mayor regresión, en particular Uganda seguida de Ghana. En estos Estados se están aumentando tanto las penas y la presión que la vida se está volviendo insoportable para las personas LGBTQI+.

El matrimonio entre personas del mismo sexo ya es legal en 37 países, entre ellos Estonia, que lo legalizó en 2023, y **Grecia**, desde febrero de 2024. Los avances han sido rápidos: el primer país en reconocer el matrimonio igualitario fue Holanda en 2001, y muchos otros lo hicieron a mediados de la década de 2010.

Aunque ha habido algunas decepciones -sobre todo en el Caribe, donde la tendencia despenalizadora que se extendió por tres países en 2022 se estancó en 2023-, en la mayoría de las regiones del mundo se produjeron cambios progresistas el año pasado. Sin embargo, el progreso se ha desacelerado significativamente, y las reacciones antiderechos han empeorado la situación de las personas LGBTQI+ en numerosos países, sobre todo en la Commonwealth africana y en partes de Europa y Estados Unidos.

Pero en lugar de rendirse, el activismo LGBTQI+ reaccionó más fuerza, mediante litigios, campañas públicas, asistencia mutua, solidaridad y protesta. Frente a los intentos de negar el derecho de las personas LGBTQI+ a existir en público, los movimientos LGBTQI+ respondieron afirmando desafiantemente su visibilidad.



Foto de Louisa Gouliamaki/Reuters vía Gallo Images.

Celebración de la legalización de los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo ante el Parlamento griego en Atenas el 15 de febrero de 2024.

Allí donde pudieron celebrarse, las marchas del Orgullo tuvieron una importancia crucial. Por debajo de la brillantina, claramente siguieron siendo protestas, y sus participantes las aprovecharon para celebrar las victorias que tantos esfuerzos les llevó alcanzar, fomentar la unidad para reunir las fuerzas necesarias para enfrentar la reacción, y expresar solidaridad con quienes viven en entornos más restrictivos y no pueden movilizarse.

LEER MÁS:

› ORGULLO 2023: ALEGRÍA DESAFIANTE FRENTE A LA REACCIÓN ANTIDERECHOS

Histeria antitrans en Estados Unidos

Las fuerzas reaccionarias anti-LGBTQI+ en Estados Unidos, que desde hace tiempo constituyen una fuente de inspiración y financiación para las fuerzas antiderechos de todo el mundo, se centraron obsesivamente en los derechos de las personas trans. Menos del uno por ciento de la población es transgénero, pero el tema es instrumentalizado para movilizar la regresión en lo que los movimientos antiderechos denominan "guerra contra lo woke".

Las luchas culturales se desarrollaron principalmente en las legislaturas estatales de Estados Unidos, donde la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles registró un total récord de **506 proyectos de ley contra la comunidad LGBTQI+** presentados en 2023. De ellos, 140 tenían como objetivo restringir los derechos de los estudiantes y educadores, mientras que 80 se centraban en la atención sanitaria, en su mayoría buscando restricciones y prohibiciones en el acceso a la atención afirmativa de género para jóvenes trans. Sesenta y cinco debilitaban las leyes de derechos civiles, incluso mediante la adopción de definiciones restrictivas de las identidades de género y el debilitamiento de la legislación contra la discriminación a través de exenciones religiosas, mientras que 25 contenían prohibiciones a la libertad de expresión, incluso para prohibir o censurar actuaciones como los eventos drag. Nueve limitaban la capacidad de las personas para actualizar su género en documentos públicos, mientras que siete prohibían a las personas transexuales el acceso a instalaciones públicas como los baños públicos. Otros 69 proyectos de ley incluyeron la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo y otras restricciones. En total, 214 de estos proyectos fueron rechazados, pero 84 se convirtieron en ley.

Más de la mitad de estos proyectos de ley restrictivos apuntaban contra los y las jóvenes trans, **casi 100.000** de los cuales viven ahora en estados de los Estados Unidos que han restringido recientemente su acceso a la salud, los deportes o los baños escolares.

Como era de esperarse, el retroceso de la protección jurídica ha ido acompañado de una **intensificación de la violencia** contra las personas LGBTQI+.

Pero los activistas LGBTQI+, incluidos los padres de jóvenes trans, no se han quedado sentados mientras les quitan los derechos. Su lucha constante por el reconocimiento y contra la discriminación y la violencia ha generado aún más iniciativas progresistas. Algunos Estados prohibieron las "**terapias de conversión**", prácticas pseudocientíficas destinadas a cambiar la orientación sexual, la identidad de género o la expresión de género que expertos de la ONU consideran equivalentes a la tortura. Otros aprobaron leyes escudo para proteger a médicos y padres que prescriben o buscan acceso a atención de la salud para jóvenes trans. Se calcula que la mitad de los jóvenes trans estadounidenses viven ahora en estados que cuentan con estas protecciones.

Al igual que la reacción contra el aborto, que ha dividido a Estados Unidos entre desiertos de derechos reproductivos y Estados refugio, las batallas en torno a las cuestiones LGBTQI+ están provocando una situación en la que el acceso a los derechos depende cada vez más del lugar de residencia. El hecho de que algunas personas **se muden a otro estado** para vivir junto a otros que confirman su visión del mundo no hará más que perpetuar la guerra cultural.

Decepción en el Caribe

Mientras que en Estados Unidos se acentuó la brecha en 2023, en el Caribe la situación fue decepcionante, reflejando la tendencia general a la obtención de resultados desiguales tras años de progreso. Tras un año de cambios sin precedentes que alentaron las esperanzas, no se produjeron nuevos avances en materia de derechos LGBTQ+ en el Caribe.

En 2022, los tribunales de **tres países** de la Commonwealth del Caribe -Antigua y Barbuda, Barbados y San Cristóbal y Nieves- anularon

leyes regresivas de la época colonial británica que penalizaban las relaciones entre personas del mismo sexo. Tras este paso crucial, los activistas de estos países están presionando para conseguir más cambios, presentando ante los Estados demandas de reconocimiento de las personas trans e introducción de protecciones efectivas contra la discriminación.

En seis países del Caribe aún se penalizan las relaciones homosexuales: Dominica, Granada, Guyana, Jamaica, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas. En febrero de 2024, para decepción del activismo, el Tribunal Superior de San Vicente y las Granadinas **rechazó** una demanda de la sociedad civil por la despenalización. Pero la incidencia en favor de la despenalización continúa en todo el Caribe. En 2023, el Festival del Orgullo de Guyana enarboló explícitamente la **bandera** de la despenalización. También lo hicieron los actos del Orgullo en Jamaica, que **enmarcaron** la lucha por los derechos LGBTQI+ como una lucha por la plena ciudadanía, **vinculando** la liberación de la legislación represiva de la época colonial con la ruptura potencialmente inminente del país con la monarquía británica.

Pero en lugar de mayores progresos, la sociedad civil ha experimentado un retroceso procedente de una fuente poco probable: la firma de un acuerdo de cooperación entre los Estados caribeños y la Unión Europea (UE).

El **Acuerdo de Samoa** entre la UE y los miembros de la Organización de Estados de África, el Caribe y el Pacífico se centra en la reducción de la pobreza, la cooperación comercial y la gestión de la migración, pero también aborda cuestiones como el cambio climático, los derechos humanos y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. En los **países** caribeños de la Commonwealth, algunos gobiernos interpretaron estas referencias como una presión a favor de la legalización del aborto, la educación sexual, el matrimonio entre personas del mismo sexo y otros derechos de las personas LGBTQI+ que consideran contrarios a los valores y tradiciones locales. Juegan así con la percepción de que estas exigencias de derechos son imposiciones occidentales.

Los gobiernos finalmente firmaron el acuerdo, pero no sin dejar claro a los movimientos LGBTQI+ de sus países que no planean ceder ante las demandas de la sociedad civil.

Ofensiva antiderechos en África

En África, el ya sombrío panorama de los derechos de las personas LGBTQI+ empeoró en su mayor parte, con algunos Estados que penalizan las relaciones homosexuales presionando para reforzar las restricciones existentes e imponer nuevas penas.

Treinta y un países africanos penalizan las relaciones homosexuales. En muchos de ellos, el activismo LGBTQI+ está en plena resistencia. Las personas LGBTQI+ se esfuerzan por crear redes y sostenerse mutuamente, pero a menudo se ven obligadas a permanecer en el closet, incapaces de afirmar su visibilidad como activistas LGBTQI+ y de defender abiertamente sus derechos sin temer por sus vidas.

En muchos países africanos, una lenta pero constante tendencia a largo plazo hacia la despenalización ha provocado reacciones antiderechos. En un país tras otro, los políticos están introduciendo proyectos de ley represivos casi idénticos, siguiendo modelos creados por la organización conservadora estadounidense **Family Watch International**. Detrás de estas iniciativas hay políticos oportunistas en busca de renombre, líderes religiosos preocupados por perder su relevancia, y jefes de gobierno que buscan apelar al conservadurismo social para amortiguar posibles amenazas a su poder. Mientras la narrativa antiderechos en África denuncia los derechos LGBTQI+ como “no africanos” e “importaciones extranjeras”, las fundaciones con sede en Estados Unidos están reforzando el legado del dominio británico. Sin dudas, la reacción antiderechos es la que se importó del norte global.

Uganda ha tomado la delantera en la regresión. En mayo de 2023, su parlamento aprobó la Ley contra la Homosexualidad con un apoyo casi unánime. Con el pretexto de proteger la cultura eclesiástica tradicional y los valores familiares frente a la “depravación” y la “promiscuidad”,



Foto de Frennie Shivambu/Gallo Images vía Getty Images.

Protesta contra el proyecto de Ley contra la Homosexualidad de Uganda ante el Alto Comisionado de Uganda en Pretoria, Sudáfrica, el 4 de abril de 2023.

la ley aumentó las penas de cárcel hasta 20 años para las personas que se identifican como LGBTQI+ e introdujo la pena de muerte para la "homosexualidad agravada", un término amplio que incluye a los reincidentes. En agosto, un hombre de 20 años fue la **primera** persona acusada de "homosexualidad agravada" en virtud de esta ley. Le siguieron muchos más.

La Ley contra la Homosexualidad tuvo como efecto la legitimación de los abusos contra las personas LGBTQI+. Un **informe** de Convocatoria por la Igualdad, una coalición de la sociedad civil, concluyó que la ley y la desenfrenada retórica homófoba que precedió a su aprobación generaron una radicalización contra la comunidad LGBTQI+. En efecto, casi todos los abusos recientes documentados, incluidos torturas, violaciones y desalojos, fueron perpetrados por particulares y no por agentes del Estado. El seguimiento realizado por el Foro de Concienciación y Promoción de los Derechos Humanos mostró también un **notable aumento** de las violaciones de derechos humanos contra las personas LGBTQI+ desde la entrada en vigor de la ley.

Los activistas LGBTQI+ ugandeses se han mantenido firmes frente a la injusticia y la violencia. El Equipo de Respuesta Estratégica, conformado por cinco organizaciones LGBTQI+, documentó los efectos de la nueva ley y **coordinó** una respuesta comunitaria, facilitando el acceso a refugios seguros y a servicios jurídicos, de seguridad y de protección. Los grupos LGBTQI+ también han **impugnado** la Ley contra la Homosexualidad ante el Tribunal Constitucional de Uganda.

Aún no se ha emitido una sentencia, pero mientras tanto, los activistas continúan enfrentando una violencia implacable. En enero de 2024, Steven Kabuye, director del grupo de acción comunitaria Uganda Key Populations Consortium, fue apuñalado y dado por muerto en lo que se consideró un **crimen de odio**.

Mientras tanto, durante los en el Parlamento sobre la Ley contra la Homosexualidad, Uganda acogió la primera **Conferencia Interparlamentaria sobre Valores Familiares y Soberanía**. Esta reunión, bajo el lema de "proteger la cultura africana y los valores familiares", **congregó** a numerosos fundamentalistas cristianos, así como a grupos de odio antiderechos y pseudoexpertos de todo el mundo, incluidas fundaciones conservadoras estadounidenses. Dirigiéndose a políticos de al menos 22 estados africanos, el presidente Yoweri Museveni representó a su país como un líder de la "lucha contra el vicio" y por la "supervivencia de la raza humana". Muchos indicaron su voluntad de seguir este ejemplo.

En algunos países, como **Ghana**, ya se estaban impulsando proyectos de ley draconianos contra la comunidad LGBTQI+ en el Parlamento. A principios de 2024, el Parlamento ghanés **aprobó** una ley que prohibía la identificación como LGBTQI+. Actualmente la aprobación presidencial está **en suspenso**, a la espera de una decisión del Tribunal Supremo sobre su constitucionalidad.

En Kenia, el año 2023 comenzó con el **trágico asesinato** del activista por los derechos LGBTQI+ Edwin Kiprotich Chiloba. La violencia aumentó en febrero como respuesta a una **victoria judicial** de la sociedad civil a favor de los derechos LGBTQI+: el Tribunal Supremo

confirmó una sentencia de 2015 que ordenaba al gobierno registrar una organización LGBTQI+, la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Gays y Lesbianas, especificando que podía mantener las palabras "gay" y "lesbiana" en su nombre.

El presidente William Ruto y otros altos cargos condenaron la sentencia con una retórica incendiaria, lo que desencadenó una **reacción violenta**. Mientras el fiscal general anunciaba que el gobierno impugnaría la decisión y sometería el asunto a consulta pública, un político de la oposición prometió presentar un proyecto de ley para endurecer las penas por homosexualidad. En marzo, el Ministerio de Educación anunció un **plan**, acordado con clérigos encabezados por el arzobispo anglicano, para establecer capellanías en las escuelas con el fin de hacer frente a "la propagación de las prácticas LGBTQ+". Unos meses más tarde, se presentó ante el Parlamento el **Proyecto de Ley de Protección de la Familia**, destinado a reforzar las prohibiciones de la época colonial y aumentar las penas por homosexualidad, uniones homosexuales y actividades y campañas LGBTQI+.

> Nos oponemos firmemente a la generalización de las normas y actitudes negativas y celebramos los limitados pero importantes avances en materia de derechos de las personas LGBTQI+ realizados en Kenia en los últimos 10 años, conseguidos en gran medida gracias a victorias en los tribunales. El Proyecto de Ley de Protección de la Familia amenaza con destruir todos estos avances. Nuestro trabajo es un recordatorio de que las libertades por las que luchamos son para todos los kenianos, y no solamente para la comunidad LGBTQI+.



IVY MERIMBA
galck+, Kenya

Para las personas LGBTQI+, se trata de una lucha existencial. Está en juego su derecho a existir, por lo que no pueden permitirse el lujo de rendirse. Esto significa que, incluso en épocas y lugares regresivos, pueden producirse cambios progresistas, porque los defensores de los derechos son implacables. Los activistas sacan fuerzas de dentro, de la creencia en su propia libertad. No hay restricción que pueda refutarla.

> Celebramos el Orgullo y colaboramos con la Iniciativa para la Salud y los Derechos Sexuales en África Oriental en la organización de la conferencia "Rostros cambiantes, espacios cambiantes", para la cual ayudamos a conseguir visados y asesoramos a personas LGBTQI+ y trabajadoras sexuales de toda África. En un momento de crecientes tensiones hacia las personas LGBTQI+, trabajamos en solidaridad con grupos de África Oriental, participamos en un diálogo estratégico sobre políticas con otros líderes de la sociedad civil, realizamos una visita solidaria a Namibia y establecimos redes para asegurarnos de que estaríamos preparados para enfrentar los desafíos futuros.



DUMISO GATSHA
Success Capital, Botsuana

En 2023, los esfuerzos de la sociedad civil a largo plazo de incidencia y litigio estratégico produjeron resultados positivos en algunas partes de África meridional, donde ciertos países lograron algunos avances en materia de derechos de las personas LGBTQI+.

En Mauricio, el activismo de la sociedad civil fue recompensado con una sentencia del Tribunal Supremo que despenalizó los actos sexuales consentidos entre adultos del mismo sexo. Emitida en respuesta a las demandas interpuestas por activistas y organizaciones LGBTQI+, el razonamiento de la Corte en esta histórica sentencia invirtió la narrativa antiderechos según la cual derechos LGBTQI+ serían una imposición occidental. En cambio, rechazó la penalización, impuesta bajo el dominio colonial británico, y la consideró una importación extranjera.

> Esta sentencia allanó el camino hacia una mayor inclusión de las personas LGBTQI+ en Mauricio. Pero aunque se hayan despenalizado las relaciones sexuales consentidas entre adultos del mismo sexo, sigue siendo crucial educar a las personas queer y a la población más generalmente sobre la sentencia y sus implicaciones para la libertad, la igualdad, la dignidad y los derechos humanos.



NAJEEB AHMAD FOKEERBUX
Young Queer Alliance, Mauricio

Pero incluso en el sur de África, el año 2023 trajo resultados desiguales. En Namibia, donde las relaciones sexuales entre hombres siguen siendo penalizadas, el Tribunal Supremo emitió un fallo en mayo ordenando al gobierno a reconocer las uniones de parejas del mismo sexo registradas en el extranjero. Sin embargo, la reacción antiderechos no tardó en hacerse oír. En julio, la Cámara Alta del Parlamento aprobó una ley que prohíbe el matrimonio entre personas del mismo sexo y castiga a quienes lo apoyan. El texto de la ley define el matrimonio como la unión entre dos personas nacidas genéticamente hombre y mujer, establece que los matrimonios entre personas del mismo sexo celebrados en el extranjero no pueden ser reconocidos en Namibia y tipifica como delito la participación en, promoción o publicidad de matrimonios entre personas del mismo sexo, penado con hasta seis años de cárcel y elevadas multas.

> Las cuestiones clave para el movimiento namibio por los derechos de las personas LGBTQI+ incluyen la despenalización de las relaciones homosexuales y el establecimiento de protecciones jurídicas más sólidas contra la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género, la igualdad de acceso a la atención médica, incluida la atención afirmativa de género, iniciativas educativas y campañas de sensibilización para aumentar la comprensión de las cuestiones LGBTQI+ y la aceptación de las personas LGBTQI+, y políticas firmes para abordar los delitos de odio y la violencia contra las personas LGBTQI+.
>
> 
> **KEVIN WESSELS**
> activista por los derechos LGBTQI+, Namibia

En Malawi, también se observaron reacciones preventivas contra cambios potencialmente positivos. En julio, un caso que cuestionaba la constitucionalidad de la penalización de las relaciones homosexuales y de la prohibición del matrimonio entre personas del mismo sexo desencadenó **protestas contra la comunidad LGBTQI+** en Lilongwe, la capital, y otras ciudades importantes.

LEER MÁS:

- EL ÁFRICA DE LA COMMONWEALTH: ATAQUE CONTRA LOS DERECHOS LGBTQI+ EN
- MAURICIO COMIENZA A PAGAR UNA DEUDA HISTÓRICA CON LAS PERSONAS LGBTQI+ EN

El mosaico asiático

En contraste con el amplio retroceso registrado en África, en Asia los resultados fueron más diversos. El movimiento LGBTQI+ logró avances en Hong Kong, Nepal, Sri Lanka y Taiwán, pero en otros países no alcanzó los progresos esperados, especialmente en India y en Japón. Algunos países, como Afganistán e Irán, siguieron estancados en una negación total de los derechos. En estos y algunos más, como China, no existió ningún espacio cívico para el activismo LGBTQI+. Unos pocos experimentaron una reacción conservadora, aunque con motivaciones políticas más obvias que en África, por lo que resultó en un impacto relativamente menor.

En Asia, todavía quedan **22 países** que penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. En 2023 solo uno, Sri Lanka, se acercó a la despenalización. Sri Lanka, una antigua colonias británicas donde las disposiciones de penalización también se aplican a las mujeres, inició este proceso en 2018 cuando **grupos de la sociedad civil** presentaron una queja ante el Comité de la ONU para la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, instando al gobierno a despenalizar las relaciones homosexuales en general, y específicamente entre mujeres. En respuesta, en agosto de 2022 se presentó un proyecto de ley al Parlamento. Posteriormente, el Examen Periódico Universal de Sri Lanka en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el que las organizaciones LGBTQI+ desempeñaron un papel fundamental, formuló recomendaciones para la despenalización, y en febrero de 2023 el gobierno se comprometió a cumplirlas.

Mientras este proceso estaba en marcha, el Tribunal Supremo emitió una **sentencia pionera** en respuesta a las peticiones de los grupos antiderechos para declarar la despenalización inconstitucional. La decisión aclaró que, contrariamente a los argumentos de los grupos antiderechos, la despenalización se ajustaba a los principios constitucionales de igualdad, dignidad humana e intimidad. Aunque el proyecto de ley aún debe someterse a votación parlamentaria, los grupos LGBTQI+ confían en que la presión que ejercieron mediante incidencia a alto nivel y campañas públicas será exitosa.

> Nuestra lucha, incluso después de la despenalización, seguirá teniendo como objetivo la integración de las personas LGBTQI+ en nuestra sociedad. Cuando fundamos nuestra organización en 2004, éramos los únicos que luchábamos por todas las personas LGBTQI+, y estuvimos solos en este viaje durante mucho tiempo. Recién en 2015 empezaron a salir del clóset y a implicarse más personas y organizaciones. Hasta entonces, era difícil ser abierto debido a la dictadura en la que vivíamos, pero de todos modos nosotros llevamos celebrando el Orgullo desde 2004. Este año nuestras celebraciones cumplen 19 años, al igual que EQUAL GROUND. Estamos muy orgullosos de lo que hemos logrado hasta ahora.
>
> 
> **ROSANNA FLAMER-CALDERA**
> EQUAL GROUND, Sri Lanka

Malasia, uno de los países que aún penaliza las relaciones homosexuales, ha tomado un rumbo opuesto, impulsado por un **nuevo partido en el poder** que adoptó una postura socialmente conservadora para asegurarse la victoria electoral.

El gobierno **prohibió recientemente** los relojes y accesorios Swatch con referencias al colectivo LGBTQI+, castigando su posesión con penas de hasta tres años de cárcel. En enero de 2024, el primer ministro Anwar Ibrahim **dejó claro** que bajo su mandato no habría reconocimiento de los derechos de las personas LGBTQI+ ni protección contra la discriminación y la violencia. Efectivamente, un gobierno que considera que un reloj de



Foto de Arun Sankar/AFP via Getty Images.

Protesta contra el veredicto del Tribunal Supremo de la India sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo en Nueva Delhi, India, el 18 de octubre de 2023.

colores representa un peligro para los valores nacionales no permitirá ninguna manifestación pública de activismo LGBTQI+.

En Indonesia, las personas LGBTQI+ también enfrentan dificultades para defender públicamente sus derechos. En plena temporada del Orgullo, se canceló una reunión regional de activistas LGBTQI+ en la capital, Yakarta, debido al acoso y las amenazas de muerte de conservadores religiosos.

Algunos Estados asiáticos que prohíben la incidencia en derechos humanos están focalizando cada vez más su represión contra las personas LGBTQI+ por motivos políticos. Entre ellos se encuentra China: si bien el Estado solía tolerar tácitamente a las personas LGBTQI+, ahora se están imponiendo **restricciones cada vez mayores** a la expresión y **organización** de estos grupos. Estas medidas forman parte de la imposición totalitaria de una identidad monolítica definida por el partido-Estado. No se permiten formas alternativas de identificación o pertenencia. En un contexto de creciente represión del disenso, ahora ya solo pueden realizarse **manifestaciones que pasen desapercibidas**. En mayo, las autoridades **ordenaron el cierre** del Centro LGBT de Pekín, que había estado funcionando durante 15 años. En agosto, los censores del gobierno **cerraron** importantes cuentas LGBTQI+ de redes sociales.

Taiwán, sede del **mayor evento del Orgullo** de Asia, ofreció el mayor contraste posible con China. Es el único país asiático con un espacio cívico abierto, que permite a la sociedad civil movilizarse plenamente por el cambio, y desde 2019 también es el único que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo. Después de cuatro años de incidencia desde la sociedad civil, el Gobierno **anunció** en enero de 2023 el fin de todas las restricciones restantes a los matrimonios transnacionales entre personas del mismo sexo, argumentando que "la igualdad matrimonial es ahora el consenso común en Taiwán".

Se espera a que se produzca un cambio parecido pronto en Nepal, donde en junio el Tribunal Supremo **ordenó** al gobierno que registre inmediatamente los matrimonios entre personas del mismo sexo, a la espera de que se reforme la ley.

> El cambio político real llevará mucho tiempo. Pero esta decisión histórica representa un avance significativo para todas las personas LGBTQI+ de Nepal. El reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo fomentará una mayor aceptación en la sociedad y entre los responsables políticos, lo que repercutirá positivamente en las leyes y las políticas.



SANJAY SHARMA
Sociedad Diamante Azul, Nepal

Aunque no se llegó a la igualdad matrimonial, en Hong Kong se produjo una **decisión importante** para los derechos de las personas LGBTQI+. A pesar de la **represión** en China, los tribunales conservan cierta independencia en algunas cuestiones. En septiembre, el máximo tribunal ordenó al gobierno establecer un marco jurídico para el reconocimiento de las uniones entre personas del mismo sexo. Esta sentencia respondió a una demanda presentada por el activista Jimmy Sham, quien contrajo matrimonio con su esposo en Estados Unidos y alegó que la falta de reconocimiento de los matrimonios extranjeros entre personas del mismo sexo violaba el derecho constitucional a la igualdad.

Sin embargo, en 2023 se experimentaron grandes decepciones en India y Japón, donde no se materializaron los avances esperados en materia de igualdad matrimonial.

En India, donde las relaciones entre personas del mismo sexo están despenalizadas desde 2018, el Tribunal Supremo emitió en octubre un veredicto no concluyente, criticado por la sociedad civil como una **oportunidad perdida**. Aunque el tribunal declaró que debe ponerse fin a la discriminación contra las parejas del mismo sexo y les reconoció derechos protegidos por la Constitución, se negó a reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo y dejó la cuestión en manos del Parlamento. Esto no deja suponer ningún cambio inminente, ya que el partido del primer ministro Narendra Modi se opone al reconocimiento de las relaciones homosexuales.

En Japón, el único país del G7 que no defiende la igualdad matrimonial, el **Orgullo Arcoíris de Tokio** atrajo a más de 200.000 personas en abril para -como lo indica su lema- "presionar hasta que Japón cambie". Ante el creciente apoyo de la **opinión pública** , un tribunal de distrito **declaró** inconstitucional la prohibición de las uniones entre personas del mismo sexo. Si bien fue la segunda sentencia judicial en ese sentido, otros dos tribunales concluyeron que la prohibición se ajustaba a la definición constitucional de matrimonio y, por tanto, era constitucional. La controversia jurídica aún no se ha resuelto, y el partido en el poder no ha mostrado voluntad de cambio.

Tras una intensa campaña de la sociedad civil, el Parlamento japonés aprobó en junio lo que se describió como una ley antidiscriminación, pero no prohibió la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. El **activismo** la consideró, en el mejor de los casos, un mero esfuerzo preliminar destinado a fomentar la sensibilización y a encomendar al gobierno la creación de un plan de monitoreo, investigación y coordinación de la aplicación de la política.

> Deben darse tres pasos cruciales. En primer lugar, debe promulgarse una ley antidiscriminación adecuada que prohíba la discriminación por motivos de orientación sexual e identidad de género. En segundo lugar, debe reconocerse la igualdad matrimonial. Y tercero, deben eliminarse los requisitos inhumanos para el reconocimiento legal del género, como la esterilización.
>
> 
> **AKIRA NISHIYAMA**
> Alianza Japonesa para la Legislación LGBT

Tanto en Japón como en otros países, el activismo continúa exigiendo la igualdad matrimonial. Esta demande fue claramente expresada por los manifestantes durante el Orgullo 2023 en Singapur, donde la ley colonial que penalizaba las relaciones sexuales entre hombres fue finalmente **derogada** en 2022. Ante la negativa del gobierno a permitir nuevos avances, los manifestantes marcharon bajo el lema "**Un Singapur para todas las familias**", oponiéndose a la noción políticamente impuesta de familia tradicional.

En lo que respecta a los derechos de las personas transgénero, el mayor revés se produjo en Pakistán, donde una **sentencia** de mayo de 2023 del Tribunal Federal Shariat de Islamabad declaró que el género debe ajustarse al sexo biológico, revocando secciones de la Ley de Protección de los Derechos de las Personas Transgénero de 2018. 12 **recursos de apelación** han sido presentados ante el Tribunal Supremo por grupos de defensa de los derechos de las personas transgénero.

LEER MÁS:

- EL MATRIMONIO IGUALITARIO AVANZA EN NEPAL EN

Las dos caras de Europa

Durante el transcurso de 2023, Europa experimentó dos tendencias divergentes: en algunos países se alcanzaron victorias significativas para los derechos de las personas LGBTQI+, mientras que en otros se produjo el retroceso más profundo en décadas. El contraste no podría ser más marcado entre Estonia, donde el espacio cívico abierto permitió que floreciera el activismo y se convirtiera en el primer Estado postsoviético en reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, y el país que lidera el asalto anti-LGBTQI+, Rusia, donde el espacio cívico se ha cerrado por completo bajo el gobierno autoritario de Vladimir Putin.

Como parte de la actual represión de Putin contra la sociedad civil, se ha dirigido la atención del Estado hacia el activismo LGBTQI+. Aunque pueda parecer extraño que Putin ataque a las personas LGBTQI+ en medio de una guerra, esto está intrínsecamente relacionado. Los derechos LGBTQI+, presentados como una supuesta importación occidental, no encajan en la estrecha definición de identidad nacional que Putin está promoviendo para respaldar su guerra imperialista.



Foto de Ilmars Znotins/AFP vía Getty Images

Activistas LGBTQI+ participan en la edición 2018 del Orgullo Báltico, un evento anual que ha rotado entre las capitales de los tres estados bálticos desde 2009.

En diciembre de 2022, el gobierno ruso **amplió** su prohibición de 2013 sobre la "propaganda gay", declarando ilegal el elogio de las relaciones LGBTQI+, la expresión pública de orientaciones no heterosexuales y la insinuación de que estas son normales, con **multas** de hasta USD 6.370 para particulares y USD 80.000 para organizaciones.

Otra nueva ley **prohibió** los acuerdos de maternidad subrogada entre hombres rusos y extranjeros, **dificultando** la paternidad para los hombres homosexuales. En julio, otra ley **prohibió** casi toda la ayuda médica a las personas trans, incluida la asistencia afirmativa de género, así como los cambios de género en los documentos oficiales. También prohibió la adopción y el ejercicio como tutores legales a las personas que ya habían pasado por procesos de afirmación de género, y declaró nulos sus matrimonios.

Las autoridades rusas están **difamando** cada vez más a las organizaciones LGBTQI+. Las califican de "agentes extranjeros", con el fin de asociarlas en la opinión pública con el espionaje. En mayo incluyeron a la organización LGBTQI+ **NC SOS Crisis Group** en el registro de "agentes extranjeros".

A finales de noviembre, tras una **petición** presentada por el Ministerio de Justicia, el Tribunal Supremo **ilegalizó** lo que denominó "movimiento internacional LGBT" por sus opiniones "extremistas", calificándolo de peligro para el tejido moral de la sociedad. Según la legislación penal rusa, **participar en** una organización extremista o **financiarla** se castiga con hasta 12 años de prisión. Además, una persona declarada culpable de **exhibir símbolos de estos grupos** enfrenta penas de hasta 15 días de detención por un primer delito y de hasta cuatro años de prisión **por reincidencia**. Las personas sospechadas de estar implicadas en una organización extremista pueden ser incluidas en una lista negra y sus cuentas bancarias pueden ser congeladas.

Como no existe ninguna entidad que pueda identificarse como "movimiento internacional LGBT", se entendió que la sentencia implicaba una prohibición general de todo activismo LGBTQI+. La sentencia también conllevó un **aumento de la violencia** contra las personas LGBTQI+: en cuestión de días, las fuerzas de seguridad **realizaron redadas** en clubes y bares gay de Moscú.

Los activistas LGBTQI+ consideran que estas acciones constituyen una táctica intimidatoria. Algunos, comprensiblemente, se han visto obligados a dejar el país, pero muchos más han **prometido quedarse** en Rusia. Al igual que otros activistas, están siendo forzados a operar en la clandestinidad, ya que incluso las manifestaciones públicas individuales de disenso están siendo rápidamente reprimidas.

En marcado contraste, las alentadoras noticias procedentes de la vecina Estonia suscitaron la esperanza de que otros países bálticos sigan el ejemplo. Décadas de luchas por la visibilidad y el respeto lideradas por las organizaciones LGBTQI+ y el movimiento de derechos humanos se materializaron en la formación de un gobierno favorable a los derechos LGBTQI+ tras las elecciones de abril.

> El debate en curso y la creciente visibilidad han contribuido a impulsar el cambio cultural y generar apoyo para los derechos LGBTQI+. Los cambios legales parecen haber profundizado aún más el cambio cultural positivo.



KELLY GROSSTHAL
Centro de Derechos Humanos de Estonia

En Letonia, el país vecino, el Parlamento aprobó en noviembre un paquete de leyes que otorga derechos a las parejas del mismo sexo, un avance largamente esperado. Aunque no se alcanzó el matrimonio igualitario, el activismo LGBTQI+ considera el reconocimiento de las uniones civiles como un gran paso adelante en uno de los países más hostiles de la UE para las personas LGBTQI+. La victoria legislativa, respuesta a una sentencia judicial favorable, se produjo tras décadas de activismo de la sociedad civil, reforzado por la elección, en mayo, del primer presidente abiertamente gay de Letonia, **Edgar Rinkēvičs**. Este cambio político abrió una ventana de oportunidades y alentó a la sociedad civil letona a perseverar en sus esfuerzos.

Sin embargo, la reacción antiderechos fue veloz, ya que los grupos conservadores empezaron inmediatamente a recoger firmas para convocar un referéndum que impidiera la entrada en vigor de esta nueva ley.

> La reacción conservadora ha sido instantánea y la cuestión aún no está resuelta. Aunque el proyecto de ley de uniones civiles se aprobó por una estrecha mayoría, los partidos de la oposición instaron al presidente a no promulgar la ley para tener tiempo de recoger firmas para un referéndum que la derogue.



KASPARS ZĀLĪTIS
Mozaika, Letonia

Los activistas LGBTQI+ del Báltico también recibieron un impulso del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que en enero de 2023 **dictaminó** que la restricción por parte de Lituania del acceso a un libro que mencionaba el matrimonio entre personas del mismo sexo violaba el derecho a la libertad de expresión.

En febrero, las campañas en favor de los derechos de las personas transgénero consiguieron algunos avances cuando España se convirtió en el décimo país de Europa en reconocer la **libre autodeterminación** de género. Como resultado, cualquier persona mayor de 16 años puede ahora cambiar su género en los documentos oficiales simplemente expresando su voluntad de hacerlo. La ley también eliminó cualquier requisito de diagnóstico médico para el cambio legal de género, prohibió las terapias de conversión, protegió los derechos de los menores intersexuales e incluyó medidas para promover la inclusión laboral y el acceso a la atención médica de las personas trans.

Esta ley se considera una de las más progresistas del mundo, pero provocó una reacción inmediata antiderechos: el partido político Vox trató de sembrar pánico entre los padres para capitalizar el asunto en las elecciones ▶**VÉASE CAPÍTULO**.

> La campaña para estas elecciones se ha visto plagada de expresiones de homofobia y transfobia. Hemos visto a políticos negarse a dirigirse a personas trans de manera consistente con su identidad de género y amenazar con abolir leyes que han consagrado derechos, tales como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley Trans. Esto se ha visto reflejado en un aumento del acoso contra las personas LGBTQI+ tanto en las aulas como en la calle. La comunidad LGBTQI+ teme que se produzca un retroceso tanto legal como social.



EMILIO DE BENITO
Colectivo LGTB+ de Madrid, España

En otros países de Europa Occidental se han desencadenado guerras culturales similares. En el Reino Unido, los políticos del partido gobernante están politizando cada vez más los derechos de las personas transexuales y expresando una abierta transfobia de cara a las próximas elecciones. Esta táctica, según los grupos LGBTQI+, está destinada al fracaso, pues creen que la mayoría de los votantes no se dejarán influenciar por cuestiones de guerra cultural que, en su inmensa mayoría, consideran inventadas o exageradas por los políticos.

En **Bélgica**, ciertos grupos conservadores intentaron restringir la circulación de información sobre sexualidad y diversidad sexual. La polémica surgió de repente en torno a un programa escolar de educación sexual que llevaba mucho tiempo en vigor. La sociedad civil lo defendió haciendo campaña para contrarrestar la desinformación y disipar los mitos en torno a sus objetivos, usos y efectos.

> La campaña de desinformación contra la educación en la vida relacional, afectiva y sexual (EVRAS) está siendo llevada a cabo por una red que incluye a conspiracionistas sobre COVID-19, personas inmersas en teorías criminales pedófilas, asociaciones de defensa de la infancia y asociaciones ultraconservadoras y de extrema derecha. Los grupos anti-EVRAS difunden desinformación para sembrar el miedo en la opinión pública, particularmente en los padres. A través del pánico moral, dividen a la opinión pública y genera dudas entre aquellos que no están familiarizados con la realidad del programa.



CÉLINE DANHIER
O'YES, Bélgica

La situación está tensa en los países de Europa del Este, donde las personas LGBTQI+ y el activismo enfrentan más barreras y los gobiernos hostiles incitan el odio para obtener ventajas políticas.

En Hungría, donde el matrimonio entre personas del mismo sexo no está reconocido y se prohíbe la adopción por parte de parejas registradas del mismo sexo, una nueva ley aprobada en abril habilitó denuncias anónimas contra parejas del mismo sexo que críen hijos juntos, contra cualquiera que desafíe el "papel constitucionalmente reconocido del matrimonio y la familia", y contra los niños que no se ajustan a su sexo asignado al nacer. Aunque un **veto** presidencial detuvo la ley, **el** problema aún no se ha resuelto y la amenaza persiste para muchas familias.

El veto podría haber sido una decisión estratégica, ya que permitió al partido gobernante capitalizar la indignación sin alienar aún más con la UE. La campaña contra el colectivo LGBTQI+ ha enfrentado al primer ministro Viktor Orbán con las instituciones de la UE, pero también le ha servido para unificar a sus seguidores y consolidar su posición dominante. Los grupos LGBTQI+ húngaros han resistido estos ataques en las redes sociales, mediante protestas callejeras y a través de su participación en los organismos de la UE.

Como resultado de la incidencia de la sociedad civil a nivel de la UE, el gobierno de Hungría se vio obligado a pasar el año defendiendo ante el Tribunal de Justicia Europeo la Ley de 2021 de Protección de la Infancia, que es de cierta manera su versión de la ley rusa de "propaganda gay". Esta ley, que equipara la homosexualidad con la pedofilia, ha llevado a la prohibición de la inclusión de temas LGBTQI+ en las escuelas. En noviembre causó controversia cuando, a instancias de un político de extrema derecha, se prohibió a los menores de 18 años visitar la exposición World Press Photo de Budapest debido a la presencia de algunas fotos en las que aparecían personas LGBTQI+.

En febrero de 2024, la presidenta Katalin Novak y la ministra de Justicia Judit Varga se vieron **obligadas a dimitir** por su papel en el indulto de un alto funcionario de un orfanato implicado en un escándalo de abusos sexuales. Algunos ciudadanos están comenzando a cuestionar la retórica del gobierno sobre la protección de la infancia, utilizada para justificar los ataques contra el colectivo LGBTQI+. Los antiguos partidarios **acusan** al partido gobernante de oportunismo.

> El cambio en la actitud de la opinión pública hacia la campaña anti-LGBTQI+ del gobierno está generando un efecto mixto. Por un lado, hay indignación por la propaganda del gobierno, lo que ha llevado a un aumento en el apoyo y la comprensión hacia la comunidad LGBTQI+. Por otro lado, algunas personas se sienten legitimadas para expresar pensamientos y actitudes discriminatorias. Esta está generando una sensación de inseguridad en la sociedad. Nos sentimos fuera de la ley y no podemos entender cómo puede estar ocurriendo esto en Europa hoy en día. Muchas personas LGBTQI+ están empezando a considerar la posibilidad de abandonar el país antes de que sea demasiado tarde.



IMRE ZSOLDOS
Alianza LGBT Húngara

El partido gobernante turco también intensificó sus ataques contra las personas LGBTQI+ antes de las **elecciones de mayo**, en las que el presidente autoritario Recep Tayyip Erdoğan obtuvo un nuevo mandato. Durante las celebraciones del Orgullo en junio de 2023, la policía detuvo a **al menos 113** personas.

En 2003, Turquía suscitó interés internacional al convertirse en el primer país de mayoría musulmana en celebrar un acto del Orgullo. Sin embargo, el gobierno se ha vuelto cada vez más **conservador**, y desde 2015 las autoridades deniegan sistemáticamente el permiso, alegando motivos de seguridad y orden público. A pesar de ello, cientos y a veces miles de personas desafían la prohibición cada año, enfrentándose a la represión, inquebrantables en la convicción de que la lucha por los derechos debe continuar.

> A pesar de las condiciones opresivas y la falta de oportunidades, el movimiento LGBTQI+ de Turquía permanece resistente y sólido. Junto con el movimiento feminista, somos los únicos que seguimos saliendo a las calles para manifestar por nuestros derechos, mostrando una valentía inquebrantable frente a la violencia policial y las detenciones. El mero acto de seguir protestando es un logro en sí mismo.
>
> 
> **DAMLA UMUT UZUN**
> Kaos GL, Turquía

Si bien 2023 resultó ser una decepción para buena parte de los movimientos de defensa de los derechos de género, es evidente que la situación hubiera sido mucho peor en ausencia de la firme incidencia de la sociedad civil. En todo el mundo, la sociedad civil resistió a través de protestas, campañas, iniciativas de protección, solidaridad, litigios y presión legislativa, manteniéndose firme en su compromiso. Aunque el progreso global experimentó una desaceleración significativa, la mayoría de los logros históricos resistieron los embates. En 2024 y más allá, la sociedad civil seguirá perseverando y buscando avances en la medida en que surjan nuevas oportunidades.



Foto de Kemal Aslan/AFP vía Getty Images.

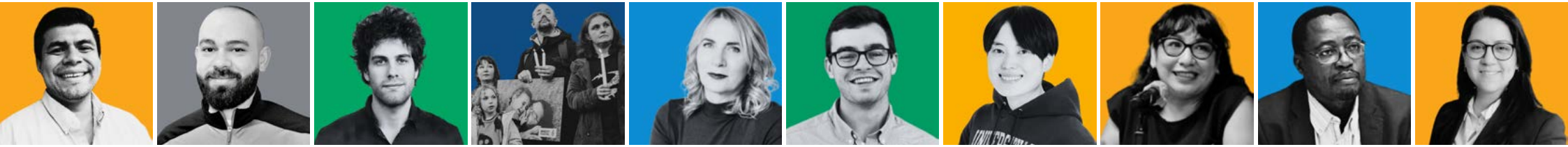
Una activista LGBTQI+ encara a la policía antidisturbios durante la marcha del Orgullo en Estambul, Turquía, el 26 de junio de 2022.

LEER MÁS:

- EL ATAQUE MÁS RECIENTE DE HUNGRÍA CONTRA LOS DERECHOS LGBTQI+ EN
- LETONIA: VITAL PRIMER PASO HACIA LA IGUALDAD MATRIMONIAL EN
- ESTONIA: ¿EL COMIENZO DE UN EFECTO DOMINÓ COLOR ARCOÍRIS? EN

AGRADECIMIENTOS

El análisis contenido en este informe no habría sido posible sin los aportes y opiniones de activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil de todo el mundo. Estas son las personas cuyas voces alimentan este informe.



AARON NODJOMIAN-ESCAJEDA · ABDALAZIZ ALSALEHI · ADRIEN FABRE · AHMED ATTALLA · AIDA DAGUDA · AIDAN CHARRON · AKIRA NISHIYAMA · ALBA A. JIMÉNEZ PATLÁN · ALFREDO OKENVE · ANA MARÍA DIEZ



ANASTASIYA VASILCHUK · ANDREA BARRIENTOS · ANDREAS BUMMEL · ANDY SUMNER · ANEEKARMA · ANJA OLIN-PAPE · ANNAMARIA LINCZOWSKA · ANOUK WEAR · ASAL ABASIAN · BADA NAM



BJESHKË GURI · BRENDA RODRÍGUEZ · BRIAN HIOE · CARINA TERTSAKIAN · CARLOS ERNESTO CHOC · CARLOS GUERRERO OROZCO · CARLOS QUESADA · CAROLINA AMAYA · CAROLINE OWASHABA · CÉLINE DANHIER



> CÉSAR ARTIGA



> CHRISTOPHER CASTILLO



> CLÉMENT KOCOU GBEDEY



> COLLECTIVE FOR THE FREEDOM OF KENIA HERNÁNDEZ



> CRISTINA PALABAY



> DAJANA CVJETKOVIC



> DAMLA UMUT UZUN



> DANIEL LUBIN



> DAVID MEJIA-CANALES



> DEBBIE GILD-HAYO



> DERYA BEYATLI



> DISHA RAVI



> DREWERY DYKE



> DUMISO GATSHA



> ELEONORA GIOVIO



> ELISABETH PRAMENDORFER



> EMILIO DE BENITO



> EMILIO JOSE MANUEL



> EREN KESKIN



> ESTELLE EWOULE LOBÉ



> EVA SILVÁN



> EVELYN RECINOS CONTRERAS



> FADEL ABDUL GHANY



> FADEL FAKIH



> FATHIMA ASHFA RAZIK



> FATIH POLAT



> FAUSTO D. SANTI GUALINA



> FILIP PAZDERSKI



> FRANCESCA RESTIFO



> FRANK SLIJPER



> GABRIELLA ABBATE



> GEETARTHA PATHAK



> GEORGES MPAGA



> GIDEON A. SANAGO



> GODINHO CRISTÓVÃO



> GÖZDE KAZAZ



> GREG SCARLATOIU



> GUILLAUME KALONJI



> GURAM IMNADZE



> HABIB MALIK ORAKZAI



> HAILEY CAMPBELL



> HARLEE RICHARDS



> HELEN KIDAN



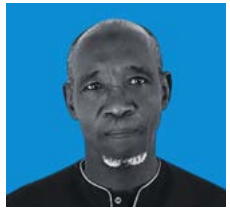
> HOT TEAM



> HUMBERTO SALAZAR



> IAN TENNANT



> IBA SARR



> IMRE ZSOLDOS



> IREEN TWONGIRWE



> ISABEL ABELLA



> IVETTE GONZÁLEZ



> IVY WERIMBA



> JAWAD FAIROOZ



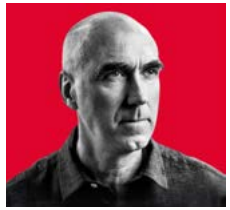
> JENNY RICKS



> JERUSALEM GIRMAY



> JOHN CAULKER



> JOHN VLASTO



> JORDÁN RODAS



> JORDI SURKIN



> JULIA TINSLEY-KENT



> KAISA KOSONEN



> KASPARS ZĀLĪTIS



> KATE WATTERS



> KELLY GROSSTHAL



> KEVIN WESSELS



> LEA SCHLENKER



> LIDA MINASYAN



> LINA ABIRAFEH



> LIVINGSTONE SEWANYANA



> M. RAVI



> MACDONALD CHIPENZI



> MANGNEO LHUNGDIM



> MARC LIMON



> MARÍA REYES



> MARIA SOL TAULE



> MARINA KOSTYLIANCHENKO



> MARJOLEIN KUIJER



> MARTA BENAVIDES



> MARTA FERRARA



> MARY AILEEN DIEZ-BACALSO



> MAURICIO ALARCÓN



> MAXIMILIAN RUF



> MELINA SPATHARI



> MENGISTU ASSEFA



> MĖTA ADUTAVIČIŪTĖ



> MILICA ANDRIC RAKIC



> MITCH ROSE



> MONIM HAROON



> MUBASHAR HASAN



> MUHAMMAD MUDASSAR



> NADIA BENAISSA



> NADIA RAMOS



> NAFISSATOU MAIGA



> NAJEEB AHMAD FOKEERBUX



> NASSERA DUTOUR



> NATALIE SAMARASINGHE



> NELLI STEVENSON



> NESHAN GUNASEKERA



> NIELS HOOGERHEIJDE



> NINO UGREKHELIDZE



NUDHARA YUSUF



NYMIA PIMENTEL-SIMBULAN



OBERT MASARAURE



PATRICIA REYES



PAULA MONJANE



PENELOPE FAULKNER



PEPECY OGOULIGUENDE



PETER ANHALT



PETER LEWIS



RACHID AOUINE



RADHYA ALMUTAWAKEL



RAFAEL UZCÁTEGUI



RIGOBERTO LOBO PUENTES



RIZKY ARGAMA



ROBERT KIRENGA



RONAN RENZ NAPOTO



ROSANNA FLAMER-CALDERA



RUTH HIDALGO



SADIKH NIAS



SANJAY SHARMA



SARAH TAK



SHAHANUR ISLAM



SHAHINDHA ISMAIL



SHUSHANIK NERSESYAN



SIEGER SLOOT



SILLA RISTIMÄKI



SOHRAB RAZAGHI



SONIA HORONZIAK



STÉPHANE DUGUIN



SULEKHA THAPA



SUSAN POWER



SYED FAWAD



THOMAS VAN GOOL



TOLEKAN ISMAILOVA



VICTORIA NEMERENCO



VICTORIA PETROVA



VICTORIA VRANA



VIOLLA REININDA



VITO BUONSANTE



VUKOSAVA CRNJANSKI



WELLINGTON MBOFANA



YANINA WELP



YINGCHEEP ATCHANONT



ZAKI MAMDOO



ZAMAN ASHRAF



ZOE RUGE

Todas las citas utilizadas en este informe son extractos editados de entrevistas con activistas, líderes y personas expertas de la sociedad civil. Las opiniones expresadas en las entrevistas son de las personas entrevistadas y no necesariamente reflejan los puntos de vista de CIVICUS. Para leer las entrevistas completas, visite el **repositorio de entrevistas** de CIVICUS Lens.

CONÉCTESE CON NOSOTROS

civicus.org

lens.civicus.org

info@civicus.org

/CIVICUS

@CIVICUSespanol

OFICINA CENTRAL
25 OWL STREET, 6TO PISO
JOHANNESBURGO, 2092
SUDÁFRICA
TEL: +27 (0)11 833 5959
FAX: +27 (0)11 833 7997

CENTRO ONU: NUEVA YORK
WE WORK
450 LEXINGTON AVE,
NEW YORK, NY, 10017
ESTADOS UNIDOS

CENTRO ONU: GINEBRA
11 AVENUE DE LA PAIX
GINEBRA, CH-1202
SUIZA
TEL: +41 (0)22 733 3435